



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Trayectorias de la institucionalidad económica en transiciones postautoritarias: Interpretación comparada de Chile y Sudáfrica

Rommy Morales Olivares



Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència **Reconeixement- Compartitqual 3.0. Espanya de Creative Commons.**

Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia **Reconocimiento - Compartitqual 3.0. España de Creative Commons.**

This doctoral thesis is licensed under the **Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0. Spain License.**

**Trayectorias de la institucionalidad económica
en transiciones postautoritarias:
Interpretación comparada de Chile y Sudáfrica**

Tesis doctoral

**Doctorado en Sociología
European PhD in Socio-Economic
and Statistical Studies
Departamento de Sociología**



Rommy Morales Olivares

**Directores:
Dr. Peter Wagner
Dr. David Casassas**



Postautoritarismo. Eliza Marx. 2017

Agradecimientos¹

Si algo he aprendido en los años de trabajo académico y en el proceso de desarrollo de mi tesis, es la importancia radical de la colaboración como parte sustantiva del trabajo científico. Durante todo este proceso tuve la fortuna de vivenciar permanentemente la cooperación de mi grupo de investigación, TRAMOD, en un marco de sinceridad epistemológica acogedora y familiar. Así mismo, este trabajo no habría sido posible sin la paciente inspiración, apoyo, confianza y dedicación inestimable de mi director Peter Wagner, quién siempre fue capaz de interpretar lo que quise decir, incluso sin haberlo dicho. Del mismo modo fue Peter quién me inspiró a aventurarme y a quedarme en Barcelona a realizar el doctorado, quizás él no lo sabe, pero fue junto a TRAMOD quienes me incitaron a la vida doctoral radicada en Catalunya. Del mismo modo fue Peter y TRAMOD quienes me invitaron a conocer un continente lejano, África subsahariana, a superar el velo de la ignorancia que tenemos desde América Latina respecto a África. Sudáfrica sonaba homogénea, y fue en TRAMOD donde pude intuir y elaborar las hipótesis que me movieron a investigar sobre el post apartheid. Agradezco infinitamente a Peter Wagner por haberme transmitido el empuje para emprender el vuelo a nuevos territorios, procurar que todo estuviese cubierto, yo apenas con el idioma, cargada de sociología y pasión.

Del mismo modo quisiera agradecer a David Casassas, también director de la tesis, amigo y profesor, quién me inspiró constantemente a volver al materialismo en la discusión sobre las transiciones, y a no olvidar la importancia de la infraestructura y el ordenamiento jerárquico de la sociedad en la determinación de todo el proceso de cambios en Chile y Sudáfrica. No puedo dejar de incluir en estos agradecimientos a mis compañeros y compañeras de TRAMOD. Algunos debates de mi tesis - sobre todo los mecanismos expuestos - han sido producto de nuestras discusiones semanales en Barcelona, y en las conversaciones abiertas y

¹ Agradezco al Programa Beca Chile CONICYT, por la financiación de las condiciones materiales de existencia de la investigadora durante gran parte del periodo doctoral. Del mismo modo al Proyecto TRAMOD. Trajectories of Modernity. ERC por financiar todo el trabajo de campo, la participación en conferencias internacionales y las condiciones materiales de la última fase de la investigación.

guerreras de nuestras conferencias. Todos y todas merecen un agradecimiento sincero y profundo, Alice, Andreas Kalyvas, el profesor Angelo Picchierri, Áurea Mota, Beatriz, Bru, el profesor Bo Strath, Edgar, Gerard Delanty, Gerard Rosich, el profesor Ivor Chipkin, José Katito, Joyce, Lorena, José Maurício Domingues, Nathalie, Riaan, el profesor Rubén Lo Vuolo, Sérgio, Svjetlana, Tracy Strong y Sam, quién además tuvo la paciencia de ayudarme a traducir con conciencia crítica la introducción y conclusiones de la tesis. A Jacob, quién me presentó el lado más profundo de Sudáfrica, colaboró en los contactos del trabajo de campo y me abrió las puertas de su hogar junto a Paty y Mbali, en Johannesburg.

A esta lista sumo otras voces agudas que me inspiraron críticamente y me permitieron conocer mi nuevo país, Sudáfrica. Agradezco al profesor Patrick Bond (Wits University), por su inestimable generosidad y brillantes intelectual; y al profesor Jeremy Seekings por acogerme en la Cape Town University durante el verano 2013.

Agradezco al *Transregional Center for Democratic Studies* de la *New School for Social Research*, hubo un antes y un después del D&D en Johannesburg University. Del mismo modo al programa South South de CLACSO – Durban University (2015), donde compartí ideas con colegas brillantes preocupados por el Sur global y la justicia.

Agradezco las conversaciones extensas y clarificadoras, al final de la escritura, con el profesor José Gabriel Palma. Una mención especial merece el profesor Antoni Domènech, QEPD, quién inspiró muchas de las ideas expuestas en el capítulo sobre Neoliberalismo. A mis maestros de antaño, los profesores chilenos Juan Miguel Chávez, Claudio Ramos, Jorge Larraín, y Aldo Mascareño, quienes me hicieron amar la sociología, en especial a Juan Miguel por acompañarme hasta el último día discutiendo las ideas de esta investigación. Todos ellos aportaron en mi deseo de querer seguir avanzando en este camino radical.

Agradecimientos sustanciales a Plantina Tsholofelo Mokone, joven investigadora sudafricana, por su maravilloso apoyo en todo el trabajo de campo en Sudáfrica y al otro lado del mundo, Mackarena Tolosa, doctoranda quién colaboró con toda la rigurosidad en el trabajo de recopilación en Chile. Ambas brillantes mujeres investigadoras fueron mis

brazos armados en mis dos surs. También a Mary y Antonio por colaborar en la metodología y la dimensión de análisis de datos, respectivamente, desde sus áreas de conocimiento que tan bien manejan.

Esta investigación ha sido una absorción de discursos e ideas de una serie de entrevistados/as en Chile y Sudáfrica, quienes me han proporcionado ideas únicas y material empírico profundo para abordar la problemática, la mayoría personas ocupadas, con poder, desconocidas para mi, a quienes les debo una gratitud especial por contar sus relatos de modo desinteresado, sincero y por confiar.

Agradezco también a los miembros del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. A la profesora Marisol García, Juan Diez Medrano, Maite Montagud y Marc Pradel, por haber leído críticamente los borradores y avances de esta tesis todos estos años. A Victor Climent por confiar en mi trabajo docente, que surge de esta aventura.

A mis amigas de Barcelona, Cata, Ali, Sandra. A mi amiga Daniela, por su capacidad de descifrar(me). A mi amiga Fatoş Güler y su familia por darme un empuje con el inglés en Sudáfrica y abrirme las puertas de su hogar en Johannesburg.

A mi madre, mujer infinita, por ser mi mejor amiga a la distancia sin dejar de ser madre, y por cruzar valientemente el charco justo cuando lo necesité. A mi hermanita Nany por darme amor en las distintas distancias, como toda nuestra historia, y su apoyo empírico y logístico siempre. A mis hermanos Marcelo y Claudio, por incrustar su seguridad en mi vivencia desde que tengo recuerdo. También a mis cuñadas Jose y Cecilia. Un agradecimiento con añoranza a mis sobrinos, a quienes me he perdido de ver crecer por elegir esta aventura académica y de vida migrante: Inés, Emilio, Martina, Amparo, Matilde y Vicente, de quienes me siento profundamente orgullosa, por su valentía, por su dulzura infinita, y agradecida por proponerse no olvidarme. Especial a mi chinita mayor, Inés, puntito lila, que me vino a regalar su luz y un abrazo en el empuje final a nuestra casa en Barcelona. A nuestro papá Luis Alberto, que donde se ha ido tempranamente, se quedó para siempre con nosotros.

A mi familia de Fraga, a la Yaya y Rosa por estar siempre atentas a todos mis pasos y caídas, a Neus y Dario por su templanza, y por permitirme querer a sus hijos, mis sobrinitos españoles, Alba, Elías y Martí. A Pere, gran amigo, por su fuerza y claridad, por hacerme sentir que en la experiencia migrante es posible creer en la disolución de las fronteras, ser familia incondicional. A la familia del Eixample en pleno, por estar siempre en el sustrato de la soledad y la fiesta de esta ciudad.

A mis bailarinas, compañeras de Mahia Rapa Nui e Inanga, quienes me dieron los invaluable momentos de desconexión y conexión con mi cuerpo y volver a la vida en nuestras jornadas de danzas, escenarios, sudor y por cierto nuestros viajes memorables. También a los músicos y bailarines.

Al equipo EBCN2016 y lo que construimos, una energía final, un empuje sustantivo para reinventarse, a Pablo, Elena, Paulina, Christian, Álvaro, Klaus e Ignacio, con quienes compartimos la convicción normativa del vínculo necesario entre conocimiento y equidad social.

A Eliza Marx por pintar el cuadro de la contraportada, inspirada en este relato sociológico. Un regalo para la tesis de esta tesis.

A Goku, por su suavidad y misticismo infinito.

A Rodrigo, compañero, amor, en las buenas y en las malas, un militante de la vida en común, gracias por conocer mi tesis y conocerme, por su aporte en la bibliografía y otros aportes basales, sin su pasión por el trabajo riguroso, sin poner el toque de ambición y realidad cuando lo necesitamos, nada hubiese llegado a su fin.

A Catalunya, mi barrio, que me ha tratado con ternura global y se ha quedado para siempre en mi.

Índice de contenidos

Introducción	5
Promesas de la transición en Chile y Sudáfrica: Unidad en la diversidad y la igualdad	10
Neoliberalismo: ideología, paradigma y concepto controvertido	14
Inconsistencia en el Desarrollo de la política económica: entre los discursos y las prácticas.....	16
Casos de estudio y enfoque	18
Introduction (English version)	21
Promises of the transition in Chile and South Africa: Unity in diversity and equality	26
Neoliberalism: Ideology, paradigm and controversial concept	29
Inconsistency in the development of economic policy: Between discourse and practice	32
Case studies and focus	35
Capítulo I	38
Instituciones y autocomprensión económica: Discusión en torno a una visión comprensiva del desarrollo	38
1. Introducción al concepto de institución	38
2. Instituciones sociales en sociología: una discusión en torno a la comprensión del desarrollo institucional.....	43
3. Dimensiones interpretativas del análisis institucional: valores y normas	48
4. Dimensiones analíticas del desarrollo institucional: poder y élites.....	50
5. Implicancias del cambio institucional	54
6. Continuidad institucional neoliberal y regímenes de desarrollo	57
Capítulo II	65
¿Por qué hablar de neoliberalismo? De ideología a herramienta interpretativa	65
1. Neoliberalismo y autoritarismo: Afinidad electiva.....	72
2. Capitalismo contemporáneo y variedades: hacia la operacionalización del concepto de neoliberalismo.....	82
3. Neoliberalismo en las Ciencias Sociales: dimensiones para la interpretación.....	88
4. El discurso de la Planificación, la socialdemocracia y el keynesianismo	

como límites conceptuales y escudos normativos del neoliberalismo	91
5. Constelaciones del neoliberalismo para el análisis	94
6. Conclusiones Toda economía en resolución es política económica planificada	98
Capítulo III.....	101
Chile: la consolidación del neoliberalismo chileno en dictadura militar y el modelo de la Concertación de partidos por la Democracia.....	101
1. Antecedentes preliminares	102
2. La dictadura cívico militar	108
3. Coyuntura crítica: política, empresarial y militar (1973-1975)	109
4. Chile: emergencia de un experimento neoliberal.....	112
5. La crisis financiera y el consenso autoritario.....	116
8. Luego de la crisis: el énfasis en la política social y el aumento de las inconsistencias	137
9. Comentarios finales.....	140
Capítulo IV.....	143
Sudáfrica: La herencia económica del Apartheid y el modelo del ANC. African National Congress.....	143
1. Historia de opresión racial y Apartheid	146
2. Ready to Govern (R2G): La cosmovisión del ANC y la nación arcoiris..	156
3. “The Reconstruction And Development Programme”	157
4. El framework del programa Growth, Employment and Redistribution (GEAR)	161
5. El “Accelerated and Shared Growth Initiative” en Sudáfrica.....	165
6. 2010: el “New Growth Path” (NGP).....	171
7. El “National Development Plan” (NDP)	171
8. La política económica de Sudáfrica post-apartheid	172
9. Desempleo y subempleo en Sudáfrica.....	174
10. Comentarios finales	176
Capítulo V	179
Resultados e interpretación comparativa: Mecanismos de emergencia y consolidación del neoliberalismo en Chile y Sudáfrica.....	179
1. Chile y Sudáfrica en términos macroeconómicos.....	180
2. Interpretación mediante Mecanismos Sociales.....	189
i. Los límites de la impugnación y el bloqueo sistemático a alternativas más radicales de izquierda.....	193

ii. La imagen estratégica internacional	199
iii. Capital moral: El lado oscuro de la legitimidad del oprimido.....	208
iv. La influencia de los <i>think tank</i> : El ensamblaje entre conocimiento y neoliberalismo	217
v. Los enclaves autoritarios y la facticidad del <i>Path dependence</i>	223
vi. Las Elites en transición y las redes de endogamia	232
VI. Reflexiones Finales	238
Final reflections (English version)	246
VII. Apéndice. Metodología de la Tesis.	255
1. Diseño de investigación	255
2. Pregunta de investigación	255
3. Metodología de Investigación.....	259
4. Interpretación comparada.	260
i. Los métodos comparativos en ciencias sociales.....	260
ii. Los estudios comparativos en sociología	262
iii. Análisis empírico.....	264
iv. Dimensión central: Política económica.....	264
v. Diseño comparado por similitudes	265
5. Sobre la investigación aplicada. Análisis de los casos.....	267
6. Las elites, actores claves de la investigación: ¿Qué entendemos por elite y cómo les entrevistamos?	268
7. Fases del trabajo de terreno y realización de entrevistas	272
8. Sobre la Entrevistas a elite y los eventos conductuales.	273
9. Muestra de entrevistas	275
Muestra de Entrevistas Chile.....	276
Muestra de Entrevistas Sudáfrica.....	286
Muestra de entrevistas otros académicos/as	300
10. Organización de la información de prensa: análisis e interpretación del contenido	301
Muestras: Selección de periódicos	302
Pauta Análisis de Prensa	303
Referencias Bibliográficas	306
Anexos	345
1. Anexo Pautas de Entrevistas	345
i. Pautas de Entrevista Chile	345
ii. Pauta de Entrevista Sudáfrica	347
2. Anexo. Crisis y la manera de gestionarlas: Chile y Sudáfrica	351
3. Anexo. Lista de Think Tanks en Sudáfrica	358

Índice de Figuras

FIGURA 1: INFLACIÓN EN CHILE, 1955-1965.....	104
FIGURA 2: INFLACIÓN EN EL PERIODO (1994- 1999).....	130
FIGURA 3: POBLACIÓN Y TASAS DE CRECIMIENTO.....	181
FIGURA 5: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB.....	182
FIGURA 6: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COMO PORCENTAJE DEL PIB.....	184
FIGURA 7: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA COMO PORCENTAJE DEL PIB.....	185
FIGURA 8: ESPERANZA DE VIDA.....	186
FIGURA 9: DESEMPLEO POR GÉNERO.....	188
FIGURA 10: GASTO PÚBLICO.....	188
FIGURA 11. MECANISMOS DE CONSOLIDACIÓN Y EMERGENCIA DEL NEOLIBERALISMO.....	243
FIGURA 12. MECHANISMS OF CONSOLIDATION AND EMERGENCY OF THE NEOLIBERALISM.....	251

Introducción

El patrón neoliberal de los procesos de democratización en países como Chile en Latinoamérica y Sudáfrica en el continente africano, producidos en la esfera política durante la década de 1990 fue acompañado de procesos radicales de liberalización económica. Estos procesos se caracterizaron por las reformas de mercado sustanciales y un cambio en las funciones estatales.

La política económica de una sociedad singular puede ser considerada como el principal arreglo institucional que permite la asignación de recursos entre los miembros de una sociedad. Es un medio por el que la esfera política tiene la posibilidad de reequilibrar las desigualdades, distribuir los recursos y potencialmente hacerse cargo de los resultados a veces intolerables del mercado. La política económica de las transiciones post autoritarias debe ser analizada en función de su trayectoria, en la medida que los aspectos referidos a su transformación dependerán, entre otros aspectos, de la configuración del pasado autoritario. La distinción dependerá del tipo de dictadura o sistema autoritario y los alcances de la dimensión de coacción y represión que afectaron a una sociedad singular. Una dictadura y un sistema autoritario, sin duda, cambia por completo la auto comprensión de una sociedad (Wagner, 2015). La auto comprensión social es un conjunto de narrativas colectivas mediante las cuales los grupos sociales buscan de manera autónoma sus propias maneras de resolver y representar las problemáticas económicas, políticas y epistémicas. Está relacionada con el significado que los actores dan a sus propias acciones. Muchas veces esta forma idealmente autónoma de representar el panorama de las transiciones que emergen posterior a una dictadura o un sistema autoritario de opresión y segregación, está cargada de esperanza y reconstrucción de un nuevo orden idealizado, una distinción entre un antes y un después,

un acontecimiento que, sin embargo, en esta nueva época muchas veces viene ya delimitada. Tal como plantea Huntington (1994), la democratización es un proceso más complejo y confuso que el paso de un sistema autoritario a una democracia. Analizando los casos de Chile y Sudáfrica en los periodos post autoritarios, hasta el año 2010, no se puede dejar de observar la pertinencia del planteamiento de O'Donnell (1994), o de Offe (2004), relativo a que no siempre los actores involucrados, las normas, los valores, y los procesos de cristalización desean y deliberan en función de un desenlace democrático y consistente con el ideal.

El paso a la democracia muchas veces es una revolución negociada (Lawson, 2005), una reforma consensuada, y observarla requiere realizar múltiples distinciones que permitan comprender lo prolongado que puede ser una situación de este tipo y la multiplicidad de los pasos institucionales que son necesarios para llegar a construir un nuevo modelo de política económica. Desde la observación sociológica, estudiar la política económica en las transiciones post autoritarias implica considerar lo que fueron aquellas decisiones deliberadas de los agentes, y de las consecuencias. Tal como plantea Przeworski (1994), la construcción de la democracia es un proceso de institucionalización de la incertidumbre, dado que los actores y grupos deben someter sus visiones a la inseguridad de la negociación.

Luego del apartheid en Sudáfrica, que finalizó el 1994 y la dictadura cívico militar en Chile, que finalizó en 1990, la trayectoria económica de ambas sociedades se puede considerar un éxito en términos económicos cuando se juzga por sus resultados, es decir, una disminución de la pobreza y el aumento del producto interno bruto (PIB) (French-Davis, 2003). Chile y Sudáfrica son considerados como economías de ingresos medios.

A pesar de los indicadores económicos favorables relativos a

crecimiento y disminución de la pobreza, ambos países han mantenido altos niveles de desigualdad. Sudáfrica actualmente es el país más desigual del mundo de acuerdo al coeficiente Gini, con un 62, y Chile dentro de los 15 primeros con un 52,1 . Los ajustes y reformas, típicas de los períodos autoritarios, han generado graves crisis sociales y económicas en ambas sociedades. Estas crisis, que han continuado con las transiciones democráticas, han socavado la base industrial de un lado y, por otro, han llevado a una mayor concentración del capital, la determinación de la especialización de los recursos y de los sectores de trabajo intensivo (Palma, 2011; Habib, 2013).

Esta investigación pretende comprender los procesos de transición de las políticas económicas de países post autoritarios, basándose en la interpretación de los casos de Sudáfrica y Chile entre las décadas del 1990 y 2010, desde una perspectiva comparada. La hipótesis principal es que ambas trayectorias son expresiones locales de los procesos globales de las reformas económicas neoliberales, cuya principal consecuencia es la mantención de las economías nacionales ancladas en una situación semi-periférica, en el orden de la economía mundial (Palma 2011; Bond 2010).

Existe sin duda una gran cantidad de análisis sobre los años de lucha por la liberación en Sudáfrica durante el periodo 1990-1994 y, por cierto, de la democratización en Chile a finales de los años 80. Cuentas empiristas, biografías, y muchos relatos han sido y están siendo redactados, posterior al reparto, toma y pérdidas del poder una vez transcurridas las elecciones de abril de 1994 en Sudáfrica, y de octubre de 1989 en Chile. Sin embargo, lo que ha buscado este trabajo es indagar en los grupos de actores y mecanismos que dan cuenta de la continuidad y consolidación del patrón neoliberal de desarrollo. Para ello, la perspectiva comparada de Sudáfrica y Chile se funda principalmente en las similitudes analizadas durante el proceso. Uno de los puntos centrales de comparación es la configuración política de las coaliciones que

lideraron las transiciones políticas post periodos autoritarios (Wagner, 2011; Wagner, 2015). En ambos países el rol de las élites y sus redes de reciprocidad ineludibles ha sido central (Terreblanche, 2012; Undurraga 2014; Mascareño, 2011). Posterior al fin de los periodos autoritarios, las clases dominantes han estado dispuestas a dejar que los dominados y oprimidos del pasado gobiernen, siempre que no se olvide lo que son y han sido, tanto en un sentido jerárquico como normativo. Tal como ha planteado Adorno, la dominación es más eficaz si se delega la violencia en que se apoya a los dominados. Por tanto las élites se desenvuelven en una situación beneficiosa para todos, la élite capitalista de siempre, y la nueva élite neoliberal.

Uno de los objetivos de la tesis es esclarecer la relación entre la continuidad y consolidación neoliberal y la existencia de mecanismos comunes entre ambas trayectorias que permitan explicar el cambio a nivel más general.

Pensando en esta problemática históricamente, el final de la Guerra Fría y la apertura relativa del sistema internacional que siguió, proporcionaron tanto el espacio como la capacidad de los organismos internacionales para desempeñar un papel en las trayectorias post autoritarias. Del mismo modo, otras transformaciones exitosas han sido evidentes, por ejemplo los cambios en Zimbabue y Namibia influyeron en los acontecimientos de Sudáfrica, y por otro lado la ola de democratizaciones latinoamericanas en los años ochenta influyó directamente en la transición chilena. Ambos países en su situación de semi-periferia han sido más susceptibles a las aperturas y a las influencias contextuales de estos procesos de modernización, con ciclos rápidos de crecimiento inestable.

En Chile y Sudáfrica las situaciones autoritarias eran insostenibles, y es aquí donde se visibilizan los grupos o coaliciones líderes, reconocidas, y legítimas en el espacio nacional, adoptando un

discurso que sustenta una ideología alternativa, y ofreciendo una planificación teóricamente viable para un cambio radical; en los casos estudiados, por ejemplo Nelson Mandela, activista anti apartheid, político sudafricano, primer presidente post apartheid entre 1994 a 1999, y por otro lado - manteniendo las proporciones de la comparación - la figura de Patricio Aylwin, político chileno, fundador del Partido Demócrata Cristiano, y presidente durante el período 1990 y 1994. Ambos hombres dirigieron y lideraron importantes organizaciones que a su vez fueron capaces de controlar la lealtad de la ciudadanía en general, cooptar la crítica, dar una nueva configuración a la élite. Ambas figuras sin duda son diametralmente distintas en lo que refiere a la trayectoria de lucha y la definición del opositor normativo de sus proyectos políticos, sin embargo fueron capaces de elaborar una nueva justificación al modelo de desarrollo neoliberal.

La nueva coyuntura presentó un desafío a la autoridad del antiguo régimen. La carente legitimidad del sistema autoritario se hizo evidente y las élites vieron claro que el cambio de gobierno era inevitable. Es justamente en esta época cuando los primeros cambios en las estructuras de la política mundial proporcionaron un contenido global a este escenario. La revolución negociada de Nelson Mandela, y el plebiscito que puso fin al gobierno-dictadura militar en Chile, debilitaron el orden social instaurado y crearon un escenario de incertidumbre para la política económica, dado que el entramado institucional heredado, en ambas sociedades singulares, era difícil de sostener. Sin embargo, al mismo tiempo no estaba clara la propuesta de la coalición de oposición. En el caso de Chile CIEPLAN (Corporación de Estudios para Latinoamérica), centro de investigación de la época, tenía un profundo trabajo de crítica a la política económica gobernante, pero no tuvo una propuesta sistemática de programa. En el caso sudafricano la oposición hacia la jerarquía racial era lo más claro, y la definición del ANC (African National Congress o Congreso Nacional Africano) y de Mandela siempre fue ambigua respecto al proyecto económico que

se quería construir, en la práctica la aparente mezcla entre libertad y regulación era lo que imperaba, pero detrás de ese modelo mixto se configuraba finalmente un entramado institucional neoliberalizado.

En todo este escenario los programas de reforma iniciados por el antiguo régimen limitan y frenan las potencialidades de desarrollo de una política económica que se haga cargo de la deuda externa y la interna, referida a lo social.

Promesas de la transición en Chile y Sudáfrica: Unidad en la diversidad y la igualdad.

La situación socioeconómica del periodo post autoritario en Chile y Sudáfrica se caracteriza por la presencia de fuertes coaliciones políticas de “centro izquierda”, el ANC en Sudáfrica y la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile (ahora Nueva Mayoría, pero Concertación en el periodo estudiado), cuyas élites políticas en su generalidad pertenecen a los grupos de actores que fueron oprimidos durante el período autoritario previo a 1990 en Chile y previo a 1994 en Sudáfrica. Tal como muestra la portada, las imágenes de la transición en ambos países evocan un arcoíris, representando en el caso de Chile la nueva época, bajo el lema “La alegría ya viene” y en el caso de Sudáfrica el significado de Rainbow Nation, que describe el sustrato social pluralista, que buscaba la integración por medio del reconocimiento de la diversidad racial, de la sociedad post apartheid.

Del mismo modo, ambas coaliciones, el ANC y la Concertación se rigieron en el nuevo contexto de la democracia con una alta disponibilidad de recursos que mejorarían el potencial económico; pero también en un contexto de elevada dependencia de las economías extranjeras, y de altísimos niveles de desigualdad a nivel mundial. La izquierda que caracterizó a las luchas políticas democratizadoras perdió su perspectiva sustantiva de cambio

durante las transiciones, en términos de Karl Polanyi.

Se han analizado las trayectorias de los actores, programas en disputas y algunos de los detalles de la transición de la política económica que permitan explicar las transformaciones de proyectos populares nacionalistas anti-apartheid, en el caso sudafricano, al neoliberalismo oficial, lo que quiere decir la adhesión a los principios económicos mercados re-regulados en favor de los intereses de las élites - que ideológicamente se ha llamado libre mercado - impulsado en términos políticos por la estrecha definición procedimental y practica de democracia, no la versión de democracia radical que caracterizó el proyecto participativo, de muchos cuadros tanto del ANC como de la Concertación; y en el caso chileno la disolución de la crítica socioeconómica y la encarnación del neoliberalismo en la piel de los antes oprimidos.

Las élites nacionales se acondicionaron para tomar las decisiones que tomaron. En los casos de Sudáfrica y Chile, el presidente Mandela, Mbeki, Zuma los presidentes Aylwin , Frei y Lagos, junto a otras élites locales, se enfrentaron a grupos de intereses diametralmente opuestos que defendían las decisiones políticas contrarias, se enfrentaron a límites, incoherencias y paradojas. No toda la incoherencia responde a factores internos de las coaliciones, sino a los acontecimientos contextuales, pero no toda restricción se debió a limitaciones responsables vinculadas a la gobernabilidad, sino también a decisiones arbitrarias que dejaba el vacío programático en materia económica.

El viaje inexorable de una política económica antiimperialista, autosuficiente y autónoma, hacia los ajustes estructurales en el caso chileno se produjo abruptamente en el periodo de la dictadura militar, al momento de instalar las reformas estructurales a través de la violencia y el desmantelamiento institucional, político y cultural del gobierno socialista de Salvador Allende; mientras que

en el caso sudafricano se desencadenó y consolidó durante el periodo de transición post apartheid, sin desconocer, por cierto, los poderosos intereses internos del capitalismo de principios del siglo XXI, de los sectores mineros extractivistas, y los sectores de trabajadores de cuello blanco que exigían condiciones similares a las del dominio británico. Esta adecuación del modelo británico influyó históricamente en la construcción del Estado sudafricano, que en el sentido weberiano administraba la totalidad de las relaciones.

En palabras de Jeremy Seekings (2015), la economía política de Sudáfrica post apartheid reflejaría la combinación de coaliciones políticas contemporáneas y conflictos con instituciones heredadas y concepciones de Estado que se dan por supuestas. Es evidente la herencia capitalista de la configuración actual del neoliberalismo, sin embargo la misma autonomía estatal que señala Seekings para argumentar la configuración mixta, desde la perspectiva de Patrick Bond (2010) sería el fundamento para comprender la economía política neoliberal que fue consolidada con las continuidades y cambios que se produjeron post apartheid.

Con independencia de las diferencias, lo que tienen en común ambos procesos de instalación neoliberal es que fueron eventos súbitos, de corta duración. En el caso de Chile con los ajustes estructurales de 1978, y en Sudáfrica en tan solo dos años, si se toma el texto de Growth, Employment and Redistribution (Bond, 2010), muy diferente a la situación africana general, donde los procesos fueron de larga duración y la situación latinoamericana que tuvo más convicción ideológica, la instalación del neoliberalismo fue un mandato internacional mucho más directo.

Frente a esto cabe preguntarse: ¿cuál fue la realidad posible en ambos países? Y al contrario, ¿cuáles fueron los principales mecanismos que impidieron que emergieran las posibilidades rupturistas de la promesa de la igualdad y la democratización de la

economía, a pesar de las circunstancias discursivas? ¿Qué iniciativas se marginaron? ¿Cuándo, quienes y cómo se hicieron alianzas que terminaron incautando las posibilidades de emancipación del tránsito neoliberal?

Estas preguntas son una parte de la discusión abierta e inconclusa de las transiciones políticas y económicas de países como Chile y Sudáfrica. Algunos se han atrevido a hablar del fin de la transición política, pero en términos económicos hablar del surgimiento del neoliberalismo en la transición política sudafricana y la profundización del mismo en el caso chileno. El desarrollo desigual en términos de clases sociales es un elemento clave que marca las trayectorias de ambos países y lo que es cada vez más generalizado en la literatura de las economías políticas de ambas naciones, es la preocupación por la inconsistencia y desviación de los gobiernos en relación a sus originales mandatos de democratización, incluyendo en esta definición de democracia aspectos relativos a la igualdad.

Con el fin de abordar analítica e interpretativamente la trayectoria del neoliberalismo en ambos países, se requiere un movimiento más allá de la retórica de los discursos políticos, y los discursos nacionalistas en torno a las realidades internas de ambos países, para documentar que las trayectorias de la Concertación y el ANC han sido hacia la derecha en lo sustancial, desde la observación de sus puntos de partidas semánticos y estructurales.

Esta tesis implica la siguiente hipótesis de trabajo, a saber: se presenta una inconsistencia en el conservadurismo post electoral, en la formulación de las políticas sociales y desarrollo en relación al mandato electoral radical previo y sus justificaciones normativas basadas en mecanismos que explican esta continuidad. La hipótesis ha sido observada metodológicamente en base a información cualitativa, entrevistas a élites y actores relevantes desde la perspectiva de los eventos conductuales, análisis de

prensa, e información secundaria .

Neoliberalismo: ideología, paradigma y concepto controvertido

Uno de los aportes teóricos de la presente investigación es la discusión en torno al concepto de neoliberalismo. El actual uso del concepto de neoliberalismo lo instituye como una noción cargada ideológicamente, y ha sido usada desde frentes críticos para elaborar una argumentación que cuestione el ordenamiento de la política económica y la posición normativa de los adversarios políticos (Varoufakis, 2010; Boas & Gans-Morse, 2009; Harvey, 2009). Desde las ciencias sociales y económicas algunos incluso han puesto en tela de juicio la utilidad analítica e interpretativa del concepto, acusándolo de carecer de definición sustantiva y afirmando que su uso implica forzar la realidad para enmarcarla en su definición (Santori, 1970; Maillet, 2015).

Existen en la literatura variadas definiciones de neoliberalismo. Una de las enunciaciones más inspiradoras en el marco de esta tesis ha resultado ser la del economista sudafricano Patrick Bond (2015), quien plantea que el neoliberalismo es una etapa del capitalismo contemporáneo en el que la búsqueda de beneficios pone un énfasis mucho mayor en la lógica del mercado, mediante la reducción de todos los subsidios que podrían permitir en la sociedad y la naturaleza una mayor protección. En este sentido, protección se refiere al plexo de seguridad que permite estar debidamente cubierto frente a injerencias consideradas arbitrarias del mercado (Pettit 2011; Casassas 2010). Esta definición tiene la potencialidad de que no pone en el centro de la discusión la distinción entre presencia y ausencia del Estado, problema que nos encontramos en la mayoría de las definiciones de neoliberalismo, donde el Estado pasa a ser la variable que define el modelo de desarrollo neoliberal de la política económica, en tanto los niveles de su ausencia o presencia del mismo. Desde una observación empírica, Manuel Antonio Garretón (2013), nos da luces de que el

neoliberalismo aparece como una de las ideologías más importantes de fines del siglo XX y que pese a su decadencia en términos de legitimidad social y efectos negativos en las formas de vida, sigue siendo objeto de defensas institucionales y de ataques. Garretón afirma que el neoliberalismo en sí mismo es una ideología totalitaria, que une indisolublemente un conjunto de políticas concretas y visiones sobre la condición humana y las personas en sociedad. En esta misma línea, la perspectiva de David Harvey unifica en su observación ambos niveles, teórico y empírico, planteando que en la práctica la neoliberalización de la economía se ha alejado de sus planteamientos teóricos iniciales. El neoliberalismo termina siendo en su emergencia un antídoto potencial contra las amenazas al orden social que generó históricamente el capitalismo, y una solución radical ortodoxa. El Estado neoliberal termina siendo contradictorio e inestable. Michel Foucault ya lo había planteado en 1978, afirmando que el neoliberalismo no debe confundirse con el lema "laissez-faire", sino por el contrario, debe considerarse como una llamada a la vigilancia, al activismo, a las intervenciones perpetuas por parte del Estado.

El concepto de neoliberalismo tiene, como veremos, utilidad analítica y sustantiva para comprender las transiciones de las políticas económicas de Chile y Sudáfrica. La primera, relativa a la utilidad sustantiva, las dimensiones del neoliberalismo permiten comprender el rol del Estado y de los diversos actores en las trayectorias socioeconómicas de los países de estudio. Y en un segundo lugar, desde una perspectiva interpretativa, el concepto de neoliberalismo permite dar luces sobre la configuración particular que adquiere la política económica en las sociedades post autoritarias, superando en cierta medida el nacionalismo y regionalismo metodológico de una observación de casos.

Tanto en Chile como en Sudáfrica, las élites económicas - haciendo uso de su fuerte presencia política - lograron mantener

su agenda a través de una transfiguración de expresión y de algunas prácticas adaptadas a los nuevos contextos. Muchas son las variables que han determinado las trayectorias y emergencias del neoliberalismo en los países de estudio. La presión ejercida por los inversionistas extranjeros se percibe como inmediata en las transiciones políticas y, como resultado, Mbeki (Sudáfrica) eligió aceptar sus demandas, y Aylwin (Chile) decidió continuar en el camino de lo posible, el camino de la continuidad. Esto condujo en Sudáfrica a la adopción del Growth Employment and Redistribution Strategy (GEAR), posterior al Reconstruction and Development Programme (RDP) cuya implementación inicial fue muy parcial, y en Chile a la continuación del Sistema de Protección Social.

Desde la perspectiva de los actores relevantes, mientras que la adopción de un programa económico radical de izquierdas - o al menos de centro - no fue posible en la práctica, una versión flexible de la agenda neoliberal ganó terreno y se consolidó. Sin embargo, dadas las percepciones de los entrevistados y entrevistadas, la disponibilidad de otros caminos habría sido posible. Es un hecho que incluso fue esperado por la comunidad empresarial, la élite económica, y otros grupos de interés, tal como se había anunciado en el discurso electoral durante el fin del periodo autoritario por parte de ambas de coaliciones, ANC y Concertación.

Inconsistencia en el Desarrollo de la política económica: entre los discursos y las prácticas.

En política la inconsistencia o distancia entre el discurso y la praxis es un factor común, ya que las declaraciones programáticas muchas veces funcionan como principio orientador, como horizonte. Sin embargo, en las transiciones post autoritarias la inconsistencia entre las declaraciones de principios políticos y las prácticas es una constante, no solo como una característica, sino

que se erige como un dispositivo común de la ausencia de avance o justificación del cambio. Esta inconsistencia entre los discursos y las prácticas se ha relacionado con presiones políticas y económicas, a veces con voluntades individuales. Desde la perspectiva de los propios actores de las coaliciones gobernantes, se argumenta que si bien el proceso de consolidación de las ideas iniciales ha sido lento, existe un progreso, haciendo referencia a los indicadores macroeconómicos y a la disminución de los niveles de pobreza. Sin embargo, como veremos en los capítulos referidos a los casos nacionales, los retrocesos y estancamientos en términos de igualdad, torneados por el neoliberalismo actuando a sus anchas en la política de desarrollo da luces sobre la preeminencia neoliberal por sobre el bienestar general.

En los capítulos posteriores interesa desarrollar una comprensión de la manera en que las políticas económicas en las sociedades post-autoritarias están influenciadas por las políticas formuladas durante los períodos autoritarios anteriores, así como los mecanismos que conducen a la continuidad de un marco de política económica que permite la perpetuación de la desigualdad social. Se pone énfasis en los procesos y discursos, normas comunicativas que han constituido un tipo particular de desarrollo capitalista del período post-autoritario y su sincronía o incompatibilidad con la práctica política, con los intereses materiales y por cierto con la estructuración jerárquica de la sociedad.

El análisis empírico se ha centrado principalmente en el nivel discursivo en el que el desarrollo económico e institucional de ambos países se ha formulado. Se ha seleccionado este campo de análisis porque, en primer lugar, se requiere una comparación a nivel de la política económica, para no perder de vista el límite entre la evolución institucional y el contexto político. En segundo lugar, en Chile la implantación de políticas neoliberales - como se ha mencionado - estuvo enmarcada en la dictadura militar y en el

caso sudafricano la matriz neoliberal se consolidó durante el periodo post-apartheid. En suma, la configuración neoliberal de la política económica ha sido planificada, instaurada y consolidada desde el Estado. Estas reformas estructurales se describen mejor en términos del materialismo económico de Karl Polanyi (1944), para quien el mercado es creado por el Estado y controlado por una burocracia. Desde la perspectiva de Polanyi, la separación entre el mercado y el Estado sería un aspecto que puede ser discutido en un sentido analítico, pero no se puede ver como una descripción ontológica, ya que mercado y estado son co dependientes. En palabras de Peter Hall (1989), todas las economías están planificadas como economías políticas.

Casos de estudio y enfoque

Ambos casos de estudio han sido ejemplos de las reformas neoliberales de la semi-periferia, que se caracteriza por las cadenas o nexos productivos globales que operan como medio de articulación, y que atraviesan vinculando desigualmente distintos países, lo que produce por un lado periferias internas en el país, pero también provoca un desarrollo desigual y combinado a nivel mundial. Además, ambos países ofrecen una complejidad adicional, si bien Sudáfrica ha demostrado una trayectoria neoliberal más moderada que Chile - marcada por un universalismo post-apartheid en muchas de sus políticas públicas - Chile ha mantenido una ortodoxia neoliberal, encubierta por un discurso post-dictadura militar anclado en algunos eslóganes socialdemócratas. En el caso de Sudáfrica los discursos anti-raciales nacionalistas han tomado el timón de los debates. Del mismo modo, los discursos de la esfera pública que prevalecieron en los períodos de transición en ambos países, señalaron la posibilidad de una ruta de desarrollo alternativo, con un fuerte componente estatal y radicalmente transformador, pero no ha sido así en la práctica.

Para interpretar la política económica de un país es necesario comprender al fin lo que Peter Wagner y Anthony Giddens han llamado las *prácticas de la asignación de recursos*. Son este conjunto de prácticas acumuladas en el tiempo que forman una trayectoria y un conjunto de reglas, la que da cuenta de la evolución de la política económica del periodo estudiado. Las prácticas de asignación de recursos deben ser interpretadas en conjunto con las prácticas autoritarias y las prácticas políticas. Bajo este punto de vista, un sistema institucional de la asignación de recursos, o el sistema económico, se forma por inducción de la cristalización de las prácticas, los hábitos y la configuración consecuente de las reglas (Wagner, 1994). Los arreglos institucionales no son el resultado de decisiones puramente técnicas (formales), sino que responden también a opciones normativas (sustantivos). Por lo tanto, es inevitable analizar el componente político de las decisiones que han informado los desarrollos institucionales neoliberales. En los casos de Chile y Sudáfrica, el reciente desarrollo institucional ha configurado una economía neoliberal, con intensa intervención del Estado, y este desarrollo se ha visto acompañado por un discurso socialdemócrata que se deriva de los discursos sociales y las presiones que circulan más allá del ámbito económico.

En Chile y Sudáfrica la privatización y fragmentación del Estado han sido las consecuencias institucionales más relevantes de las políticas sociales de acuerdo a las métricas de crecimiento económico. Es conocido que los países en desarrollo parecen más dependientes de las presiones externas directas que los desarrollados. Los patrones institucionalizados de las relaciones Estado-Sociedad determinan la forma en que se han llevado a cabo las transiciones neoliberales, independientemente del nivel de desarrollo económico (Fourcade y Babb, 2002).

Los neoliberales rechazan la dimensión social como solución a los problemas sociales, y buscan revivir una versión de la autoridad en

un nuevo disfraz de libertad. Esto se transmuta en varios argumentos para la existencia de un Estado fuerte como productor y garante de una sociedad de mercado estable. El sistema neoliberal y su diseño institucional son determinados por las decisiones de las instituciones capitalistas, como el consenso de Washington, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estas instituciones por cierto que tienen una fuerte intervención de los gobiernos, las élites locales y los expertos técnicos. Este proyecto neoliberal de carácter “utópico” era precisamente lo que Polanyi temía. El Estado no se anula, pero está fragmentado. El Estado busca persistentemente la reorganización institucional, dando lugar a un sistema institucional interno fragmentado y en base a nuevas restricciones externas (Harvey, 2007).

En ambos países, se pueden observar continuidades neoliberales a pesar de los discursos de cambio expresados por las coaliciones en el poder. Si bien las instituciones pueden cambiar, incluso cuando no se alteran conscientemente, la continuidad es el eje que persiste a pesar de los cambios, o precisamente a causa de ellos. Para entender la continuidad neoliberal en periodos post-autoritarios se ha considerado metodológicamente las declaraciones de principios políticos por parte de las coaliciones gobernantes, sus actores, las oposiciones, y sus ideas de institucionalizar el cambio. La lectura de estas declaraciones se ha hecho en base a la observación del cambio para comprender continuidad, o la falta de ella, en la práctica.

Introduction (English version)

The neoliberal pattern of democratization processes in countries like Chile in Latin America and South Africa on the African continent, elaborated in the political sphere during the 1990s, were accompanied by radical processes of economic liberalization. These processes assumed a neoliberal character, which has generated a developmental pattern characterized by substantial market reform and a change of state functions.

A country's economic policy can be considered the primary institutional arrangement allowing for the distribution of resources between the members of a society. It is a means by which the political sphere is able to level inequalities, distribute resources and potentially assume responsibility for alleviating the sometimes intolerable consequences of the market. The economic policy of post-authoritarian transitions needs to be analysed with due regard to their trajectories, insofar as those aspects relating to the transformation of a given economic policy will depend, among other things, on the configuration of its authoritarian past. The distinction will depend on the type of dictatorship or the form of authoritarian rule and the extent to which the coercion and repression affecting a country have penetrated. There can be no doubt that a dictatorship or an authoritarian system totally transforms a society's self-understanding (Wagner, 2015). A social self-understanding is a complex of collective narratives by means of which social groups autonomously pursue their own solutions for resolving the economic, political and epistemological problématiques. It is related to the significance that actors assign to their own actions. This ideally autonomous manner of representing the panorama of transitions that emerge in the aftermath of a dictatorship or authoritarian system of oppression and segregation is often charged with hope for the reconstruction of an idealized order that clearly marks a historical rupture. Nonetheless, the possibilities for realizing this new order are often constrained at

the outset. As Huntington (1994) suggests, democratization is a far more complicated and confusing process than a simple step from an authoritarian system into a democracy. Analysing the cases of Chile and South Africa in the post-authoritarian periods, up to the year 2010, one is perpetually reminded of the pertinent observations of O'Donnell (1994), or of Offe (2004), to the effect that the actors involved, along with the norms, values and practical processes, do not always express a desire for an outcome that would be democratic and consistent with the ideal.

The transition to democracy is often a negotiated revolution (Lawson, 2005), a consensual reform, and its observation requires that we make multiple distinctions that allow us to understand the potentially prolonged nature of such a situation along with the multiplicity of institutional steps that must be taken in order to construct a new model of economic policy. From the perspective of sociological analysis, studying economic policy in post-authoritarian transitions entails considering what the deliberative decisions of the agents involved were and what consequences these had. As Przeworski (1994) suggests, the construction of democracy is a process of institutionalizing uncertainty, given that the actors and groups must submit their visions to the uncertainty of negotiation.

Following apartheid in South Africa, which came to an end in 1994, and the civil-military dictatorship in Chile, which ended in 1990, the economic trajectory of both societies could be considered an economic success when considered in terms of its results, that is, the reduction of poverty and the increase of gross domestic product (GDP) (Ffrench-Davis, 2003). Chile and South Africa are considered middle-income economies.

Despite favourable economic indicators relating to growth and poverty reduction, both countries have sustained high levels of inequality. At present, South Africa is the most unequal country in

the world when gauged by the Gini index, scoring 62, and Chile is ranked among the 15 most unequal countries, with a 52,1. The adjustments and reforms, typical of authoritarian periods, have generated grave economic and social crises in both societies. These crises, which have survived the democratic transitions, have eroded the industrial base, on the one hand, while leading, on the other hand, to an increased concentration of capital, which determines the specialization of resources and labour-intensive fields of work (Palma, 2011; Habib, 2013).

This research aims to understand the transitional processes of economic policies in post-authoritarian countries, based on an interpretation of the cases of South Africa and Chile in the two decades between 1990 and 2010, from a comparative perspective. The principal hypothesis is that both trajectories are local expressions of global processes of neoliberal economic reform, whose primary consequence has been to bind national economies to a semi-peripheral condition within the global economic order (Palma 2011; Bond 2010).

There certainly is an enormous amount of literature about the years of the liberation struggle in South Africa during the 1990–1994 period and, indeed, on democratization in Chile at the end of the 1980s. Empirical accounts, biographies and many personal stories have been and are being compiled in the wake of the division, assumption and loss of power following the April 1994 elections in South Africa and of October 1989 in Chile. Nonetheless, what this study sets out to do is to inquire into the groups of actors and mechanisms that account for the continuity in, and consolidation of, the neoliberal developmental pattern. To this end, the comparative perspective on Chile and South Africa is based in the commonalities arising in the transitional process. One of the central points of comparison is the political configuration of the coalitions that led the political transitions in post-authoritarian periods (Wagner, 2011; Wagner, 2015). In both countries the

undeniable role of elites and their networks of reciprocity has been central (Terreblanche, 2012; Undurraga 2014; Mascareño, 2011). Following the end of the authoritarian periods, the dominant classes have been willing to allow those formerly dominated and oppressed to rule, provided only that it never be forgotten who and what they are and have been, in both a hierarchical and a normative sense. As Adorno has suggested, domination is more effective if violence is delegated to the dominated. Thus the elites enter into a situation that is beneficial for all, the abiding capitalist elite and the new neoliberal elite.

One of the objectives of this thesis is to clarify the relationship between neoliberal continuity and consolidation and the existence of mechanisms common to both historical situations that make it possible to explain this change at a more general level.

Thinking about this research problem historically, the end of the Cold War and the relative openness of the international system that followed offered international organizations both the space and the ability to play a role in shaping post-authoritarian trajectories. Similarly, other successful transformations can be found. For example, the changes in Zimbabwe and Namibia influenced events in South Africa, and on the other hand the waves of democratization in Latin America in the 1980s had a direct influence on the Chilean transition. Both countries in their semi-peripheral situation had been more susceptible to such openings and to the contextual influence of these processes of modernization, with rapid cycles of unstable growth.

In both cases authoritarian situations were unstable, and it is here that we see the appearance of the leading, recognized and legitimate groups or coalitions in the national space adopting a mode of discourse that supports an alternative ideology, and holding out a theoretically viable plan for radical change. In the case studies presented here, this is exemplified, on the one hand, in

the figure of Nelson Mandela, anti-apartheid activist, South African politician, and first post-apartheid president between 1994 and 1999; and on the other hand – maintaining the proportions of the comparison – the figure of Patricio Aylwin, Chilean politician, founder of the Christian Democratic Party (Partido Demócrata Cristiano), during the 1990–1994 period. Both men directed and headed important organizations that were themselves capable of commanding the loyalty of the citizenry in general, co-opting criticism, and altering the configuration of the elite. Both figures are, of course, diametrically opposed when considered from the perspective of the struggle trajectory and their normative modes of defining the opposition, but all the same, they were able to articulate a new justification for the neoliberal developmental model.

The new configuration posed a challenge to the authority of the former regime. The authoritarian system's lack of legitimacy became evident and the elites saw clearly that a change of government was inevitable. It is precisely during this period that the first changes in the structures of world politics invested these developments with global content. Nelson Mandela's negotiated revolution, and the plebiscite that put an end to government by military dictatorship in Chile, debilitated the established social order and ushered in a period of political-economic uncertainty, given that the inherited institutional framework, in both cases, was difficult to maintain. Nonetheless, time the opposition coalition's proposal was at the same unclear. In the case of Chile, the Corporation for Latin American Studies (Corporación de Estudios para Latinoamérica, abbreviated as CIEPLAN), a research centre of the time, launched a thoroughgoing critique of the governing economic policies, but did not possess a systematic proposal for an alternative programme. In the South African case, the opposition to the racial hierarchy was entirely clear, while the definitions offered by the African National Congress (ANC) and by Mandela were always ambiguous about the nature of the

economic project they wished to create. In practice, an apparent mix between liberty and regulation won out, but behind this mixed model a neoliberalized institutional model was being formed.

In this scenario reform programmes initiated by the former regime constrain and halt the developmental potentials of economic policies that take charge of the external debt as well as, in the social sense of this term, the internal debt.

Promises of the transition in Chile and South Africa: Unity in diversity and equality

The socio-economic situation of the post-authoritarian period is characterised by the presence of strong “centre-right” political coalitions: the ANC in South Africa and the Coalition of Parties for Democracy (Concertación de Partidos por la Democracia, now Nueva Mayoría, but Concertación in the period under study) in Chile. Their political elites generally all belong to the groups of actors that were oppressed during the authoritarian period prior to 1990 in Chile and 1994 in South Africa. The images of the transition in both countries evoke the imagery of a rainbow, which in the Chilean case represents the new era under the slogan “happiness is coming”, and in the case of South Africa possesses the meaning of “Rainbow nation”, which describes the pluralistic social substratum that was seeking integration through the recognition of the post-apartheid society’s racial diversity.

Likewise, both coalitions, the ANC and the Concertación, governed in the new democratic context with a wide availability of resources that would improve their economic potential; but also in a context of pronounced dependency on foreign economies, and of soaring levels of inequality on a global scale. During the transitions the left that waged the political battles for democratization lost sight of the aim of substantive change, to use Karl Polanyi’s terminology.

The trajectories of the actors, the programmes in dispute, and some of the details of the political-economic transition have thus been analysed to facilitate, in the South African case, an explanation of popular nationalist projects opposing apartheid into official neoliberalism, by which is meant adherence to economic market principles of re-regulation in favour of elite interests – which has ideologically been called the free market – driven in political terms by the narrow procedural and practical definition of democracy, and not the version of radical democracy that characterised the participatory project espoused by many cadres of both the ANC and the Concertación; and in the Chilean case, the dissolution of socio-economic critique and the embodiment of neoliberalism in the skin of the formerly oppressed.

The national elites were gradually brought round to taking the decisions they took. In the cases of Chile and South Africa, presidents Mandela and Mbeki, presidents Aylwin and Frei, and other local elites came up against groups with diametrically opposed interests that defended contrary political decisions; they came up against limits, incoherencies and paradoxes. This incoherency is not only a response to factors internal to the coalitions, but also to contextual events, and restrictions are not all due to limitations connected to governability, but also arbitrary decisions that left the programmatic emptiness in the treatment of economic matters.

The inexorable journey of an anti-imperialist, self-sufficient and autonomous economic policy toward structural adjustments in the Chilean case came about abruptly during the period of military dictatorship, when instituting structural reforms through violence and the institutional, political and cultural dismantling of Salvador Allende's socialist government; while in the South African case it was unleashed and consolidated during the post-apartheid transition period, without ignoring, or course, the powerful

interests of capital at the beginning of the twenty-first century, of the extractive mining sector and of the white collar workers sector that were demanding conditions similar to those characterising the period of British rule. This adaptation of the British model historically influenced the South African state which, in Weberian terms, administratively regulated the totality of relations. As Jeremy Seekings (2015) puts it, the post-apartheid South Africa political economy came to reflect the combination of contemporary coalitions and conflicts with inherited institutions and conceptions of the state that were taken for granted. While the capitalist inheritance of the contemporary neoliberal configuration is clear, the same state autonomy that Seekings points to when arguing for the presence of a mixed configuration is, according to Patrick Bond (2010), of the very essence for understanding the neoliberal political economy that was consolidated through the continuities and changes occurring in the post-apartheid period.

Regardless of these differences, what both processes of neoliberal institutionalisation have in common is that they were sudden events, of short duration. In the Chilean case with the structural adjustments of 1978, and in South Africa in only two years, if the text of Growth, Employment and Redistribution is taken into account (Bond, 2010). In marked contrast to the African case in general, where such processes were of longer duration, and the deeper grounding of the Latin American situation in ideological conviction, the installation of neoliberalism was a far more direct international mandate.

In light of this, it becomes necessary to ask: what outcomes were possible in both countries? And conversely, what were the mechanisms that impeded the emergence of the path-breaking potentialities of equality and democratization of the economy, despite the discursive circumstances? What initiatives were sidelined? When, with whom, and how were alliances made that ended up appropriating the emancipatory potentials of the democratic

transition?

These questions are part of the open and inconclusive discussion about the political and economic transitions of countries like Chile and South Africa. Some have gone as far as to speak of the end of the political transition even while speaking, in economic terms, of the ascent of neoliberalism in the South African political transition and its deepening in the Chilean case. Unequal development in terms of social class is a key element marking the trajectories of both societies, and the literature on the economic policy of both nations has come to increasingly focus on the inconsistency and divergence by governments from their original mandates for democratization, where this definition of democracy includes aspects pertaining to equality.

In order to analytically and interpretatively approach the trajectory of neoliberalism in both countries it is necessary to go beyond the rhetoric of political discourse, along with the nationalist discourse surrounding the internal realities of both societies, in order to document how the trajectories of the Concertación and the ANC have moved toward the right in substantial terms when viewed in relation to their semantic and structural points of departure.

This thesis implies the following working hypothesis, namely: there is an inconsistency in the post-electoral conservatism, with regard to its formulation of social policies, its development in relation to the former radical electoral mandate and its normative justifications, which is based in mechanisms that explain this continuity. The hypothesis has been formed, methodologically, by drawing on qualitative information, along with interviews with elites and relevant actors employing the behavioural event interview method, media analysis, and secondary sources.

Neoliberalism: Ideology, paradigm and controversial concept

One of the theoretical contributions of the current research is the discussion it offers concerning the concept of neoliberalism. Contemporary use of the concept has rendered it an ideologically freighted notion, and it has supported critical positions that develop arguments in which political-economic regulation and the normative position of political adversaries is questioned (Varoufakis, 2010; Boas & Gans-Morse, 2009; Harvey, 2009). Some in the social and economic sciences have even called into question the analytical and interpretative usefulness of the concept, accusing it of lacking a substantive dimension and arguing that using it entails forcing reality into a pre-established conceptual framework.

Various definitions of neoliberalism can be found in the literature. One of the most inspiring articulations encountered in the course of researching this thesis has been that of the South African economist Patrick Bond (2015), who contends that neoliberalism is a stage of contemporary capitalism in which the search for profit places a far greater emphasis on the logic of the market, which it does by reducing all the subsidies that might confer greater protection on nature and society. In this sense, protection refers to the plexus of security that permits one to be adequately covered against interferences from the market that can be considered arbitrary (Pettit 2011; Casassas 2010). This definition has the potential benefit of not placing the distinction between the presence or absence of the state at the centre of the discussion, which is a problem we encounter with most definitions of neoliberalism, where the state becomes the variable that defines the model of neoliberal development of economic policy in accordance with the degree to which the state is present or absent. From an empirical perspective, Manuel Antonio Garretón (2013) contends that neoliberalism appears as one of the most important ideologies of the late twentieth century, and that despite its degeneration in terms of social legitimacy and negative effects on forms of life it remains an object of institutional defences and

attacks. Garretón argues that neoliberalism itself is a totalitarian ideology that indissolubly fuses a complex of concrete policies with visions concerning the human condition and the place of humans in society. In the same line, David Harvey's perspective unifies both theoretical and empirical levels into a coherent vision, contending that the neoliberalization of the economy has in practice become distanced from its initial theoretical underpinnings. Neoliberalism has ended up emerging as a potential antidote for the threats to society that capitalism has historically generated, presenting itself as a radically orthodox solution to this very problem. The neoliberal state ends up being contradictory and instable. Michel Foucault had already posed the problem in 1978, arguing that neoliberalism should not be confused with the "laissez-faire" slogan, but should on the contrary be considered a call for vigilance, for action, and for perpetual interventions on the part of the state.

The concept of neoliberalism, as we can see, is of analytical and substantive use for understanding the transitions of the economic policies of Chile and South Africa. First, relating to the substantive use, the dimensions of liberalism make it possible to understand the role of the state and the diverse actors involved in the socio-economic trajectories of the countries studied here. And second, from an interpretative perspective, the concept of neoliberalism sheds light on the particular configuration that economic policy acquires in post-authoritarian societies, to some extent surpassing methodological regionalism and nationalism in the observation of cases.

In both Chile and South Africa the economic elites – drawing on their strong political presence – managed to pursue their agendas by transfiguring their mode of expression and by adapting certain practices to the new contexts. A great many variables have shaped the trajectories and emergences of neoliberalism in the countries studied here. The pressure exercised by foreign investors is

immediately apparent in political transitions, and as a result Mbeki (South Africa) chose to accept their demands, and Aylwin (Chile) decided to stay on the path of the possible, the path of continuity. This led in South Africa to the adoption of the Growth Employment and Redistribution (GEAR) strategy following the Reconstruction and Development Programme (RDP), whose initial implementation was only very partial, and in Chile to the continuation of the Social Protection System (Sistema de Protección Social).

From the perspective of the relevant actors, so long as the adoption of a radical left – or at least centrist – economic programme was not possible in practice, a flexible version of the neoliberal agenda gained ground and took shape. Nonetheless, according to those interviewed, other routes were available and could have been taken. In fact this was also what was expected by the business community, the economic elite and other interest groups, just as had been declared in the electoral campaigns during the end of the authoritarian period by both coalitions, the ANC and Concertación.

Inconsistency in the development of economic policy: Between discourse and practice

In politics inconsistency or distance between discourse and practice is a common occurrence, since programmatic declarations often function as an orienting principle, as a horizon. Nonetheless, in post-authoritarian transitions the inconsistency between declarations of political principles and practices is a constant, not only as a characteristic, but as a common device for ensuring that no advance is made or for justifying change. This inconsistency between discourse and practice has been related to political and economic pressures, and sometimes to individual wills. Actors within the governing coalitions themselves argue that, even if the consolidation of initial ideas has been slow, there has been progress with regard to macro-economic indicators and to the

reduction of poverty levels. Nonetheless, as we see in the chapters referring to national cases, regression and stasis with regard to equality, pivoting on free-wheeling neoliberalism in development policies, sheds light on the prioritization of neoliberalism over the well-being of all.

The following chapters seek to develop an understanding of the manner in which economic policies in post-authoritarian societies are influenced by policies formulated during the preceding authoritarian periods as well as by the mechanisms that lead to the continuation of a political-economic framework that allows for the perpetuation of social inequality. Emphasis is placed on processes and discourses, communicative norms that have constituted a particular type of capitalist development in the post-authoritarian period and their synchrony or incompatibility with political practice, with material interests and of course with the hierarchical structuration of society.

The empirical analysis presented below has concentrated principally on the discursive level at which the economic and institutional development of both societies has been formulated. This field of analysis has been selected because, in the first place, a comparison at the political-economic level is necessary in order not to lose sight of the boundary between institutional evolution and the political context. Second, in Chile the establishment of neoliberal policies – as mentioned above – was framed by the military dictatorship, and in the South African case the neoliberal matrix was consolidated during the post-apartheid period. In sum, the neoliberal configuration of economic policy was planned, implemented and consolidated by the state. These structural reforms are better described in terms of Karl Polanyi's (1944) economic materialism, for whom the market is created by the state and controlled by a bureaucracy. From Polanyi's perspective, the separation between market and state is an aspect that can be discussed in an analytical sense, but it cannot be understood as an

ontological description, as the market and state are co-dependent. In the words of Peter Hall (1989), all economies are planned as political economies.

Case studies and focus

Both case studies have been examples of neoliberal reforms of the semi-periphery, which is characterized by global production chains or nexuses that operate as a medium of articulation through which the different countries along the chain are unequally linked together. On the one hand, this produces internal peripheries in the given country, but it also causes unequal and combined development at a global level. Moreover, both countries offer an additional complexity. While South Africa has followed a more moderate neoliberal trajectory than Chile – characterized by a post-apartheid universalism in many of its public policies – Chile has maintained a neoliberal orthodoxy, veiled by a post-military dictatorship discourse rooted in some social democratic slogans. In South Africa nationalist, anti-racist discourses have seized the helm of public debates. Likewise, the most prominent public sphere debates in both countries during the transition period pointed the way toward an alternative developmental route, with a strongly statist component and a radically pro-transformation agenda, but this route was not followed in practice.

In order to interpret the economic policy of a country it is necessary to possess a deep understanding of what Peter Wagner and Anthony Giddens have referred to as practices for the allocation of resources. It is this complex of practices, accumulated over time, that form a trajectory and a complex of rules, which accounts for the evolution of economic policy in the period studied here. Practices for the allocation of resources need to be interpreted alongside authoritative practices and political practices. From this perspective, a system for the allocation of resources, or the economic system, is inductively formed through the crystallization of practices, habits and the resulting configuration of rules (Wagner, 1994). Institutional arrangements are not the consequence of purely technical (formal) decisions, but also respond to normative (substantive) options. It is therefore

necessary to analyse the political component of the decisions that have informed neoliberal institutional developments. In the cases of Chile and South Africa, recent institutional developments have configured a neoliberal economy, with intense state intervention, and this development has been accompanied by a social democratic discourse derived from social discourses and the pressures that circulate beyond the economic sphere.

In both cases, the privatization and fragmentation of the state have been the most relevant institutional consequences of social policies formulated in accordance with the metrics of economic growth. It has been observed that developing countries appear more dependent on direct external pressures than developed countries. The institutionalized patterns of state–society relations determine the manner in which neoliberal transitions have been carried out, independently of the level of economic development (Fourcade and Babb, 2002).

Neoliberals reject the social dimension as a solution to social problems and seek to revive a version of authority disguised as liberty. This is transmuted into various arguments for the existence of a strong state as the producer and guarantor of a stable market society. The neoliberal system and its institutional design are determined by the decisions of capitalist institutions such as the Washington Consensus, the International Monetary Fund (IMF) and the Federal Reserve of the United States. These institutions are indeed strongly regulated by governments, local elites and technical experts. This neoliberal project, with its “utopian” character, was precisely what Polanyi feared. The state is not abolished, but it is fragmented. The state persistently pursues institutional reorganization, giving rise to an internally fragmented institutional system, itself reliant on external restrictions (Harvey, 2007).

In both countries neoliberal continuities can be observed despite

the discourses of change expressed by the ruling coalitions. While institutions can change, including when they are not changed consciously, continuity is the pillar that remains standing in spite of such changes, or precisely because of them. In order to understand continuity in post-authoritarian systems, the declarations of political principles on the part of governing coalitions, their actors, and the opposition, focusing on their ideas about how to institutionalize change, have been methodologically foregrounded. The reading of these declarations has been based on the observation of change in order to understand continuity, or its absence, in practice.

Capítulo I

Instituciones y autocomprensión económica: Discusión en torno a una visión comprensiva del desarrollo.

En el presente capítulo se desarrollarán y presentarán los antecedentes teóricos de base que contempla el desarrollo de la presente investigación, los cuales recogen principalmente el marco conceptual del desarrollo institucional desde la teoría sociológica y el pensamiento institucionalista.

1. Introducción al concepto de institución

Como se ha visto, el objetivo de la presente investigación es realizar un análisis de la evolución de la política económica estatal post periodos autoritarios, desde una perspectiva comparada entre Sudáfrica y Chile, en tanto son países con reciente emergencia de sus democracias. El foco del análisis para observar la política económica de ambos casos es el entramado institucional de la política económica. El concepto de institución constituye un mecanismo explicativo de las trayectorias económicas de ambos países y de sus políticas económicas, y es aplicable a una multiplicidad de problemas sociales, teniendo un alcance intermedio en tanto permite la explicación analítica e interpretativa a la vez, de procesos o trayectorias económicas, que permiten dar respuestas al cómo estas sociedades post autoritarias han resuelto su problemática en la materia.

El foco del análisis institucional será la política económica estatal en su dimensión de acoplamiento con la política, o sistema político: políticas económicas post autoritarias de ambos países. En este contexto, la definición de economía de Polanyi resulta sencilla y útil, además de coherente con la comprensión de Peter Wagner al respecto. Polanyi entiende la economía como un “(...) *proceso institucionalizado de interacción entre el ser humano y su entorno que se traduce en el abastecimiento continuado de los medios materiales que permiten la satisfacción de necesidades*” (Polanyi, 1994). En un

sentido más amplio, el análisis de la política económica de ambos países es utilizada para la observación del cómo operan las instituciones en general, revelando las operaciones económicas no solamente en el espacio restringido de la economía misma, sino enriqueciendo el análisis con la incorporación de factores culturales y políticos, como se verá posteriormente en el marco teórico.

A partir la observación de Wagner, desde la sociología, el objeto sociedad puede ser analizado como “configuración de instituciones” (Wagner, 1997), y a su vez éstas instituciones analizadas como prácticas convertidas en normas. Las instituciones pueden ser miradas como organización de convenciones; para Wagner una crisis institucional implica una tendencia a la des-convencionalización, que puede ser seguida por un nuevo juego de convenciones. Las crisis son periodos durante los cuales los individuos modifican sus prácticas sociales hasta un punto en que las configuraciones institucionales se hallan sujetas a una profunda transformación. En una crisis, en vez de hablar de una pérdida de capacidad de acción o control, parece más adecuado constatar la presencia de una modificación a la orientación de la capacidad de acción y de un cambio en el modo de controlar las prácticas sociales. Las crisis concluyen con las trayectorias alteradas, pero esta alteración puede estar en distintos niveles. Por tanto el orden puede mantenerse igual a pesar de una aparente crisis institucional, o viceversa.

Desde la sociología, ha sido evidente que la economía se organiza por la vía institucional, se constituye en base a movimientos entre *agentes*, a través de los que se conectan los elementos del proceso económico. Polanyi, observando las grandes transformaciones económicas plantea que la interacción entre el ser humano y su entorno, y las definiciones de los actores en relaciones sociales, dan paso a un proceso de *institucionalización* de las normas. A la esfera institucional pertenecen las administraciones, la formas de distribución de ingresos, la forma de definición de impuestos, los sistemas de seguridad social, las políticas públicas, las “*propiedades de unidad y estabilidad*,

estructura y función, historia y política, confluyen en la economía a través de su investidura institucional. (...) He aquí las bases para definir el concepto de economía humana como un proceso institucionalizado de interacción, cuya función es ofrecer los medios materiales a la sociedad” (Polanyi 1944)².

En aquel sentido, la política económica va a depender de las formas de integración social de una época particular, de la posición de los actores, y va a designar los movimientos mediante los cuales se van a conectar los elementos del proceso económico. Siguiendo a Polanyi y Granovetter (2001), se encuentran aportes a los elementos de nuestra comprensión de institución e institucionalización, con la incorporación de la distinción entre agentes en distintos niveles, informales y marginales. El autor ha usado empíricamente las distinciones de Polanyi y las vincula con la teoría institucionalista. Entendió el concepto de *incrustación* como una forma de abordar el problema de la articulación micro-macro en el análisis empírico de la economía planteando que *“el procedimiento queda ilustrado por medio de la elaboración de las consecuencias macro de un aspecto de interacción a pequeña escala: la fuerza de los vínculos débiles”* (Granovetter, 1973). De este modo emprende una crítica a los modelos sistémicos focalizados en la acción formal, centrados en los *lazos fuertes* a la vez que excluyendo grupos y relaciones micro del análisis. Es decir, Granovetter aporta elementos subjetivos e informales para explicar -desde el concepto de interacción a pequeña escala- la difusión de información, la movilidad social, la organización política, la cohesión social y en consecuencia, la evolución institucional. La fuerza de los *vínculos débiles* entre instituciones permite observar flujos no observables a simple vista, aportando elementos para comprender el cuánto y de qué manera se irritan las instituciones sociales por el comportamiento. Para Granovetter, las transacciones que dan vida a las instituciones están

² En esta investigación se pone el foco en la política económica fiscal. Sin embargo, en el presente marco teórico se hablará en un sentido más amplio de política económica.

insertadas en las conexiones sociales. La institucionalización de la política económica ocurre en todos los niveles de la jerarquía social e involucra a los agentes. Esta integración de conceptos del autor resulta fundamental en la conciliación de la mirada institucional con la mirada interpretativa de los procesos sociales, resultando útil – además- en la incorporación de los discursos de agentes marginales a los procesos de decisiones de política económica; en Chile y Sudáfrica, tal es el caso, por ejemplo, de los actores sindicales, quienes de manera disímil han sido excluidos en los procesos institucionales del caso chileno, aún con legislaciones que han constreñido el poder de decisión, e incluidos con cuotas de poder y roles precisos en el caso de Sudáfrica³. En suma, la visión de Granovetter permite incorporar este tipo de discursos y acciones en la observación, y evaluar su nivel de impacto en la trayectoria institucional de la política económica.

Para entender la coordinación que se da dentro y entre las instituciones el institucionalismo clásico de North (1990) aporta elementos sustanciales. Desde esta perspectiva se asume que la vida social se compone de interacciones que se reiteran e iteran en el tiempo, y que quedan enmarcadas y cristalizadas en instituciones. Sus supuestos de erigen contrarios a la economía neoclásica, en tanto asume por una parte que los procesos de coordinación tienen fricciones, asimetrías de información y costos (Portes, 2010). Los planteamientos de North aportan un elemento central que si bien es obvio para la sociología, no lo es tanto para el estudio de la economía como objeto: los agentes son racionales en el espacio económico, pero no son omniscientes, lo cual permite una apertura a otros tipos de racionalidad de la acción, al consenso y la fundamentación normativa para el análisis de la institucionalización de la política económica. En

³ Otro aporte de la comprensión de los vínculos débiles en el desarrollo institucional es la incorporación de la informalidad en dos niveles. Primero, en las relaciones informales que se establecen en el proceso de decisión institucional, y segundo en la incorporación de la informalidad en tanto tema a ser resuelto por la política económica (en especial en Sudáfrica donde el sector de la economía informal es amplio y sustantivo).

este sentido entiende la racionalidad en un sentido más amplio, podríamos decir “*weberiano*”, donde los fines de la acción no son el único elemento determinante.

Entonces, las instituciones son *constricciones* ideadas por los agentes que dan forma a su vez a la interacción humana. Son elementos estructurados y estructurantes de la vida social, definen pautas de incentivos en el intercambio de agentes, reducen la incertidumbre, proporcionando disposición y orientando la interacción, limitando las elecciones sociales. Las instituciones definen los incentivos para que dos o más agentes cooperen, generan la motivación por cooperar y desincentivan la corrupción, la desafección, el oportunismo y el *free riding*, en tanto elementos fuera de las normas valoradas socialmente. Haciendo uso de la visión neo-institucionalista de institución, la visión sociológica del desarrollo institucional ha sido un tema clásico pero poco influyente en los estudios de la política económica. Variadas son las posturas teóricas que han buscado dar cuenta del modo en que emergen las instituciones sociales. Max Weber, por ejemplo, plantea que el proceso de institucionalización parte desde la *comprensión* de la acción social con sentido, hasta la *crystalización* social, probable, que se plasma en la configuración de *órdenes legítimos* (Weber, 2002). Entender este proceso, implica observar la relación entre la acción social de los diversos agentes formales o informales involucrados en el juego de la decisión y su relación con las estructuras de orden institucional ya sedimentadas históricamente, que operan como *path dependence* o pasado, a modo de facilitadores o restrictores de las decisiones presentes y futuras.

Resulta entonces improbable comprender sociológicamente el proceso de institucionalización de la política económica (o la racionalización de dicho proceso) sin analizar al mismo tiempo, desde una mirada cualitativa weberiana, las motivaciones en la acción de los actores involucrados y excluidos en los procesos de su constitución. En ese sentido, la interrelación estratégica de actores va a otorgar los parámetros X o Y para su consecuente institucionalización, mientras

que el *path dependence* operará como filtro para la inteligibilidad de las comunicaciones de dichos actores en las *situaciones de acción*⁴. Siguiendo esta línea, las instituciones dan sentido a la acción. De esta forma, tienen por un lado un componente cognitivo que irá definiendo la acción de los individuos, y por otro lado reglas institucionales que se cumplen a través de las organizaciones o aparatos administrativos.

En suma, y desde la mirada *weberiana*, una institución se caracteriza por ser una asociación que implica un cuadro *administrativo*; de esta manera involucra un carácter de relación social por un lado, y de autoridad y regulación por otro. La institución económica que analizamos en la presente investigación tiene un componente jurídico, asienta reglas coercitivas para los actores y otorga filtros de inteligibilidad social para la acción.

2. Instituciones sociales en sociología: una discusión en torno a la comprensión del desarrollo institucional

El concepto de instituciones se ha transformado en los últimos años en un indicador que permite desarrollar un análisis sociológico de la evolución de la economía, tanto desde una mirada inductiva como deductiva, incorporando al mismo tiempo un objeto de estudio que había sido exclusivo de la teoría económica. Ahora bien, ha habido una serie de miradas en torno al término institución, y por cierto “olvidos selectivos”, como ha planteado Portes (2006). Las instituciones son conjuntos de reglas escritas o informales, que gobiernan las relaciones entre los ocupantes de roles en organizaciones sociales y otras áreas institucionalmente estructuradas de la sociedad, como la política y la economía (Hollingsworth 2002, Granovetter 2001), en este caso.

⁴ El concepto de situación de acción *habermesiano* es pertinente para comprender la interacción entre sujetos en determinados contextos, quienes hacen referencia a sus valores, a normas sociales y la subjetividad para argumentar frente a un determinado tema (Habermas, 1998).

Desde la teoría sociológica clásica y contemporánea, existe un cúmulo de conceptos y distinciones claves que tienen gran utilidad analítica para comprender el desarrollo institucional de la sociedad y en este caso, de la política económica. En ese sentido, es desde paradigmas teóricos como el institucionalismo que se ha podido observar el desarrollo institucional y entender el desarrollo de las naciones y las políticas económicas nacionales. Por ejemplo, desde la economía Hoff y Stiglitz (2001), han considerado que “*el desarrollo ya no se concibe (solamente) como un proceso de acumulación de capital, sino como un proceso de cambio organizacional*”. Ésta ha sido una visión que ha estado presente en toda la tradición sociológica contemporánea implícitamente, sin haber logrado irritar a la observación económica de la sociedad. Han sido los nobeles de economía, tal como plantea Portes (2006), quienes han logrado influir la visión económica y el estudio de la evolución; tales son los casos de Joseph Stiglitz y Douglas North. Cuando North declaró que las instituciones importan, se comenzó a tomarlas en cuenta de manera más sistemática en el estudio económico en las ciencias sociales.

Al parecer, la sociología de la economía ha dado la bienvenida a este giro institucional, tal como plantea Evans (2004), sobre todo debido a que si se complementa una mirada analítica de las instituciones con una visión interpretativa del desarrollo social, podrían llegar a comprenderse procesos históricos de desarrollo de las políticas económicas con mayor nivel de complejidad, incorporando elementos de la vida social que no son observables de una visión puramente analítica; no solamente analizar en términos de lo que sucede a nivel empírico, sino explicar el por qué sucede y evaluar desde una perspectiva también analítica la consistencia con los discursos institucionales que motivan la legitimidad de esos cambios en los países.

En síntesis, ¿qué es una institución social? Las respuestas, tal y como se ha planteado, son diferentes y dependen de la disciplina. No obstante, una institución puede ser entendida como un *conjunto de*

normas sociales, cristalizada, que configuran un entramado que va a delimitar la acción futura de los agentes y procesos.

North (1990) definió las instituciones como “*toda forma de restricción que los seres humanos crean para dar forma a la interacción humana*” (pp. 3), una definición quizás poco precisa, que abarca un espectro amplio desde las normas incorporadas en el proceso de socialización hasta la coerción física. A partir de aquello, lo que se puede decir es que existen instituciones cuando existen influencias externas sobre el comportamiento de los actores sociales, lo que Durkheim (1986) definió como *normas sociales* y frente a lo que Habermas (1998) está de acuerdo, en tanto las normas son los elementos sociales que definen las reglas del juego de los agentes, por lo menos en el nivel del mundo de la vida. Sin embargo, en la evolución de las políticas económicas las normas no son lo único que existe en la base de su desarrollo. A partir de esta definición, hasta ahora incompleta, todo lo que se puede decir es que existen instituciones cuando *algo* ejerce influencia externa sobre el comportamiento de los actores sociales. Es indudable que eso no es todo lo que existe en la dinámica de las comunidades y sociedades reales. En un intento de aclarar el significado del concepto, citando a Portes (2004) elaboró una tipología que distingue entre *instituciones de movimiento lento*, en tanto dimensiones culturales y valóricas, e instituciones de *movimiento rápido*, en tanto normas legales y planes organizativos. A efectos de la presente investigación interesan las instituciones de movimientos rápido, si bien éstas no dejan de referenciar a las dimensiones de las instituciones de movimiento lento. Roland elabora una hipótesis respecto al cambio institucional en las sociedades singulares foco del estudio.

Las normas sociales y las *estructuras de poder* se erigen como limitantes para el cambio de las instituciones de movimiento rápido, que constituyen las instituciones económicas (Roland 2004: 104-105). Son elementos comunes, que pueden ser considerados campos habituales que dan un caldo de cultivo amplio para una mirada

interpretativa del problema del cambio institucional en las economías semi-periféricas, como Chile y Sudáfrica. La visión de Roland coincide con los diagnósticos de variedades del capitalismo para América Latina (Schneider 2009; Schneider y Karcher 2010; Schneider y Soskice 2009). Dentro de estos diagnósticos se plantea que el mecanismo de coordinación que caracteriza a la región no es el mercado ni la coordinación estratégica, sino la jerarquía. De ahí el concepto de Economías de Mercado Jerárquicas (HME). La jerarquía se refleja tanto en la dependencia de los países de ingresos medios a las decisiones de inversión hechas por empresas multinacionales, como en la división del trabajo tácita entre éstas y los grandes grupos económicos domésticos.

La jerarquía opera generando una concentración de la propiedad en unos pocos grupos diversificados que controlan grandes porciones de las economías nacionales, que ejercen su poder y propiedad de manera directa sobre las firmas y sectores que controlan. La jerarquía también opera otorgando mayores poderes de decisión a los empleadores y las asociaciones gremiales por sobre los trabajadores, beneficiándose así de la existencia de mercados del trabajo poco regulados, grandes reservas de trabajadores poco calificados y baja densidad sindical (Schneider y Karcher 2010). Lo anterior genera ventajas comparativas concentradas en actividades extractivas -minería, agricultura, etc.- e industrias intensivas en mano de obra de baja cualificación.

Desde lo que se ha denominado socioeconómico, se han realizado diversos intentos para poner orden a este entramado de conceptos. Una distinción que parece pertinente mencionar -por su impacto en las investigaciones más actuales de cambio institucional- es la propuesta por Hollingsworth (2002), quien distingue entre instituciones (*normas, reglas, convenciones, valores, hábitos, etc.*) versus arreglos institucionales (*mercados, Estados, jerarquías corporativas, redes, etc.*), sectores institucionales (*sistemas financieros, sistemas de educación, sistemas empresariales*), organizaciones y “productos y desempeño” (cantidad y calidad de los productos, etc.). Sin embargo,

por más orden que trate de brindar esta visión, se considera que aun padece la tendencia a hacer confluir elementos diferentes bajo el mismo concepto y limitar las posibilidades de observación causal y niveles de influencia. Según esta tipología nos interesa observar la relación inductiva y deductiva –dialéctica– que existe entre las instituciones y los arreglos institucionales.

El influyente neo-institucionalismo y la sociología analítica permiten sumar reflexiones causales a estas perspectivas, e indicar que el *contexto social* impone restricciones a las acciones del agente racional. Desde la sociología se podría decir que una afirmación de este tipo no es nueva; sin embargo en los estudios económicos es relevante y lleva a problematizar la racionalidad instrumental propia del clásico homo-económico, y a entender a los actores bajo una racionalidad limitada (Dolsak y Ostrom 2003, Elster et al. 1998). Aunque potente en sí misma, esta observación de la realidad institucional abre la pregunta de cuáles son las características del contexto social que limitan la acción racional. Al respecto, Portes (2006) plantea que decir simplemente que dependen de la época y del contexto, no lleva teóricamente a ningún lugar, puesto que esta afirmación no es cuestionable empírica o epistemológicamente. Para ello, los conceptos de la teoría sociológica son pertinentes.

Desde la sociología analítica, Ostrom (1990, 2000) plantea que la forma de resolver la problemática económica en la sociedad se desprende del dilema entre el interés propio (de actores, o grupos) y el bien colectivo (social) de quienes utilizan los mismos recursos de propiedad común. Desde un punto de vista normativo, Ostrom argumenta que ni el Estado ni el mercado pueden hacer esa tarea de forma total, pues tratan de imponer reglas externas a los agentes relevantes, pero siempre habrá espacio de reflexividad y resistencia. En ese sentido, las restricciones sociales importan junto con esta reflexividad. Ésta es la tesis de North (1990) que permite analizar el desarrollo institucional en la dialéctica entre aquello que permanece en tanto reglas y aquello que puede cambiar en tanto emergencia

contextual. Sin embargo, ha quedado un vacío teórico y de resultados prácticos de la investigación en torno al cambio institucional. Este problema ha sido descrito en el trabajo de Hoff y Stiglitz (2001), Portes (2006), Streeck (2005) y otros.

3. Dimensiones interpretativas del análisis institucional: valores y normas

Para el análisis de la política económica de un país, desde una mirada comparativa, los elementos que componen la cultura y la estructura pueden ordenar en una jerarquía de influencias causales⁵. Para ello, podemos tener como unidad de observación a los valores, en tanto elementos con cierta profundidad pero que pueden ser observados en circunstancias o situaciones de acción, como plantearía Weber. Los valores están implícitos, y se pueden inferir del comportamiento de los actores. Desde la sociología analítica éstas serían las restricciones a la acción de los actores no procedimentalizadas o no normadas, que observaría North (1990), Ostrom (2000) y otros en tanto elementos circundantes o externos a las instituciones propiamente tal.

Las restricciones en un nivel observable son las normas; directivas concretas para la acción, o cristalizaciones explicitadas del cómo proceder de los actores, una dimensión observable en tanto indicador del auto-entendimiento social. Los valores están implícitos y relacionados a las normas en su emergencia; son reglas que prescriben el cómo proceder, lo que se puede hacer y aquello que no se puede hacer. Estas reglas pueden ser formales y codificadas en constituciones, en leyes, o bien implícitas.

⁵ Desde la Mirada de Habermas, complementada con la observación de Wagner, la cultura puede ser observada en tanto compuesta por valores, desde factores ‘profundos’, a menudo ocultos bajo la vida social cotidiana pero fundamentales para su organización, hasta fenómenos ‘superficiales’, más variables y evidentes. El lenguaje y los valores son los elementos ‘profundos’ de la cultura, el primero como instrumento fundamental de la comunicación humana y los segundos como fuerza motivadora de la acción moral, individual o colectiva.

El concepto de institución incluye los valores y normas en su configuración en tanto cristalización de los mismos y en la restricción de su variación en el tiempo. Es un concepto que involucra un proceso dialéctico entre la emergencia de los valores hasta su fijación a nivel social, y que al menos a nivel teórico incluye la propia posibilidad de su destrucción y/o renovación. La investigación empírica e histórica aporta elementos para dar fuerza a este argumento, tal como la definición de institución de Weber o Polanyi antes planteada.

Uno de los aportes más reciente de la sociología económica a la observación del desarrollo institucional es la incorporación de la idea de roles. Los actores de la política económica de una nación entran en juego en el cambio y permanencia institucional ocupando *roles o posiciones determinadas* en sus organizaciones y en las instituciones. Del mismo modo, sus roles están sujetos a restricciones e incentivos de las normas. Los roles incluyen expectativas normativas sobre los actores, que vienen desde otros actores o de sus colectivos y proveen de un repertorio instrumental de habilidades necesarias para el desempeño de sus funciones en las instituciones. En torno a temas económicos, desde la sociología moderna los roles han sido entendidos como un *repertorio de habilidades*.

En suma, valores, normas y roles, si bien son conceptos clásicos de la sociología, no han estado presentes con la fuerza que amerita en los estudios de la socio-economía y las observaciones de las trayectorias institucionales de las políticas económicas.

4. Dimensiones analíticas del desarrollo institucional: poder y élites

Las instituciones son moldeadas, en gran medida, por los diferenciales de poder de los agentes. La definición de poder que más aporta a nuestro modo de observación es la Weber (1992), en tanto habilidad de un actor para imponer su voluntad a pesar de la resistencia de otros, pues destaca el carácter forzoso y coercitivo de este elemento básico de la estructura social. No depende del consentimiento voluntario de los subordinados, y para que algunos actores y grupos lo tengan, otros deben ser excluidos del acceso a los recursos que confieren poder. Mientras que los valores motivan o restringen, el poder permite. En el análisis del sur global, y en particular en el caso de Chile y Sudáfrica, la idea de distribución desigual del poder entre los agentes sociales es central, por tanto la idea de élites se posiciona también como fundamental.

Las élites que controlan los recursos tanto políticos como económicos, y que confieren poder, tratan de estabilizar y perpetuar su posición reproduciendo los valores a modo de persuadir el orden existente, ya sea por la vía de la facticidad o la validez. Como dice Weber (2002), el poder así se legitima y se convierte en autoridad, cuando los subordinados aceptan su posición o no logran cambiar el orden. En el análisis institucional, el poder está presente en las relaciones de autoridad del espacio de la política económica, al que Williamson (1985) denomina jerarquías.

En ambos contextos -Chile y Sudáfrica- el poder de negociación de las coaliciones políticas post autoritarias ha sido central para definir la política económica. Desde el marxismo teórico, la evolución institucional de la economía se puede comprender como una concatenación de crisis, y sería el poder en manos de las élites lo que permitiría regular esos momentos complejos⁶. Lo que se observa

⁶ Desde el marxismo, las crisis económicas se explican bajo la lógica de intentos por contrarrestar la caída tendencial de la tasa de ganancia o la lógica capitalista en

entonces en la evolución institucional son formas institucionales de regulación social. Las formas institucionales son *codificaciones* de una o varias relaciones sociales fundamentales, siendo categorías intermedias y sub-determinadas. El rol de las formas institucionales es codificar y sintetizar los conocimientos necesarios para la acción de los individuos, y por tanto simplificar el contenido informacional y cognitivo presente en la economía y la sociedad en general. Los agentes actúan con una racionalidad institucionalmente situada, siendo de esta manera las formas institucionales reductoras de incertidumbre.

En la discusión en torno a diferenciales de poder, el ordenamiento jerárquico de la sociedad es lo que deriva de ello (Casassas, 2010), así como el concepto fundamental de clase social. Una de las formas de entender dicho concepto es de manera agregada, cuya posesión o exclusión de recursos materiales y simbólicos lleva a diferentes oportunidades y capacidades para influir en los acontecimientos. Por lo general, la posición de clase se asocia con la riqueza o la falta de riqueza, pero también está vinculada con otros recursos que confieren poder, como las conexiones o redes correctas con los otros (Bourdieu 1990; Portes 1998). Como recalcó Bourdieu, las clases dominantes disponen de combinaciones de recursos que no sólo incluyen la riqueza, sino también vínculos para influir en otros, lo que se denomina capital social, y el conocimiento y estilo para ocupar posiciones de alto nivel de estatus capital cultural. A esto se le agregaría, además, el capital moral, que tiene que ver con la posición respecto al entramado de vivencias que hacen a un actor legítimo o ilegítimo en su campo de acción.

El poder legítimo en tanto autoridad, y el que podríamos considerar ilegítimo en tanto influencias, produce a su vez jerarquías de estatus que determinan cómo perciben realmente los actores sociales la estructura implícita de poder y cómo se clasifican a sí mismos (Portes, 2010).

su más pura lógica de maximización de ganancias para un grupo en particular o grupos particulares (Brenner, 2009).

En síntesis, no todo es restricción del comportamiento, sino que algunos elementos restringen, otros motivan y otros permiten. Lo que se ha intentado es construir un marco teórico útil para el análisis comparativo de la realidad institucional de la política económica de Chile y Sudáfrica. Las definiciones de North y el institucionalismo de la economía no son completamente complejas, pues no asumen el problema de la relación entre esas instituciones con el contexto al que están incorporadas de manera sustantiva (roles, clase, poder), así como los planos contingentes que especifican las relaciones entre esos roles, y por tanto la estructura real de las instituciones.

Giddens (1987) ha señalado en torno a su análisis de la estructuración social, que las instituciones no son estructuras sociales, sino que tienen una estructura social. Por ejemplo, las organizaciones, como representación real de los planos que guían las relaciones entre roles. Ahora bien, si solo nos quedamos con la visión de procesos de cristalización de valores, normas e instituciones, no sería suficiente para entender la ausencia de cambio o la continuidad de los procesos sociales, y tampoco para evaluar dichos cambios en relación a un parámetro político de consistencia con los discursos, de expectativas sociales en un horizonte de resolución de la problemática económica en democracia. No es cierto que una vez establecidos los ocupantes de un rol o posición social sigan ciegamente las reglas institucionales definidas, sino que las modifican, las transforman y las evitan continuamente en el curso de su interacción cotidiana. Y en esta dinámica entran en juego los intereses y estrategias.

El contexto histórico, nacional e internacional es relevante. Las instituciones están sujetas al encaje social, y los intercambios entre agentes que las instituciones tratan de guiar afectan, a su vez, a estas instituciones. La definición de institución, entonces, coincide con la idea de unos planos que especifican las funciones y libertades de los roles de los agentes, las relaciones entre los agentes y sus grupos de adscripción. Las instituciones y las organizaciones resultantes se

pueden crear desde cero, como un *novum* radical o revolucionario en una trayectoria histórica, o bien se pueden remodelar en función de los parámetros ya asumidos. Varios ejemplos existen de estas situaciones en las trayectorias institucionales de los países analizados, desde la creación de instituciones como el Banco Central en Chile en el periodo dictatorial, o ciertas reformas que han buscado fortalecer la independencia respecto al mercado internacional o asumir ciertos mandamientos externos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional (FMI). Estos temas serán desarrollados en el análisis histórico de los casos.

En forma similar, el rol de ciertos actores, como un ministro de gobierno, puede implicar la expectativa de preferencias particularistas en la asignación de empleos y del patrocinio del gobierno, o nombramientos por lealtad al partido y no por la experiencia y convicción valórica.

La práctica de usar el poder del cargo para asegurar una posición o un equilibrio entre instituciones es conocida en las transiciones políticas post autoritarias (Marais 2001, Garate 2013, Ominami, 2012). Cuando los planos institucionales se superponen a esas realidades, no es difícil imaginar los resultados. No se trata de que estos planos sean necesariamente contraproducentes, sino que pueden tener una serie de consecuencias inesperadas y disímiles (o inconsistentes) con el discurso en torno a lo que se haría o se debería hacer (O'Donnell 1994; Portes 1998).

Las clases dominantes o élites de los países que han sido estudiadas en la presente investigación, Chile y Sudáfrica, ya sea una élite radicalmente nueva en su configuración como en el caso sudafricano o una élite que ha vuelto al poder político como en el caso chileno, rara vez han renunciado voluntariamente a sus posiciones o a los recursos que les confieren poder. Casi siempre se produce una lucha en la que las ventajas de poseer cargos dan la delantera a las élites establecidas. Es por ello que ha sido tan difícil implementar políticas de reforma de

la propiedad, o aumentar la competitividad internacional de las industrias locales propiedad de grupos privilegiados acostumbrados a la protección estatal y a la complacencia de las grandes potencias. Stiglitz (2001) ha reconocido la relevancia del poder, y ha planteado que la imposición de nuevos conjuntos de reglas, sin un cambio simultáneo de la distribución del poder (y la propiedad), es una estrategia que puede no tener los efectos esperados. Esto no es nuevo desde la sociología, pero es relevante dentro de los estudios del campo económico. Ahora bien, desde esta observación, el poder no es una entidad que flota libremente y en ese sentido se toma distancia de la visión *foucaultiana* del mismo. El poder depende de recursos sustantivos, capital, medios de producción, violencia organizada y capital moral, elementos que como veremos en el curso de la investigación varían en los casos de Chile y Sudáfrica.

5. Implicancias del cambio institucional

Tanto North (1990) como Campbell (2004) permiten entender los distintos enfoques del cambio institucional predominante en los estudios actuales. Para un estudio comparativo, la visión más histórica del institucionalismo basado en la política económica, es la más pertinente. El cambio social puede ser entendido como un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente en el tiempo (a), o como una combinación de evolución puntuada o irrupción del acontecimiento, cuando ocurren cambios drásticos (b). Campbell considera que los determinantes principales del cambio pueden ser ordenados en dos elementos: la dependencia de la trayectoria (a), o la tendencia de los acontecimientos a seguir un curso rígido en el que lo que existía ayer determina en gran parte lo que ocurre hoy y lo que es probable que ocurra mañana (b), por ejemplo bajo el concepto de *path dependence* (North 1990), y la difusión, o tendencia de los modelos institucionales establecidos a desplazarse, influyendo en la evolución de los acontecimientos.

Los modelos institucionales de los países del centro económico, como

economías avanzadas de acuerdo a los parámetros legitimados de la sociedad mundial, van influyendo en el devenir de los países analizados, la tutela de agencias internacionales o el deseo de los gobernantes locales de imitar el mundo moderno. Este es un proceso dominante en el mundo global (Meyer et al. 1997).

El cambio institucional no es equivalente al cambio de la estructura de clases o del sistema de valores de una sociedad o de un país, procesos que afectan a las instituciones, pero que ocurren de manera separada o son posibles de observar de manera separada. La idea de dependencia de las trayectorias, ya propuesta por los estudios de la teoría de la dependencia en América Latina y la idea de *difusión* o *generalización* de valores y normas, como elemento o *novum* en las trayectorias de acontecimientos que concatenan la evolución institucional, permiten observar el cambio en tanto nodos o puntos concretos en las trayectorias institucionales. Un cambio en el marco de esta investigación implica, por tanto, un nuevo modo de hacer en determinada institución, que afecte el modelo de desarrollo económico en su conjunto.

Desde la mirada de los autores más influyentes en el análisis institucional, desde North hasta Portes, el cambio histórico del desarrollo institucional tiende a ser gradual; y la manera ya estructurada en la sociedad de hacer las cosas determina en gran medida el futuro de los acontecimientos. Ahora bien, el cambio institucional no se limita a la difusión de elementos nuevos y a la dependencia de la trayectoria pasada. El cambio también puede afectar en niveles profundos, produciendo resultados radicales e incluso considerados no evolutivos en la trayectoria, teniendo un carácter re-fundacional en varios aspectos. Tal es el caso, por ejemplo, de la reconstrucción institucional post apartheid en Sudáfrica, o la re-configuración de las nuevas democracias en los países del Este, no siendo así en el caso chileno, donde los cambios han sido más mesurados.

Peter Wagner, así como gran parte de la sociología histórica contemporánea, incluidos Charles Tilly (1984), Immanuel Wallerstein (1991) se ocupan también del cambio revolucionario. La teoría de las trayectorias de modernidad de Wagner, con el concepto de auto-comprensión social, destaca el conflicto entre las visiones del mundo y la tensión entre autonomía y control por parte de los grupos de poder. Un cambio estructural en el desarrollo institucional se presenta luego de una concatenación de acontecimientos extensa, y esto se hace evidente en momentos de efervescencia colectiva y en sus impactos institucionales subsecuentes. En este sentido la sola idea de *path dependence*, o dependencia de la trayectoria pasada, es muy limitada. Permite explicar bien la continuidad, pero no así el cambio.

En síntesis, es evidente que las instituciones se ven afectadas por los cambios sociales a nivel general, sean estos revolucionarios o no. A partir de la literatura expuesta, y siguiendo el ordenamiento en niveles de Campbell (2004), podemos plantear teóricamente algunas fuerzas potenciales que influyen en las instituciones y su transformación histórica. El autor afirma lo siguiente, ordenando por niveles las posibilidades de cambio: 1) la dependencia de la trayectoria pasada, permite observar el cambio más visible, 2) la difusión o *novum* externo que lleva a un cambio evolutivo en un nivel intermedio; 3) Los avances en el acoplamiento externo o avances científicos (conocimiento o técnicas) que afectan las habilidades y el orden normativo; 4) los liderazgos carismáticos o procesos morales, capaz de transformar el sistema de valores y por ello la cultura⁷; 5) las disputas entre élites (clases sociales) que tienen potencialidad para cambiar la distribución del poder. Según Portes (2006), estos últimos elementos determinarían un cambio institucional profundo del tipo que se observa luego de las revoluciones sociales y las intervenciones que marcan épocas, como ciertas figuras históricas radicales.

⁷ Respecto a la evolución carismática y normativa en la sociedad, resulta pertinente en este punto hacer la comparación entre evolución de liderazgos carismáticos o figuras radicalmente relevantes en la sociedad y las figuras religiosas. Tal es el caso del capital normativo que podrían tener figuras como Nelson Mandela en Sudáfrica.

6. Continuidad institucional neoliberal y regímenes de desarrollo

Una de las hipótesis conductoras de la presente investigación es la continuidad del modelo de desarrollo autoritario respecto al post autoritario en los países o sociedades singulares analizadas. Para entender esta continuidad, se desarrollarán aquí algunas ideas que configuran un marco analítico que entiende las teorías existentes sobre el cambio institucional de las políticas económicas llamadas avanzadas, mediante la incorporación de la noción de *jerarquía institucional* (Amable 2003, Amable & Polimbarini 2009). La continuidad institucional y el cambio no solamente dependen de las características del contexto político y el grado de interpretación de las instituciones (Streeck, 2005), sino también del grado de relación de las diferentes instituciones y por sobre todo de cómo éstas instituciones son percibidas por los grupos interesados de la jerarquía institucional.

Frente a lo anterior, en primer lugar, se considera que en las teorías interpretativas de las trayectorias históricas de cambio, incluyendo la de Peter Wagner con el análisis de la confluencia de las problemáticas de la modernidad (política, economía e epistémica), no ha sido clara la confluencia en el análisis empírico de las investigaciones de desarrollo institucional. Para ello, se propone que la indagación de los mecanismos explicativos de las trayectorias políticas y económicas, son confluyentes, y explican la continuidad de regímenes de desarrollo institucional de la economía, tal es el caso de Chile y Sudáfrica. En segundo lugar, se busca profundizar en los procesos más amplios de continuidad de las políticas económicas neoliberales post autoritarias, en tanto economías particulares con carácter re-fundacional, a nivel discursivo en la semi periferia capitalista.

La continuidad institucional se explica por la capacidad, a base del poder, de los *grupos dominantes* o élites para defender las

instituciones de *alta jerarquía*. Son esas instituciones en lo alto de la jerarquía institucional las que reflejan los intereses del bloque dominante más directamente o constituyen la base de un compromiso político del bloque dominante.

Tal como plantea Amable (2003), de este modo los grupos dominantes son capaces de defender esas instituciones mediante la alteración de ciertos parámetros para que el desempeño institucional se vea reforzado (ajuste marginal de la institución), o a través del estrechamiento de la interpretación de parámetros (solidificación de reglas) o mediante concesiones menores o mayores de capacidad de negociación a instituciones con menor jerarquía (promesa de acomodación, por ejemplo).

Para observar el cambio o la continuidad, es necesario examinar también los mecanismos, debido a que éstos son los indicadores observables en cualquier trayectoria de desarrollo social. Siguiendo a Elster (1989), los mecanismos son fácilmente reconocibles patrones causales que se producen con frecuencia y que se activan bajo condiciones desconocidas y con consecuencias indeterminadas. Según (Hedstrom 1998, Hedstrom & Bearman 2009) un mecanismo se convierte en una constelación de actividades a nivel social, vinculadas entre sí, de tal manera que producen regularmente un determinado resultado histórico. Un mecanismo social incluye actores (entidades) y actividades (relaciones, acciones, interacciones) y el resultado de esa interacción es una institución social, su cambio, y permanencia.

Los mecanismos de cambio en las instituciones individuales se complementan con esfuerzos a largo plazo en la modificación de las condiciones mismas que afectan el cambio institucional, por lo que las posibilidades de los cambios futuros se reducen o se aumentan, el horizonte de emergencia de nuevos acontecimientos que modifiquen la lógica institucional se ve constreñida o abierta a nuevos elementos. Desde la visión de Amable (2003), es interesante ver que trayectorias incluso divergentes de continuidad institucional de las políticas

económicas se pueden explicar por el recurso a la importancia de los puntos de inflexión, o acontecimientos similares. Es en estos momentos de las trayectorias donde se puede realizar una observación empírica de diferentes mecanismos de continuidad. Esta investigación de la trayectoria económica de sociedades de la semi periferia capitalista, siguiendo a Hall (2001), intenta poner el énfasis en la dimensión política del cambio económico y la explicación de su continuidad, desde una observación de mecanismos de trayectorias institucionales.

En las últimas dos décadas, las cuestiones de la continuidad institucional y cambio han sido cada vez más analizadas con la identificación de los *mecanismos causales* que refuerzan o quiebran las trayectorias institucionales (Mahoney, 2000). En ese sentido, la discusión se ha desplazado gradualmente a los mecanismos de equilibrio dependientes de la trayectoria, que permiten explicar la persistencia de la continuidad y el cambio en el capitalismo contemporáneo.

Sin embargo, una de las hipótesis del presente trabajo es que, muchas veces la deseada continuidad por parte de las élites que ostentan el poder, necesita de cambio en las instituciones. Por lo tanto, más importante que las *restricciones* al cambio, o en el mismo nivel, es la capacidad de ciertos actores para volver a configurar la estructura institucional con algunas limitaciones para asegurar su continuidad (Madariaga, 2016). Los trabajos recientes sobre continuidad institucional (Streeck 2005, Hacker 2005, Mahoney & Thelen 2010), han ayudado a comprender y establecer algunas reflexiones sobre cómo es posible que cambie una institución según características del contexto político y de un conjunto de instituciones afectadas.

Aún siguen existiendo tensiones o brechas entre las explicaciones del cambio y los mecanismos para explicar éstos. Por un lado, las teorías de la continuidad son demasiado rígidas para explicar el cambio en ciertos niveles, y las teorías de la discontinuidad son menos útiles para

explicar la estabilización. En este marco teórico se sostiene que para hacer frente a las deficiencias y complejidad de los estudios institucionales, y a la ausencia de perspectiva crítica en la mayoría de los estudios neo-institucionalistas, es necesaria la incorporación de la noción de *jerarquía*. La discontinuidad o continuidad en la observación del desarrollo institucional puede ser resultado de la incorporación de la noción de jerarquía institucional. Las instituciones no solo son capaces de cambiar cuando no están sometidas a la alteración formal, también pueden persistir en su configuración inicial, a pesar del cambio formal, o precisamente a causa del cambio formal.

Si se entienden las instituciones como compromisos de distribución entre los grupos con intereses, roles y poder, el conjunto de los grupos sociales que logra institucionalizar sus preferencias políticas e imponerlas a los demás forma un bloque dominante. La jerarquía institucional consiste en aquellas normas que son más importantes en el mantenimiento de la hegemonía del bloque dominante y el compromiso político subyacente (Amable 2003: 66, Amable & Palombarini 2009: 135). La jerarquía que el bloque dominante atribuye a estas reglas en el cumplimiento de sus objetivos de política, reflejaría el poder relativo de los diferentes grupos de la política económica en general, y dentro del bloque dominante, en particular. Tal como se ha observado en las investigaciones de Fourcade & Babb (2002) y Schneider (2009), en las economías periféricas el rol de las élites y el poder ha sido central en el cambio y continuidades institucionales.

Observando la estructura institucional de las políticas económicas por niveles analíticos, en la parte superior del ordenamiento jerárquico se encuentran las reglas que importan más para la obtención de los objetivos de política del bloque dominante, o alrededor de la cual el compromiso del bloque se sustenta. En su parte inferior, nos encontramos con normas que son menos determinantes de sus objetivos de política, o que no entran en la fórmula de compromiso

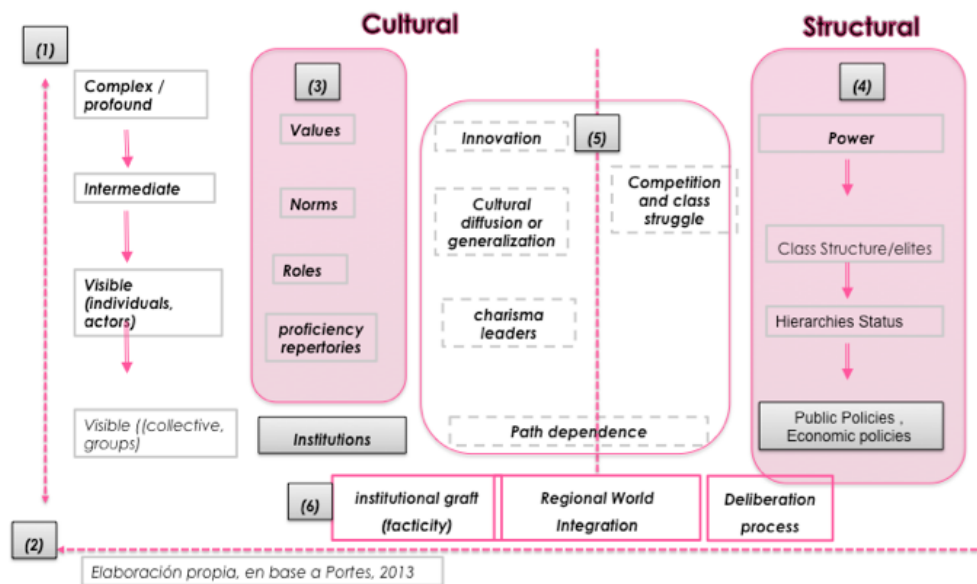
que se pretende. La fórmula sobre la que descansa esta configuración se debe a una variedad de factores cuyo impacto necesita ser estudiado en cada caso particular. Cuando un bloque dominante y sus instituciones de alta jerarquía en la hegemonía se posicionan a base de poder e intereses particularistas, imponen su lógica y dan una forma particular a la arquitectura institucional general. Un factor que no podemos dejar de considerar, en tanto políticas económicas periféricas, es el efecto de las fuerzas externas sobre la configuración nacional (Cardoso & Faletto, 1969).

Según Amable (2003), es necesario tener algunas ideas claves en consideración. El cambio será más difícil o aplicado con más cautela en ámbitos en los que los grupos más poderosos tienen intereses creados y en que los acuerdos políticos son difíciles de obtener, es decir, las instituciones de alta jerarquía. En el sentido contrario, se espera que en aquellas áreas en las que los grupos dominantes tienen poco interés, es decir, las instituciones de baja jerarquía, el consenso sea más fácil de conseguir y sean más fáciles de cambiar (Amable 2003: 68, Amable en Crouch et al 2005). Desde esta visión se desprenden dos supuestos: primero, la estabilidad histórica de las instituciones dependen de su posición en la jerarquía y segundo, la dinámica de la continuidad del régimen de desarrollo y su trayectoria puede ser capturado por la observación de las estrategias de los grupos dominantes para defender las instituciones de mayor jerarquía. La continuidad de las trayectorias institucionales refleja la capacidad del bloque dominante para sostener sus preferencias políticas, y es más probable que ocurra en un contexto político muy inclinado al mantenimiento del *statu quo*, donde esta adherencia alta del status se combina con altas barreras de cambio interno, de diferente naturaleza como por ejemplo, los amarres institucionales del pasado dictatorial, y los intereses de las élites, entre otros. De este modo, el bloque dominante de poder mantiene su composición y la correlación de fuerzas, mientras que los pequeños cambios en las instituciones existentes están pensados, incluso, para mejorar su desempeño. Los grupos dominantes o élites pueden alterar los parámetros de la

institución o introducir nuevas instituciones que puedan alcanzar los objetivos de política similares. De esta forma, el régimen puede mantener los objetivos de políticas generales del bloque dominante y reforzar sus políticas de soporte.

En síntesis, cuando el contexto político se abre a un desafío más intenso de cambio, la capacidad para impugnar las jerarquías de los grupos no hegemónicos, dentro y fuera del conglomerado del bloque dominante, es mayor. Cuando esto se combina con la reducción de las barreras al cambio interno, los grupos de poder aún pueden conservar un margen de maniobra en la interpretación y aplicación de las normas existentes. En este contexto, es posible que quieran romper las reglas con el fin de dar cabida a los intereses de otros grupos poderosos de presión para el cambio. En consecuencia, este tipo de ajuste institucional puede caracterizarse por una recomposición del bloque dominante con el objetivo de ampliar la base de apoyo para un cierto régimen.

En conclusión, en el siguiente esquema se intentan reflejar los conceptos expuestos y su ordenamiento, para comprender la configuración institucional del modelo de desarrollo económico de un país, en este caso Chile y Sudáfrica, y el cambio y la continuidad del mismo.



En la primera columna del esquema (1), observamos los niveles sociales a los cuales se puede acceder mediante la observación empírica y los métodos que provee la sociología, desde los más complejos o profundos, hasta un nivel más visible, donde se encuentran las instituciones (en el recuadro remarcado).

En la parte horizontal del esquema (2) podemos observar las dimensiones de lo social desde un nivel cultural hasta un nivel estructural, usando las categorías de la sociología y el neo-institucionalismo. La dimensión estructural de las instituciones, y por ende sus indicadores observables empíricamente, vendrían a ser las políticas públicas o políticas económicas, en tanto planes y programas del sistema político.

En el nivel cultural (3) se tienen conceptos ya definidos, como normas, valores, roles y repertorios de los agentes, que son observables a través de sus discursos y prácticas, mientras que en el nivel estructural (4) se tienen las relaciones de poder, la estructura de clases de los grupos (élites) y la jerarquía de sus estatutos en la estructura institucional.

La pregunta por el cambio institucional y la continuidad se puede desarrollar desde las teorías institucionalistas que explican el desarrollo institucional en los modelos económicos de los países, por la innovación tecnológica o los modos de producción en un nivel de las normas (5). Por la variación cultural, difusión de nuevas formas de hacer y generalización de los valores sociales. También por la acción social de líderes carismáticos y políticos con influencia y legitimidad amplia. Del mismo modo, la competición de las élites y la posibilidad de imponer su modo de hacer, juega un rol central. Estos son solo algunos mecanismos relevantes. En el proceso investigativo se han encontrado otros que serán desarrollados, tales como el capital moral de las élites que toman decisiones en materia de política económica. El *path dependence* ocupa un lugar central en las trayectorias de cambio y continuidad.

Adicionalmente, se puede ver (6) que existen explicaciones de mecanismos más elaborados y nuevos como la integración regional, los procesos deliberativos de decisión y la facticidad misma de la política que pueden explicar la configuración de las instituciones en los modelos de desarrollo.

Capítulo II

¿Por qué hablar de neoliberalismo? De ideología a herramienta interpretativa

El neoliberalismo es un concepto controversial tanto en las ciencias sociales como en el debate político, especialmente en los últimos años post crisis financiera del 2008. Desde las ciencias sociales y económicas, se ha considerado que es un concepto ideológico y riesgoso por su carencia analítica o interpretativa, reprochando la aparente carencia de definición sustantiva y afirmando que su uso implica forzar la realidad para enmarcarla en su definición (Sartori, 1970). Su actual uso lo erige como un concepto cargado normativamente para elaborar una crítica de ciertas situaciones y adversarios políticos (Varoufakis, 2010; Boas y Gans-Morse, 2009). A pesar de las críticas que expongo en la investigación al plantear la definición de neoliberalismo como eje del análisis, considero que el concepto tiene tanto utilidad sustantiva como interpretativa. En relación a la utilidad sustantiva, las dimensiones del neoliberalismo permiten comprender el rol del Estado y los diversos actores en las trayectorias socio-económicas de los países de estudio. Y en un segundo lugar, desde una perspectiva interpretativa, el concepto de neoliberalismo permite dar luces sobre la configuración particular que adquiere la política económica en las sociedades post autoritarias estudiadas. El objetivo de este capítulo es elaborar un marco conceptual útil para el análisis de la construcción política de las políticas económicas en Chile y Sudáfrica en sus periodos post-autoritarios.

Los usos cuantiosos del término neoliberalismo se caracterizan por importantes lagunas en la definición. Es normal encontrar el concepto en un sinfín de publicaciones; sin embargo pocas veces se usa una definición al respecto, y menos aún una definición operacional. El uso más común, para no hablar de esta fase histórica de la economía como neoliberalismo, generalmente es capitalismo contemporáneo

(Casassas y Wagner, 2016). El concepto de capitalismo contemporáneo se define como una etapa del capitalismo, sin embargo el neoliberalismo remite a los aspectos teóricos y normativos de este capitalismo, especialmente en como se despliega en países como Sudáfrica y Chile, donde el proceso refundacional del Estado cristaliza en términos institucionales su relevancia en la coordinación de la economía. El concepto neoliberalismo en este sentido es más pertinente para analizar casos concretos, dada su potencialidad operacional, y la capacidad de dar cuenta de dimensiones propias de un sistema de diseño institucional que tiene implicancias en el desarrollo. Y por cierto dar cuenta de las concepciones ideológicas y teóricas que sustentan esta etapa de la economía.

Esta imprecisión instala una gran confusión sobre su sentido, e instala un fantasmagórico temor al nombrarlo en espacios académicos, y enunciarlo. Además, constatan que el uso contemporáneo del término en las ciencias sociales está cargado hacia un sentido despectivo para describir las reformas o políticas. En su análisis se encuentran pocos usos positivos del término, o la utilidad de las afinidades con el concepto; se comprueba un uso asimétrico según las diferencias ideológicas en las ciencias sociales (Boas y Gans-Morse, 2009, p.140). En general, son las perspectivas críticas frente al mercado como mecanismo de coordinación las que catalogan estos procesos como neoliberales. Por lo tanto neoliberal o neoliberalismo ha pasado a ser una etiqueta muchas veces usada para el repudio, más que un concepto analítico e interpretativo.

En general, el neoliberalismo desde esta visión crítica tendría cuatro significados subyacentes en su uso, a saber: un conjunto de políticas de reforma económica; un modelo de desarrollo contrario al modelo de desarrollo estatal; una ideología con carácter normativo, que pone al centro la libertad como valor; y un paradigma académico relacionado con la teoría económica neoclásica (Maillet 2015; Palma 2007). Los autores esbozan tres vías en las que usar el concepto analíticamente podría ser provechoso: para distinguir el capitalismo contemporáneo de períodos de desarrollo anteriores en términos

económicos; para acentuar las diferencias entre los sistemas económicos actuales de los llamados países en desarrollo y países desarrollados, manteniendo en algunas ocasiones esta distinción; para analizar los modelos de desarrollo de esos mismos países o conjunto de países.

Uno de los centros conceptuales y normativos del concepto es la idea de competencia (Theodore, Peck y Brenner, 2009). En la mayoría de las reflexiones acerca del neoliberalismo la *competencia* es la dinamizadora del mercado y justifica su aplicabilidad en términos empíricos, y permite entender -al menos reflexivamente- la opción generalizada por el mercado en las relaciones entre Estado - actores del mercado.

Del mismo modo, en las discusiones existe una paradoja evidente en torno al rol del Estado en el neoliberalismo. El punto aquí es que el Estado es impreciso, lo que permite la construcción de una idea analítica de neoliberalismo con matices de acuerdo a sus dimensiones. No se puede afirmar que el Estado tiene un rol particular sino más bien que el Estado siempre cumple un rol, en distintos niveles, en relación a la provisión o no de seguridad, y coordinación o no del mercado (Hall, 1989). El Estado está presente en su aparente ausencia. Uno de las mayores críticas y dudas frente al uso del concepto de neoliberalismo es que su extensión conceptual es muy amplia. Situarlo en el plano de la sociología permite una primera restricción a la problemática de la interacción entre los espacios de la sociedad, y la interacción entre el sector público y privado a escala nacional en los países en estudio. Sin embargo, incluso dentro de esta aproximación la literatura evidencia una tensión entre la doctrina neoliberal y la impronta hacia el repliegue del Estado versus una práctica política apoyada por este mismo Estado. El objetivo de la construcción conceptual es conciliar estos aspectos y hacerlo en la distinción entre el nivel sociológico y las dimensiones del concepto.

A efectos de la presente investigación esta dimensión es sustancial, pues la intervención del Estado implica la definición del tipo de

modelo de desarrollo de ambos países: Chile y Sudáfrica. El núcleo común del concepto de neoliberalismo es lo que caracteriza sus dimensiones en forma transversal. En los años 80 la discusión sobre dicho concepto le entrega una importante flexibilidad. Aun así, el principal rasgo del núcleo común o basal es la presencia del mercado como forma de coordinación predominante, cimentada en su supuesta superioridad teórica y normativa sobre las alternativas, debido al rol de la competencia como dispositivo epistémico. Sin embargo, también existen divergencias internas al concepto, en particular respecto al rol del Estado. La plasticidad del concepto permite su resolución mediante la creación de constelaciones teóricas y empíricas disimiles, pero no por ello contradictorias.

El núcleo común del concepto se encuentra en la predominancia del mercado como mecanismo de coordinación para toda clase de actividades productivas. Esta supremacía tiene su correlato en la externalización de funciones que el Estado había asumido en algún momento como productor principal, basada en la convicción de que el sector privado resultara más eficiente en esa tarea. Por lo tanto, el neoliberalismo en tanto sistema se erige como una relación entre organismos del Estado y actores de mercado donde estos últimos están a cargo de la provisión de los bienes y servicios. Esto es una traducción de la creencia propia del neoliberalismo como doctrina de que el mercado como mecanismo, es la forma más eficiente de organizar las actividades económicas, mediante la competencia entre los actores de mercado. Se trata de una visión epistemológica del mercado, en el sentido de que funciona como un instrumento de conocimiento, en particular de las preferencias de los actores (Hayek 1993; François, 2008).

La situación de competencia perfecta es el dispositivo clave en la teoría económica neo-clásica, que además constituye hoy el sentido común de la ciencia económica. La competencia perfecta es una estructura de mercado que se realiza cuando la configuración del mercado cumple cinco condiciones, a saber: atomización de los productores, homogeneidad del producto, transparencia en la

información, libertad de entrada y salida, y libre disponibilidad de los factores de producción. Constituye entonces el ideal hacia el que deberían tender todos los mercados. Paradójicamente, en esta situación desaparecen los comportamientos competitivos, porque todas las empresas son tomadoras de precio, y deben seguir lo que dicta el mercado (Stiglitz & Walsh, 2009). De ahí que una forma de ver la competencia sea como mecanismo disciplinante de los comportamientos de los actores privados (Stigler, 1957). En un paradigma más realista, donde no se considera el horizonte de la competencia perfecta como una situación alcanzable, la existencia de más competencia es una forma de garantizar la eficiencia. En este sentido, la competencia pasa a ser un instrumento político en las relaciones Estado - actores de mercado, en la medida que puede generar indirectamente resultados favorables, sobre todo considerando que la competencia no se limita al precio, sino que también afecta al producto en sí, cuya calidad podría variar positivamente.

De este modo, en el núcleo común del concepto de neoliberalismo está la idea de que el mercado competitivo es el mecanismo de coordinación más eficiente para la provisión de bienes y servicios, pero también que esta competencia no es necesariamente natural, sino que puede ser protegida, incentivada y construida. En el cumplimiento de estas funciones de protección, incentivación y construcción aparece el rol del Estado, frente a los posibles frenos a la competencia, que la teoría económica ha clasificado como fallas de mercado (Crouch, 2011). La promoción de la competencia pasa a ser el criterio para medir la pertinencia de una política (Amable, 2011; Garretón, 2012). El neoliberalismo privilegia, entonces, la competencia como dispositivo para maximizar la eficiencia, pero puede diferenciarse sobre la deseabilidad de interferencias o correcciones exteriores, para garantizar su buen funcionamiento contra las fallas de mercado.

La diversidad del neoliberalismo puede también entenderse en relación a la difusa aceptación y aproximaciones a la resolución del problema de estas fallas de mercado o externalidades. Todos los modelos de política económica reales están afectados por estas fallas y

el modo de aceptación o control de las mismas se basa en la concepción de neoliberalismo que hay detrás de estos diseños. (Stiglitz y Walsh, 2009).

En el análisis de Chile y Sudáfrica se he encontrado como rasgo sustancial una asincronía entre el nivel discursivo y el nivel empírico de las políticas económicas, y a su vez distintos niveles y formas de coordinar y aceptar esta competencia y la autorregulación. Del mismo modo al explorar los límites del neoliberalismo y su realidad empírica en las trayectorias de desarrollo en las transiciones democráticas de estos dos países, se puede ver hasta qué punto y en qué medida una declaración de principios no tiene su correlato en la práctica económica.

El horizonte de crecimiento y progreso rige la mayoría de las economías en el mundo, es un tema global y es venerado enfáticamente por el neoliberalismo reinante. La contraposición a este principio tiene su origen en el marxismo, que puso su perspectiva dialéctica de la emancipación contra el proyecto liberal de la racionalización, el progreso, el crecimiento, el enriquecimiento, afirmando explícitamente que el capitalismo implica explotación. No es objeto de este apartado profundizar en la concepción marxista de progreso, en contraposición a lo que podríamos llamar progreso neoliberal, pero resulta importante destacar que la perspectiva marxista consideraba inevitables las contradicciones de la modernidad, y serían estas mismas contradicciones las precursoras de un cambio radical hacia el socialismo (Marx, 1999).

Durante las transiciones democráticas de Chile y Sudáfrica los discursos ideológicos y los planteamientos en torno al diseño institucional se centraron, en su mayoría en atacar la dimensión relativa al autoritarismo y la deuda social del apartheid y de la dictadura, en definitiva se atacaron las grandes narrativas del pasado reciente, sin embargo como veremos en los capítulos referidos a cada uno de estos países, esta crítica se realizó dejando al margen una concepción más profunda de cambio económico. Pero todos sus

avances sociopolíticos estaban en contra de la izquierda modernista. En todo este escenario de las transiciones políticas, el neoliberalismo, en tanto modernismo de derecha, concepción epistemológica, política y económica, no fue golpeado por argumentos críticos de las nuevas coaliciones gobernantes (Garreton 2012, Seekings 2016, Gumede 2015, Gelb 1998, 1999). La derecha revigorada de Estados Unidos americana fue un modelo a seguir, con matices, por los nuevos modos de gobernabilidad (Therborn 2003, en Delanty 2006).

La imagen habitual del neoliberalismo representa una retirada del Estado de su provisión social y deberes reguladores en favor de la mano invisible del mercado. En su forma utópica, el neoliberalismo se asocia a una regulación estatal mínima, incluso ausente para algunas interpretaciones, diluida para otras, pero esto es básicamente una interpretación subjetiva e ideológica, tal como Gramsci (1971 en Marais, 2011) señaló hace casi un siglo, el *laissez faire* es una forma de regulación estatal, introducida y es mantenida por medios legislativos y coercitivos. Es un conjunto de opciones políticas, y constituye una forma contemporánea de acumulación capitalista, es un capitalismo contemporáneo global, pero implica el uso sistemático del poder estatal para recomponer las reglas del capital en la vida económica, política y social. La dimensión de clase no queda excluida, como plantearía David Harvey (2005). El neoliberalismo aparece como un proyecto de clase global y unificado, dirigido a restaurar o apuntalar la supremacía de la clase dominante. Ahora bien, a pesar de ser un proceso global, la noción de neoliberalismo no debería ser homogénea. La práctica neoliberal es considerablemente más diversa, adaptativa y flexible que la clásica distinción entre neoliberalismo versus el estado de bienestar (Ferguson, 2007, p.84), refiriéndose a África. Del mismo modo el neoliberalismo está lejos de ser un plan de hierro, coordinado estructuralmente por un clase definida o un poder determinado. Las transiciones post-autoritarias neoliberales lo han transformado en su aplicabilidad empírica. Las transiciones neoliberales han transformado la base material de sociedades tan diversas como Brasil, Gran Bretaña, India, Polonia, Sudáfrica, Chile, Corea del Sur, Estados Unidos o Zambia, entre otras.

En cada uno de ellos, la reestructuración se ha producido de manera distinta. Los casos de Chile y Sudáfrica son emblemáticos, en tanto que sus políticas económicas comparten rasgos claves referentes a la ampliación de los derechos de propiedad privada, el libre comercio y la desregulación de las actividades empresariales, bajo gobiernos de centro izquierda que no han sido capaces de deconstruir la política económica neoliberal, e incluso, han diseñado las instituciones al borde del núcleo normativo de la misma.

En líneas generales, el neoliberalismo engloba políticas y prácticas, decisiones y procesos de institucionalización. La emergencia del neoliberalismo en el caso de Sudáfrica y Chile tiene como elemento común una especie de mandamiento proveniente de una esfera ineludible. En el caso chileno este imperativo es claro durante la dictadura específicamente con la instauración de las reformas neoliberales, mientras que en el caso sudafricano existen raíces en la época de desarrollo capitalista institucional establecidos hace casi un siglo, no solo mucho antes de la aparición de la democracia representativa y el fin del apartheid (a principios de los 90), sino antes incluso del comienzo del apartheid en 1948. En aspectos claves, el estado sudafricano fue construido a principios del siglo XX, en respuesta a diversas presiones políticas amplias de los sectores de las élites; sin embargo la emergencia neoliberal como tal en ambos casos aparece como un imperativo claro, foráneo y jerárquico. Las consecuencias sociales perversas, como la desigualdad (Palma, 2006), las fallas, las externalidades no entraron evidentemente en juego para los tomadores de decisiones. Por ejemplo, a medida que los ajustes neoliberales se hicieron omnipresentes, la tasa de mejoras en los indicadores de salud se desaceleró significativamente en la mayoría de las regiones del mundo durante los años ochenta, pero especialmente en los años noventa (Deaton & Drèze, 2002 en Marais, 2011).

1. Neoliberalismo y autoritarismo: Afinidad electiva

El neoliberalismo y el autoritarismo pueden ser observados en su

afinidad electiva; hay buenas razones empíricas para pensar de ese modo. Chile y Sudáfrica son justamente ejemplos de ello, si pensamos en la evolución de la política económica de Chile post-dictadura y los programas de ajuste para Sudáfrica, así como las políticas de coexistencia del libre mercado y dispositivos de seguridad en EEUU o China. Esta articulación, sin embargo, no deja de ser problemática si pensamos en la ideología neoliberal en este rol del Estado como coordinador, ya que por una parte tenemos el actor Estado autoritario y por otro los actores privados que reproducen el orden social, imponiendo un tipo de gobernabilidad a distancia (Foucault, 2007).

El autoritarismo ligado al neoliberalismo tiende a ser reflejado como el resultado a veces inesperado de la ideología neoliberal pura y radical, y las prácticas neoliberalizantes desordenadas que resultan en un rol más potente para el Estado del que había estado previsto con antelación. Sin embargo, en la agenda neoliberal la ingeniería y la gestión de los mercados desde el Estado es fundamental.

Además, la coerción dirigida por el Estado y el aislamiento de las presiones democratizantes es fundamental para la creación y el mantenimiento de la política económica, manteniendo al margen los impulsos para una mayor igualdad o democratización. El neoliberalismo siempre ha contenido tendencias autoritarias o al menos ha necesitado de ellas para instalarse, tal como puede ser observado en el caso experimental de Chile; sin embargo, tras la llegada de las transiciones post-autoritarias éste se ha vuelto significativamente más promitente.

Siguiendo el concepto de autonomía de Peter Wagner (2015), la autonomía surge como la capacidad política de una colectividad, no individual, vinculada al concepto de soberanía. En este sentido, el autoritarismo también puede ser observado como la configuración del poder institucional en el intento de aislar ciertas políticas y prácticas institucionales de disidencia social y política (Bruff, 2014). En el caso de las nuevas democracias post-autoritarias y el proceso de refundación se asume un proceso de inclusión radical de valores como

la prudencia y la austeridad – e incluso el miedo - para justificar una reestructuración sustentada por el Estado y a través de la transferencia de la responsabilidad económica a los individuos. El Estado chileno y el sudafricano se vieron, desde los periodos autoritarios, envueltos en una semántica democrática pero subordinado a configuraciones supranacionales. Por lo tanto, el aparente fortalecimiento del Estado en términos de su autonomía implicó simultáneamente su creciente fragilidad, ya que se está convirtiendo en un blanco cada vez más directo de las luchas populares, las demandas y el descontento por medio de las presiones que emanan de este fortalecimiento.

El neoliberalismo, en tanto cosmovisión, ha cubierto prácticamente todas las áreas de la vida social y se constituye como la forma que adquiere la política económica de ambos países en el periodo de transición política. El argumento de Jamie Peck en este sentido es que la ideología neoliberal ha estado siempre al tanto de los llamados males necesarios del gobierno y estos males están marcados por la predominancia del *laissez-faire* de las formas de intervención en el ámbito socioeconómico (Peck, 2008, p.7).

La vida social puede ser reformada en innumerables aspectos a nombre del mercado, y en el marco del neoliberalismo es relativamente sencillo y legítimo desplegar la retórica contra otros enemigos sociales del llamado equilibrio económico.

El contexto de refundación democrática y la lógica de la responsabilidad priman por sobre la ética de la convicción de los principios. Una característica común y central del neoliberalismo en esta perspectiva es el desmantelamiento o la supresión de formas de coordinación que no sean la propia lógica del mercado Peck (2010). La regulación invasiva y la burocracia son conceptualizados como aspectos ineficientes de la organización social propios de la regulación excesiva (véase también Harvey 2005; Mirowski y Plehwe, 2009). El neoliberalismo se entiende como el menor papel económico y social del estado, existiendo una tendencia permanente a considerar al neoliberalismo como fundamentalmente asociado al mercado libre, a

saber: la desvinculación del mercado de las formas estatales y otras formas institucionales en nombre de la mítica mano invisible del mercado. Sin embargo, esto es una forma superficial de comprender lo que es el neoliberalismo. El mismo Friedrich Hayek (1973) sostuvo que las instituciones políticas que prevalecen en el mundo occidental producen necesariamente un camino a la destrucción del mercado. Sin embargo, las condiciones para el orden neoliberal históricamente no se realizan a través de la coordinación autónoma del mercado. El Estado y las élites han sido y son una permanente y necesaria forma de coordinar tanto la ideología neoliberal como su la institucionalización y la práctica.

El Estado es central no solo en la coordinación institucional, sino que es fundamental para dirigir las presiones democráticas que podrían obstruir el mantenimiento o creación de un orden político económico alternativo. Este es un tema sustantivo para este trabajo. El Estado no sólo coordina la dimensión del diseño de instituciones, sino que opera defendiéndose activamente contra los impulsos democratizantes que promueven un tránsito hacia una mayor igualdad político-económica. Michael Perelman (2007, p.44) sostiene que, aunque los economistas políticos clásicos como Adam Smith y David Ricardo intentaron generalmente demostrar cómo el mercado y sus impulsos coordinadores podrían beneficiar a la gente, entendían que la sociedad de mercado requería, paradójicamente, de medidas para obligar a un gran número de personas a unirse a la llamada revolución de mercado. Esto llevó en ambos casos nacionales a generar un apoyo incluso privado a las restricciones generalizadas.

Resulta común encontrar una gran cantidad de literatura en relación a cómo definir, conceptualizar y medir la democracia (Munck 2009; Coppedge et al 2011; Coppedge 2012, entre otros), respecto a cómo, y hasta qué punto podemos vincular la democracia a variables socioeconómicas, como crecimiento y desarrollo (Przeworski, Alvarez, Cheibub y Limongi 2000; Lipset 1960), y del mismo modo respecto a las precondiciones o variables que ayudan al surgimiento de regímenes democráticos (Teorell 2010; Rustow 1970). Algunos de

estos estudios hacen referencia al autoritarismo, pero de manera indirecta. Por ejemplo, cuando Przeworski et al (2000) afirman: “no hay duda que es mucho más probable hallar democracias en países más altamente desarrollados. Sin embargo, la razón no radica en que es más probable que las democracias surjan cuando los países se desarrollan bajo el autoritarismo, sino que una vez que emergen, es más factible que sobrevivan en países que ya se encuentran desarrollados”. Del mismo modo Acemoglu y Robinson (2006) sostienen que en sociedades menos desiguales, las élites tenderán a estar más dispuestas a tomar las demandas redistributivas porque aquello no es tan costoso para ellas, y por tanto es probable que decidan seguir en dictadura. Lo que se pretende resaltar en este punto es que los autoritarismos y dictaduras en una gran parte de la literatura sociológica no han sido estudiados como una variable en sí en profundidad, sino como la negación del concepto de democracia, o bien cuando se habla de democratización, el estado previo a pasar a una democracia.

A pesar de lo anterior, es posible encontrar algunos trabajos que se concentran en dictaduras o bien, se acercan a estudiar este fenómeno. Puede que uno de los trabajos más importantes al respecto el de Levitsky y Way (2010) “Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War”. Los autores analizan la trayectoria de regímenes que durante el período de guerra fría se convirtieron en lo que ellos denominan “autoritarismos competitivos”, los cuales son definidos como “un régimen civil en el cual las instituciones formales democráticas existen y son ampliamente vistas como el principal medio para ganar el poder (...)” (Levitsky y Way, 2010, p.5).

Del mismo modo existen en la literatura variadas definiciones de neoliberalismo. Una de las definiciones que más inspiradoras han resultado es que la del economista sudafricano Patrick Bond (2015), quién plantea que el neoliberalismo es una etapa del capitalismo contemporáneo en el que la búsqueda de beneficios pone un énfasis mucho mayor en la lógica del mercado, mediante la reducción de todos los subsidios que podrían permitir a la sociedad (y la naturaleza)

una mayor protección. En este sentido protección se refiere al plexo de seguridad que permite estar debidamente protegido frente a injerencias arbitrarias del mercado.

Para comprender la evolución de la política económica se requiere partir de una definición operacionalizable de neoliberalismo con valor heurístico. El neoliberalismo en tanto concepto a desarrollar en este capítulo se constituye como una herramienta analítica para dar cuenta del rol del Estado en la organización de los mercados en la etapa actual del capitalismo contemporáneo.

El neoliberalismo da el fundamento basal donde se desarrolla la interrelación entre el Estado, sus instituciones y los actores del mercado, basándose en el impulso de mecanismos de competencia considerados la manera más eficiente para la organización de la provisión de cualquier tipo de bien, servicio o política. En el neoliberalismo se pone un énfasis mayor en la lógica de la competencia, en tanto que es el método considerado propio del mercado. La competencia tiene la facultad de coordinar, disciplinar y estimular los actores privados, para que individualmente y en conjunto lleguen al ideal asintótico – propio de sus defensores - de eficiencia máxima, mediante el paralelo control reductivo de los subsidios que podrían permitir a la sociedad en su conjunto un mayor sustrato de seguridad.

En el análisis de la literatura el predominio del mercado como forma organizadora constituye un fundamento analítico basal- en términos de Polanyi - del concepto de neoliberalismo. No significa una desaparición del Estado o la acción pública. Al contrario, existen distintas formas de construcción política de los mercados, que se encarnan en las distintas formas y matices que adquiere de neoliberalismo. Tal como planteó Foucault, el Estado toma una forma determinada para participar dentro de la organización neoliberal: “el neoliberalismo no debe confundirse con el eslogan *laissez-faire* , sino que, por el contrario, debe considerarse como un llamado a la vigilancia, al activismo y a las intervenciones perpetuas” (Foucault,

2007).

Los mismos elementos que hacen al neoliberalismo un concepto sumamente controversial, lo transforman en un concepto complejo y multidimensional. Para desarrollar una definición consistente que permita analizar las trayectorias políticas de los países de estudio y sustentar las hipótesis, se requiere un análisis de literatura que involucre las reflexiones desarrolladas desde su emergencia histórica conceptual como fenómeno.

El concepto de neoliberalismo surge durante la llamada Gran Depresión Económica de inicio de los años 30', lo que en el plano de la discusión económica produjo una crisis del pensamiento liberal clásico instaurado hasta el momento. En ese mismo periodo doctrinas de organización económica como el fascismo por una parte, y el comunismo por otra, emergen como formas de coordinación y planificación del Estado en materia económica, cuyo punto en común es que comparten el rol de la planificación desde el rol estatal.

En este contexto, intelectuales de diversas áreas reflexionan sobre la necesidad de refundar el liberalismo. Un momento clave de este proceso fue el coloquio Internacional de Lippmann, en París 1938 (Audier, 2012). En esta reunión, lejos de encontrar afinidades unificadoras se generan líneas y corrientes disimiles entre partidarios del liberalismo, particularmente entre los llamados ordo-liberales y los liberales más clásicos. Estos debates continúan desarrollándose durante varias décadas. La Sociedad de Mont Pélerin es un sitio particularmente importante donde se desarrollo todo el debate. (Audier, 2012; Klein 2007; Mirowski & Plehwe, 2009; Peck, 2008).

Para comprender la idea de neoliberalismo se requiere entender la diferencia con su antecesor, el liberalismo clásico. En este último, la visión del mercado tiene una connotación naturalista, y se erige como una organicidad espontánea que se desarrolla hipotéticamente en espacios delimitados por el Estado. En el Neoliberalismo, sin embargo, la idea de mercado se asume como socialmente construida

(Van Horn y Mirowski, 2010).

Una de las mayores diferencias y evoluciones del concepto de neoliberalismo es que en esta definición el mercado y su lógica pasa a tener la legitimidad para coordinar y desplegarse en otros ámbitos de la sociedad, como forma de coordinación.

La idea del mercado como un espacio limitado, autónomo y que debe ser constreñido en sus límites, es cuestionada en Chile por el trabajo intelectual de la camada de economistas provenientes de Chicago, los llamados Chicago Boys. Entre ellos Gary Becker es definido por sus pares como un pionero en la idea de imperialismo económico del mercado. Bajo esta perspectiva la lógica de mercado puede ser aplicada para coordinar y evaluar espacios y actividades que no habían sido consideradas pertinentes de ser mercantilizadas con anterioridad a este paradigma. (De Lagasnerie, 2012; Foucault, 2007).

Al emerger desde una crisis (Klein, 2007), el neoliberalismo en tanto constelación de ideas y doctrina, se erige como una respuesta a una situación de ineficacia. Paulatinamente se va consolidando como una alternativa a la planificación y a la provisión pública, pero mantiene en su centro la paradoja en torno al Estado, en tanto el Estado pasa a ser marginal en la configuración de una sociedad de mercado total por un lado, pero tiene una función organizadora céntrica de esa totalidad. La ideología neoliberal se sustenta en la convicción de que los mercados abiertos, competitivos y no regulados, que no se encuentran sometidos a injerencias estatales ni a las acciones de colectivos sociales, representan el mecanismo óptimo para el desarrollo socioeconómico (Theodore, Peck y Brenner 2009).

Del mismo modo, el neoliberalismo como doctrina se configura como antagonista frente al keynesianismo, sistema de ideas con multiplicidad de enunciaciones, y que se ha usado históricamente para definir las prácticas políticas que han sobrepasado a lo estrictamente descrito por Keynes, tal como ha planteado Peter Hall (1989). Más allá de esta diversidad, podríamos decir que aquello que ha identificado al keynesianismo es el rol del Estado en la provisión de la

coordinación social de la economía, y su posición contraria a la idea de *laissez faire*.

El neoliberalismo en su origen es una alternativa teórica a la configuración capitalista de la economía. Sus recetas tuvieron dificultad para plasmarse en la realidad, pasando a la práctica en una aguda tensión en torno al rol de Estado y su coordinación en la sociedad. Como proyecto político y económico tuvo su posicionamiento fundador en Chile, en la Inglaterra gobernada por Margaret Thatcher (Klein, 2007), y en los Estados Unidos gobernados por Reagan (Fourcade y Babb, 2002). Ahora bien, no se puede hablar de una sola vía del neoliberalismo (Maillet 2015), más bien se pueden observar las tensiones en torno a una de sus aporías fundadoras: reducir el rol del Estado y la necesidad de recurrir a diversas herramientas desde el Estado mismo para construir la economía.

La situación del neoliberalismo como alternativa a principios y recetas que han mostrado dificultades para actuar en una realidad cambiante, lo hacen pasar de la teoría a la práctica, lo que agudiza la tensión en torno al rol del Estado y los focos de diversidad (Maillet, 2015). Sin embargo, como proyecto político, al igual que en el plano económico, el neoliberalismo nunca ha sido unificado. Las traducciones prácticas, en el caso pionero de Chile, pero también en la Inglaterra de Thatcher y los Estados-Unidos de Reagan (Fourcade y Babb, 2002), acentúan esta diversidad, en particular en la confrontación entre las recomendaciones teóricas de reducción del rol del Estado y la práctica de recurrir a las herramientas institucionales y mecanismos específicos, muchas veces subterráneos, para construir los mercados. Esta tensión no es binaria, y está lejos de ser una dicotomía entre la presencia - ausencia del Estado en la coordinación del mercado, pero es así como se ha entendido en la historia del concepto y a ello le debe su falta de legitimidad analítica. James Buchanan, presidente de la famosa Sociedad e Mont - Pelerin lo define así: *"Entre nuestros miembros, hay algunos que son capaces de imaginar una sociedad viable sin un estado (...). Para la mayoría de nuestros miembros, sin embargo, el orden social sin un estado no se imagina fácilmente, al*

menos en cualquier sentido normativamente preferido (...). Por necesidad, debemos mirar nuestras relaciones con el estado desde varias ventanas, para usar la metáfora nietzscheana familiar (...). El hombre es, y debe permanecer, un esclavo del Estado. Pero es crítico y vitalmente importante reconocer que la esclavitud del diez por ciento es diferente de la esclavitud del cincuenta por ciento " (traducción propia) (en Mirowski y Plehwe, 2009, p.5).

Actualmente la paradoja del Estado en la configuración del neoliberalismo se observa claramente a nivel empírico y en procesos sociales como la innovación. Desde la perspectiva del politólogo Antoni Domènech (2015), y en consonancia con la postura Yanis Varoufakis (2010), el Estado cumple un rol central no sólo en términos de coordinación institucional, sino en la acumulación misma. Por ejemplo, a partir de los años 70 los Estados Unidos comenzaron a absorber una gran porción del excedente de productos industriales del resto del mundo. Las importaciones netas norteamericanas eran las exportaciones netas de países excedentarios como Alemania, Japón y China; países que eran la principal fuente de demanda. A su vez, los beneficios obtenidos por los empresarios de las naciones excedentarias regresaban a Wall Street en busca de mayores retornos. Wall Street, entonces, se servía de esos flujos de capital extranjero con tres fines: a. proporcionar crédito a los consumidores norteamericanos; b. invertir directamente en las grandes corporaciones empresariales norteamericanas; c. comprar bonos del Tesoro estadounidense, es decir, financiar los déficits del Estado norteamericano. En el 2008 se mermó la capacidad de Wall Street para seguir cerrando el círculo del reciclaje global. A partir de ese momento, la resultaría imposible a la economía mundial recuperar su posición: y no podrá hacerlo en lo venidero, sin un mecanismo de reciclaje del excedente global.

2. Capitalismo contemporáneo y variedades: hacia la operacionalización del concepto de neoliberalismo.

A finales de los años 80 y principios de los años 90 aparecieron una serie de tesis analizando el devenir del sistema capitalista anunciando la convergencia del sistema capitalista hacia su versión liberal. La tesis del fin de la historia fue una explicación común para entender tanto los procesos de acomodo capitalista del centro económico del mundo como de los países de la semi periferia. Ya fuese desde una observación alentadora sobre la globalización y la hegemonía liberal, o bien otra más catastrófica sobre el advenimiento del caos.

En las llamadas economías políticas avanzadas ofrecieron ciertas luces sobre la diversidad interna de su configuración, rescatando análisis más clásicos sobre la diferencia entre un capitalismo de carácter liberal, como el caso de Estados Unidos, versus otro más planificado, como el caso del estudio de Andrew Shonfield (1965) sobre la Europa de la post-segunda guerra mundial. Del mismo modo, el tema de los modelos de desarrollo y su historicidad fue rescatado reconsiderando estudios sobre el desarrollo tardío, así como las diferentes estructuras institucionales que desarrollan los nuevos países industriales con respecto a los que se desarrollaron en primera instancia, como el caso de Alemania y Francia versus Inglaterra, el estudio de la emergencia de nuevas formas de organización productiva distintas a la producción en masa de Piore y Sabel (1986), y los estudios de la Escuela de la Regulación francesa sobre la diferencia entre el fordismo francés y el de los Estados Unidos, entre otros.

Estos enfoques dieron vida a mediados de los años 90 a nuevas interpretaciones sobre la diversidad capitalista, que han sido muy útiles para el estudio comparado de las naciones. La diversidad capitalista y sus reflexiones se fundió con nuevos estudios acerca de los estados de bienestar liberales, conservadores y socialdemócratas, y por cierto sobre la diversidad de los regímenes productivos. Uno de

los libros pioneros, “Political Economy of Modern Capitalism: Mapping Convergence and Diversity” de Crouch y Streeck (1997), puso en tensión la relación entre convergencia y divergencia, y concentró el análisis en los diferentes modos de regulación económica y de arreglos institucionales en las economías políticas capitalistas avanzadas, sus patrones de innovación, solidaridad social y de competencia política, las características de sus gobiernos corporativos y relaciones industriales.

La publicación del libro “Varieties of capitalism” de P. Hall y D. Soskice (2001) fue todo un acontecimiento, pues innova con una propuesta sobre la diversidad capitalista que rápidamente toma el centro del debate y amplía las posibilidades de observación del capitalismo. Entre los elementos centrales de la propuesta se encontraban, a saber: primero, la existencia de los cinco dominios institucionales claves que otorgan el carácter a una economía política (sistema financiero y gobierno corporativo, sistema de innovación, relaciones industriales, relaciones entre firmas, y sistema educativo); segundo, la centralidad del comportamiento de las empresas en la emergencia de dichos arreglos institucionales (y el descarte explícito del Estado como agente); tercero, la existencia de dos formas típico-ideales mediante las cuales las firmas coordinan dichas estructuras: arreglos de mercado –dando paso a Economías de Mercado Liberales o LME en la sigla en inglés- o mediante cooperación estratégica, dando origen a Economías de Mercado Coordinadas (CME); cuarto, la idea de la existencia de ventajas comparativas asociadas a una y otra variedad de capitalismo; y quinto, la idea de la existencia de *complementariedades institucionales* que refuerzan dichas ventajas comparativas y generan incentivos a los agentes económicos para conservarlas en el tiempo.

La teoría de las variedades del capitalismo no sólo explicaba la existencia de diversidad en el capitalismo, sino que también incorporaba la posibilidad de perseguir distintos modelos institucionales. Además, permitió avanzar en el estudio de una serie

de hipótesis acerca del futuro del capitalismo, el cambio institucional y el diseño de políticas, y también cómo dirigir una economía hacia uno u otro de las variedades exitosas, bajo un esquema económico basado en la distinción entre Economías de Mercado Liberales y Economías de Mercado Coordinadas.

Adicionalmente, estas variedades del capitalismo dieron fuerza a una serie de estudios que, amparados en las ideas centrales del volumen, vendrían a exponer controvertidas tesis que renovaron el debate en economía política comparada. Entre ellas, por ejemplo, aquella que sostiene que los llamados mundos del bienestar no son necesariamente producto de las luchas de las organizaciones sindicales y de los partidos de izquierda, como proponían las principales teorías sobre el surgimiento de los estados de bienestar, sino de las preferencias de los propios empresarios por contar con sistemas de protección social que fortalezcan las ventajas comparativas de las economías políticas coordinadas.⁸

Ahora bien, no tardaron en aparecer agudas críticas a los planteamientos de esta teoría. Las más comunes tenían que ver con: lo reduccionista de la tipología y la falta de contenido empírico; su excesivo nacionalismo metodológico; las variedades, por ejemplo, que tienden a confundirse con países específicos, el funcionalismo contenido en los planteamientos sobre complementariedades institucionales referente al funcionamiento y cambio institucional; y la no consideración de factores como las luchas y compromisos de clases y el rol del estado en el surgimiento de las variedades (Crouch, 2005; Streeck, 2010a; Bohle y Greskovits, 2009; LoVuolo, 2015).

En todo el debate en torno a las variedades del capitalismo, aparecen las investigaciones sobre las variedades del capitalismo en América Latina. Desde la década de los ochenta diversos estudios han comenzado a reconocer la diversidad del capitalismo en América

⁸ Para mayor detalle ver por ejemplo Estevez-Abe, Iversen, y Soskice (2001); y Mares (2003)

latina, por ejemplo estudiando la emergencia y desarrollo de los regímenes de políticas sociales. Algunas aplicaciones para el caso de América Latina pueden ser encontrados en la utilización de la noción de modelos de desarrollo (Mesa-Lago, 2002; Sheahan, 2003), derivados de la existencia de resultados diversos en materia social y económica asociados con determinados objetivos socioeconómicos y mecanismos institucionales para alcanzarlos. Ben R. Schneider (Schneider, 2009; Schneider y Karcher, 2010; Schneider y Soskice, 2009) por su parte propone la necesidad de adaptar la tipología de variedades del capitalismo para estudiar cada contexto (LoVuolo, 2015). De este modo, se visualiza que el mecanismo de coordinación que caracteriza a cada contexto no es el mercado ni la coordinación estratégica, sino la jerarquía, de ahí el concepto de Economías de Mercado Jerárquicas. La jerarquía se refleja tanto en la dependencia de los países de cada contexto a las decisiones de inversión hechas por empresas multinacionales, como en la división del trabajo tácita entre estas y los grandes grupos económicos domésticos. He aquí la relevancia de las élites en la coordinación de la economía y las políticas económicas.

La jerarquía opera generando una concentración de la propiedad en unos pocos grupos diversificados que controlan grandes porciones de las economías nacionales, que ejercen su poder y propiedad de manera directa sobre las firmas y sectores que controlan. La jerarquía también opera otorgando mayores poderes de decisión a los empleadores y las asociaciones gremiales por sobre los trabajadores, beneficiándose así de la existencia de mercados de trabajo poco regulados, grandes reservas de trabajadores poco calificados y baja densidad sindical (Schneider y Karcher, 2010, p.636; Schneider, 2009, p.563). Lo anterior genera ventajas comparativas concentradas en actividades extractivas -minería, agricultura- e industrias intensivas en mano de obra de baja cualificación. Siguiendo las investigaciones desarrolladas en Sudáfrica, desde los planteamientos de Patrick Bond, Vusi Gumede y Stephen Gelb, podemos confirmar que la estructura de las economías nacionales han sido similares en su configuración de dependencia y de mercados del trabajo poco regulados. Vusi Gumede

(2015) y Stephen Gelb (2013) plantean que los procesos de diseño socioeconómico en la época post-apartheid fueron diseñado desde arriba, excluyendo del proceso la deliberación.

Esta jerarquía sin duda tiene efectos en la desigualdad socioeconómica de la región y la fuerte influencia que tienen los sistemas presidenciales en su mantención. De este modo, la relación que en los países avanzados genera ventajas comparativas que aumentan la eficiencia de la economía, en América Latina produce complementariedades negativas que refuerzan las desigualdades. En el caso del mercado del trabajo, diversas complementariedades negativas, a saber: altas tasas de rotación laboral, sindicatos pequeños y altamente politizados con baja representación a nivel de planta, bajo nivel de cualificación, alta informalidad, producen una trampa de bajas cualificaciones y trabajos precarios (Schneider y Karcher, 2010, p.633). Lejos de responder a una sola forma de organización del capitalismo en América Latina, lo que permite observar este conjunto de teorías es en qué posición se sitúan los países respecto al ordenamiento de sus economías y sus políticas económicas. En este sentido, como plantea Undurraga (2014) Chile se posiciona como un país que favorece la posición de las empresas y presenta un ambiente legal propicio a la economía de mercado, principalmente debido a la refundación de la dictadura cívico militar. Mientras que en el caso de Sudáfrica esta mezcla de libertad y regulación del mercado es impulsada por la política post-apartheid (Seekings, 2016). El partido gobernante en la actualidad, el Congreso Nacional Africano (ANC), representa una coalición de clases definida principalmente por su oposición compartida a la jerarquía racial, que caracterizaba al apartheid (Mandela, 2010), uno de los aspectos centrales de su política ha sido superar restricciones impuestas a su movilidad ocupacional y social, oportunidades de negocio, ingresos y riqueza bajo el apartheid.

Siguiendo con la idea de variedades del capitalismo, si bien los trabajos de Schneider avanzan de manera importante en incorporar América Latina a la controversia sobre diversidad capitalista, logrando capturar además las especificidades de esta región respecto de las

economías avanzadas, varias de las críticas hechas al enfoque de las variedades del capitalismo aplican también en otros aspectos, como por ejemplo en lo reduccionista de la tipología y la sobreestimación de la existencia de modelos regionales; en la inexistencia de explicaciones de las dinámicas sociopolíticas que dan origen a las “complementariedades”; y por último, en la falta de consideración del Estado como un agente crucial del cambio institucional, entre otras (Madariaga, 2016; Maillet, 2016, Lo Vuolo, 2017).

Una de las maneras de complementar esta visión ha sido el estudio de los países post-comunistas y sus refundaciones dando cuenta de la existencia de economías políticas de institucionalidad precaria y sus procesos de institucionalización, la importancia de los agentes externos y del estado en la emergencia de relaciones entre dominios institucionales, y el surgimiento de ventajas comparativas. Especialmente importante es el trabajo de Klaus Offe (2004) en su análisis de la refundación de la democracia en las sociedades post comunistas. Del mismo modo los trabajos de Bohle y Greskovits (2007), citados por Madariaga (2016), quienes partiendo de una teoría de la diversidad capitalista de origen polanyiano, investigan la interacción entre legados institucionales asociados al socialismo, la percepción de dichos legados por parte de los *policymakers*, las elecciones iniciales de políticas, los subsiguientes procesos políticos y las presiones internacionales en el surgimiento de patrones de configuraciones institucionales. De manera similar, y utilizando ideas provenientes de la teoría de la dependencia, Bruszt y Greskovits (2009) intentan mapear la emergencia de clusters de economías políticas periféricas con diversas formas de vinculación a la economía internacional y a los centros industriales, dando cuenta del cómo se va configurando empíricamente el neoliberalismo en regiones no europeas.

3. Neoliberalismo en las Ciencias Sociales: dimensiones para la interpretación

En las ciencias sociales el concepto neoliberalismo comienza a ser usado en los años 80, para definir la emergencia y configuración de nuevos modos de vida como el individualismo, las crisis sindicales y otros tipos de evoluciones económicas del sistema capitalista contemporáneo en el marco del proceso de globalización. Desde una observación interpretativa, las visiones del neoliberalismo remiten a su consideración como periodo histórico, aun en curso, mientras que otros consideran que este período ha terminado y hablan de post-neoliberalismo. Una de las visiones que reúne varias dimensiones para el análisis y que examina diversas perspectivas en las ciencias sociales respecto al tema es la idea del “arco” del neoliberalismo (Centeno y Cohen, 2012) que consiste en un período histórico iniciado durante los años 80, y encargado por el Consenso de Washington y las diez prescripciones que lo componen (Williamson, 1990).

Desde la perspectiva de Centeno y Cohen (2012) los fenómenos que caracterizan el neoliberalismo pueden ser considerados desde la problemática económica, política y cultural. Estas dimensiones están en un nivel empírico e histórico, por lo que vale la pena agregar, por un lado, la dimensión relativa a la teoría (e interpretación sociológica abstracta) y por otro lado, a los aspectos empíricos que se refieren a la gobernabilidad y la estructuración de clases de la sociedad.

El componente económico es central y coordinador de los otros aspectos, si bien es un debate técnico de la política respecto al mejor modo de operar de la económica, y que implica sin duda una reflexión en términos teóricos. El neoliberalismo plantearía que la sociedad y su diseño institucional tiene mejores resultados por medio de la máxima libertad de los mercados y por la mínima intervención del Estado. La libertad es concebida en términos negativos, como plantea Honneth (2014), no siendo la realización del *telos* de la modernidad, sino la ausencia de constricciones externas – incluso institucionales – que limiten el desarrollo del libre mercado. Las personas se mueven

por el autointerés, y el bienestar está brindado por el despliegue de las capacidades emprendedoras dentro de un marco institucional caracterizado por los derechos de propiedad y libre comercio. El papel del Estado y el gobierno en este sentido estaría orientado a ofrecer y asegurar un plexo de seguridad, la protección de la propiedad privada y la mantención de mercados (Harvey, 2005).

En segundo lugar, otro aspecto central del neoliberalismo es su dimensión cultural, que implica su connotación ideológica. Los argumentos centrales de esta dimensión es en primer lugar el desencanto discursivo de la política y su capacidad organizadora por la economía. Tal como plantea Peck (2009), el neoliberalismo responde a un ethos hegemónico. Ese ethos transformador, se caracteriza por sobrevalorar la evaluación económica por encima de la evaluación política. El neoliberalismo, en este sentido, resalta todas las dimensiones relativas a los indicadores económicos de la realidad social, incluidas las dimensiones de la gobernabilidad relacionadas con la eficiencia económica. En cuanto a la discusión más contemporánea del concepto, un artículo reciente que aborda el fenómeno desde su diversidad sistematizando diversas visiones es “What is neo-liberalism?”, donde se van contrastando distintas caras del neoliberalismo, y en referencia a la dimensión común del concepto, este trabajo plantea que un núcleo ideológico común y distintivo del neoliberalismo es la elevación del mercado entendida como una entidad no política, no cultural, mecánica, sobre todos los demás modos de organización (Mudge, 2008, p.705). Una especie de concepción ontológica de la sociedad donde el mercado funciona por sobre otros espacios.

En tercer lugar, la dimensión política es “una estrategia institucionalizada de contención de la crisis, que involucra elecciones políticas y poder”; y la dimensión cultural es el ascenso de la hegemonía ideológica o sistema de pensamiento”. Una característica común y central del neoliberalismo en esta perspectiva es el desmantelamiento o la supresión de formas de coordinación que no sean la propia lógica del mercado. El alcance de esta idea de

neoliberalismo va más allá de lo social, y da cuenta del alcance antropológico de la lógica neoliberal. Sin embargo, es el desmantelamiento el concepto central de esta perspectiva. Foucault (2007) coincide en la perspectiva del desmantelamiento pero agrega la dimensión de atomización, como una manera de despolitización. La exclusión de las intuiciones que permite la acción colectiva y la deliberación. Es una técnica de gobernabilidad (governmentality) que neutraliza el comportamiento colectivo mediante la autonomía en un sentido también negativo, contrapuesto a la idea de Wagner (2016), quien se refiere a la autonomía como aquello que permite a los seres humanos elegir los medios adecuados y tomar las medidas apropiadas, en un marco de aprendizaje y memoria. Lo que refuerza el neoliberalismo respecto a esto es un sentido individualista de autonomía, orientada a intereses no colectivos, con el fin de disponer al Estado y sus instituciones al servicio de los grandes capitales. En este sentido incluso la desigualdad, como plantearía Palma (2017) sería un atributo funcional y no solamente una externalidad negativa.

A nivel de operatividad empírica e histórica de estas dimensiones, el neoliberalismo en tanto sistema implica una diversidad intrínseca que a su vez puede implicar otras distinciones, como por ejemplo la intelectual, burocrática y administrativa - gubernamental (Maillet, 2015; Ramos, 2012). La primera se centra en las escuelas del pensamiento económico que constituyeron y dan vida al proyecto neoliberal de hacer del libre mercado la principal fuerza motora de la actividad económica y el diseño institucional. La burocrática aglomera las políticas implementadas en nombre de la superioridad del mercado para organizar la vida institucional, a saber: la liberalización, desreglamentación o neo-reglamentación, privatización, despolitización y monetarismo. En esta definición el Estado parece configurarse como un ordenamiento neoliberal, que no se caracteriza por el repliegue o disminución. Este es un tema sustantivo en el planteamiento de la presente investigación. La faceta gubernamental del neoliberalismo considera sus efectos políticos en un sentido más amplio. Desde esta visión la organización tradicional de la política en torno a la izquierda o la derecha se ve debilitada por la adopción

transversal de políticas neoliberales de las operaciones burocráticas. Tanto el caso chileno como el sudafricano se ven muy bien reflejados en este marco, en la medida en que la discusión en torno a las políticas progresistas de izquierdas de las coaliciones gobernantes en las transiciones políticas se vieron neutralizadas en la práctica burocrática y política, tal como veremos en los capítulos siguientes.

En la práctica, las dimensiones del neoliberalismo se acoplan en un ordenamiento performativo, es decir, la faceta ideológica y la política tienen un poder performativo sobre el diseño institucional, tienen capacidad creativa para alterar realidades. La idea básica de la performatividad es que la economía, como disciplina, moldea y formatea a la economía en tanto espacio, así como actividad económica (Callon, 1998; MacKenzie et al., 2007).

Por otro lado, en el trabajo de Boas y Gans-Morse (2009) “Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan”, los autores ordenan las controversias en torno al concepto de neoliberalismo con el fin de configurar su utilidad analítica para la investigación, y no solamente como una etiqueta peyorativa. Estos autores inician su observación en el ámbito de la historia de las ideas, llegando hasta la actual comprensión del neoliberalismo, y analizando la posición del concepto que en su definición ha llegado a ser un eslogan académico (*an academic catchphrase*) (Boas y Gans-Morse, 2009; Maillet, 2015).

4. El discurso de la Planificación, la socialdemocracia y el keynesianismo como límites conceptuales y escudos normativos del neoliberalismo

En el caso del neoliberalismo, sus límites se fundamentan en una organización de las actividades sociales y económicas alternativa al mercado. Una definición y opción contraria al neoliberalismo consistiría entonces en una elección por el Estado como impulsor de la

coordinación. Desde la observación de algunos autores como Hayek, esta caracterización ha sido promovida por teóricos del proyecto neoliberal, cuyo pensamiento se construye fundamentalmente contra la idea de planificación (Fontaine, 1999). Son operaciones de ingeniería social que Hayek asimila a un “constructivismo racionalista”, cuyo fracaso es inevitable, frente a la complejidad de la operación (François, 2008; Scott, 1998). Aparece una visión dicotómica de las opciones políticas: la planificación, en sus encarnaciones comunistas o fascistas, o la promoción de los mercados propia del neoliberalismo.

Sin embargo, más allá de este posicionamiento teórico marcado por la situación política de la época, en materia de construcción conceptual la dicotomía entre el concepto y su polo límite es sólo una opción. También es posible considerar un espacio conceptual continuo, donde existen otros fenómenos en lugar del antagonismo total.

En este sentido, entre la planificación total y los mercados como única forma de coordinación, existen formas intermedias de intervención, cuyos referentes emblemáticos serían el keynesianismo y la social-democracia. El keynesianismo es una corriente económica que ha sido rival con el neoliberalismo, desde la controversia personal entre Keynes y Hayek (Peck, 2008) hasta la oposición en cuanto doctrinas para el manejo de la macro-economía. La dificultad para construir esta alternativa moderada al neoliberalismo en la perspectiva de este trabajo reside precisamente en que tanto la una como la otra han sido observadas más bien a nivel macro-económico. Pero del mismo modo que el llamado consenso de Washington incorporaba ponderaciones que afectaban a los distintos sectores, como las privatizaciones (Williamson, 1990), el keynesianismo tuvo traducciones sectoriales en la promoción de una intervención directa del Estado tanto en Chile como en Sudáfrica en la provisión de ciertos servicios o bienes considerados decisivos, que son precisamente el objeto de este estudio.

Para pensar en alternativas nacionales al neoliberalismo que no sean

necesariamente una provisión completamente pública, es posible recurrir también al pensamiento político social-demócrata, y en particular la discusión sobre los regímenes de bienestar (Esping-Andersen, 2000), donde el concepto de “decomodificación” apunta justamente a extraer de la lógica del mercado algunos servicios para los cuales ciertas comunidades políticas consideran que no se debería aplicar la lógica mercantil, sino un enfoque de derecho. Incluso en un nivel más general, la social-democracia se asocia a la idea de un predominio de la política y la solidaridad por sobre la lógica del mercado (Esping-Andersen, 1985), lo que redundaría en otros tipos de relaciones entre organismos de Estado y actores privados.

La frontera entre el neoliberalismo y formas de organización alternativas está entonces en la alteración de la lógica de maximización de la eficiencia que caracteriza el mercado como forma de coordinación de actores privados. En la discusión política contemporánea, en particular con la llamada tercera vía de los años 90, y la adopción por fuerzas políticas nominalmente social-demócratas de medidas neoliberales (Mudge, 2008), esta frontera se ha vuelto más elusiva. Incluso, tendencias recientes en Europa pueden dar la impresión de que el neoliberalismo es otra forma de describir el capitalismo contemporáneo, liberado de los constreñimientos de corte social-demócratas propios de las décadas post-segunda guerra mundial (Streeck, 2010b). Aun así, es necesario pensar las fronteras conceptuales, para el núcleo común en base a esta idea del reemplazo de la lógica de mercado por alternativas. Es decir, cuando el Estado promueve otras soluciones distintas de la competencia, no necesariamente se está potencialmente en una configuración alternativa al neoliberalismo, sino que se está frente a una variante de la aplicabilidad institucional del neoliberalismo.

5. Constelaciones del neoliberalismo para el análisis

Además de las dimensiones del neoliberalismo, el ordenamiento institucional de la política económica neoliberal puede tener variedades empíricas, que impliquen una conjugación contingente de las dimensiones antes mencionadas. El trabajo de Maillet (2015) propone una serie de variedades del neoliberalismo aplicable a las políticas sectoriales de Chile, donde el indicador clave es el rol del Estado en cada una de las variedades. Este trabajo es sustantivamente orientador, pero no es pertinente para un análisis más general de variedades nacionales distintas. En este sentido, para entender los grados de ortodoxia neoliberal y la autorreferencia misma del neoliberalismo, se proponen distintos grados de radicalidad neoliberal, que pueden ser usados para analizar casos empíricos, y que sin duda tienen relación con el rol del Estado propuesto por Maillet (2015).

Bajo esta lógica, se presentan a continuación cuatro constelaciones que dan cuenta de los grados de ortodoxia, apertura y autorreferencia en el orden de su aparición histórica en la doctrina o práctica, a saber: política económica neoliberal (PEN) ortodoxa, PEN mandatada, PEN performática, y PEN mixta. Para cada una se presentan elementos teóricos, que pueden ser propios de la doctrina, y de los usos del neoliberalismo en ciencia social.

La primera constelación es la política económica neoliberal de carácter ortodoxo, que se refiere a una versión que apela a la pureza y al núcleo común referido a la idea de auto-regulación, que se distingue por un rol muy reducido del Estado. En este escenario no se consideran las fallas de mercado como un problema que se pueda resolver con la intervención del Estado. Al contrario, se considera que las políticas públicas en este sentido producen más daño que reparación. Este rol mínimo se asemeja al del “guardián de noche” (night-watchman) del liberalismo clásico, que está a cargo de mantener la ley, el orden (Maillet, 2015), y los derechos de propiedad, sin preocuparse de los asuntos particulares de carácter social, tal cual fue el caso de la primera época neoliberal del Chile en el periodo

dictatorial y el caso de los sistemas financieros.

Esta ausencia del Estado se fundamenta en el pensamiento de Hayek. Las propiedades que atribuye a los mercados hacen inútil cualquier intervención del Estado, en la medida que cualquier previsión de planificación tendrá un resultado necesariamente nefasto. Para Hayek “la gran tarea estriba en suprimir todos esos obstáculos e impedimentos, arbitrados por la insensatez humana, que coartan y frenan el espontáneo desarrollo” (Hayek, 1960).

De esta experiencia nace una fobia al Estado comentada por Foucault (Foucault, 2007). Esta aversión radical tiene eco en el anarco-capitalismo, corriente de pensamiento influyente en Estados Unidos. En términos académicos, el libro “Anarquía, Estado y Utopía” es emblemático de esta crítica radical a cualquier intervención estatal en nombre de la libertad (Nozick, 1974). Se favorece un repliegue del Estado y funda programas políticos de reducción del Estado. Constituye en este sentido una reacción a la importancia que había tomado el Estado en la economía después de la segunda guerra mundial. Esta connotación reactiva es muy importante para pensar no en la ausencia del Estado, sino en un rol activo del Estado, en hacerse ausente. Se puede relativizar, por tanto, la desaparición del Estado como característica de esta configuración de la PE ortodoxa, en la medida que es difícil o hasta imposible que el Estado sea totalmente ausente.

En segundo lugar, las bases teóricas de la constelación de la PEN mandatada descansan en la controversia en torno al término de neoliberalismo en los años 1930. En esta época se oponían, entre otras corrientes y personalidades, la escuela austriaca y la escuela alemana de Friburgo. Simplificando la oposición entre estos dos tipos de renovación del liberalismo, la diferencia se articulaba en torno a la pregunta del sentido que iba a tener el prefijo “neo” al concepto tradicional de liberalismo. En ambos casos, estaba presente la idea de rescatar un concepto que había sido desvalorizado por la culpabilidad que se le atribuía en la depresión económica mundial de los años

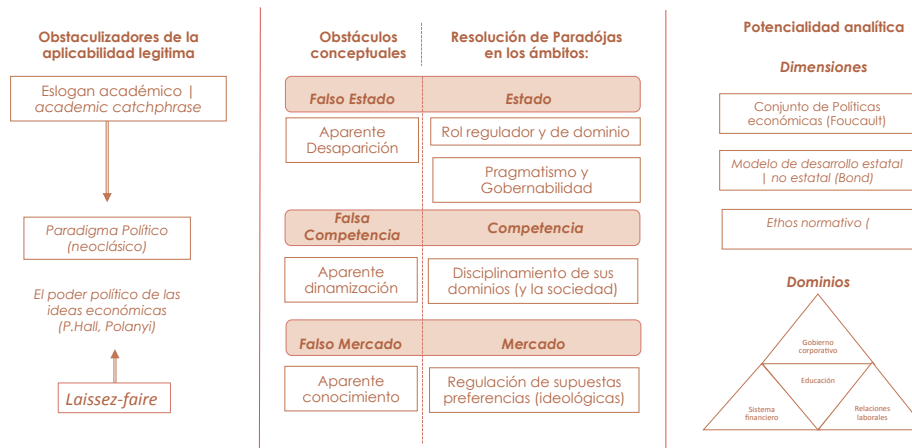
1930. También sufría de la competencia de los autoritarismos y totalitarismos, y en términos más económicos de la alternativa que representaba la economía planificada. Las teorías ordo-liberales promovidas por la escuela de Friburgo, inspiraron esta segunda variedad. Los pensadores ordo-liberales estaban preocupados con mejorar el resultado social del antiguo liberalismo. A diferencia de la escuela austriaca, aceptan y asumían la crítica al liberalismo clásico. Su objetivo era recuperar la legitimidad de la doctrina liberal. Para cumplir este propósito, llegaron a la conclusión de que debían incorporar mayor intervención del Estado, para levantar una “alternativa moderada al liberalismo clásico” (Boas y Gans-Morse, 2009). Los ordo-liberales desconfiaban de los resultados de los mercados sin control, y no compartían la idea según la cual las corporaciones operan solas (Van Horn y Mirowski, 2010). En consecuencia, estaban a favor de cierta intervención estatal, aunque limitadas y se distinguen también claramente de una economía planificada. Con este propósito los ordo-liberales acuñan el término de “economía social de mercado”, a saber: *"La consigna clave es la economía de mercado social, una economía definitivamente libre, comparada con una economía dirigida y planificada, pero sometida a controles, preferentemente en forma jurídica, destinados a impedir la concentración del poder económico"* (Friedrich, 1955, citado por Mudge, 2008, p.715). El predominio de una intervención basada en las leyes es sustancial. La competencia requiere ser promovida y resguardada.

El tercer tipo de PEN es la performática. Su base está en las teorías del “diseño del mercado”, corriente que se desarrolló a medida que la ciencia económica y las políticas públicas sufrían un proceso de ensamblaje (Guala, 2007; Ramos 2012). Inicialmente, este diseño de mercados aparece principalmente como una respuesta al problema concreto de los monopolios naturales. La existencia de monopolio es considerada una falla de mercado según la teoría económica (Stiglitz y Walsh, 2009). La ausencia de competencia genera entonces una problemática respecto a los medios para disciplinar a este actor privado.

La última constelación descrita por Maillet (2015) es la PEN mixta. Esta constelación descansa en fundamentos teóricos menos desarrollados que los anteriores. Corresponde más bien a situaciones concretas, de provisión parcial de un bien o servicio por parte del Estado o una empresa pública. Estos casos se distinguen del polo antagónico al neoliberalismo, la provisión estatal. Corresponde a situaciones donde existe provisión pública parcial, sin que se sustituya al mercado. Se da en casos donde existen varios proveedores, uno (o algunos) de ellos con una estructura de propiedad pública. Este proveedor público tiene por objetivo presionar a las compañías privadas, dentro de la lógica del mercado. Es decir, puede buscar ampliar el mercado, incorporando nuevos consumidores, o ser pionero en algunas actividades, pero sin renunciar al equilibrio económico. En este sentido, participa de una mayor eficiencia del mercado, y no apunta a la desaparición de su competencia. Podría ser el caso de una empresa de generación eléctrica pública que privilegiaría alternativas ecológicas por ejemplo, aunque el costo sea más elevado. También entraría en este caso un banco público que tenga prácticas crediticias más arriesgadas hacia las pequeñas empresas, para favorecer el emprendimiento.

En definitiva, cada una de estas formas de PEN pueden ser observadas tanto en las fases de las transiciones democráticas como en algunas dimensiones concretas de la política económica en regímenes democráticos. Sin embargo, el neoliberalismo en general es el sistema que proporciona el marco organizativo y los puntos éticos de los principios rectores de las transiciones en ambos países, Chile y Sudáfrica. Esto es especialmente relevante en relación con las obligaciones del Estado.

6. Conclusiones Toda economía en resolución es política económica planificada



A modo de síntesis, en el gráfico se observa el debate en torno al neoliberalismo desde una perspectiva teórica. Tal como se aprecia en la primera columna, el neoliberalismo ha sido considerado en el debate intelectual - en la mayoría de los debates del siglo XX- como un *eslogan*, cuya denominación implica detrimento de la posición del adversario, para catalogar ideológicamente el ordenamiento de la economía. El supuesto basal de esta concepción es el *laissez - faire*, idea que implica la autorregulación de la sociedad, del mercado y la ausencia del Estado como entidad que constriñe el funcionamiento del sistema económico.

Este supuesto desde esta perspectiva es ideológico, pues oculta la contradicción y distancia que existe entre una declaración de principios normativos y la operatividad empírica real. En este caso se funda en la necesidad de existencia de una acción individual libre, como principio decisivo para el bienestar.

Considerando que dentro de la economía existen ámbitos identificables como el Estado, el Mercado y la Competencia, se puede apreciar que existen obstáculos conceptuales anclados en

estos tres ámbitos. En la segunda columna del gráfico se observa que tanto el Estado, como la competencia como el mercado tienen una falsa conceptualización a nivel teórico, donde ha predominado la idea de que el Estado desaparece, el mercado es autorregulado y la competencia dinamiza la esfera económica y de las políticas públicas.

Desde esta perspectiva, tal como se refleja en la tercera columna, estos supuestos son obstáculos en tanto no permiten observar empíricamente el cómo funciona la política económica de una sociedad singular, o un país. Tal como se ha descrito en este marco conceptual y siguiendo el supuesto de Peter Hall, las ideas económicas tienen poder político por lo que van ocultando la real operatividad de la política económica y naturalizando la dinámica autorregulada, aun cuando en la práctica no es autónoma, no menos aun autorreferente, en tanto está siendo determinada por las ideas políticas.

Con ello, en la tercera columna se observa que, en primer lugar, *el Estado no desaparece, sino que se reorganiza, distribuyendo su poder en plano de otras instituciones políticas desde donde se coordina la política económica*. Los elementos que caracterizan al Estado desde una perspectiva estatal es el pragmatismo con el que genera dinámicas reguladoras en sus ámbitos espacios de dominio.

En segundo lugar, *la competencia funciona como un mecanismo de pragmatismo disciplinador de los dominios de la política económica*.

En tercer lugar, *el mercado no es autónomo ni es regulador de preferencias*, el mercado es un espacio donde se toman decisiones que devienen fundados en intereses, de procesos de deliberación en el marco de la estructura de clases y las elites políticas.

Esta concepción analítica de neoliberalismo, permite observar

empíricamente como se despliegan estos supuestos a nivel de las dimensiones propias de la política económica, del modelo de desarrollo estatal y por cierto, asociado a un *ethos* normativo.

Capítulo III

Chile: la consolidación del neoliberalismo chileno en dictadura militar y el modelo de la Concertación de partidos por la Democracia.

El presente capítulo se centra en la política económica chilena de las últimas décadas, y tiene por objetivo describir y analizar dichos aspectos poniendo énfasis en componentes distributivos, planes de desarrollo, políticas públicas, gasto social y actores clave en la adopción de ciertas alternativas; además de identificar decisiones formales o informales relevantes y procesos de deliberación clave en los procesos de continuidad. Así mismo, se busca establecer una analogía respecto a cómo se establece un consenso neoliberal (Madariaga, 2015) luego de la vuelta a la democracia y cómo estas temáticas se relacionan con los mecanismos explicativos de la continuidad neoliberal. Para su desarrollo, este capítulo está dividido de la siguiente manera: en primer lugar se presentan antecedentes preliminares que analizan el período previo a 1973 y sirven de base para comprender el contexto político-económico en el que se encontraba el país antes de la dictadura militar. Luego, se examina el período del régimen considerando como punto medular las reformas neoliberales llevadas a cabo durante esta etapa y los actores involucrados; para finalmente analizar el período post autoritario que abarca desde los años 90 en adelante, poniendo énfasis en cómo se expresa la continuidad de algunas de estas reformas hasta el año 2010.

Desde el año 1960 Chile ha experimentado uno de los períodos de desarrollo capitalistas más acelerados de la historia global (Ffrench-Davis, 2003; Garretón, 2016), socavando el impulso hacia transformaciones profundas impulsadas por el gobierno Socialista de Salvador Allende (1970). Luego del golpe de Estado del año 1973 que consolidó la dictadura civil-militar, las reformas estructurales impulsadas en base al modelo neoliberal, mermaron la igualdad, y fomentaron las privatizaciones y la apertura económica. Incluso se ha

planteado que Chile no ha vivido un proceso de modernización, sino un mero proceso de crecimiento rentista, incapaz de ser base material para el crecimiento sostenible a largo plazo (Palma, 2010).

La dictadura reorganizó todas las áreas de la sociedad. El discurso fundacional reflejado en las palabras de uno de sus principales ideólogos, Jaime Guzmán, esta fue definida como un sistema que permitiría superar el “estatismo exagerado” . Esta premisa fue la base de la comprensión dictatorial. Las reformas se llevaron a cabo desde el Estado diseñando una nueva arquitectura del sistema económico paradójicamente liberalizado de ese mismo Estado.

Al volver la democracia en Chile, en el año 1990, se mantuvo el sustrato de estas reformas, en un contexto de graves problemas de deuda social, de una inflación no controlada por el Banco Central chileno y de la exacerbada apertura económica. Nuevos roles y potenciales reformas surgieron a partir de 1990, sin embargo, el modelo económico de la Concertación - continuado por la Nueva Mayoría - no hizo frente a la redistribución y se ocuparon de la consolidación neoliberal. La crítica a esta continuidad aparece al final del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), y se hace más radical durante el primer período del gobierno de Bachelet (2006-2010).

Fue al comienzo de los años noventa cuando la Concertación pudo decidir entre un cambio sustancial en la estrategia económica (intervencionismo estatal), o en el marco de los “enclaves autoritarios” (Garretón, 2016), aceptar las condiciones institucionales heredadas, limitándose a los ajustes que se consideraban fundamentales para una mayor eficiencia económica y una mayor igualdad social, eligieron la segunda opción.

1. Antecedentes preliminares

La crisis del 29’ marca un antes y un después en la estabilidad tanto económica como política de Chile. Frente a la coyuntura, el país tuvo

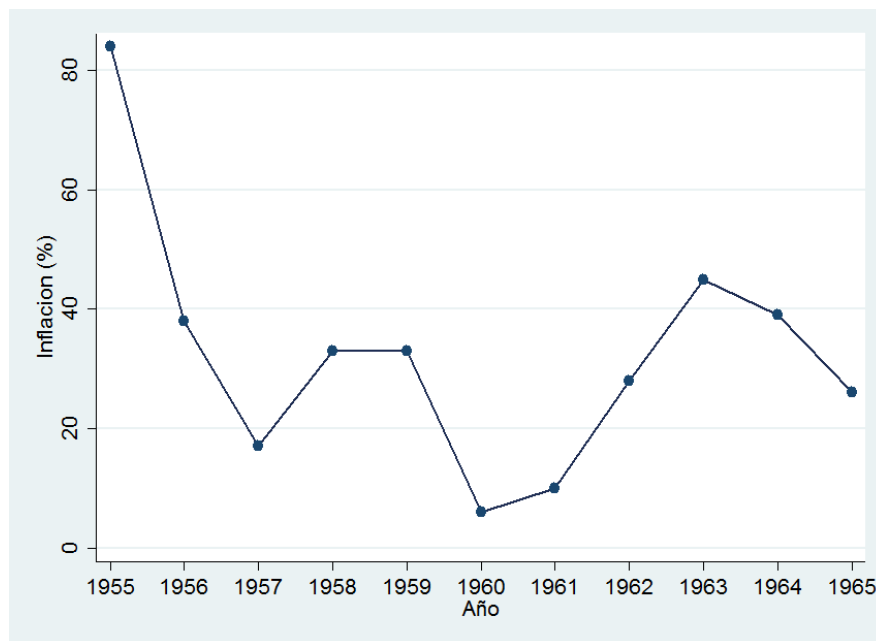
que lidiar con diversos problemas como la cesantía, la caída de exportaciones de materias primas, pérdidas en la agricultura y bajas de sueldos en el mercado laboral. Como ejemplo, las ventas del salitre, la principal materia prima que tenía el país, se volvieron casi nulas, también debido a la creación del salitre sintético en Alemania unos años antes (Olmos y Silva, 2010). Esta situación gatilló en la adaptación a una nueva estrategia de desarrollo económico, la denominada Industrialización por Sustitución de Importaciones, también conocida como Modelo ISI. Este nuevo modelo tenía como fin promover la industria nacional y todo lo que aquello conlleva, considerando al Estado un actor protagónico en la Economía, tal como venía siendo la tendencia mundial en ese entonces (Sunkel, 2011).

Tempranamente, la nueva estrategia adoptada comenzó a tener éxito, reorientando la economía hacia la modernización. Tal como sostiene Rebolledo Leyton (2005), entre los años 1908-1925 a 1940-1950 la tasa de crecimiento del país se eleva de un 2,6% a un 3,7% en promedio y la fuerza de trabajo del sector industrial aumentó un 41%. La revalorización del rol que cumplía el Estado y el Modelo ISI parecían entregar resultados positivos a la economía del país, concediendo un mayor énfasis a las políticas sociales y al desarrollo industrial, y posibilitando la creación de instituciones como la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO (1939), la cual comienza a tener un rol fundamental en la puesta en práctica de esta nueva estrategia de desarrollo económico. Además, durante este período se crean importantes empresas estatales como ENAP, ENTEL, ENDESA y IANSA, impulsadas por un Estado con un rol cada vez más preponderante que potencia políticas destinadas principalmente a la clase trabajadora y media, debido a la importancia de la industrialización y el consumo (Olmos y Silva, 2010).

Posteriormente a dicho periodo se comienzan a evidenciar problemas propios del gasto excesivo del Estado frente a este tipo de modelo, principalmente aquellos relacionados con la inflación. El Gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) por primera vez incluye un paquete de medidas antiinflacionarias para frenar y disminuir las cifras que

llegaban al 30%. Dichas medidas incluían una reducción del déficit público y el gasto (Ffrench-Davis, 2008). Si bien las medidas logran reducir la inflación los años siguientes, en 1961 se produce una crisis en la balanza de pagos y la inflación vuelve a aumentar, tal como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Inflación en Chile, 1955-1965



Fuente: Elaboración propia con datos de INE

Sin embargo, un aspecto importante a destacar de este gobierno es que, como expresa Rebolledo Leyton (2005), se pusieron en marcha políticas con elementos que en un futuro serían parte de la instauración del modelo neoliberal: énfasis en el comercio exterior y reducción al proteccionismo industrial, mayor protagonismo del sector privado en la economía, entre otros. Posteriormente, el Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1965-1970) comienza un fuerte programa de estabilización a los índices macroeconómicos que se venían sosteniendo, junto a la adopción de diversas reformas tales como la

Reforma Agraria, Reforma Educacional, la “chilenización” del cobre, entre otras, con el fin de mejorar los niveles de distribución del ingreso, uno de los principales objetivos de su gobierno (Olmos y Silva, 2010). Sin embargo, al igual que los programas llevados a cabo en los períodos anteriores, tuvieron un éxito inicial pero luego, en 1967, la inflación volvería a incrementarse sobre el 35% manteniendo niveles altos hasta finales del gobierno⁹.

Frente a un clima de confrontación y radicalización política, en el año 1970 asume la presidencia Salvador Allende, quien gana a sus contendores Jorge Alessandri (Partido Nacional, PN) y Radomiro Tomic (Democracia Cristiana, DC), luego de tres intentos fallidos en elecciones presidenciales, imponiéndose con una mayoría relativa del 36%. Posteriormente, y luego de un acuerdo con la Democracia Cristiana, el Congreso chileno ratificaría la elección de Allende por 153 votos. El proyecto político de la UP contemplaba la construcción de un gobierno que fuera “la vía chilena al socialismo” a través de los marcos del sufragio, lo cual implicaba reformar estructuralmente algunos aspectos de la economía chilena y donde la finalidad de la política económica sería la redistribución del ingreso (Henríquez, 2008; Rebolledo Leyton, 2005). El cuadro 1 resume algunas de las políticas implementadas:

Cuadro 1: Políticas durante la UP

Seguir con las políticas impulsadas por Frei, principalmente Reforma Agraria y Nacionalización del Cobre.
Aumento de sueldos en un 40%
Congelación de precios por medio de Decreto
Estatización de industrias
Estatización de la banca

Fuente: Elaboración propia con datos de Archivo Chile

⁹ Datos entregados por Archivo Chile.

De acuerdo a ello, vale la pena mencionar que el gobierno de Allende no contó con un programa específico para la estabilización de los índices macroeconómicos, al contrario, optó además por aumentar de manera exacerbada el gasto público para poder llevar a cabo las iniciativas sociales de su Programa. Esto, junto a otros factores acumulados, produjo una inestabilidad macroeconómica generalizada, con índices de inflación que llegaron incluso sobre el 500%: *“En cuanto a política macroeconómica, la administración de Salvador Allende se puede decir que sintetizó todo los vicios y errores de los cuatro gobiernos anteriores en una mezcla que probó ser completamente explosiva”* (Morandé y Noton, 2004, p.7)

Sumado a aquello, vale la pena mencionar un factor importante para comprender el contexto político en el período anterior a 1973: el sistema de partidos. La aparición de la Democracia Cristiana (DC) en el espectro político, partido que surge con un fuerte compromiso social -lo que lo hace atractivo para el electorado- favorece en gran medida la elección de Eduardo Frei Montalva en 1965. Este partido ocupa una posición de centro en el espectro; sin embargo, se configura como un partido altamente programático, rígido y sin capacidad de negociación. En consecuencia, se conforma un sistema de partidos de “tres tercios” (izquierda-centro-derecha) con características altamente polarizadas, lo que estanca cualquier posibilidad de negociación entre las partes (Scully, 1992).

En suma, la crisis del 29’ afectó de manera aguda a la economía chilena, lo que modifica sustancialmente los actores activos de este sector. El Estado, que hasta el momento permanecía con una escasa participación, comienza a tener un protagonismo cada vez más marcado, llegando a ser el impulsor del modelo económico propuesto en ese entonces. El gasto público aumenta de manera sustancial y se implementan reformas políticas y sociales profundas, como aumento de salarios y una reforma al sistema educacional que contemplaba la creación de una Escuela Nacional Unificada, perteneciente al Estado, a expensas de la emisión de mayor cantidad de papel moneda, lo que

posteriormente contribuiría a producir inestabilidades.

Cuadro 2: Indicadores Macroeconómicos 1970-1973

Año	PIB total (%)	Déficit de balanza comercial (% PIB)	Déficit del sector público (% PIB)	Precio del Cobre (\$US)	Inflación (%)	Tasa de desempleo (%)	Tipo de cambio Real
1970	2,1	12,5	2,7	0,64	34,9	5,7	111,9
1971	9	13,3	10,7	0,49	22,1	3,9	94,6
1972	1,2	15,9	13	0,49	260,5	3,3	43,4
1973	5,6	15,1	24,7	0,81	605,1	5	40,7

Fuente: Archivo Chile – CEME:

Es así como los índices macroeconómicos comienzan a sufrir inestabilidades importantes, sobre todo aquellos relacionados a la inflación por el aumento de la producción de dinero para el gasto público. A pesar de que fueron implementadas medidas antiinflacionarias durante diversos períodos presidenciales, ninguna pudo acabar concretamente con los elevados índices. En efecto, al año 1970 la política económica chilena se encuentra inestable, con un sistema de partidos polarizado y un descontento social cada vez mayor.

2. La dictadura cívico militar

Durante el la dictadura cívico militar, Chile fue escenario de la primera experiencia y puesta en práctica de un modelo económico neoliberal ortodoxo en el mundo hecho de forma sistemática (Garretón, 2012). Sin embargo, para un mejor entendimiento de los aspectos característicos de este período, es posible definir ciertas etapas donde es fundamental hacer la distinción respecto al énfasis de las políticas llevadas a cabo. Cada una de estas etapas serán analizadas

a continuación.

3. Coyuntura crítica: política, empresarial y militar (1973-1975)

Salvador Allende asume el poder en 1970 con el apoyo de la coalición de la Unidad Popular (UP) que la conformaban los dos principales partidos de izquierda: socialistas y comunistas. Como se ha mencionado en puntos anteriores, su propósito era llevar a cabo una “revolución en democracia” con la intención de llevar el régimen de desarrollo estatista existente a su extremo. Esto trajo consigo una radicalización de la polarización política/ideológica, acentuando las dificultades del régimen de desarrollo dirigido por el Estado y mostrando las contradicciones del proyecto revolucionario con una economía capitalista y un sistema de gobierno democrático. En este momento histórico implicaba que muchas de las relaciones sociales que antes de cementación de la estructura económica de Chile se encontraban en un estado de flujo. En ese contexto de inestabilidad política, comenzaron a aparecer partidarios de una intervención militar, los cuales compartían un objetivo general común: el restablecimiento del orden público (relacionado tanto a la inestabilidad social como macroeconómica) y el respeto de la propiedad privada, junto con la rápida solución de alta inflación y los déficit públicos crónicos que se venían acumulando de los gobiernos anteriores (Martínez y Díaz, 1996; Valdés, 2008; Silva, 1996). A este clima de inestabilidad también se suma el surgimiento del paradigma neoliberal y la crisis de los Estados de Bienestar europeos, junto con el decaimiento de regímenes socialistas en el mundo (Olmos y Silva, 2010). Aquello concuerda con la tesis planteada por Naomi Klein (2007), quien sostiene que la implementación de un modelo bajo los supuestos desarrollados por la Escuela de Chicago y específicamente por Milton Friedman, se ha hecho en muchos casos bajo experiencias de coyunturas, desastres o contingencias los cuales han sido aprovechados y vistos como una oportunidad para instaurar el

“capitalismo del desastre”, reformas políticas y económicas radicales sustentadas en los principios del corporativismo, como el escaso rol que ocupa el Estado en la economía.

La mayoría de los sectores que apoyaron el golpe de Estado compartieron una orientación nacionalista, conservadora y corporativista estatal. Estas tres orientaciones tienen estrecha relación en cuanto una visión conservadora favorece también una tendencia nacionalista que respalda o apoya un gobierno autoritario o militar, interesado principalmente en preservar una unidad nacional frente a las inestabilidades y a las divisiones políticas y sociales existentes. Así mismo, la orientación corporativista-estatal favorece la implementación de un orden capaz de reemplazar a las estructuras políticas y al parlamento. Entre ellos, se encuentran los terratenientes expropiados por la Reforma Agraria, la comunidad empresarial, los sectores de las clases medias y facciones del partido Demócrata Cristiano. A su vez, un pequeño grupo de empresarios participa activamente en el derrocamiento de Allende, e ideológicamente se reúnen en torno a un grupo de economistas formados en la Universidad de Chicago –más tarde llamados los “Chicago Boys”-, con el apoyo de un programa re-fundacional neoconservador radical sin precedentes en la historia política del país (Valdés, 2008). También hubo divisiones importantes dentro de la junta militar que tomaron el poder después del Golpe Militar (Martínez y Díaz, 1996). A pesar de las similitudes en sus orientaciones nacionalistas, conservadoras y corporativistas-estatal, estos grupos también presentaban una diversidad de orientaciones políticas que se vieron reflejadas en las medidas llevadas a cabo entre 1973 y 1975. Si bien las políticas de ajuste fueron graves, con la liberalización de precios inmediata y un ajuste de profundidad y reestructuración del sector público para eliminar el déficit público, los parámetros que afectan al sector transable se idearon con el fin de permitir una corrección paulatina a las nuevas condiciones económicas (Edwards, 1983, p.5-6; Agosín, 2001, p.109). Así, se eliminaron inmediatamente las barreras no arancelarias al comercio, pero los aranceles se reducirían gradualmente a lo largo de los años. En efecto, durante los primeros

años de la Dictadura, se ve reflejada la inexistencia de un proyecto político suficientemente claro detrás de la intervención militar (Martínez y Díaz, 1996, p.81; Valdés, 2008, p.16-7).

Los años 1975-76 marcan la solución de esta coyuntura crítica, con la constitución de un bloque dominante duradero y un grupo hegemónico claro. La persistencia de altos niveles de inflación en 1974 y el contexto de la crisis económica en 1975 (Edwards, 1983, p.5-6), junto con los temores de un contragolpe y el descontento popular asociado a una revitalización de las fuerzas de izquierda, fue determinante en la toma de corporativistas sectores empresariales (grandes y pequeños) más dóciles en el apoyo continuo del control militar (Martínez y Díaz, 1996, p.86). Esto hizo que los partidarios demócratacristianos del régimen, quienes poseían las opiniones económicas más progresistas en el gabinete temprano y habían condicionado su apoyo al Golpe de Estado para una restauración rápida del régimen constitucional y la convocatoria de elecciones generales, se unieran a la oposición (Martínez y Díaz 1996, p.84). Posteriormente, los *Chicago Boys* se convertirían en un actor clave en las principales decisiones en el Gabinete, lo que fue facilitado por el programa de reforma abarcadora del grupo, su espíritu de equipo, la lealtad al régimen y su capacidad para llegar a un acuerdo con la disidencia interna en la Junta, haciendo posible la centralización del poder en manos del Ejército presidido por el General Pinochet.

En efecto, en Chile se produce un Golpe de Estado el 11 de Septiembre de 1973 que cambia las dinámicas políticas y modifica a los actores clave en las decisiones políticas de ese entonces, promoviendo una orientación fuertemente nacionalista y conservadora. Sin embargo, el drástico cambio al sistema estatista que predominaba, con altos niveles de gasto público y una fuerte participación del Estado, no se produciría hasta los tramos posteriores de la dictadura cívico militar, debido a la inexistencia de un proyecto político claro los primeros años (Fontaine, 1993).

4. Chile: emergencia de un experimento neoliberal

En el año 1955, autoridades de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile generan una alianza y convenio de colaboración con la Universidad de Chicago. Es así como un grupo de estudiantes viaja a aquella ciudad a adquirir mayores conocimientos, estudiantes que posteriormente serían conocidos como los “*Chicago Boys*”. En ese sentido, y en el contexto de una “*privación total de las libertades públicas y los derechos de los ciudadanos*” (Valdés 2008, p.10) los actores militares lograron forjar una estrecha alianza con estos economistas liberales los cuales fueron formados al alero de las ideas de Milton Friedman que suponían una defensa al mercado y a las libertades individuales (Gárate, 2012). Es así como destaca la importancia de la Universidad Católica como actor importante especialmente como *think tank*. Sin oposición política y un gobierno dispuesto a aceptar un proyecto re-fundacional, el proceso de ajuste dio un giro radical. Así, se optó por poner en práctica una política destinada a recuperar los equilibrios macroeconómicos que fue llamada “*política de shock*” y que tenía como principal objetivo abordar los niveles de inflación y equilibrar la balanza de pagos (Wilhelmy & Duran, 2003). En efecto, desde el año 1975 hasta el año 1981 se implementa en Chile un modelo neoliberal ortodoxo, es decir, el modelo en su forma más pura, sin alteraciones y produciendo cambios sustanciales en la economía chilena (Ffrench-Davis, 2001). La mirada colectivista y bienestarista se deshecha por completo y aparece entonces un enfoque de individualismo exacerbado en atención a los planteamientos del neoliberalismo, donde el ser humano es anterior al Estado y por ende tiene preferencia; el Estado entonces debe pasar a ocupar un rol pasivo y netamente subsidiario.

La puesta en práctica de este nuevo modelo promovió las exportaciones además de incentivar fuertemente las importaciones. Se iniciaron políticas de desregulaciones, una reducción de los aranceles, subsidios y las exenciones de impuestos fueron abolidos, así como los impuestos sobre la riqueza. Al mismo tiempo, las principales agencias

de promoción del Estado se mantuvieron sólo para realizar las necesidades funcionales (Román, 2003, p.36-8). Por ejemplo, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), el agente principal del proyecto chileno ISI sufre de una reestructuración junto a las empresas de propiedad estatal (EPE) para preparar su futura privatización. De esta manera, *“mientras algunos de éstos observaban expectantes estos drásticos cambios, otros se inclinaban por denunciar el costo político y social que significaba un régimen autoritario”* (Wilhelmy & Durán 2003, 275).

Esta liberalización de la economía suponía una idea totalmente opuesta a lo que se había realizado en los anteriores mandatos, donde generalmente se privilegiaba un comercio exterior cerrado, un sistema proteccionista donde había limitaciones a las importaciones y los aranceles de entrada podían llegar hasta un 105% (Fontaine, 1993). En cambio, la política implementada desde 1975 se basaba en una promoción de las exportaciones donde el país poseía ventajas comparativas, principalmente en los productos primarios. Además, se promulga el Decreto 600 que tiene por objetivo aumentar el ingreso de capitales extranjeros, especialmente aquellos ligados a la explotación minera (Wilhelmy & Durán, 2003).

Un tipo de cambio móvil con pequeñas apreciaciones previamente anunciadas se ejecutó entre 1977 a 1978 para reducir la inflación a niveles internacionales, seguida de la fijación de los tipos de cambio en el año 1979. En esta época también se logra la plena liberalización de la cuenta de capital, añadiendo la liberalización temprana de los precios y el comercio, y la reestructuración del Estado para complementar un programa neoliberal ortodoxo. Al mismo tiempo, las principales agencias de promoción del Estado se mantuvieron sólo para realizar las necesidades funcionales (Román 2003, 36-8). Se comienza a despedir a un elevado número de funcionarios públicos, y la tasa de inflación cae a 376%¹⁰. Algunas de las medidas consideradas durante este período se traducen en:

¹⁰ De acuerdo a datos entregados por el INE.

- Liberalización de la economía, promoviendo las importaciones/exportaciones
- Privatización de empresas que pertenecían al Estado
- Una fuerte reducción del gasto público
- Se desincentivan los subsidios y los ajustes a las remuneraciones
- Se vuelve a establecer el peso como moneda

La política de shock implementada generó una fuerte caída del crecimiento del PIB (-12,9% en 1975), que culmina con una crisis de la deuda, existiendo además un alto desempleo de cerca del 25%. Sin embargo, y a pesar de que la crisis petrolera de 1974 produce inestabilidad en las cifras inflacionarias en Estados Unidos, en Chile las cifras bajan considerablemente año a año, llegando a un 64% el año 1977. Ya el año 1978 los niveles de inflación se estabilizan cerca del 30% (De Gregorio, 2005). En paralelo, esta década registra el nivel más bajo de desigualdad, lo que la literatura atribuye a las políticas que fueron impulsadas por el gobierno de la Unidad Popular, sin embargo, en los años posteriores los niveles de desigualdad aumentarían por sobre los niveles de décadas anteriores (Lambrecht, 2011). Esto ocurre debido a que el gobierno de la Unidad popular “*se fundamentaba en ideologías completamente distintas a las del régimen dictatorial*” (Lambrecht, 2011, p.18).

En términos de Derechos Humanos, durante la dictadura cívico-militar se restringen sistemáticamente libertades fundamentales, donde se detiene a líderes políticos y personas relacionadas a la oposición a quienes se les torturó y asesinó, se realizaron allanamientos y exilios. Hasta el día de hoy quedan interrogantes sobre el paradero de cientos de personas. Desde el retorno a la democracia en los 90’, se han hecho múltiples esfuerzos por la búsqueda de verdad y justicia, donde destacan las comisiones Rettig, Valech, entre otras instancias

dedicadas a reparar en parte el dolor sufrido por las familias¹¹.

Finalmente, en 1980 se establece mediante plebiscito una nueva Constitución política elaborada por una comisión compuesta de abogados y profesores de derecho, que restablece el marco legal, la cual se caracteriza por ser escrita y otorgarle gran poder al Ejecutivo, especialmente para asegurar la continuidad de Augusto Pinochet. En efecto, esta constitución “*no se caracterizó por la pluralidad política de sus integrantes ni tampoco por postular cosmovisiones diferentes*” (Bassa & Viera, 2008). Sin embargo, hasta el día de hoy se ha mantenido vigente, no exenta de modificaciones lo que sin duda da luces de cómo se ha expresado la continuidad de este modelo. Este es un punto relevante en cuanto a mecanismos de continuidad se refiere, que se manifiesta a través de una instancia institucional donde se busca mantener la estabilidad y los equilibrios, sin llevar a cabo cambios radicales con el fin de respaldar el neoliberalismo.

¹¹ Información extraída del Instituto de Derechos Humanos INDH. <http://www.indh.cl/wp-content/uploads/2013/12/Cap-6.pdf>

5. La crisis financiera y el consenso autoritario

Según Ffrench-Davis (2001), la introducción del modelo neoliberal ortodoxo al sistema político chileno estuvo compuesto de dos etapas principales: la primera, desde el año 1975 a 1981, se caracterizó por la implementación del modelo neoliberal en su forma más pura que implicó una reestructuración total del aparato público y una redefinición de sus marcos de acción. Sin embargo, desde el año 1982 en adelante, debido principalmente a diversas crisis y shocks externos que afectaron negativamente y bruscamente la economía del país relacionados a las remesas de intereses, flujos de capital y caída en términos de intercambio, hubo una apertura hacia un enfoque mucho más pragmático para poder enfrentar los efectos de estas crisis. Examinaremos más exhaustivamente esta segunda etapa en los puntos que se tratarán a continuación.

La depresión global del sector industrial y de transables y los altos niveles de desempleo de la época, junto con el auge del consumo (de bienes importados) inducido por el aumento del poder adquisitivo y el crecimiento vertiginoso del sector financiero, produjeron una acumulación en la balanza de pagos financiado sucesivamente por el endeudamiento externo. No obstante, a principios de la década de 1980 el régimen neoliberal ortodoxo estaría angustiado por los problemas de rendimiento de las instituciones de estabilización y el cambio en el equilibrio de poder que éste produce. El proceso de ajuste vinculado a los tipos de cambio logró controlar la inflación y proporcionar a los sectores empresariales reticentes nuevos nichos de negocio (Ffrench-Davis, 2003, p.219-222; Meller, 1996, p.196-7). Sin embargo, en esta fecha se producirían tres shocks importantes que afectarían negativamente a la economía del país: uno relacionado con los flujos de capital, otro al incremento de las remesas de intereses y por último una caída en términos de intercambio (Ffrench-Davis, 2001).

A pesar de la regulación de algunas cifras macroeconómicas y los buenos niveles de ciertos indicadores, en la década de los 80' Estados

Unidos se ve envuelto en la peor recesión desde la crisis del 1929, principalmente debido a las alzas significativas en los precios internacionales del petróleo, lo que sin duda afecta de manera global. A la par, un aumento en las tasas de interés, la sobrevaluación del peso chileno, y una excesiva deuda externa de parte de los países de América Latina, provocó una crisis bancaria colosal generando consecuencias que se ven sobretodo reflejadas en los índices económicos: el PIB cae un 14.3%, el desempleo supera el 20%, la inflación llega a un 23% en 1984¹² y la demanda agregada cae a un 28% entre 1981 y 1983 (Ffrench-Davis, 2001). El sistema financiero quebró generando una crisis profunda en la banca (Ainzúa, 2010). Además, el gobierno militar debe lidiar también en estos años con cambios en materia política: la oposición al régimen se organiza, y nace la Alianza Democrática, presidida por Gabriel Valdés, por lo que se generan distintas protestas a nivel nacional, también de sindicatos, estudiantes y partidos políticos de la oposición (Rodríguez, 2006). En resumen, el ambiente político se torna inestable a lo cual se suma un descontento social generalizado por el contexto de crisis y oposición al régimen.

La dictadura militar y su equipo económico ortodoxo deben lidiar entonces con la toma de decisiones importantes frente a la crisis. En efecto, se enfrentan a la decisión crucial de mantener el experimento neoliberal personificado en la alternativa entre resistir la deflación (la posición ortodoxa) o proporcionar rescates (la postura pragmática). Mientras que la preferencia por la posición ortodoxa se destacó de forma continua (Meller, 1996, p.218; Edwards, 1993, p.29), en Enero de 1983 las autoridades financieras declararon la inconvertibilidad del peso chileno, se llevaron a cabo estrictos controles de capital, y el Estado se hizo cargo de la banca. Las explicaciones hacia este punto de inflexión se han centrado en la continuidad del régimen autoritario (Silva, 1996, p.9). Al hacer esto, los autores destacan el "miedo" de la movilización popular como un factor de inducción de la lealtad del sector empresarial a la dictadura. Así, se expresa un mecanismo de

¹² De acuerdo a datos proporcionados por el INE.

continuidad al régimen con una participación importante de nuevos actores clave como parte de apoyo a la dictadura. Sin embargo, esto no explica el cambio de política y por sí mismo proporciona poca influencia para entender por qué la crisis ayudó a derrocar a las dictaduras neoliberales de los países vecinos como Argentina y Uruguay, pero no sucedió lo mismo en Chile (cf. Blake 1998). Afirmamos que este cambio puede ser entendido como un compromiso sostenido por el cambio en la correlación de fuerzas producidas por la crisis dentro del bloque dominante, de los militares/alianza tecnocrática a los sectores empresariales que reclaman rescates. Si bien esto ayudó a inducir un cambio en el entorno favorable a una modificación del *statu quo*, la rigidez de las instituciones en la parte superior dejaba poco espacio para el cambio interno en las políticas de alta jerarquía.

Mientras que el nuevo sector financiero proporciona una base de apoyo a los militares frente a la tecnocrática alianza independiente de los gremios empresariales reacios y los partidos de derecha, esto también implica la incorporación de un nuevo interés a la coalición hegemónica: hacer la alianza inicial ya no aislada de la presión interna grupos. Cuando la crisis estalló, parte de la poderosa base de apoyo socio-económica del gobierno se declaró en quiebra y su interés en un rescate en general se comparte con el resto del sector empresarial muy endeudado, inclinando cada vez más el equilibrio de poder hacia los grupos que piden una mayor intervención del gobierno, siguiendo presente la revitalización de viejos intereses corporativistas en el sector empresarial. Existía un creciente malestar social por la mayor crisis económica en décadas y la reconstitución de la oposición política que amenazó con llevar el gobierno militar abajo (Martínez y Díaz 1996, p.95). De hecho, la oposición política reactivada buscó activamente capitalizar la crisis financiera para atraer a sectores de actividad en una nueva alianza para inducir inmediata redemocratización y la adopción de un régimen más incrustado (Silva, 1996, p.217-9). Estos, a su vez, podrían ganar más aliándose con las autoridades militares en lugar de la oposición, ya que esto asegura el carácter neoliberal general del régimen y del sistema económico, la

participación mínima del Estado en la economía, pero con una mejor capacidad de respuesta a sus intereses contingentes (Silva, 1996, p.223-226).

En ese sentido, con un contexto político con menos probabilidades de perpetuar el *statu quo* y el poco espacio del plan para actuar en los límites del régimen existente, los grupos hegemónicos negociaron para llegar a un compromiso con los grupos empresariales con el fin de mantenerse en el poder y mantener su influencia en el régimen de desarrollo. En los años de recesión cruciales, las autoridades incorporaron los intereses empresariales en el Gobierno, y eliminaron a los más radicales *Chicago Boys* de los ministerios clave, a cambio de los tecnócratas más suaves y los políticos de derecha estrechamente relacionados con las asociaciones empresariales y su tradición corporativista (Silva, 1996, p.224). Además otorgó a las asociaciones patronales un papel importante para influir en las decisiones de política a través de los consejos de política y las comisiones de consultoría en los siguientes años.

Este giro pragmático se sintió de inmediato en la política económica. La introducción de los nuevos intereses en el bloque dominante también dio un nuevo impulso a la política industrial en el marco del rostro de un desplazamiento del enfoque neutral por uno más pragmático dirigido a proteger y promover el sector exportador. Streeck y Thelen (2005, p.20) lo describen como el modo de cambio que se produce cuando *"previamente desviado, las prácticas de los extranjeros adquieren relevancia a expensas de formas y comportamientos institucionales tradicionales"* Este proceso se puede ver en la introducción de políticas fuertemente resistidas en años anteriores, tales como un aumento general de tarifas (hasta un 35% en 1984), además de algunos sobre-aranceles específicos, bandas de precios para las materias primas, subsidios para la importación de bienes intermedios, las políticas de atracción de IED vinculadas a la refinanciación de la deuda pública, y la protección a algunos sectores que compiten con las importaciones (Agosín, 2001; Meller, 1996, p.246).

A partir del año 1984 la economía comienza a recuperarse. Sin embargo, recién el año 1989 el PIB per cápita logra llegar a los niveles obtenidos antes de las crisis de principios de los 80' (Ffrench-Davis, 2001). En 1985 comienza entonces un proceso de privatización de empresas del Estado que se justificaba, entre otros aspectos, en que acumulaban pérdidas millonarias. Pasando de alrededor de 400 a 20 empresas en manos estatales. Además, comienza a haber cambios en el Gabinete, donde Luis Escobar es reemplazado en el Ministerio de Hacienda por Hernán Büchi. Este nuevo ministro se posiciona como clave para reactivar la confianza del sector privado y la economía en general. A pesar de que los índices de inflación siguieron teniendo niveles elevados (26%), con la estrategia del nuevo ministro la economía logra crecer un insólito 6% anual. Sin embargo las privatizaciones no se limitaron tan solo a las empresas del Estado. Existieron también privatizaciones en el ámbito de la seguridad social, donde se crean las Asociaciones de Fondos Previsionales (AFP) las cuales ponen fin al antiguo sistema basado en un reparto solidario, donde se transfiere la mayor parte de las cotizaciones sociales a los administradores privados de seguridad social que garantizan fácil acceso a la financiación a los nuevos grupos económicos y las empresas estatales privatizadas (Martínez y Díaz 1996, p.92-3; p.98). En el ámbito de la salud se crean las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES). A la vez, se crean los Servicios de Salud Regionales, traspasando la atención primaria a la administración municipal (Larraín, 2012; ley 19.378¹³).

En este período también se lleva a cabo una modernización en el ámbito de la educación. Durante estos años, se crea un cuantioso número de universidades e institutos privados de enseñanza superior. Además, se entrega un gran número de subvenciones a privados para incentivar esta actividad y que inviertan en este sector, creando lo que hoy se conoce como la educación particular subvencionada. De esta manera la educación, y en concordancia con la perspectiva neoliberal, se torna una mercancía que es transable en el mercado (Peña, 2011).

¹³ <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30745>

En efecto, tal como sostiene Ffrench-Davis (2001) desde el año 1987 la economía chilena experimenta tres cambios positivos: un alto precio del cobre, la llegada de un acuerdo con bancos acreedores para postergar pagos de intereses al año 1991-1993, y ahorros de divisas resultantes de la conversión de la deuda. Así, si bien la economía presentaba algunos desequilibrios, al final de la década de los 80' se exhibía una economía con altas tasas de utilización de su capacidad productiva, con un gran impulso exportador y una fracción del sector modernizada.

6. Transición: una democracia tutelada y la ampliación del neoliberalismo

Como se ha visto hasta el momento, desde que el Gobierno de Salvador Allende se ve interrumpido por el Golpe Militar el año 1973, se comienzan a producir cambios notables en varios aspectos de la política chilena. Ya desde el año 1976 se puede ver implementado en Chile un modelo de corte radicalmente neoliberal, dando un giro totalmente distinto a lo que se venía promoviendo hasta ese entonces. Este nuevo modelo tiene dos características que es posible resaltar: por una parte, los esfuerzos se centran en controlar los índices macroeconómicos que venían produciendo oscilaciones importantes y por otro lado, desde 1985 sobre todo, se le da un fuerte énfasis a las privatizaciones en distintos ámbitos, en parte llevando a cabo algunas disposiciones contenidas en el Consenso de Washington, el cual proponía una “receta” para alcanzar el desarrollo (Olmos y Silva, 2010). Se implementan políticas que aumentan los niveles de desempleo y reducen el gasto (y la participación) del Estado en todos los ámbitos. La administración pública sufre un drástico cambio que implica una reducción de su tamaño y la redefinición de sus ámbitos de acción (Araya y Cerpa, 2008). En suma, entre las medidas destacadas que fueron implementadas durante la dictadura cívico-militar y sus características, se destacan:

Cuadro 3: Algunas medidas durante la dictadura civil militar

Reducción de los altos niveles de inflación, pero con presencia de oscilaciones
Reducción los servicios o beneficios sociales existentes para los trabajadores
Un gran aumento del desempleo y del subempleo
Reducción de salarios
Reducción de los sectores manufactureros, constructores, mineros y estatales
Altos grados de privatizaciones
Una gran apertura de la economía a los mercados internacionales
Consolidación del Banco Central como un ente autónomo, sin intervención del Estado
Acrecentada desigualdad (índice Gini de 0,570 en el período 1987-1990)
Implementación de un tipo de cambio competitivo

Elaboración propia, con datos de Drake (2003) y Ffrench-Davis (2001)

La dictadura civil militar preparó una nueva Constitución Política que fue aprobada ese año. Esta nueva Constitución otorgó ocho años más al mando del Estado al por entonces líder indiscutible, el General Pinochet. Posteriormente, el año 1988 se realiza un segundo plebiscito, esta vez para decidir si el General Augusto Pinochet se mantendría en el poder hasta el año 1997, en el cual gana la opción “No” y el gobierno se ve obligado a preparar las primeras elecciones después de 20 años. La victoria de las fuerzas democráticas de centro-izquierda (la Concertación) en el plebiscito primero, y en las primeras elecciones democráticas en 20 años más tarde, generó temores de un

retroceso autoritario pragmático (Weyland, 1999, p.69).

Aunque la Concertación había moderado su discurso crítico en los últimos años con el fin de ganar la confianza del sector empresarial (Silva, 1996, p.225), su pasado estatista siguió arrojando dudas sobre su capacidad para mantener un buen clima de negocios (Silva, 2002, p.344). En ese contexto, la transición a la democracia tenía un carácter pactado, que significaba negociar y consensuar ciertas reformas de carácter gradual. Respecto a esto, Gruninger (2003, p.6) argumenta que: *“el marco en el cual se había negociado la transición, no permitía al nuevo gobierno cambios democráticos radicales. Entre los obstáculos está la Constitución del año 1980 que asegura la descentralización de la administración del Estado y la privatización de varias funciones económicas de carácter público. Otro obstáculo es la necesidad de cuidar el equilibrio de las fuerzas políticas y optar por una política de consenso antes que de enfrentamiento con la derecha política. A esto se suma un clima internacional en favor de las reformas económicas neoliberales y las democracias “prudentes” y la exitosa situación macroeconómica de la primera mitad de los 90 en Chile que hizo difícil justificar otra estrategia económica”*. De hecho, la Coalición agrupa a una gran parte de los sectores políticos que habían sido la oposición al régimen autoritario y su experimento neoliberal, principalmente el Partido Demócrata Cristiano, facciones del Partido Socialista y otras fuerzas de izquierda que habían sido parte del Gobierno de la UP. Un papel importante fue desempeñado por los equipos técnicos de las partes cuyo análisis del programa de política del gobierno fue casi la única voz disidente que se oía en los días más oscuros del régimen, ocupando los pocos espacios abiertos para la prensa independiente (Silva, 1991, p.403). Después de asumir el cargo en 1990, sin embargo, el nuevo gobierno en gran parte dominado por estos técnicos apresuró a ratificar los fundamentos del modelo económico heredado de la dictadura (Fazio y Parada, 2010; Silva, 1991, p.409).

Dos factores destacan para dar explicación a esto: primero, un buen desempeño económico indujo a una parte importante de los líderes de

la Concertación para apoyar una versión más amplia de un neoliberalismo pragmático, lo que genera una división interna dentro de la Coalición entre las orientaciones liberales y progresistas (Garretón, 2000). Por otro lado, la reconstitución de la base de apoyo del régimen en los últimos años de la dictadura facilitó la aceptación de la Coalición del diseño constitucional de la dictadura, el empoderamiento de las facciones moderadas dispuestas a negociar limitaron sin duda el grado de maniobra de las facciones más progresistas. Es así como debido a su gran importancia, la idea del bloqueo hacia alternativas más radicales se constituye como un mecanismo de la continuidad neoliberal.

Después de la profunda recesión de 1982-1983, la economía experimentó un repunte liderado por la expansión del sector de las exportaciones y una fuerte recuperación de la crisis, con la actividad económica que golpea un récord de 10% en 1989, inclinando la balanza de poder hacia aquellos grupos que exigen el mantenimiento del consenso pragmático (Silva, 1996, p.224-6). La recuperación económica y las perspectivas de democratización concedieron al modelo un reconocimiento externo adicional (Weyland, 1999, p.71). Por el contrario, después del punto de inflexión de 1982-1983, los militares/alianza tecnocrática reconstituyeron su base de apoyo a través de una nueva ola estratégica y selectiva de las privatizaciones, que incluían entidades financieras intervenidas y bienes del Estado valiosos (Martínez y Díaz, 1996, p.98). A través de ella, muchos partidarios del régimen autoritario y la línea más dura de los defensores neoliberales -que más tarde formarían el partido UDI de Centro Derecha- obtuvieron acceso privilegiado al poder económico en sectores clave (Mönckeberg, 2001). Crucial para este desarrollo fueron también las privatizaciones vistas en el punto anterior, como las del sistema de seguridad social y la introducción de un nuevo Código de Trabajo antes de la crisis. Este último se rompió debido a la grave desregulación de los mercados laborales, disminuyendo la densidad sindical y su influencia (Martínez y Díaz, 1996, p.92-4). Como resultado, las facciones corporativistas restantes del sector empresarial podrían adoptar el modelo neoliberal pragmático ofrecido

por la dictadura, cerrando la puerta a cualquier posibilidad de un pacto más desarrollista después de su abierto apoyo a la opción autoritaria en el plebiscito de 1988 (Silva 1996, p.225).

En el contexto del buen desempeño económico, se fortaleció el poder de los grupos ortodoxos, incluido el mismo General Pinochet. De hecho, a los ojos de las facciones liberales de la Concertación, la única manera de salvaguardar la democracia recuperada del país y mantener un buen clima para los inversionistas, era asegurar la cooperación de las facciones moderadas de la derecha y los sectores empresariales, lo que implicaba mantener en gran medida intactas las instituciones políticas y económicas heredadas (Silva, 1996, p.225-6; Silva, 2002, p.344; Silva, 1991, p.405; Weyland, 1999, p.70-1), resaltando la importancia de la creación de redes de reciprocidad entre las élites. En el aspecto político esto suponía, por una parte una disminución grave de la competencia política, principalmente a través de un sistema electoral que le negó la representación a los partidos minoritarios y coaliciones, la inducción de la oposición a confundir al centro (Aninat et al., 2008, p.173-8), y 2) y una serie de "enclaves autoritarios" que dificultaron el funcionamiento y puesta en práctica de un sistema democrático (Garretón en Linz y Stepan 1996, p.210; Silva, 2002, p.341).

En el caso de la política económica, el consenso neoliberal ampliado fue sellado por tres negociaciones clave en la década de 1990: 1) la institucionalización de (CBC) la independencia del Banco Central de Chile y el mandato exclusivo de asegurar la estabilidad de precios en 1989 (Bianchi, 2008); 2) una reforma fiscal mucho menos generosa que propuso anteriormente la Concertación, y altamente sesgada hacia los impuestos indirectos (Fazio y Parada, 2010; Silva, 1996, p.232-3); y 3) la falta de apoyo a la reforma del Código de Trabajo y restauración de los derechos de los sindicatos (Silva, 1996, p.233-4).

En cuanto al sistema de partidos, a pesar de que durante el gobierno de Salvador Allende la relación de la Democracia Cristiana con los partidos de la izquierda chilena era bastante alejada, durante el proceso de transición estas fuerzas se unen para dar forma a la

oposición al régimen, principalmente desde el año 1983. Así se crea una alianza con el fin de que Aylwin ganara las elecciones y la presentación de una lista de candidatos para las elecciones parlamentarias. A esto se suma que las leyes electorales aprobadas por el la dictadura cívico militar obligaban de cierta forma a los partidos a la formación de coaliciones y pactos para poder ganar los escaños (Valenzuela, 1995). Es así como desde los 90' se constituye la Concertación de Partidos Por la Democracia, formada por 17 partidos de centro izquierda quienes ganan las elecciones de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). A su vez, por el lado opuesto se configura la Alianza, formada por los partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, que representaron la oposición a dichos gobiernos.

Es de esta forma como el panorama del consenso neoliberal permitió a los Concertacionistas implementar políticas sociales sin perturbar el equilibrio macroeconómico (Weyland, 1999, p.81; Silva, 1996, p.228). Facciones liberales y progresistas de la coalición seguirían estando, sin embargo, en disputa permanente, pero su unidad como proyecto político descansaría principalmente en sus críticas al régimen militar por las violaciones de los derechos humanos y un fuerte énfasis a la política social (Weyland, 1999, p.69; Meller, 1996, p.332; Silva, 1996, p.225; Aninat et al 2008, p.173-8).

Con amplio consenso sobre cuestiones macroeconómicas, se ha conservado la mayor jerarquía heredada del régimen. A su vez, un proceso de solidificación de sus instituciones complementarias debía ser perseguido con el fin de reducir las alternativas políticas de la coalición gobernante. Además de la ley que rige el papel del Banco Central, un mecanismo innovador de cuasi-metas de inflación fue implementado, consistente en anuncios anuales de metas de inflación para el año siguiente (De Gregorio, Tokman y Valdés 2005, p.11). Por el contrario, los cambios en la política industrial serían impulsados por dos fuerzas opuestas. En primer lugar, los gobiernos de la Concertación complementarían la política de apertura comercial de la

dictadura (disminuyendo gradualmente los aranceles en toda la década) con la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con los principales socios comerciales del país (Fazio y Parada, 2010).

Dos acontecimientos serían cruciales: la adhesión de Chile a la OMC, que hizo necesaria la eliminación de las medidas de apoyo a las empresas a finales de la década de 1990, y la firma de los Acuerdos de Libre Comercio con los EEUU y la UE a principios de la década de 2000, que disminuiría aún más los aranceles y restringiría la utilización de medidas de protección (Agosín, 2001, p.120; Ffrench-Davis, 2003). Por otro lado, la política industrial sería utilizada estratégicamente por las facciones más progresistas de la Concertación para buscar el apoyo de ciertos sectores empresariales para constituir un nuevo bloque (Silva, 2002, p.352). Estas facciones comenzaron a utilizar las instituciones existentes para avanzar en un marco más coherente de promoción de la industria, aunque dentro de los límites planteados por las políticas de mayor jerarquía. El esquema fue constituido por una serie de subsidios a la demanda sobre la base de un sistema de horizontales "donaciones de contrapartida" para la financiación de nuevos proyectos y/o con fines de formación (Román, 2003, p.40; Muñoz Gomá, 2001, p.49). Si bien esto fue estrictamente diseñado para evitar cualquier tipo de preferencia sectorial, con el objetivo de una participación "neutral" del Estado (Muñoz Gomá, 2009, p.13), fue dirigida tácitamente para promover las PYMES (Román, 2003, p.40), y teniendo en cuenta los recursos y esfuerzos involucrados fue visto como la *"más potente caja de herramientas microeconómicas en funcionamiento en la región de América Latina"* (Román, 2003, p.59). Con renovados recursos financieros e institucionales para la promoción, este nuevo marco de política implicaba poner en movimiento un proceso de conversión de las agencias estatales casi muertas tales como CORFO, SENCE (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo), INDAP (Instituto Nacional de Desarrollo Agrario) redirigiendo sus esfuerzos a los nuevos objetivos, funciones y propósitos (cf. Streeck y Thelen 2005, p.26).

En efecto, luego del triunfo de la oposición en el plebiscito de 1988 y

las posteriores elecciones, hubo una etapa de “reforma a las reformas”, donde se produce un perfeccionamiento al modelo económico de mercado, sin desconocer la adopción de un consenso hacia el modelo neoliberal, manteniendo las bases del modelo económico implementado durante la dictadura cívico militar. Se fortaleció el componente social, y se corrigieron fallas graves en la política macroeconómica para conseguir un entorno estable y sostenible en el tiempo. Durante los primeros años de la década de los años 90’, la economía chilena dio origen a uno de los períodos de mayor prosperidad: el PIB logra un crecimiento de un histórico 7% anual entre 1990 y 1998, en el mismo período la expansión de las exportaciones fue de un 10% y la inversión logró incrementos significativos. La tasa de inflación no aumentó, el déficit en cuenta corriente se mantuvo en niveles sostenibles, se firmaron una gran cantidad de Acuerdos de Libre Comercio y se fortalecieron los vínculos con países desarrollados (Ffrench-Davis, 2001).

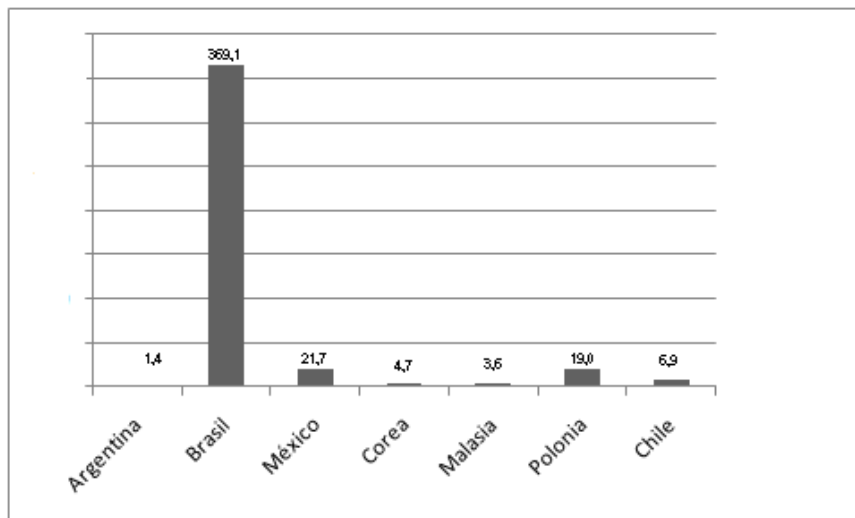
La sociedad de los años 90’, bajo los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle se configura con características poco similares a las de antes del régimen: se está frente a una sociedad con menos confianza en el Estado y mucho más individualista (Araya y Cerpa, 2008; PNUD, 1998). De esa manera se opta por incorporar la justicia social como elemento primordial, sin dejar de lado y reconocer la importancia de los agentes privados para el desarrollo económico del país, pero reconociendo también la importancia de la intervención del Estado sobre todo en materias sociales. El crecimiento económico alcanzado contribuyó a la disminución de las cifras de desempleo y de pobreza. Además, hubo medidas redistributivas y avances en materia de flexibilización laboral. En la misma línea, se crea la Comisión Por Verdad y Justicia, destinada a investigar las violaciones a los Derechos Humanos en la Dictadura (Cademartori, 2007). A continuación algunos hechos importantes llevados a cabo durante este período:

- Gran baja del desempleo

- Aumento de los salarios
- Creación de Acuerdo Marco, Reforma Tributaria y Reforma Laboral
- La inflación cae a un solo dígito
- Fuerte impulso a la modernización del Estado
- Alta inversión en obras públicas e infraestructura

Frente a un contexto macroeconómico internacional, durante este período Chile se posiciona con bajos niveles de inflación en relación no tan solo a países de Latinoamérica, sino también con niveles muy cercanos a los obtenidos por países de todas las regiones del mundo, como se muestra en la Figura 2.

Figura 2: Inflación en el periodo (1994- 1999)



Fuente: Elaboración propia con datos de **Le Fort (2000)**

Un punto importante de mencionar durante este período –y en la lógica neoliberal- es que se abre paso a la política de concesiones, sobre todo para fomentar y acelerar procesos de infraestructura, por

ejemplo, como las concesiones viales, otorgando responsabilidad a entidades privadas para llevar a cabo estas tareas (Blazevik Quiroz, 2007). En la misma lógica, Chile se incorpora al MERCOSUR por lo cual los aranceles caen y las exportaciones sufren un aumento considerable. En otras palabras, desde los 90' y durante los gobierno de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle la economía chilena sufre una creciente reactivación y apertura, donde el mantenimiento de equilibrios macroeconómicos se torna fundamental. El proceso neoliberal y los cambios en la lógica de modernización del Estado hacen que el crecimiento aumente de manera notable, que el desempleo disminuya y que se consolide un equilibrio macroeconómico relevante por lo que la inversión extranjera directa (IED) aumenta por sobre lo esperado (Ffrench-Davis, 2001). En ese sentido, hacia fines de la mitad de la década de los 90', la economía chilena parecía estar en buen pie.

7. La crisis asiática y la consolidación del neoliberalismo

En general, la estabilidad del consenso democrático/pragmático durante la década de 1990 (Aylwin-Frei) se basaba en dos condiciones muy frágiles para el mantenimiento de la meta de estabilidad de precios: 1) que la expansión económica y el desempeño de la combinación de medidas políticas ortodoxas y pragmáticas no amenazaban el precio y estabilidad, y que 2) los grandes grupos empresariales mantuvieran su confianza en que la Concertación estaría liderada por sus facciones moderadas que aseguraran un compromiso con el modelo económico heredado, y que no buscarían una coalición más amplia para romper sus "ataduras" políticas. Sin embargo, al final de la década ambas condiciones se alterarían, generando una modificación adicional del régimen de desarrollo.

En el año 1997, los países emergentes de Asia comenzaron a tener dificultades. Indonesia, Corea del Sur, Tailandia y Hong Kong comienzan a vivir serios problemas a causa de la fuga de capitales extranjeros. Si bien en un comienzo no se sabía de forma concreta cómo esta crisis asiática iba a afectar sobre todo a los países de América Latina, en el año 1998 el Banco Central decide subir la tasa de interés para frenar los niveles de consumo, importaciones e inversión, ante la contracción de los mercados. Pero la economía chilena solo reaccionó 6 meses después a estos ajustes. Es así como el desempleo comienza a tener niveles cada vez más elevados y las exportaciones comienzan a descender sostenidamente. La recesión se hace cada vez más profunda, pasando de un 7% de crecimiento económico en el período 1985-1997, a un 2.7% en promedio en el período 1998-2003 (Agosín y Montecinos, 2011). Como sostiene Ffrench-Davis (2001), la economía chilena al año 1998 había acumulado desequilibrios importantes, debidos principalmente al manejo macroeconómico interno, asociado a los tipos de cambio o a las cuentas de capitales. Por ende, la crisis asiática afectó a Chile de manera sostenida, principalmente por dos vías: una, por la reducción de los flujos de capitales y otra, por el deterioro de los términos de

intercambio. El año 1999, la inversión se redujo un 18%, y las exportaciones mostraron una desaceleración significativa.

Durante el auge de las exportaciones de 1985-1988 hubo niveles relativamente bajos de las entradas de capital, así como también las brechas productivas importantes no amenazaban a la inflación, lo cual era de hecho una condición importante para facciones ortodoxas a aceptar un compromiso pragmático. Bajo el mismo marco político, sin embargo, la aceleración de la entrada de capitales, la reducción de las brechas productivas y el mantenimiento de altos niveles de actividad económica durante varios años (más del 7% desde finales de 1980) activa la necesidad de dirigirse a la inflación y las bandas de ER, por lo que la política monetaria se torna particularmente estresante.

En la víspera de la crisis asiática, el escenario cambió radicalmente. Después de que en Chile se sorteara de buena manera la situación de la crisis mexicana de 1994 a 1995, un segundo importante choque de flujos de capital se materializó en 1995-1996 produciendo desequilibrios importantes. La crisis asiática arrastró en 1997 el principal temor del Banco Central el cual fue que las salidas masivas de capital en el contexto de una demanda interna recalentada amenazarían la meta de inflación (Céspedes et al. 2005, p.22; Morandé y Tapia, 2002, p.70; Ffrench-Davis 2003, p.371). Las sucesivas olas de ataques especulativos de divisas a raíz de la crisis rusa de 1998 convencieron a la CBC que dos metas monetarias simultáneas (inflación y ER) ya no eran posibles (Céspedes et al., 2005, p.24).

En el otro carril, las perspectivas de las elecciones de 1999 en un contexto de recesión económica tras la crisis asiática y la constitución de una oposición unificada (la Alianza por Chile) aumentaron las posibilidades de que las fuerzas de la derecha disputaran el dominio político de la Concertación por primera vez después de la vuelta a la democracia (Angell y Pollack, 2000; Garretón, 2000). La victoria del candidato socialista, Ricardo Lagos, en las primarias de la

Concertación tomó posiciones a un extremo (Silva, 2002, p.346). Mientras Lagos no representaba realmente un hilo para el consenso establecido (Silva, 2002, p.346), muchos sectores de la izquierda, incluyendo las fuerzas progresistas de la Concertación, tenían la esperanza de que esto podría, al menos, permitir una reconstitución en la correlación de fuerzas dentro de la coalición (Garretón, 2000, p.84). Sin embargo, Lagos asumió el poder en 2000 en un contexto político difícilmente susceptible de cambios en el régimen de desarrollo. La recesión económica había reforzado la parte derecha de centro-UDI dentro de la Alianza, y facilitó un cambio hacia sectores de línea dura dentro de las asociaciones empresariales; con una estrecha victoria electoral, las facciones ortodoxas explotaron estratégicamente la vulnerabilidad política del nuevo gobierno para exigir mayores garantías (Silva, 2002, p.350) haciendo posible un mayor fortalecimiento de la meta de estabilización.

Es así como el gobierno de Lagos comienza en un contexto bastante complicado, debido a que la economía solo se fue recuperando a un ritmo relativamente lento. El crecimiento de un 5,4% el año 2000, solo se debió a que hubo un fuerte incremento de las exportaciones; pero otras variables como el desempleo o la demanda interna, se observaban estancadas por la incertidumbre y falta de confianza, lo que derivó en una lenta reactivación. El escenario internacional también se torna confuso, principalmente a raíz de una crisis petrolera provocada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, lo que en Chile hace replantearse las cifras respecto a las metas de inflación. En América Latina, Argentina también pasa por un momento de recesión, lo cual no favorece la atracción de capitales extranjeros. En un contexto de alto desempleo (cerca del 11%), una economía debilitada y una Concertación fragmentada por la detención del General Pinochet en Londres, los primeros años del gobierno de Lagos sin duda se enfrentaron a un escenario complejo (Huneeus, 2006).

El compromiso de la Concertación y sus técnicos con la estabilidad de precios fue ratificado sucesivamente antes y después de las elecciones

con el fin de "renovar" el la instalación del consenso democrático/neoliberal. A finales de 1999 los controles de capital fueron eliminados y se permitió sólo la intervención "en circunstancias especiales" (es decir, cuando la depreciación amenazó a los objetivos de inflación), mientras que la política monetaria se hizo muy contractiva. A través de una solidificación adicional de la política ambiental, la administración de Lagos hizo esfuerzos en la disminución de las facultades discrecionales del Banco Central y aislándola de las presiones políticas, y en la unión del compromiso de la política fiscal implícita existente (Aninat et al., 2008, p.161-2). Dos medidas se destacan como cruciales: 1) la introducción de un "marco de metas de inflación en toda regla" (De Gregorio, Tokman y Valdés 2005, p.11), basado en una banda de inflación anual de destino, y 2) la aplicación en 2001 de un la política fiscal de balance estructural con una regla de un superávit fiscal del 1% con el fin de mantener el gasto público bajo control en los períodos de alta actividad económica y los flujos de divisas. La política de balance estructural se aprobó como la "Ley de Responsabilidad Fiscal" en 2003 (Fazio y Parada, 2010, p.123-33).

Los acontecimientos que siguieron a la crisis asiática generan una reacción. Aunque el marco de la política industrial ideado a principios de la década no tuvo los resultados esperados, los niveles de crecimiento decepcionantes tras la crisis asiática y el pasado de los buenos resultados de las subvenciones a la exportación pragmáticos de la década de 1980 ayudó a crear la sensación de que el único resultado del juego de políticas "neutral" fue un retraso en el desarrollo tecnológico y en una mayor diversificación de las exportaciones (Muñoz Gomá, 2001, p.29-30; Muñoz Gomá, 2009, 45). Con la garantía del carácter indiscutible del objetivo de estabilidad, las facciones más progresistas de la Concertación fueron capaces de reunir consenso para renovar el marco de la política industrial en virtud de programas de cooperación público-privada y dentro de los límites de la regla de responsabilidad fiscal. Se las arreglaron para presionar por un impuesto sobre las ventas de Cobre, tema por cierto muy debatido, el cual ha disminuido gracias a la oposición de las

poderosas empresas mineras y de los partidos de derecha, para financiar el Fondo Nacional de Innovación para la Competitividad (2005). En paralelo, se las arreglaron para instituir el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, un tablero de consultoría mandato de la presidencia que recomienda el apoyo de los *clusters* productivos estratégicos y creó una política nacional de innovación y competitividad.

8. Luego de la crisis: el énfasis en la política social y el aumento de las inconsistencias

Durante el gobierno de Lagos el ministro Eyzaguirre introduce una política restrictiva hacia el gasto público o gasto social, lo que representó durante gran parte del período un crecimiento de éste mucho menor al crecimiento del PIB per cápita. Es decir, si bien desde el retorno a la democracia se comienza a dar un fuerte énfasis al gasto social, durante el gobierno de Ricardo Lagos este proceso continuó, pero con mucho menos énfasis (Fazio y Parada, 2006). Además, en este período se le dio una alta importancia a algunas reformas, entre las que destaca la Reforma a la Constitución política el año 2005 que eliminó gran parte de las disposiciones heredadas de la dictadura además de Reformas a la Salud y a la Justicia. A pesar de que se opta por una política restrictiva para no aumentar los niveles de inflación, se le da un gran énfasis a la generación de nuevos empleos. En paralelo, como se ha mencionado en puntos anteriores, también se llevan a cabo incentivos para la inversión privada, donde se crea el Programa de Fomento de Oportunidades para las Regiones, los Contratos de Desarrollo Regional, las Concesiones, y se les otorga la Exención de Patentes Comerciales a las Comunas, todos con el fin de otorgar estímulos para la atracción de capitales privados (Araya y Cerpa, 2008). Destacan también durante este período la reforma laboral del 2001, el AUGE y la promoción de programas de empleo (Ffrench-Davis, 2001). Cabe destacar aquí un punto importante, relacionado a los mecanismos de continuidad del régimen neoliberal posible de ver en este período: durante los gobiernos de la Concertación es posible identificar en variadas oportunidades la búsqueda por mejorar políticas o acuerdos existentes, más que cambiarlos o alterarlos, los que sin duda contribuyen a la continuidad del sistema.

Recién el año 2004 parecía ser que la economía chilena comenzaba a reactivarse, sobre todo por la introducción de shocks externos positivos principalmente relacionados a los precios de las exportaciones. Así, el año 2005 se registra un crecimiento de un 6% y

el volumen de las exportaciones creció un 8% (Ffrench-Davis, 2001).

El año 2005 asume la presidencia Michelle Bachelet y a partir de esto, se comienza a incentivar una visión fuertemente influenciada por la importancia del componente social en políticas públicas importantes, generando una red de protección social, para bajar las tasas de pobreza, desempleo y aumentar la demanda. Además, se aprueba la Ley de Transparencia, y siguiendo la línea del estímulo a la inversión, se crea un Incentivo Tributario a la Inversión Privada (Alegría Ojeda, 2012).

El año 2008 se deben enfrentar elevados índices de inflación (los mayores niveles en 17 años) por cual el Banco Central decide elevar las tasas de interés. Sin embargo, el año 2009 Estados Unidos entra en una crisis financiera que se transforma en una crisis internacional, por lo que en Chile los efectos se sintieron de manera intensa. Las exportaciones experimentaron fuerte bajas y por ende, las expectativas de crecimiento y de empleo disminuyeron drásticamente. A la par, hubo una disminución importante de la inversión privada por lo cual también hubo una disminución en el PIB. No obstante, gracias a la aplicación de políticas contra-cíclicas fue posible contrarrestar los efectos de la crisis y poder recuperar, lentamente, los niveles de crecimiento desde el año 2010. En efecto, de acuerdo a lo que señala CEPAL (2009) éstas medidas contra-cíclicas incluyeron:

- Programas de empleo
- Promoción de la inversión pública
- Un plan de gasto
- Apoyo crediticio para PYMES

A pesar de aquello, los niveles demanda interna se contrajeron casi un 10% anual, junto con las importaciones. Hubo una reducción del PIB de un 1,6% anual. Las industrias manufactureras, de la construcción y pesqueras tuvieron contracciones significativas, y las tasas de

desempleo alcanzaron sobre un 10% el año 2009 (CEPAL, 2009). En términos concretos, la crisis afectó notoriamente la economía chilena. De ese modo, el año 2009 se propone un presupuesto que tiene por objetivo contrarrestar algunos efectos de la crisis pero sin bajar los gastos sociales de parte del Estado.

De este modo, en los últimos años de la década de 2000, la senda neoliberal chilena se enfrentaría a aumentar contradicciones. Por un lado, el alto precio de las materias primas entre otros factores, afectarían de gran manera al sector transable (Fazio y Parada, 2010, p.99-109), lo que aumentaría la divergencia de intereses entre facciones en los sectores empresariales comprometidos con una versión ortodoxa del régimen neoliberal, y otros de apoyo a una postura más pragmática, como los exportadores y productores agrícolas. Tan fuerte sería este efecto y las presiones de los sectores transables, como para obligar al CBC de intervenir el mercado de divisas para devaluar el peso, por primera vez en 2008 y nuevamente en 2011 (Fazio, 2011).

En suma, durante la década del 2000 los gobiernos centran sus esfuerzos en distintos aspectos de acuerdo al contexto en el que se desarrollan. Por una parte, el gobierno de Ricardo Lagos se centra en la profunda crisis asiática que Chile enfrenta a fines de los 90', por lo cual el énfasis está puesto en recuperar la confianza en términos económicos, reactivar la inversión y los índices macroeconómicos. Por otra parte, el gobierno de Michelle Bachelet pone el énfasis en el componente social y en el aumento de las políticas sociales con una participación activa del Estado.

Por otro lado, el descontento de los grupos sociales excluidos a 20 años del consenso democrático/neoliberal y la representación política limitada se elevaría y empezarían a presionar para su inclusión (Sehnbruch y Donoso, 2011). La escalada de descontento social se manifiesta en una sanción de la Concertación de 20 años de políticas de "tercera vía" con la elección del primer Presidente de derecha en 20

años en 2010, Sebastián Piñera, y posteriormente con las mayores manifestaciones sociales desde la dictadura en 2011. Ese mismo año estalla el conflicto estudiantil exigiendo una educación garantizada, gratuita y no “más subsidiada”, además de existir un fuerte desgaste de casi la totalidad de instituciones públicas, con niveles de confianza en promedio, bajo el 30% (Boccardo y Guajardo, 2013). La posibilidad de reconstituir alianzas en ambos lados del espectro político, la voluntad política para cambiar el sistema electoral por primera vez desde el retorno a la democracia, y el fortalecimiento de la oposición de izquierda parece estar plantando las semillas para una recomposición del equilibrio de poder que conduce a la erosión del modelo neoliberal. En los últimos años, y sobre todo para enfrentar las elecciones del año 2013, se pone fin a la Concertación como pacto y se crea La Nueva Mayoría como nuevo referente político amplio de centroizquierda, el cual incluye en su coalición al Partido Comunista. Esta nueva coalición enfrenta las elecciones del año 2013 donde su candidata Michelle Bachelet resulta electa transformándose en la coalición oficialista.

9. Comentarios finales

Como se ha visto en el desarrollo del presente capítulo, Chile representó la introducción de un sistema neoliberal ortodoxo en su forma más pura. Simultáneamente el caso chileno ilustra la institucionalización de un compromiso neoliberal, sin muchos detractores, iniciado en el período de transición desde el régimen militar, hacia un sistema democrático a principios de los años 90'. Luego del establecimiento del régimen militar, junto con la implementación de este modelo neoliberal con características de ortodoxo, la administración del desarrollo chileno estaría conformado por tres puntos de inflexión principales. En primer lugar, una profunda crisis financiera los años 1982-1983 junto con la agitación social sucesiva obligó al gobierno militar a forjar un compromiso con los sectores empresariales con el fin de ampliar sus bases de apoyo,

abriendo la puerta a algún pragmatismo político. Posteriormente, el retorno a la democracia el año 1990, que llevó a una coalición de centro-izquierda al poder, aumentó la inconsistencia generando patrones disímiles del cambio: una intensa búsqueda de la solidificación de instituciones. Por último, el contexto político y económico que rodea a la crisis asiática (1997-1998) permitió sellar e institucionalizar el neoliberalismo, pero con el aumento de la incompatibilidad en el nivel de políticas públicas.

Como se ha visto en el presente capítulo, la consolidación del neoliberalismo supone, entre otros, el privilegio hacia un ambiente de equilibrios macroeconómicos y la estabilidad institucional. Los mecanismos asociados a la continuidad del régimen de desarrollo económico, se observan de manera clara por la posición de la coalición oficialista que se manifiesta a través de políticas públicas y acuerdos específicos donde se busca, por ejemplo, concesionar o subsidiar a entes privados junto con llevar a cabo un gasto público con el fin de mantener la estabilización institucional. Así mismo, el bloqueo hacia alternativas más radicales o la seducción de potenciales oposiciones estuvieron dadas desde el comienzo de los 90', e incluso antes del plebiscito del 88' por actores claves. A la par, la búsqueda por modificar ciertos acuerdos o políticas sin cambiarlos radicalmente y la creación de redes de reciprocidad con élites pone de manifiesto la elección por evitar una alteración radical del *status quo* y el mantenimiento del sistema.

Siguiendo el concepto de “ecología institucional” desarrollado por Peter Hall (2007), llamamos a esta trayectoria institucional una “ecología neoliberal” que expresa el proceso de ajuste constante en las medidas de política y su apoyo político a fin de estabilizar el rendimiento y la aceptación de una lógica institucional comprometida con la estabilidad de precios. Además de garantizar el apoyo a las instituciones de enseñanza superior, este proceso de ajuste también supuso una ampliación de la base de apoyo socioeconómico para el régimen neoliberal con el consiguiente efecto más heterogéneo, y políticas que tienen un efecto mayor en el cambio institucional. Esto

explica el creciente arraigo de las políticas públicas en el marco general de la estabilidad de precios y el aumento de las contradicciones dentro del régimen de desarrollo y su base de apoyo.

Capítulo IV

Sudáfrica: La herencia económica del Apartheid y el modelo del ANC. African National Congress.

La política económica de Sudáfrica tiene una variedad de dimensiones. Es un país de contradicciones, paradojas e ironías. La pobreza y la desigualdad en los ingresos coexisten con ciudades parcialmente modernas y un sector minero desarrollado, en términos de infraestructura industrial y comercial. En ese contexto, este capítulo analiza la evolución de la política económica post-apartheid. Se discuten los tipos de políticas neoliberales implementadas en Sudáfrica, con un enfoque específico para el período posterior al Apartheid, es decir desde 1994, poniendo énfasis en su eficacia en el modelo actual de desarrollo de Sudáfrica.

Sudáfrica se convirtió en políticamente democrática en el año 1994, después de las primeras elecciones post apartheid. Antes de dichas elecciones, Sudáfrica se caracterizaba por un sistema colonial racial arraigado y un desarrollo socioeconómico desigual. Los Colonos holandeses y británicos, que se establecieron en Sudáfrica en los años 1652 y 1820, respectivamente, instauraron un sistema económico que sirvió los intereses de la metrópoli, a expensas de los pueblos indígenas del territorio (Gumede, 2014 y Wilson, 2012). Esto fue, según la literatura, para la ontología de la desigualdad y la formación de clases sociales empobrecidas en Sudáfrica. Después de que el Partido Nacional (NP) ganara el poder nacional, en el año 1948, su gobierno blanco comenzó a hacer cumplir las políticas de discriminación racial en virtud de un sistema de legislación que fue llamado Apartheid. Bajo el Apartheid, los *black africans* fueron obligados a vivir en zonas separadas, y a hacer un uso público separado de los blancos. A pesar de la oposición fuerte y consistente contra el Apartheid dentro y fuera de Sudáfrica, sus leyes se mantuvieron en vigor durante la mayor parte de los 50 años que estuvieron gobernando.

Para comprender históricamente la configuración de Sudáfrica, se debe entender el proceso de colonización el que se remonta al siglo XV cuando los marinos portugueses, que fueron los pioneros de la ruta marítima a la India, comenzaron a visitar la costa sudafricana. Otros colonos europeos los siguieron desde finales del siglo XVI en adelante. El proceso de colonización llegó se vio caracterizado por la esclavitud y modelo de trabajo forzado desde finales del siglo XVI, en el año 1652, especialmente en el periodo de comercio. Este fue el modelo original de colonialismo traído por los holandeses en 1652. Este modelo colonial de esclavitud se consolidó en el año 1657 cuando los colonos europeos seleccionaron tierras y granjas en las regiones cultivables alrededor de Ciudad del Cabo, donde el vino y el trigo se convirtieron en los principales productos. Los inmigrantes europeos, que fueron alentados a colonizar África como agricultores pioneros, se les brindaron importantes extensiones de tierra para cultivar, generando un sistema de traspaso de mano de obra desde los *Black Africans* lo que tuvo consecuencias para las comunidades africanas que se enraizaron en la estructura de clases del país.

Ahora bien, durante el siglo XVIII, Sudáfrica experimentó una revolución minera, que comenzó con el descubrimiento de diamantes y oro, y de este modo el país se transformó de ser una sociedad agraria a la periferia del comercio mundial en una economía industrial integrada a nivel mundial (Terreblanche 2002). Según Walter Rodney (1973: 116) en su libro, "How Europe Underdeveloped Africa", la relación que existía entre África y Europa era la de una transferencia de riqueza y extractivismo. La revolución minera condujo a la rápida expansión de la colonización europea en el continente. Esto condujo a un aumento en el número de colonizadores, y los colonos comenzaron a extenderse a las áreas circundantes más allá de las cadenas montañosas más cercanas. A medida que aumentaron en número, su demanda de tierras, agua, ganado y trabajo también aumentó, y cada vez más habitantes indígenas fueron incorporados a la economía colonial como sirvientes, perdiendo posteriormente su independencia política y económica, como consecuencia.

En todo este contexto extractivista se produce un aumento significativo en el número de blancos afrikáners, especialmente posterior a las Guerras Anglo Boeres, los afrikaners constituyeron un gran número y una base del electorado en Sudáfrica. Este fue un factor crítico en la victoria electoral del Partido Nacional que dio paso a la formulación del régimen de Apartheid colonial. El apartheid se refiere a la segregación formal de grupos raciales. El régimen separatista del apartheid se basó en cierta medida en leyes coloniales. Sin embargo, hizo la segregación más rígida y la reforzó de forma más agresiva y con un diseño institucional acorde. Hendrik F. Verwoerd (1954), uno de los ideólogos del apartheid, afirmaba:

"No hay lugar para él [el africano] en la comunidad europea por encima del nivel de ciertas formas de trabajo. Dentro de su propia comunidad, sin embargo, todas las puertas están abiertas. Por esa razón, no tiene valor para él recibir una capacitación que tiene como objetivo la absorción en la comunidad europea, donde no puede ser absorbido"¹⁴. (traducción propia)

El resultado institucional de esta política fue proporcionar al mercado del trabajo flexibilidad en todas sus formas y por cierto la segregación racial ya no en términos solo simbólicos, sino estructurales.

El sistema económico sudafricano se ha basado históricamente en la extracción de minerales. De acuerdo a CJPME Foundation (2014: 03) hasta la mitad del siglo XIX fue una sociedad predominantemente agrícola en la cual la mayoría de las personas, tanto blancos y negros, vivían de la tierra. El sistema económico en los orígenes de la nación sudafricana se debe en gran parte a la extracción de minerales, la cual se remonta al año 1740 (Bond, 2000). Tanto el desarrollo de la

¹⁴ Esto condujo a una extensión nacional de la segregación en la educación y el empleo. La Ley de Educación Bantú de 1953 fue una de las leyes racistas más ofensivas del apartheid. Trajo la segregación a la educación, en el sentido de la educación de los sudafricanos, los negros estaban bajo el control del gobierno. La educación Bantú fue diseñada para enseñar a los estudiantes africanos a ser "tiradores de madera y cajones de agua" para una economía y una sociedad de blancos, independientemente de las capacidades y aspiraciones de un individuo (UNESCO, 1976: 01).

industria en Sudáfrica así como el poco desarrollo de la agricultura están directamente vinculadas a la dependencia de la economía de la explotación minera y de minerales. Según Mohamed (2010) históricamente, el desarrollo económico de Sudáfrica se había centrado en las actividades extractivas de los sectores de minería y minerales. En consecuencia, el Estado y la industria minera siempre han trabajado juntos para apoyar el crecimiento de las industrias manufactureras, tal como sostiene Mohamed.

El sistema económico se expandió y se desarrolló un sistema capitalista por medio de la acumulación de riqueza y de la revolución industrial. La revolución industrial impulsó a los sudafricanos, que venían de un origen pobre, hacia una condición más moderna de inserción en el mercado, sin embargo manteniendo la precariedad. Del mismo modo, la inversión directa y masiva, principalmente extranjera, transformaría a Sudáfrica en una de las potencias económicas del siglo XX y en el país más industrializado de África (Wilson, 2012). Según Frye, Farred y Nojekwa (2011), se impuso en Sudáfrica un capitalismo industrial altamente desarrollado, en una tierra colonial y mercantil, caracterizada por una dominación socio-política de los colonos. Este capitalismo se basa, según se ha denominado en la literatura más crítica, en la "esclavitud asalariada", propia de las sociedades capitalistas avanzadas, caracterizada de ese modo por las condiciones de precariedad de los trabajadores. Este sistema capitalista se vio fuertemente sesgado en términos raciales, sirviendo sistemáticamente los intereses de la metrópoli, a expensas de los pueblos indígenas de Sudáfrica (Wilson, 2012).

1. Historia de opresión racial y Apartheid

Según Mohamed (2010) la historia económica de Sudáfrica se caracteriza por la *"política de la opresión de los black africans y el estricto control de los trabajadores africanos"*¹⁵ (p.44). Leubolt

¹⁵ La raíz del Apartheid se remonta al sector minero de Sudáfrica. La industria

(2015) sostiene que las influencias coloniales sobre la minería y la extracción de minerales en la economía de Sudáfrica fueron institucionalizadas de manera diferente: principalmente africanos tenían que hacer el trabajo físico duro. Los patrones de la explotación laboral y la "esclavitud asalariada" fueron evidentes. Frente a ello, se visualiza en los años 90 la gran diferencia racial de la tasa de pobreza y la desigualdad de Sudáfrica.

Según Patrick Bond (2000), durante los años 90, el 95% de los pobres eran personas africanas, y de ellos el 4% era de "color"¹⁶. La gente de

minera sentó las bases del mismo. Esto se debe a que mucho antes de que se formalizara la legislación del sistema autoritario del Apartheid, los europeos ya se habían establecido en Sudáfrica, junto con su participación en la minería. La minería de roca profunda es una industria intensiva en capital, y solo un puñado de personas que con el tiempo se les conoció como los Randlords, lograron obtener el capital necesario para participar en esa actividad. Cecil Rhodes, Abraham Bailey, Alfred Beit, Ernest Oppenheimer y Joseph Robinson fueron algunos de los más conocidos Randlords. El crecimiento de la industria de la minería dio lugar a los enormes beneficios generados para ellos. Esto fue el sustento de nuevas políticas de trabajo en las zonas rurales y urbanas. También alentó a la creación de leyes y prácticas en las que progresivamente fueron excluidos los pueblos negros.

¹⁶ Cabe mencionar que existen diversas categorías raciales en South África: Color, Indian, Whites, Black (que en la mayoría de los textos se mencionan como africanos). Sudáfrica es un país profundamente estructurado por la raza. En este sentido, es diferentes a otros países con historias coloniales. Por ejemplo, en la década de 1950, cuando otros territorios coloniales devinieron independientes, Sudáfrica fue en la dirección opuesta, al convertirse en un Estado de apartheid. Según Wilmot James (2010: 01) en la era pre-apartheid, las categorías raciales eran vagamente utilizadas para trazar los límites que protegen el estado, los privilegios de clase y los derechos políticos a lo largo de las líneas de apariencia y ascendencia. Mientras que en la época del apartheid sirve para diferenciar los privilegios de clase. La clasificación racial bajo el apartheid. se define en la Ley de Registro de Población de 1950, a lo largo de líneas de aspecto y reconocimiento social: los europeos (blancos), mestizos, asiáticos y negros (que significa) 'nativos'. Sin embargo, esto fue un problema para el gobierno del apartheid principalmente porque no eran individuos de diferentes grupos de raza, por lo que no encajaban perfectamente en la caja de los miles de individuos de piel clara que no eran ni negro ni blancos, sino colors. Se llegó a la siguiente clasificación: *Asiática* se refiere, una persona cuyos padres son miembros de una raza o tribu cuya étnica casa es Asia, y podrá ser una persona su mayoría de origen es asiática. *Bantu* Se refiere a la persona, tanto, de cuyos padres son de oro eran miembros de una tribu aborígen de África, y podrá ser una persona de vida mestiza como

la categoría racial blanca e india representa menos del 1% de los pobres. En otras palabras, la mayoría africana compuesta por más de la mitad de la población del país obtenían ingresos familiares inferiores a 300 rands (19 dólares aproximadamente) por mes durante los años 90.

El régimen autoritario del Apartheid comenzó fácticamente en 1948, y la institucionalización del colonialismo racial empeoró durante la era del Apartheid en Sudáfrica, especialmente bajo el sistema económico del capitalismo. El régimen del Apartheid hizo del racismo una política de Estado que llevó a la explotación y a la dominación aguda de la mayoría africana por la minoría blanca (Bond, 2000). El gobierno del Apartheid empleó diversas estrategias y políticas que aseguraron que los blancos mantuvieran el control de la economía, disfrutando de mejores condiciones de vida y mejor obtención de capacidades, de una manera significativamente superior a las otras razas (Gumede, 2010)¹⁷. Los residentes *Black Africans*, por el contrario, fueron explotados con fines laborales, contribuyendo de manera directa al aumento de las tasas de ganancia en el sector minero. De hecho, para mantener la estabilidad política de la

miembro de la comunidad de la 'Bantú', tribu, corral o ubicación. *Color* significa la agrupación de cualquier persona que no es una persona blanca, asiática, bantúes, incluirá bosquimanos griqua, oro Hotentote koranna; y una persona *blanca* significa la agrupación de una persona cuyos dos padres cuya etnia es Europa e incluirá cualquier Judío, sirio o de otro tipo, que es en apariencia evidente que una persona blanca, a menos que y hasta se demuestre lo contrario. La clasificación racial bajo la dieta post-apartheid, En los albores de la administración democrática del post-apartheid gobierno del ANC, abolió cualquier acto división del tipo anterior, en el orden institucional, sin embargo la permanencia cultural sin duda es un hecho.

¹⁷ Desarrollo territorial separado: La notoria Ley del Suelo de 1913, marcó el inicio de un desarrollo territorial separado al obligar a la mayoría de los sudafricanos negros a vivir en reservas, para que pudiesen trabajar como aparceros. La Ley de Tierras generó prohibiciones a los africanos, de compra o alquiler de cualquier tierra, excepto en las zonas restringidas que estaban contempladas para los africanos en forma de reservas. El gobierno planificó dicho desarrollo con la intención de que los trabajadores agrícolas africanos no tuvieran más incentivo que trabajar por salarios en efectivo, en lugar de cultivar sus propias tierras (Allan, 2005).

dominación colonial, el gobierno del Apartheid comenzó a poner en práctica las políticas racistas del mercado laboral y social en favor de la minoría blanca. De esta manera, la raza se convirtió en la categoría política central para el capitalismo sudafricano (Beinart, 2001).

En los albores de la transición democrática, el clima era de crisis y no existían muchos elementos culturales de unificación. Sin embargo, una de las mayores fuerzas era el deseo de evitar una guerra civil (Leubolt, 2015), y el anhelo de una transformación en el marco de un "capitalismo no racista". Incluso el discurso de Nelson Mandela (2010) reflejado en su biografía "*Long walk to the freedom*" manifiesta que el cambio que se esperaba no atentaba contra los cimientos del capitalismo, sino más bien apuntaban a la dimensión racial del mismo. La democracia era la esperanza de mayoría africana de Sudáfrica. Era un símbolo de independencia política, que consistía en liberar a la mayoría africana del sesgo racial y la opresión capitalista racial, y lo que resultaría en un ideal normativo de una mejor vida para todos, no solo los oprimidos.

El año 1994 se pone fin oficial al sistema autoritario del Apartheid. El año 2015 marca 21 años desde los albores de la democracia. En estos 21 años, la economía sudafricana se ha transformado en una de las líderes en el mercado emergente de África, siendo Sudáfrica uno de los países más industrializados del continente. Los primeros diez años de la democracia post-apartheid fueron de cambios drásticos y rápidos. Desde el año 1994, el gobierno encabezado por el African National Congress, ANC inauguró legislaciones y políticas de intervención que buscaban resolver las contradicciones y las ramificaciones que fueron provocados por el legado de siglos de discriminación y el colonialismo del Apartheid. Según el Fondo Monetario Internacional (2005) desde los inicios de la democracia, el ritmo de crecimiento económico se duplicó y la inflación se redujo a unos niveles bajos y predecibles. El Fondo Monetario Internacional sostiene que estas tendencias favorables han sido el resultado de las políticas macroeconómicas disciplinadas, la diversificación de la base productiva de la economía, y una apertura de la misma al comercio

exterior. En el transcurso, la prestación de servicios sociales básicos se había mejorado y se produjeron importantes logros en el bienestar. La acción concertada también se había comprometido a abordar la incidencia del VIH/SIDA, habiendo tenido un costo social y económico tan sostenido¹⁸.

Sin embargo, a pesar de los sostenidos cambios positivos, permanecen inconsistencias entre la declaración de principios y el desarrollo a nivel de políticas públicas. Por ejemplo, las altas tasas de crecimiento de Sudáfrica, no han sido acompañadas por una expansión significativa en la oferta de trabajo. Esto es evidente en los bajos niveles de competencias de las personas, el alto desempleo y el aumento de los niveles de pobreza en los primeros años del Apartheid. La diferencia en comparación a Chile es notable entre ambos países. En 2011, el nivel de pobreza en Chile era del 22% de la población, mientras que en Sudáfrica era del 53%, más del doble. Esta diferencia se hace notar aún más en los indicadores económicos (Fondo Monetario Internacional, 2005).

Los niveles y la profundidad de la transformación social en Sudáfrica en la década de los 90 pueden ser evaluados mediante la comparación con la realidad bastante nefasta de la década de los 80. La Sudáfrica de los años 80 se caracterizó por una profunda crisis social, al borde de una guerra civil. La infraestructura social, incluyendo la educación, estaba en una situación de precariedad extrema, los jóvenes se encontraban en una situación de desamparo e inseguridad que les llevaba a enfrentarse a un país que podría ser considerado ingobernable en términos institucionales y con altísimos índices de violencia política. Según los historiadores y novelistas, la violencia y el miedo se respiraba en las calles del orden autoritario del Apartheid,

¹⁸ En la comparación entre Chile y Sudáfrica, es considerable la diferencia en las expectativas de vida, y una explicación la podemos encontrar en los diferentes niveles de enfermedades que se presentan en cada país. Por ejemplo, mientras en Chile, en el año 2013 el porcentaje de personas infectadas con VIH (edades de 15 a 49) era de 0.3% de la población, para el mismo año en Sudáfrica era del 19.1%. Para más detalles sobre la realidad del VIH en Sudáfrica ver Katito (2015).

los sistemas de seguridad funcionaban arremetiéndolo al miedo y a la insostenibilidad ordenamiento daba cuenta cómo el viejo orden se caía a pedazos (Houston y Mutheir, 1998, p.37).

En los principios de la democracia, el gobierno encabezado por el ANC heredó una economía y una esfera pública que se encontraba en una profunda crisis. Por un lado, el caos y la violencia caracterizaban la sociedad sudafricana, producida por años de sistemática y rigurosa división racial. Según Nattrass (2005) a pesar de que en los años 90 un sector de la población africana había disfrutado de un rápido ingreso al alza y la movilidad de clases, en los últimos años del Apartheid, la mayoría de los africanos antes relegados lo siguieron siendo, siguieron sumergidos en la pobreza, en la marginación y el subdesarrollo, mientras que la pequeña minoría blanca que el poder había celebrado era visiblemente rica. Los datos sobre los ingresos de 1993 indicaron que la tasa de pobreza –según fuentes del Banco Mundial- era de 57% entre los Black Africans, el 20% entre las personas de color, un 7% entre los indios y el 2% entre los blancos (Bond, 2000). Según Mayer et al. (2000), el ingreso promedio per cápita dentro de la minoría blanca de Sudáfrica era de alrededor de 12 veces la media de los Black Africans. Desde la perspectiva de Gumede (2014) y sus recientes investigaciones, los Black Africans han enfrentado en este periodo escasas oportunidades de empleo o autoempleo, debido principalmente a que fueron sometidos a la educación pública de baja calidad, a una limitada atención de salud, y han sido geográficamente confinados a las partes empobrecidas del país o ciudades pobres (Gumede, 2014) . No obstante lo anterior, el régimen autoritario del Apartheid no sólo trajo prejuicios a los africanos desfavorecidos, también ha perpetuado la pobreza y exacerbado la desigualdad de ingresos en formas muy evidentes. Como la mayoría de los regímenes autoritarios, el Apartheid no cumplió con estándares de seguridad y desarrollo mínimos, ni procuró cubrir las necesidades socio-económicas básicas de la mayoría del país. En consecuencia, esto dio lugar a que la economía de Sudáfrica de los años 90 estaba profundamente arraigada en altos niveles de desempleo, pobreza y la

desigualdad, así como los bajos niveles de inversión durante la crisis económica de la década de 1990 (Gumede, 2014).

La precariedad en Sudáfrica ha tenido un carácter bastante radical. La economía no ha logrado satisfacer niveles de seguridad adecuados para los ciudadanos. Muchas personas hasta hoy no cuentan con agua potable, sistema sanitario y electricidad. Del mismo modo, la situación de la educación y la atención sanitaria en el país han sido profundamente insuficientes. Según Gerwel (1994, p.82) la reconstrucción educativa se tornó un enorme desafío para la transición post-apartheid, ya que las escuelas eficaces se habían derrumbado. La situación del sistema de salud no fue diferente. Además de la desigualdad racial arraigada, la calidad y extensión de la atención de salud se centró en la medicina curativa y la tecnología intensiva, en lugar de la medicina preventiva y la medicina primaria (Todaro y Smith, 2006). Por lo tanto, la situación económica y social de Sudáfrica se encontraba en una difícil coyuntura.

En este contexto, el objetivo más importante del ANC no fue sólo crear una sociedad unida, no racial, no sexista, próspera y democrática, sino generar un sistema de políticas públicas capaz de mejorar la calidad de vida de todos los sudafricanos. Esta visión de "una vida mejor para todos" se utilizó para buscar el posicionamiento en las primeras elecciones democráticas del 27 de abril de 1994¹⁹. Fue

¹⁹ El ANC, que se formó el 8 de enero de 1912 por los antepasados de Sudáfrica, se dirige principalmente a reclamar la soberanía de los pueblos y de reafirmar la libertad de la gente del continente africano, que se había perdido en campos de batalla repartidos por el paisaje de África (CNA, 2012, p.2). El objetivo más importante de la ANC era crear una sociedad unida, no racial, no sexista, próspera y democrática de toda Sudáfrica. Desde su inauguración, hace más de 100 años, el ANC ha estado a la vanguardia de la lucha de liberación que culminó con el derrocamiento de la dominación por parte de la minoría blanca y la supresión del crimen de Apartheid. Esta visión del movimiento del ANC se predijo en las palabras de un estudiante de Sudáfrica, llamado Pixley ka Isaka Seme en 1906, durante un día discurso en la Universidad de Columbia, Nueva York (CNA, 2012): *"El día más brillante está aumentando en África (...) Si la regeneración de África pertenece a este período nuevo y poderoso (...) El pueblo africano (...) posee un sentimiento común fundamental, que está en todas partes manifiesta en sí (...)*

bajo este objetivo que el gobierno liderado por el ANC buscó a comienzos de la transición convertir a Sudáfrica en un país democrático y con un Estado desarrollista.

Desde la literatura, la idea de Estado desarrollista tiene una definición compleja, que no es única. Sin embargo, una perspectiva que ha tenido predominancia en las definiciones del concepto de Estado desarrollista y que da luces sobre el objetivo del ANC es la definida

cristalizar en una idea central común (...) la regeneración de África significa que una nueva y única civilización es que pronto se añadió al mundo” (p.2). Las categorías dominantes de líderes del CNA se pueden dividir en los isleños, que incluye aquellos que fueron detenidos en la isla Robben, como el fallecido ex presidente Nelson Mandela; los exiles, incluido los que estudiaron en los países africanos o en el extranjero y se convirtieron en intelectuales, como el ex presidente Thabo Mbeki, que maduró políticamente en las capitales del mundo. Los exiliados, que eran y son el grupo más importante para los líderes potenciales y reales de la fiesta, ya que controlan los recursos financieros, la inteligencia y las redes militares, y era imposible de llevar sin su apoyo; y los inziles, quienes son los que se quedaron en Sudáfrica. Muchos de los cuales pertenecían a organizaciones unidas bajo el amplio paraguas del Movimiento Democrático de masas (MDM) cuando se formó en 1983, y los que estaban Umkhonto we Sizwe, como el actual presidente, Jacob Zuma. Cada uno de estos grupos contenían una mezcla de orígenes y experiencias culturales e históricos, que llevaron al movimiento.

Sin embargo, como el ANC creció, el cambio de los roles de género se hicieron evidentes. Las mujeres africanas emigraron a las ciudades, donde miles encuentran empleo como las mujeres lavadoras, servicio doméstico y como trabajadoras de las fábricas, especialmente en la elaboración de alimentos y textiles. Crecientes comunidades urbanas requieren los servicios de profesores y enfermeras, por ejemplo (CNA, 2012, p.8). Por lo tanto, esto llevó al reconocimiento y el establecimiento de la Liga 1931 bantús de las mujeres (BWL), que fue reconocida como la rama de la ANC. Encabezado por Charlotte Maxeke, BWL ha participado principalmente en la resistencia pasiva y se concentró en la lucha contra las mujeres africanas. Fue sólo hasta 1943 que BWL o mujeres fueron admitidas oficialmente en el miembro del ANC como ANC. Esto condujo a la formación de la Liga de Mujeres del ANC (ANCWL), en el año 1948. Las mujeres de todos los ámbitos de la vida y de todas las razas participaron en una marcha el 9 de agosto de 1956. Una vez más, a través de la ANCWL, el carácter no racial de la ANC y el movimiento se puso en evidencia. La Liga Juvenil del ANC (ANCYL) se formó en 1944. Este grupo de jóvenes líderes africanos basó sus ideas sobre el nacionalismo africano y creía que los africanos se liberarían sólo por sus propios esfuerzos. El ANCYL ha producido destacados líderes del movimiento como Anton Lembede, Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo, Peter Mokaba y muchos otros que siguen contribuyendo a la ANC hasta el día de hoy (CNA, 2012, p.8).

por Johnson (1982 y 1999), Amsden (1989) y Evans (1995 y 2007), quienes ponen énfasis en la noción de una "autonomía incrustada".

Evans y Heller (2012, p.5) sostienen que la noción de Estado desarrollista ha evolucionado de los últimos años. Esto se debe principalmente al hecho de que las teorías de desarrollo han cambiado. Inicialmente, el modelo de un Estado desarrollista se inspiró en la definición de un papel predominante del Estado en las estrategias de industrialización de países exitosos, como el caso de Japón y los llamados tigres asiáticos. El énfasis estuvo puesto sobre el rol de director del Estado en la iniciación y la conformación de estrategias de industrialización mediante la movilización de recursos y enfocándolos en iniciativas industriales seleccionadas. Según Evans (2010), más recientemente se ha producido un cambio. La literatura hace hincapié en la importancia del desarrollo socioeconómico, así como el desarrollo humano en la construcción de un Estado desarrollista democrático; basándose en la experiencia de países como Mauritania, Costa Rica y Chile. Para el autor, teóricamente en esta autonomía enraizada (*embedded autonomy*), las instituciones del Estado deben ser autónomas en la medida en que faciliten la identificación y promoción de los objetivos estratégicos de desarrollo, mientras que se exhibe la noción de que el Estado sería capaz de establecer y mantener colaboración eficaz con grupos clave que agregarían un impulso necesario para el logro de objetivos de desarrollo (Evans, 1995).

Por otro lado, un autor relevante para el estudio de Sudáfrica como es Gumede (2010), define un Estado desarrollista como un Estado que es "*activo en la consecución de su programa, en colaboración con los interlocutores sociales, y tiene la capacidad y está organizado adecuadamente para sus objetivos de progreso predeterminados*" (p.9). Esta amplia definición sugiere que un Estado desarrollista se compone esencialmente de un gobierno que tiene las capacidades necesarias para cumplir un mandato de desarrollo, logrando un equilibrio entre el Estado y el capital, así como trabajar con la sociedad en su conjunto. En principio, este objetivo del ANC se trata

de una iniciativa única y coherente en términos normativos: es única porque ningún otro gobierno se propuso convertirse explícitamente en un Estado desarrollista, y es considerada noble y coherente en tanto tal objetivo puede y sólo puede lograrse a través de niveles razonables de igualdad, de crecimiento redistributivo, inspirándose en las experiencias de países que han logrado crecimiento y ciertos niveles de igualdad social. La noción de un Estado desarrollista por tanto implica una concepción sistémica de Estado según esta perspectiva. Lo que el post-apartheid de Sudáfrica ha previsto, se encapsula de manera efectiva en el marco del estado de desarrollo (Gumede, 2014).

Es posible afirmar que la preocupación estratégica del ANC, en coherencia con sus principios históricos, ha sido elevar la calidad de vida de todos los sudafricanos, en particular, especialmente la de los pobres (ANC, 1994). El gobierno encabezado por el ANC se comprometió desde un inicio con una serie de apuestas estratégicas que pretendieron combinar el crecimiento y el desarrollo, la reconstrucción y la redistribución, la participación popular y el respeto a los derechos humanos. Según Houston y Mutheín (1998, p.42) este compromiso fue capturado en la mayoría de los documentos de la ANC, discursos, sus líderes en el gobierno, etc. Estos van desde la orientación política del ANC para una Sudáfrica democrática que se adoptó en la Conferencia Nacional de 1990; al *“To Ready to Govern”*, un documento de trabajo que fue lanzado en noviembre de 1996; como también el *“The State of Social Transformation”*, el proyecto de estrategia y táctica del ANC antes de la conferencia nacional de 1997; y el *“All power to people”*, de los discursos de los presidentes Nelson Mandela y el presidente Thabo Mbeki. El párrafo siguiente captura la esencia de lo fue y es el discurso post-apartheid de Sudáfrica por parte del ANC.

“(Sudáfrica) está siguiendo un modelo de Estado Desarrollista. El desarrollo consiste en mejorar la calidad de vida; se trata de la equidad y la justicia. Como el documento RDP (Reconstruction and Development Programme) afirma, el desarrollo implica una

economía en crecimiento en el que la redistribución es un elemento crítico; que incluye la modernización de las fuerzas productivas y una redefinición de las relaciones de producción. Incluye la preservación y desarrollo de los recursos humanos en forma de habilidades para la formación, la creación de empleo y la prestación de servicios de educación, salud, infraestructura y un sistema de seguridad social adecuado, etc. También sobre la democracia y la participación popular” (ANC, 1998; traducción propia)

El camino estratégico hacia el desarrollo, la mejora de la calidad de vida y todos los aspectos declarados en estos principios se elaboran en el documento estratégico *Ready to Govern* (R2G). Del mismo modo, la Constitución de Sudáfrica es una de las cartas fundamentales que también consagra el derecho de todos los sudafricanos y sudafricanas a la igualdad y preveía específicamente las medidas que deben adoptarse para corregir los desequilibrios históricos, la injusticia de la época del Apartheid. Particularmente estos aspectos fueron tratados en el Programa *Reconstruction and Development* (RDP) de 1994.

2. Ready to Govern (R2G): La cosmovisión del ANC y la nación arcoiris

El R2G es por excelencia el documento de discusión más importante de Sudáfrica. Fue lanzado en noviembre de 1992, para informar a la opinión pública de la Sudáfrica democrática qué se planteaba en el imaginario del ANC. Fue el intento más vigoroso del mismo en poder detallar el tipo de sociedad democrática que sería Sudáfrica y qué se buscaba construir, entregando elementos de política e influyendo de manera significativa al gobierno durante la década de 1990 (Presidencia de Sudáfrica, 2014). Se estructuró de tal manera que se puso de relieve la estrecha relación entre *"la creación de la democracia política y la transformación social y económica"* (Houston y Muthein 1998, p.45). Huston y Muthein (1998, p.46) sostienen además, que expuso la forma en que el Estado podría transformar el sistema político, el gobierno, la economía, la propiedad

de la tierra, las condiciones de vida de todos los sudafricanos, la educación, la salud, el aparato de seguridad, etc. Gumede (2011) afirma que el documento en particular indicó cuál sería el papel de un "Estado desarrollista democrático" en una Sudáfrica post-apartheid. Se presentó la política pensando en todos los aspectos del desarrollo, incluidos los aspectos relacionados con las propuestas sociales respecto a la economía post-apartheid. Fue el primer paso para la creación de un nuevo sistema económico y político, a través del cual el poder político podría ser utilizado para transformar el Estado, la sociedad y la economía (Gumede, 2011).

3. "The Reconstruction And Development Programme"

Antes de la primera elección democrática de Sudáfrica en abril de 1994, el ANC acordó en principio adoptar el *The Reconstruction and Development Programme* (RDP). En paralelo, uno de los objetivos de la transición fue adoptar una federación sindical de amplias dimensiones, el *Congress of South African Trade Unions* (COSATU). COSATU entró en negociaciones con el ANC y el Partido Comunista de Sudáfrica (SACP) y logró la formalización de una alianza estratégica, conocido como la Alianza Tripartita (Baskin, 1991, p.434). La Alianza Tripartita se auto-define como una alianza representante del movimiento obrero y se considera que fue diseñada para asegurar que la perspectiva de la clase trabajadora se impusiera en las políticas y los programas adoptados por el ANC, una vez que se convirtió en el principal partido de gobierno. La Alianza Tripartita fue forjada para garantizar que, en adelante, el gobierno democrático electo de Sudáfrica tuviese un trabajo de consensos (Southall y Wood, 1999, p.68). A partir de esta sinergia surge la legitimación del Programa de Reconstrucción y Desarrollo (RDP), que se define como un sistema integrado. A la luz de los antecedentes, se puede argumentar entonces que el RDP se originó en un intento de COSATU por incidir en un gobierno del ANC e impulsar un programa de desarrollo marcado por la perspectiva laboral.

La RDP se planteó como una forma de crecimiento a través de la política de redistribución, y se dirigió principalmente a la creación de una economía fuerte, dinámica y equilibrada. Su objetivo fue el desarrollo de la capacidad de recursos humanos de todos los sudafricanos, centrándose en la educación y la formación, los niveles de alfabetización, las artes y la cultura, el deporte y la recreación y el desarrollo de los jóvenes; asegurar la no discriminación racial o de género en la contratación, la promoción de las situaciones de formación; el desarrollo de una equilibrada economía regional; y democratizar el Estado y la sociedad a través de la aplicación y la defensa de la Constitución de Sudáfrica (Gumede, 2015). Según Gumede (2015), estos objetivos o declaraciones de principios estuvieron esencialmente orientados a la satisfacción de las necesidades básicas de los sudafricanos y a la construcción de una nación unificada. Terreblanche (2003) también sostiene que su primera prioridad incluye *"la satisfacción de las necesidades básicas de las personas: el empleo, la tierra, la vivienda, el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, el transporte, un medio ambiente limpio y saludable, la nutrición, la salud, y social bienestar"* (p.89). En este sentido Hanival y Maia (1994) argumentan que la RDP es un programa socio-económico en lugar de un marco de política macroeconómica integrada. En parte, fue orientado por un marco político socialista. Fue el primer documento de política que hace hincapié en el compromiso de las bases, desarrollo de abajo hacia arriba, que sería asumido e impulsado por las comunidades y por organizaciones consideradas representativas.

El RDP permitió a las comunidades beneficiarias participar en la mayoría de los niveles de toma de decisiones y en el proyecto de ejecución. Según Hermon (2004), el RDP contenía una visión y el supuesto de la existencia de una ciudadanía comprometida; comunidades que trabajan junto con un gobierno dispuesto a garantizar el desarrollo humano, para poner fin a la exclusión social asociada al período del Apartheid, y para la construcción de una mejor calidad de vida a través del empleo, salud, vivienda y todo lo que iba a

garantizar un futuro más brillante. En el corto y mediano plazo, el gobierno desarrolló los presupuestos para los planes sociales y programas públicos. A largo plazo, se esperaba el cumplimiento de los objetivos de redistribución y erradicación de la pobreza que se lograría mediante una política fiscal considerada prudente y una reducción de la deuda acumulada antes de 1994 (Hermon, 2004). El RDP y sus proyectos asociados desempeñaron un papel importante en el establecimiento de las bases de un sistema de política, proporcionando un marco de acción para la prestación de servicios. En términos de cumplimiento, en general la literatura afirma que no es posible negar los avances. Gumede (2009), Seekings (2013) y Terreblanche (2009) entre otros, a pesar de ser críticos, consideran que los objetivos del programa se han conseguido parcialmente, especialmente en lo referido al acceso a los servicios básicos. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para asegurar y hacer empírico el discurso en torno a la "mejor vida para todos" que el RDP se comprometió

De acuerdo con el *Statistics South Africa's*, ha existido un importante progreso impulsado por el gobierno de Sudáfrica después del Apartheid. Este progreso se veía reflejado en la inclusión y el aseguramiento respecto al acceso de las personas a servicios básicos como vivienda, agua, electricidad y un medio ambiente limpio y saludable. Se ha producido un aumento del 9,1% en el número de personas que se instalaron en casas formales, y una disminución del 2,8% en el número de personas que viven en asentamientos informales y casas tradicionales. Además, hubo un aumento del 6,7% en el número de personas que no tenían acceso a agua corriente y un aumento del 33,2% en el número de hogares que tenían acceso a Internet.

En términos de seguridad social en relación a los objetivos planteados por el RDP, efectivamente se lograron algunos resultados notables. De acuerdo con la disposición de la nueva Constitución Sudafricana todos los ciudadanos tienen derecho a la seguridad social, y el gobierno estableció un sistema de bienestar, que se extendió por grupos

vulnerables, (personas mayores, discapacitados, niños/as, etc.). Sin embargo, no dejaron de ser políticas focalizadas en grupos específicos (Harsch, 2001, p.9). A modo de ejemplo, los programas de atención de salud gratuita se implementaron para las mujeres embarazadas y los niños en edad pre-escolar. Se proporcionó el derecho a comida para niños entre 3,5 y 5 millones en edad escolar (Heymans, 1995, p.57; Marais, 2001, p.190). Por otra parte, a partir del año 2010/11, unos 15 millones de personas recibieron subsidios sociales, que constituyó más del 3,2% del PIB. Esta cifra se elevó a 15,6 millones en 2011/12 y que resultó ser 16,8 en el año 2014 (Gumede, 2014). La mayoría de los beneficiarios de las subvenciones son los 10,4 millones de beneficiarios de la beca de manutención de niños, beca que se ofrece a los niños considerados necesitados hasta la edad de 15 años (Gumede, 2014).

No obstante, desde una perspectiva crítica el RDP no fue un programa que lograra cumplir todos sus objetivos. Desde el principio, el gobierno carecía de capacidad institucional para ponerse en práctica, debido a diversos motivos. Los que se mencionan en los análisis y evaluaciones del programa son principalmente que el personal designado carecía de habilidades de aplicación adecuadas, y la existencia de importantes retrasos en el acceso a los servicios básicos. En general, se llevó a cabo una carente administración provincial de los programas de nutrición primaria, y desde 1994 ha habido una creciente insatisfacción con la creación de la prestación de servicios y empleo, enmarcados en el RDP.

A aquello se suma que el programa no detalló un plan de acción minucioso para la consecución de sus principales objetivos. Su formulación fue demasiado amplia y acabó como una lista de declaraciones de principios y deseos (Terreblanche, 2003, p.109). Por ejemplo, en marzo de 1996 sólo 5 millones de rand (de los 15 millones asignados) habían sido destinados a la reconstrucción y el desarrollo (Lee, 1998, p.5). Por otra parte, el desafío del programa de asistencia social era su sostenibilidad financiera y las posibles

consecuencias no deseadas. En cuanto a aquello, la cuestión fundamental tenía que ver con el tipo de sociedad sudafricana que buscaba construirse. Uno de los diagnósticos tenía que ver con la capacidad organizacional, pues debería haber más personas en un empleo remunerado que en la asistencia social (Midgley, 2001, p.270).

Al igual que los programas analizados y vistos anteriormente, en el periodo de transición política también se llevaron a cabo una serie de políticas macroeconómicas e intervenciones de política económica. Estas se analizarán a continuación de manera detallada.

4. El framework del programa Growth, Employment and Redistribution (GEAR)

Cuando el nuevo gobierno del ANC de Nelson Mandela se encontró con su primera crisis monetaria importante, a partir de febrero de 1996, momento en el que el valor del Rand se vio desplomado más de un 25% (Visser, 2004), el *Reconstruction and Development Programme* (RDP) fue sustituido por el marco del *Growth, Employment and Redistribution* (GEAR).

El 14 de junio de 1996, el gobierno encabezado por el ANC dio a conocer lo que sería en los años venideros una piedra angular de la política económica, y con optimismo discursivo lo nombró el programa *Growth, Employment and Redistribution* (GEAR). En ese momento, el objetivo del presidente Thabo Mbeki con la estrategia de GEAR fue bastante colosal. Tuvo la esperanza de que podía disipar la visión estereotipada referente a que los líderes africanos eran inherentemente incapaces de gestionar los estados modernos de manera exitosa (Pottinger, 2009). Según Pottinger (2009) el documento de política inicial (RDP) tenía elementos keynesianos y se centraba en la demanda, bajo el supuesto de que generaría crecimiento y empleo mediante la inversión gubernamental. En contraste a aquello, el GEAR no fue el producto de consultas con COSATU y el

SACP (Partido Comunista) y por lo tanto, estaba asumido que generaría –y en efecto generó– un considerable desacuerdo interno dentro de la Alianza Tripartita (Bond, 2000, p.82). Fue desarrollado por un equipo técnico de 15 responsables políticos integrados por funcionarios del *Development Bank of Southern Africa*, del *South African Reserve Bank*, tres departamentos estatales, académicos y dos representantes del Banco Mundial, con el fin de tranquilizar el capital nacional y los mercados de divisas extranjeras (Kotzé, 2000, p.12). El programa estaba destinado a estabilizar la economía y rescatarla ya que se estaba desmoronando: la economía estaba efectivamente en una recesión cuando el ANC llegó al poder en 1994 (Gumede, 2013).

En general, la literatura y el área académica cubierta por los entrevistados en esta investigación argumentan que GEAR fue una política económica neoliberal, que se centró en la filosofía de libre mercado. Demostró en la práctica un compromiso orientado al mercado y en conformidad con el "Consenso de Washington" (Gumede, 2010). Como ya se ha mencionado, el Consenso de Washington fue un tipo de reforma económica que fue demandado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Se basó en gran medida en el creciente papel del sector privado y el disminuido papel del Estado (Pottinger, 2009). Al igual que en el RDP, la estrategia de GEAR estaba dirigida esencialmente a *"un crecimiento económico de rápido seguimiento con el fin de generar empleo formal para el trabajo de asilo; redistribuir el ingreso y la generación de oportunidades para los pobres; la creación de una sociedad en la que salud, educación y otros servicios están disponibles para todos; y permitiendo un entorno en el que las casas son seguras y los lugares de trabajo son productivos"*. Sus objetivos incluyeron la prestación de servicios básicos a los pobres, la creación de 400.000 nuevos puestos de trabajo, lograr un crecimiento económico de hasta un 6%, la reducción de la deuda nacional, la estabilización de la inflación entre el 3% y el 6%, dar efecto a los derechos socioeconómicos de la Constitución, la redistribución de la riqueza a través de la creación de empleo y la reforma del mercado de trabajo (Sudáfrica Presidencia,

2010).

Sin embargo a diferencia del RDP, la clave está en que la estrategia de GEAR fue un tanto más arraigada en un paradigma económico neoliberal. Incluía el objetivo de la disciplina fiscal, que el gobierno del ANC sustentó bajo la administración del presidente Thabo Mbeki. Se actuó conforme a la reducción del déficit presupuestario, la reasignación de los gastos del Estado a la salud, la educación y la infraestructura; se buscó ampliar la base tributaria y la reducción de los tipos impositivos marginales; la abolición de la tasa de cambio dual en 1995 y la eliminación gradual de control de cambios para garantizar los llamados derechos de propiedad; aumentar la desregulación; la liberación del comercio, la privatización, la eliminación de las barreras a la inversión extranjera directa y la liberación financiera (Huston y Mutheir, 1998, p.55). La literatura sudafricana sostiene que GEAR en realidad tuvo un buen desempeño, ya que pudo realizar algunos de sus objetivos y se estabilizó la economía sudafricana. El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita había aumentado a un ritmo muy elevado en particular desde 1996. Durante los años 1994 y 2004, el crecimiento promedio fue alrededor del 3%, lo que representa una mejora considerable respecto a la década anterior a 1994, donde el crecimiento promedió fue de un 1% por año (Gumede, 2010).

Según Visser (2004, p.9) el éxito de GEAR se midió por los indicadores de "desarrollo económico". Este desarrollo implicó un liderazgo por parte del sector privado, mientras que el Estado continuó jugando un papel distinto en la economía con cierta radicalidad, donde el mandato fue que los activos estatales fuesen privatizados, habiendo recortes en el gasto público; estimulación de la competitividad internacional y la consolidación de una economía orientada a la exportación; junto con un proceso de reestructuración de los presupuestos de prestación de servicios sociales y programas de infraestructura municipal con el fin de atender las demandas de los considerados pobres a través de un paquete para cubrir sus

necesidades básicas (Visser, 2004, p.10).

Según Desai (2002), el programa trató de alejarse de los modelos estatistas con carácter asistencialista, subvencionados por el estado y basado en entrega de servicios municipales, y se erigió como un modelo hacia una prestación de servicios más neoliberal, donde el sector privado cumplió un rol más sustantivo. Este modelo se justificó con el argumento de que la economía necesitaba de estabilización macroeconómica. Durante la época del Apartheid, la economía estaba en una situación crítica, con una inflación de dos dígitos, con altas tasas de interés, tasa de crecimiento negativo del PIB y otros problemas tales como una alta deuda pública (Gumede, 2015).

Según Chagunda (2006) GEAR trató de erradicar los problemas antes mencionados y lograr estos objetivos a través del crecimiento económico, lo que habría sido liderado por la inversión del sector privado que a su vez, permitía la creación de empleo. Por lo tanto, el GEAR implicaba que el desarrollo económico en Sudáfrica debía ser liderado por el sector privado; el Estado debía jugar un papel menor en la economía; los activos estatales deberían ser privatizados; debía haber recortes en el gasto público; competitividad internacional y una economía orientada a la exportación; controles de cambio flexibles; y los presupuestos de prestación de servicios sociales y programas de infraestructura municipal debían ser vueltos a ser prioritarios a fin de atender las demandas de los considerados más pobres, a través de un paquete de medidas que permitieran cubrir sus necesidades básicas. Incluso las políticas económicas que se implementaron a través del programa fueron definidas por los principios que se consideran neoliberales. Desde la perspectiva de Habib (2009), se consideró, entre sus planteamientos sustantivos, la importancia del gasto público, los bajos déficits fiscales, la baja inflación, la privatización, la desregulación, la mínima intervención del Estado y la importancia de la entrada de capital extranjero para el desarrollo y crecimiento económico (Habib, 2009, p.149).

El historial del marco de acción de GEAR, fue en primer lugar que las instituciones privadas no podían proporcionar con eficacia las subvenciones de bienestar social y de asistencia social a los sectores más desfavorecidos. El gobierno central buscó establecer unilateralmente las prioridades y los fondos que se asignaban a las políticas sociales y sectoriales (Bond, 2000, p.116). Además de esto, GEAR falló en reducir el desempleo, la pobreza y especialmente fracasó en su propósito de disminuir drásticamente la desigualdad. Fue por tanto severamente criticado por alianzas como COSATU y el SACP del ANC. A finales del año 1998, el gobierno del ANC se vio obligado a reconocer que GEAR había sido un programa limitado en relación a sus objetivos y sus expectativas, y por lo tanto se reintrodujo el RDP como política de Estado primordial. Sin embargo, y a pesar de estos desafíos, a finales del año 2002 la estrategia había logrado cumplir con ciertos indicadores como la disminución del déficit fiscal, la inflación y el consumo del gobierno, reportando cifras de 2.2%, 5.4% y 18%, respectivamente, lo que provocó una mayor estabilidad macroeconómica, mejores informes y el aumento de la rendición de cuentas (Pottinger, 2009). Además, la gestión de las finanzas públicas mejoró drásticamente bajo el marco de GEAR y fue el único éxito visto con respecto al PIB, la tasa de crecimiento negativa de los principios de los noventa se invirtió.

Por último, la política monetaria restrictiva y los niveles de gobierno reestructurados condujeron a una reducción del gasto público. Hacia el final del segundo mandato de Mbeki, se considera que él y sus gestores económicos habían traído cierta estabilidad macroeconómica al país. A pesar de que los niveles de pobreza se mantenían altos, millones de ciudadanos disfrutaban de mejores condiciones de vida que las que tenían antes (Pottinger, 2009).

5. El “Accelerated and Shared Growth Initiative” en Sudáfrica

La primera política fue el RDP, que se expresa por la mayoría de la literatura como una solución rápida (Chagunda, 2006). Su objetivo fue

la "entrega" social de infraestructura para los pobres, siendo la piedra angular de la era Mandela. La segunda política fue GEAR, que se define normalmente como la pieza central del plan macroeconómico estratégico del ANC. Este documento estratégico siguió siendo la "biblia" de la administración Mbeki (Pottinger, 2009). No obstante, GEAR fue sustituido el 2005 por el *Accelerated and Shared Growth Initiative* para Sudáfrica (ASGISA). ASGISA fue aprobado por el gabinete de gobierno en julio de 2005 y se dio a conocer el 6 de febrero de 2006, por su vicepresidente, Phumzile Mlambo-Ngcuka (Chagunda, 2006).

A pesar de una actuación positiva sostenida, el ritmo de crecimiento económico y el cambio estructural no habían sido suficientes para tener un impacto significativo sobre los niveles de desempleo y pobreza. El gobierno, los trabajadores, las empresas y la sociedad civil estaban de acuerdo en que la pobreza y el desempleo eran los mayores desafíos a los que se enfrentaba el país. Sin embargo, las soluciones a estos problemas diferían de acuerdo a cada sector. Esto implicaba que el PDR y el engranaje no cumplen plenamente sus objetivos. Por su parte, ASGISA se puso en marcha con el objetivo de acelerar el crecimiento económico a un promedio de al menos 4,5% entre 2005 y 2009, y a una tasa anual promedio de 6% sostenible entre 2010 y 2014 (Presidencia de Sudáfrica, 2008). Se consideró necesaria tal aceleración en el crecimiento a fin de reducir a la mitad la incidencia de la pobreza y el desempleo para el año 2014 (Hanival y Maia, 2007). Todos los sectores están de acuerdo en que había una necesidad de lograr el crecimiento económico del 6% que mencionaba ASGISA. Otros sectores, utilizando el lenguaje de GEAR, creían que el crecimiento económico permitiría que la riqueza del país llegara a los pobres.

De acuerdo con Hanival y Maia (2007), el ASGISA identificó seis restricciones que mantenían a Sudáfrica distante respecto a la consecución de sus objetivos de desarrollo. Estas restricciones incluían la inestabilidad de la moneda; la escasez de mano de obra

calificada, problema que se amplificaba debido al impacto de los patrones espaciales del Apartheid en el costo de mano de obra; las limitadas oportunidades de inversión; la burocracia del entorno regulador, así como la carga de las pequeñas y medianas empresas; y las deficiencias en el estado de organización, capacidad y liderazgo, entre otros. Por lo tanto, el gobierno sudafricano puso en marcha ocho programas para eliminar estas restricciones. Estos programas incluían: inversión en infraestructura, iniciativas de potenciación de la segunda economía, desarrollo de las habilidades y la educación (*Joint Initiative for Priority Skills Acquisition*), políticas industriales y estrategias sectoriales, la política macroeconómica y las intervenciones de gobierno (Presidencia, 2008).

La *Joint Initiative for Priority Skills Acquisition* (JIPSA) fue promulgada el 27 de marzo de 2006. JIPSA fue un programa de tres años que tuvo por objeto hacer frente al reto de la formación escasa del país. Comparativamente, mientras ASGISA fue un programa de gobierno, JIPSA fue una agenda con carácter nacional y tuvo una mayor participación del sector privado, la comunidad académica y otros actores de la comunidad nacional. El objetivo inmediato de JIPSA era el desarrollo de las habilidades identificadas por ASGISA.

Formó parte estratégica de un *Joint Task Team* de 26 miembros del gobierno sudafricano, de las áreas de economía, ciencia, trabajo y sociedad civil, y un grupo de trabajo técnico que se componía de especialistas y expertos en áreas que iban desde la investigación, hasta todos los niveles de la educación, trabajo, negocios y gobierno. JIPSA identificó las siguientes áreas como focos para la adquisición de habilidades:

- Ciudad, planificación urbana, regional y habilidades de ingeniería para los municipios
- Desarrollo de ingeniería y planificación. Habilidades de alto nivel para las industrias de transporte y telecomunicaciones de la red, así como para los sectores de energía

- Habilidades técnicas para el desarrollo de infraestructura
- Gestión y habilidades de planificación en el ámbito de la educación, la salud y el gobierno local
- Formación del profesorado en matemáticas, tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), ciencia y competencias lingüísticas en la educación pública.
- Habilidades que necesitan los municipios para ejecutar el desarrollo económico local, especialmente economía del desarrollo.

Por lo tanto, JIPSA pretendió ser una medida de apoyo para las personas enmarcadas en la economía informal o segunda economía y estuvo dirigido a la promoción de su participación en la dimensión formal de economía (Presidencia, 2008).

En el marco del programa JIPSA, en 1998 se promulga la ley que da vida a la política llamada *Sector Education and Training Authorities* (SETAs), que se estableció inicialmente en el año 1998. Tal como señala Pottinger (2009), SETAs fue visto como el mecanismo central para mediar la relación entre la formación y las necesidades económicas y sociales. De acuerdo con el documento de revisión de los 20 años del programa SETAs (*Twenty Year Review, 2014*), este proyecto fue establecido con el objetivo de vincular el desarrollo de habilidades más estrechamente vinculadas a las necesidades de los sectores económicos y proporcionar oportunidades para el aprendizaje experimental a través de los sistemas de aprendizaje establecidos gubernamentalmente. SETAs, según Brown (2007), fue central para la interpretación de las necesidades de cualificación en el contexto de la demanda económica, pero no creando demanda económica, sino más bien como sistema de adaptabilidad de las necesidades del mercado para la formación de las personas. Un punto relevante fue que, de acuerdo con Pottinger (2009), estos programas se establecieron bajo el supuesto de que las instituciones del Estado estaban en la mejor posición para juzgar las necesidades de formación de las empresas cuyos beneficios dependían de asegurar el flujo de personas

debidamente preparadas.

Sin embargo, este programa por si solo no fue capaz de gestionar en la práctica todo el proceso que se había puesto como meta. De acuerdo con el documento *The Twenty Year Review* (2014) el número de personas en paro que completaron los sistemas de aprendizaje alcanzado fueron más de 22.000 para el año en 2013, habiendo dificultades en la colocación de los estudiantes para el aprendizaje experimental y el empleo sostenible. Por otra parte, en las evaluaciones sociales del proyecto se ha identificado que los fondos acumulados con el propósito de identificar y satisfacer el sector de las habilidades críticas de los beneficiarios potenciales, o bien no fueron gastados de manera rigurosa o han tenido un confuso despliegue, pues el efecto ha sido cuestionable. Uno de los aspectos más críticos fue el hecho que la mayoría de las empresas adheridas al programa en el sector privado descontaron la tasa SETA en tanto impuesto pero continuaron con sus formaciones internas. La Junta de Desarrollo de la Industria de la Construcción encontró que la mayoría de los alumnos SETA estaban en niveles básicos de formación, y esto no provocó ninguna contribución significativa a los conocimientos especializados requeridos por el sector privado de la industria. Por lo tanto, de acuerdo con Pottinger (2009) existe una cadena de insuficiencias en la formación, desde la enseñanza primaria, secundaria y terciaria, que ha tenido un efecto crítico en la inserción de las personas en los mercados de trabajo, así como en las diferenciaciones salariales entre ellas.

Otro subsector de educación relevante para el desarrollo económico en Sudáfrica fue el programa *Education and Training* (FET), cuya transformación fue articulada por el Departamento Nacional de Educación (1997) debido al deseo de generar una estrategia de coordinación entre sectores claves para el encadenamiento productivo, que proporcionaran experiencias significativas para formar en una fase

postobligatoria de educación²⁰. Sin embargo, el sector FET de Sudáfrica también se ha enfrentado a una serie de desafíos. Hoeckel (2007) sostiene que estos desafíos se ven transversalizados por la percepción de que las instituciones FET son centros de formación inferiores, que producen una calificación de baja categoría. De acuerdo con Akoojee y McGrath (2007) a pesar del intento significativo por el *Department of Higher Education and Training* (DHET) para recapitalizar y realizar un giro en torno al sector universitario FET, la incertidumbre permaneció en Sudáfrica debido a que para generar cambios sustanciales, las instituciones FET debían ser vistas como alternativas adecuadas a la educación superior. Otro reto que intimida el sector FET identificado por Booyens (2009) es el hecho de que un número significativo de profesorado en las instituciones FET han tenido una cuestionable cualificación²¹.

De acuerdo con el *Annual Report of the Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa* (AsgiSA 2007), la estrategia ASGISA alcanzó un cierto nivel de éxito. A pesar de que la tasa de desempleo seguía siendo alta, creció de manera significativa. Además de esto, la tasa de inversión del gobierno aumentó a más del 10% anual y el de las empresas públicas a un nivel aún mayor.

²⁰ Una función clara identificada por el sector FET con la economía, que pronto fue seguido por la introducción de la Ley de FET (nº 98 de 1998).

²¹ Sin embargo y a pesar de estos desafíos, en el año 2014 se logró cierto éxito en la contratación de los graduados sin empleo en el marco del programa de JIPSA. Alrededor de 3.589 graduados fueron contratados en compañías sudafricanas para la formación y prácticas a través del *Umsobomvu Youth Fund* (UYF) y la *Independent Development Trust*; 202 personas adicionales fueron contratadas con las empresas marítimas. Algunos de los participantes fueron mujeres profesionales que estaban utilizando la oportunidad de adquirir conocimientos y mejores prácticas en los campos de las finanzas, la construcción y la hostelería. Los países receptores fueron la India, China, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Japón, Reino Unido (UK), Alemania y los EE.UU. Otros 100 trabajadores fueron enviados a la India y los EE.UU. en marzo de 2007. Países como China, Holanda, Corea del Sur y Nueva Zelanda también han proporcionado ofertas de contratación (Gumede, 2014).

6. 2010: el “New Growth Path” (NGP)

El *New Growth Path* (NGP) se introdujo como sucesor de ASGISA. De acuerdo con la OCDE (2013) se dirigía principalmente hacia el aumento de las tasas de crecimiento económico sostenible de entre el 6% y el 7% por año con el fin de crear cinco millones de puestos de trabajo para el año 2020, reduciendo por tanto la tasa de desempleo al 15%. El NGP también reconocía la necesidad de los gobiernos de “*reducir la desigualdad, derrotar la pobreza y crear trabajo decente*”. El NGP hacía hincapié en que dicho objetivo tenía que realizarse mediante la reestructuración de la economía sudafricana para mejorar su desempeño en términos de absorción de mano de obra, así como su composición y la tasa de crecimiento (OCDE, 2013).

El *New Growth Path* tuvo un éxito reducido, por tanto experimentó un mayor número de desafíos. A través de la NGP, la economía no fue capaz de generar oportunidades de empleo suficientes. Esto se debió principalmente a la falta de un diagnóstico eficaz respecto a los retos reales del tipo de economía en Sudáfrica. Por otra parte, la implementación de las medidas propuestas en el programa estaba abrumado por una fuerte declaración política.

7. El “National Development Plan” (NDP)

El NDP puede ser visto como un plan de “creación de consenso” hacia el camino a seguir posterior a 1994. Al igual que en todos los otros documentos de política nacional que tienen como objetivo reducir la pobreza, la desigualdad y el desempleo, el NDP ofrecía además una perspectiva a más largo plazo. En los contenidos del programa se definía un resultado deseado a nivel nacional, e identificaba los roles que los diferentes sectores de la sociedad tenían que jugar con el fin de alcanzar ese objetivo.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Planificación (2012) el NDP

era un plan para todo Sudáfrica. Su objetivo era garantizar que el gobierno llegara con sus políticas a todos los sectores de la sociedad con el fin de entender cómo estaban contribuyendo a su sociedad y a la economía, así como para identificar cualquier obstáculo que no les permitiera cumplir su función con eficacia. El NDP establecía como declaración de principios normativos y desarrollo técnico que Sudáfrica sólo pudiera alcanzar sus objetivos haciendo uso de las energías de su capital humano, generando una economía inclusiva, desarrollando la construcción de capacidades, la mejora de la capacidad del Estado, y la promoción del liderazgo y las asociaciones en toda la sociedad.

8. La política económica de Sudáfrica post-apartheid

La economía bajo el gobierno del ANC en el periodo post-apartheid de Sudáfrica ha crecido relativamente más rápido de lo que lo había hecho en las últimas décadas, bajo el régimen del Apartheid. A pesar de ello, actualmente está empezando a mostrar los registros de estancamiento de los niveles de crecimiento, y como consecuencia de ello y después de los efectos de la recesión económica mundial, la mala gestión económica y la corrupción. No obstante la economía sudafricana se ha estabilizado, desde los albores de la democracia (South Africa's Twenty Year Review, 2014). El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita ha ido aumentando a un ritmo intenso sobre todo desde 1996, mientras que el PIB per cápita había estado disminuyendo desde 1980 hasta 1994/5. En este aspecto, Sudáfrica ha visto mejoras notables en el crecimiento económico desde 1994 en términos de indicadores macroeconómicos. Desde 1994/5 al 2004, el crecimiento promedio fue alrededor del 3%, lo que puede ser considerado como una mejora considerable respecto a la década anterior a 1994, cuando el crecimiento promedio fue de 1% por año. Desde 2004, el crecimiento ha superado el 4% por año, alcanzando aproximadamente el 5% en 2005 (Gumede, 2011).

Por otra parte, durante los últimos 20 años, Sudáfrica se ha convertido

en una parte integral del mercado regional e internacional. La economía de Sudáfrica ha pasado de ser una economía de bajo rendimiento -debido en parte al boicot y las sanciones internacionales antes de la década de 1990- a una economía con un crecimiento relativamente bueno en relación al Producto Interno Bruto (PIB) (Banco Mundial, 2014). Al comparar la economía de Sudáfrica con la del mundo, la economía se llevó a cabo razonablemente bien para la mayoría de los primeros 20 años de democracia. Esto se debe a la apertura de la economía asociada con la transición a la democracia, la cual vio un aumento sustancial de las exportaciones y las importaciones, así como un rápido aumento de las inversiones de cartera desde el extranjero. Desde la década del 2000, el resultado fue un aumento en el déficit comercial y por cuenta corriente, sobre todo con un fuerte aumento de las importaciones superando el aumento de las exportaciones (South Africa's Twenty Year Review, 2014). La recesión mundial de 2008, sin embargo, dio lugar a un marcado descenso en las exportaciones y las importaciones en términos de volumen; a partir de entonces, las importaciones subieron mucho más rápido que las exportaciones, lo que lleva a un empeoramiento de la balanza por cuenta corriente.

Los inversores extranjeros retiraron sus inversiones, lo que provocó una severa limitación en la cuenta corriente, y también dio lugar a la caída del valor del Rand. Debido a la rápida integración global, así como las interconexiones profundas y complejas entre las instituciones financieras, la crisis se trasladó rápidamente a través de los activos, mercados y países. El precio de la vivienda y los otros precios de los activos se incrementaron de manera exponencial (Ekpo, 2012. P. 5). Sin embargo, el Rand fue capaz de recuperarse y volver a crecer de manera constante.

El decidido crecimiento de la economía podría ser interpretado como positivo, no obstante el ritmo no fue consistente con otras áreas de desarrollo. A pesar de que la economía creó un buen número de puestos de trabajo durante el 2005-2008, el número no fue el

pronosticado. La política económica post-apartheid se enfrentó a altas tasas de desempleo y subempleo, como también altos niveles de pobreza y desigualdad de ingresos. En este sentido, la economía post-apartheid se caracterizó por una doble problemática, de acumulación y de desarrollo desigual.

9. Desempleo y subempleo en Sudáfrica

Como se indicó anteriormente, uno de los desafíos críticos a los que se ha enfrentado el gobierno post-apartheid y la política económica del ANC, ha sido el desempleo, los altos niveles de pobreza y la desigualdad de ingresos. Este reto y el deseo de reducir el desempleo a un máximo del 14% ha sido capturado y articulado en la mayoría los documentos de la ANC, los discursos de la élite del partido, los líderes del gobierno y sus documento de política.

El número de puestos de trabajo no ha sido suficiente en relación a la demanda de los mismos. Desde el análisis de la literatura y a partir del análisis de los programas de empleabilidad expuestos anteriormente se ha podido corroborar que la calidad de los empleos ha sido en su mayoría precaria.

A partir de los datos entregados por StatsSA y el informe del Censo de 2011, la tasa de desempleo de Sudáfrica ha ido en aumento. De acuerdo con aquello, en marzo de 2003, la tasa de desempleo de Sudáfrica alcanzó un máximo histórico del 31,2%²². El Centro para el Desarrollo y la Empresa (2014, p.18) ha sostenido que Sudáfrica tiene ahora la tasa de desempleo registrada más alta del mundo de 24,3%. De acuerdo con la encuesta trimestral de población activa de

²² Desde el año 2004 hasta el año 2008, la tasa de desempleo de Sudáfrica se situó en un valor promedio del 26,3%, alcanzando un nivel relativamente bajo del 23% en septiembre de 2007 (StatsSA, 2012). En el año 2012, se registró una tasa de desempleo del 25,2% en el primer trimestre, siendo dicha tasa del 23,9% en el cuarto trimestre de 2011, lo cual demuestra un aumento del 1,3% en la tasa de desempleo del país de un año para el otro.

Sudáfrica, el número de parados aumentó en 237.000 (4,9%) entre 2013 y 2014, lo que refleja un aumento de alrededor del 1,1%²³.

Podría decirse que la tasa de desempleo juvenil de Sudáfrica es un reto estructural más que circunstancial, dada su persistencia en contra de las intervenciones legislativas y programáticas innumerables implementadas (Gumede, 2010). De acuerdo con el Centro para el Desarrollo y la Empresa (2009) el desempleo juvenil es sólo una parte del problema de desempleo más profundo en Sudáfrica. Según los análisis, la educación de mala calidad y la mano de obra sesgada son las causas principales del desempleo en Sudáfrica.

Por otra parte, la raza sigue siendo una línea de fisura persistente en la tasa de desempleo juvenil de Sudáfrica. Lam, Leibbrandt y Mlatsheni (2008) sostienen que *"si bien los jóvenes generalmente tienen dificultades para hacer la transición de la escuela al trabajo, las tasas de desempleo en dicha población africana son desproporcionadamente altas"*. Además, las diferencias raciales surgen incluso antes de la escuela, los jóvenes africanos son mucho más propensos que los blancos, o cualquier otro grupo racial, a haber trabajado durante los años que están inscritos en la escuela.

Sobre la base de esta observación, se puede argumentar entonces que el problema del desempleo de los jóvenes se ha traducido en la exclusión de los mismos, y ha sido uno de los problemas principales de la economía sudafricana (NYDA, 2011, p.70). Antes de la administración de Jacob Zuma y la introducción del *New Growth*

²³ Uno de los acontecimientos más inquietantes de Sudáfrica es el hecho de que el 70% del total de parados pertenecen a la población joven, entre 15 y 35 años (Nyda, 2011, p.65). La mayoría de ellos son trabajadores no cualificados o con escasa educación, y la mayoría de ellos viven en las zonas rurales de Sudáfrica, donde ha habido una demanda baja debido a los cambios en la estructura interna de la producción de la economía (Gumede, 2010). Adicionalmente, el grupo de edades con la tasa de desempleados más alta es el comprendido entre los 15 y los 24 años, un grupo de edad que también se compone en su mayoría por personas que han dejado de buscar un puesto de trabajo (StatisSA, 2010).

Path, había muchos otros programas que tuvieron objetivos similares. Entre ellos el *Expanded Public Work Programme* (EPWP), *Jobs for Growth*, el programa de Empleo del Fondo Juvenil *Umsobomvu*, la Asociación Sudafricana de Formación de Graduados, el Esquema Nacional de Ayuda Financiera, entre otros (Towards a Fifteen Year Review, 2008, p.77).

10. Comentarios finales

De acuerdo con el *Reconstruction and Development Programme* (RDP) y en coincidencia con datos actuales, la distribución del ingreso de Sudáfrica está racialmente distorsionada y se ubica como una de las más desiguales del mundo.

Hay un consenso general entre los académicos en relación a la idea de que la pobreza y la desigualdad, en particular la desigualdad de ingresos, siguen siendo extremadamente altas en la era del post-apartheid. Estos dos temas de desarrollo están vinculados principalmente al legado del colonialismo del Apartheid, así como la estructura de la economía. Por un lado, Gumede (2014) sostiene que el colonialismo del Apartheid ha relegado sistemáticamente a una proporción de la población a un menor acceso al desarrollo de capacidades, y lo ha mantenido enmarcado en un sector de obra no calificada. Por lo tanto, la desigualdad de ingresos está fortificada por dimensiones raciales y en la actualidad se ha perpetuado beneficiando a aquellos con ciertas habilidades o conexiones políticas, manteniendo al resto de la sociedad y especialmente a la población negra, en los niveles más bajos de bienestar económico o financiero (Gumede, 2014).

De acuerdo con Van der Berg (2010), Sudáfrica se compone de altos niveles de desigualdad en los patrones de distribución del ingreso. Es común atribuir los altos niveles de desigualdad y pobreza de Sudáfrica a la discriminación racial y en particular, al Apartheid. Esto se debe principalmente a la discriminación racial bajo el primer

gobierno colonial británico y luego el Apartheid que distribuye el botín de crecimiento económico a lo largo de líneas raciales, el cual sentó las bases para un mayor desarrollo de los patrones y los privilegios en una sociedad estratificada por raza (Van der Berg, 2010). Al menos desde un punto de vista teórico, la desigualdad racial en Sudáfrica es una función de la historia política que ha trascendido lo largo de tres siglos y que se caracteriza por las instituciones que tratan a los *Black Africans* como inferiores.

De acuerdo con Patrick Bond (2000) y Terreblanche (2003), la transición del Apartheid al post-apartheid fue una transición de élites. Esto implica que las élites políticas y económicas estuvieron de acuerdo en la transformación y llegaron a un convenio que fue realizado parcialmente a expensas de las personas. De acuerdo con dichos autores, Southall (2010) sostiene que la transición del Apartheid a una sociedad democrática se caracterizó por un conjunto de reformas débiles, debido a que el acuerdo alcanzado era esencialmente entre la élite política y el sector privado. Por lo tanto, la desigualdad racial y la desigualdad de ingresos en Sudáfrica es ante todo, una cuestión política y una cuestión económica.

Desde un punto de vista económico, sin embargo, la desigualdad de ingresos es consecuencia de la configuración del mercado de trabajo. La pobreza y la desigualdad de Sudáfrica están fuertemente arraigados en el mercado de trabajo (Leibbrandt, Finn y Woolard, 2012). Sudáfrica es un país con una distribución muy desigual de los ingresos y en consecuencia, con niveles de pobreza elevados como país en desarrollo (Van der Berg, 2002). Borat et al. (2012) argumenta que la desigualdad de ingresos en Sudáfrica y la política económica posterior al Apartheid tiene que ver con la estructura de la economía. La economía sudafricana se caracteriza por altas tasas de desempleo, siendo la tasa de desempleo más baja del 25% en el año 2012 (Narayan y Mahajan, 2013). De acuerdo con Borat y Hodge (1999), los patrones de demanda del mercado de trabajo de Sudáfrica reflejan una creciente demanda de mano de obra más calificada y la

disminución de la demanda de trabajadores/as poco cualificados, lo que afecta aún más a la estructura de la economía del país, y por consiguiente el aumento de la desigualdad en el mercado laboral. Por lo tanto, el mercado de trabajo está influenciado por la estructura de la economía que según Frye et al. (2011), está caracterizada por una desigualdad estructural propia de las economías en desarrollo que carecen de políticas re-distributivas, como el caso de Sudáfrica.

Capítulo V

Resultados e interpretación comparativa: Mecanismos de emergencia y consolidación del neoliberalismo en Chile y Sudáfrica.

Tal como se ha visto en los capítulos anteriores, Chile y Sudáfrica se han caracterizado en sus periodos post-autoritarios por la presencia de fuertes coaliciones de izquierda y de centro, el ANC en Sudáfrica y la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile, cuya élites pertenecen principalmente a los grupos de actores que fueron oprimidos durante los períodos autoritarios, vale decir el apartheid y la dictadura cívico-militar, respectivamente. Ambas coaliciones han gobernado en el nuevo contexto de la democracia post-transicional y se han caracterizado por haber generado expectativas incumplidas, sobre todo en lo referido al desarrollo de la política económica y por cierto en aspectos claves, como por ejemplo la promesa de la igualdad.

La comparación de Chile y Sudáfrica se basa principalmente en sus similitudes. Este tipo de comparación parte de la hipótesis de que existen similitudes sistemáticas en las condiciones subyacentes, que coexisten con notables diferencias. Estos mecanismos comunes han recorrido un largo camino para explicar la continuidad de los regímenes neoliberales de desarrollo de ambas naciones, y esta continuidad está relacionada con lo que hemos llamado inconsistencia entre el discurso y la práctica institucional. El objetivo de este ejercicio comparativo es ofrecer un sistema de mecanismos subyacentes de las trayectorias observadas de emergencia, cambio y continuidad.

En ambos casos, se observan el establecimiento de un régimen neoliberal de desarrollo como el resultado de una coyuntura crítica, y la solidificación de las instituciones más relevantes en materia económica, con el objetivo de limitar la interpretación y la reformas más profundas en esta materia; la institucionalización de un sistema

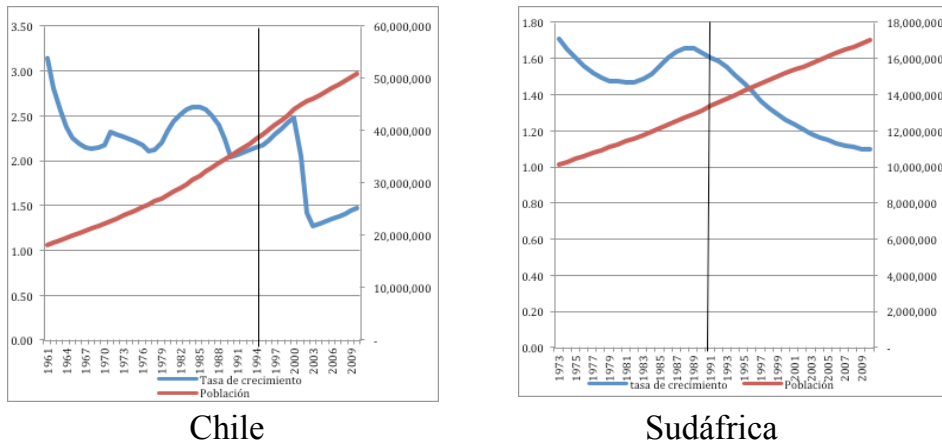
político representativo con grupos de centro izquierda estratégica; la existencia de grupos de la izquierda (los sindicatos, por ejemplo) que respaldan los gobiernos; la anulación de la crítica y la exclusión de las demandas de los movimientos sociales, la presencia de la influencia radical de los centro de pensamiento y el capital moral de los grupos antes oprimidos, entre otras características.

1. Chile y Sudáfrica en términos macroeconómicos

En los capítulos anteriores se ha descrito y analizado los principales aspectos de la política económica tanto chilena como sudafricana en las últimas décadas. No obstante, parece interesante analizar los principales aspectos sociales y macroeconómicos de ambos países de manera comparada, ya que este análisis puede entregarnos información relevante respecto a las similitudes y diferencias entre ambos. A continuación por tanto, se presentan y describen algunos de estos indicadores para ambos países, con el fin de identificar claramente en qué aspectos existen semejanzas y en cuales hay diferencias significativas. Primero se revisarán indicadores ligados a aspectos macroeconómicos, y posteriormente el análisis estará centrado en indicadores sociales, de calidad de vida y pobreza.

Primero, respecto a los índices de población y crecimiento económico, Chile tiene menores niveles de población, al 2010 tenía 17 millones aproximadamente, mientras Sudáfrica cuenta con aproximadamente 51 millones de personas. Sin embargo ambos países han ido disminuyendo sus tasas de crecimiento de población. Si observamos estos mismos indicadores en los momentos autoritarios, destaca que mientras en periodo autoritario de Chile (PAC) la tasa de crecimiento de la población promedio era de 1.56 y en el periodo postautoritario fue, en promedio de 1.31, en el caso del periodo autoritario de Sudáfrica (PAS) la tasa fue de 2.33 y durante el PPAS es de 1.79. De esto entonces se puede deducir que las tasas son mayores en el país africano, en comparación a Chile.

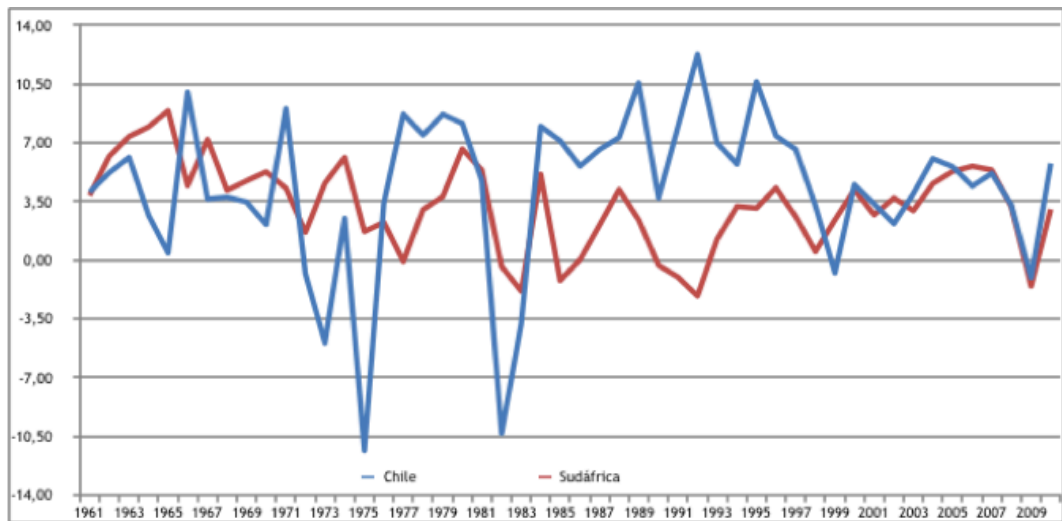
Figura 3: Población y tasas de crecimiento



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Un índice relacionado al anterior es el que da cuenta de la tasa de crecimiento anual del PIB. En este punto, se hace posible argumentar que el PIB de Chile ha sido mayormente afectado por crisis económicas, sobre todo durante en el periodo autoritario llegando a tener caídas de hasta un 11% en 1975. En el caso de Sudáfrica, durante el PAS el promedio de crecimiento fue de 3.25% y durante el PPAS fue de 3.24%, básicamente sin mejoras en el ritmo económico. En suma, si bien hay un crecimiento en ambos países, en el caso del país africano la terminación del periodo del apartheid no ha representado una mejora respecto al ritmo de crecimiento económico que era una de las promesas de la aplicación de las políticas económicas neoliberales.

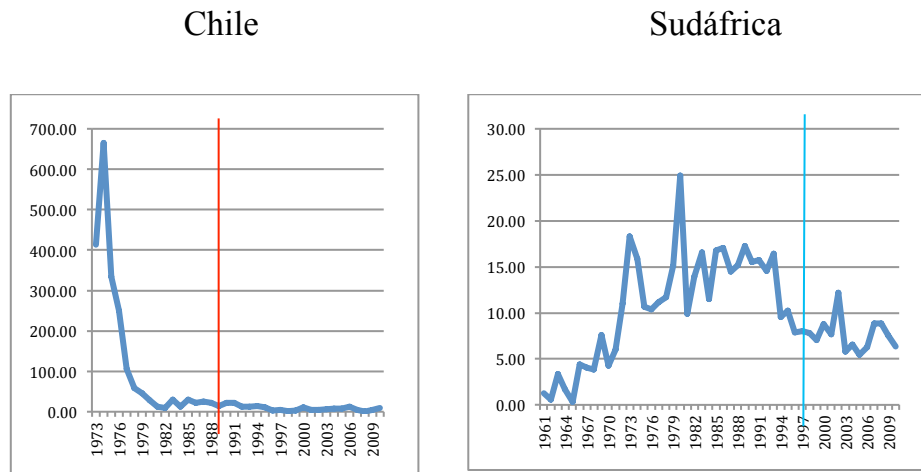
Figura 5: Tasa de crecimiento anual del PIB



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

En relación a la inflación, como se vio en los capítulos anteriores, el control de ésta ha sido una de las metas más importantes de las políticas económicas neoliberales. Como se puede apreciar en la figura 5, en ambos períodos autoritarios hubo un descontrol de la inflación. El caso más sobresaliente es el de Chile, ya que luego del golpe de estado la inflación se disparó a más del 600%. Durante el periodo e transición la inflación se ha mantenido estable dado que el Banco Central ha tenido un rol protagónico. En el caso de Sudáfrica ésta también sufrió alzas hasta un máximo de 24% en 1988.

Figura 5: Inflación

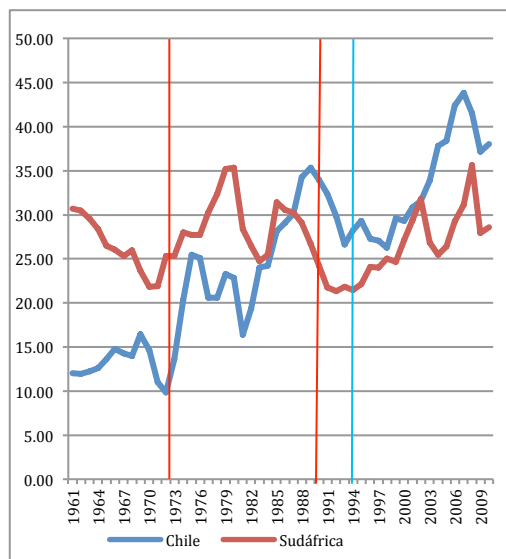


Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

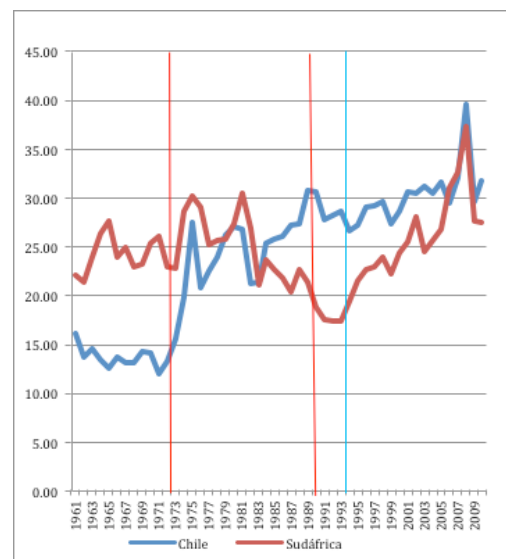
Respecto a las exportaciones e importaciones, se vio en los capítulos anteriores que una de las características del neoliberalismo han sido las políticas de la libre entrada y salida de mercancías. Esta liberalización se ha dado a través de diferentes formas como la firma de tratados de libre comercio (TLC) y la eliminación de barreras a la importación y exportación de mercancías. Una forma de observar la continuidad en este tipo de políticas se puede ver expresada en el incremento de las exportaciones e importaciones de ambos países luego de los periodos autoritarios. Por ejemplo, en Chile se pasa de un promedio de las exportaciones PAC de 24% a un 33% en PPAC. En Sudáfrica el promedio de exportaciones en ambos periodos se mantiene en 27%; sin embargo, en las importaciones Sudáfrica pasa de un 23% en el PAS a un 26.03%, En el caso de Chile se pasa de un 2 % a un 30%.

Figura 6: Exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB

Exportaciones como % PIB



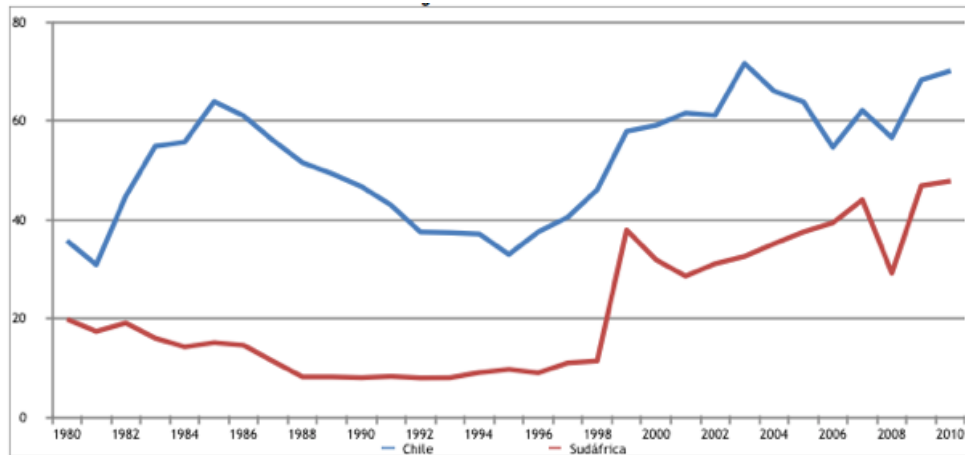
Importaciones como % PIB



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Otra de las políticas neoliberales fue el hecho de no poner trabas a la movilidad del capital, y una manera de verlo es a través de la entrada de la Inversión Extranjera Directa (IED) a cada país. Si bien en los gráficos no se tiene todo el período autoritario de ambos países, si podemos darnos una idea de la tendencia que ha seguido la IED. En Chile en 1990 era de 46% pero el promedio al PPAC es de 52%, y Sudáfrica registró un 9% al término del apartheid pero el promedio durante PPAS fue de 28%.

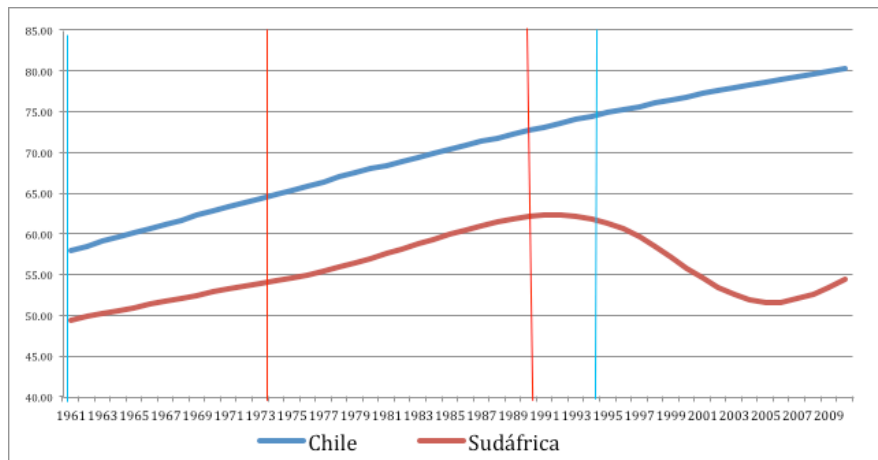
Figura 7: Inversión Extranjera Directa como porcentaje del PIB



Fuente: Elaboración propia con datos del UNCTAD

En relación a indicadores sociales, un aspecto importante para caracterizar la situación de ambos países es el indicador de esperanza de vida. Esto, debido a que al 2010 en Chile es de 80 años mientras que para Sudáfrica es de 54 años. Como se observa en la gráfica, ese indicador siempre ha sido mayor para el caso de Chile, además de tener un crecimiento sostenido. Por otro lado, para Sudáfrica en el PPAS tiene una marcada caída; de hecho, el promedio de la esperanza de vida en PPAS es menor que en el PAS.

Figura 8: Esperanza de vida



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

En relación a las tasas de alfabetización, si bien no hay mucha diferencia en sus tasas al año 2011, donde en Chile es del 95% y en Sudáfrica de 93%, durante los periodos autoritarios si existían diferencias significativas. En 1982 la tasa para Chile ya era de 91% mientras que para Sudáfrica era 75%²⁴.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es otro indicador importante comparar, debido a que éste trata de reflejar el grado de desarrollo de las poblaciones de cada país y está relacionado con indicadores económicos y sociales (como la pobreza). Se basa en tres aspectos: vida larga y saludable, educación y vida digna, siendo cero el nivel de desarrollo más bajo y uno el más alto. Para el caso de Chile, el año 2014 su índice era de 0.832 y ocupaba el lugar 42 del mundo, clasificado dentro de la categoría de IDH “muy alto”. Por otro lado, para Sudáfrica el mismo año fue de 0.666 y ocupaba el lugar 116 con un IDH “medio”, junto con países como El Salvador o Vietnam. Estas diferencias también son notables en el tiempo: mientras que en Chile en 1990 (transición a la democracia) era de 0.699 en Sudáfrica era de 0.621. Se produce entonces un aumento notable del IDH para el caso

²⁴ Según datos del Banco Mundial

de Chile en el período 90-2014, mientras que en el caso de Sudáfrica, apenas hubo avance.

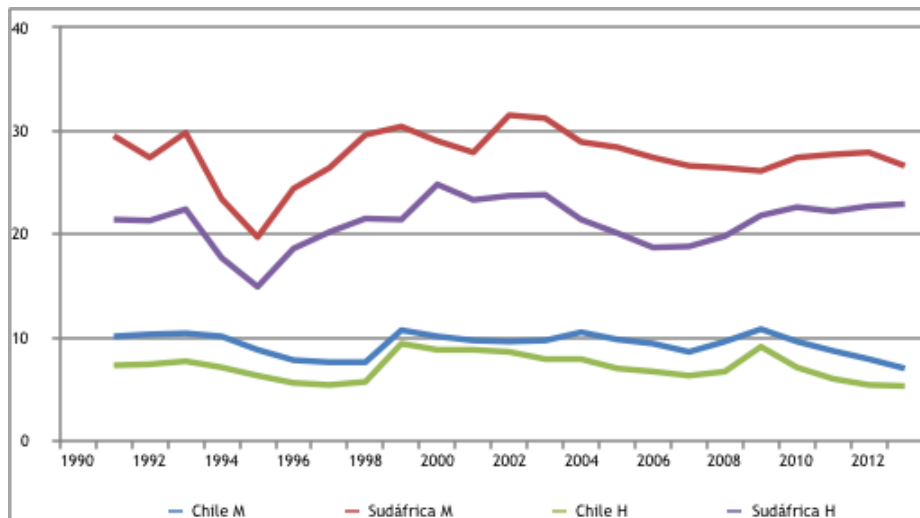
Respecto a los índices de pobreza, la diferencia entre ambos países es marcada, debido a que para el caso de Chile en 2011 era de un 22% de la población, mientras que para Sudáfrica era de 53%, más del doble. Esta diferencia también se vislumbra en otros indicadores, también asociados a la pobreza, por ejemplo en el número de muertes por cada 100 mil nacimientos²⁵. En Chile al año 2013 era de 22 personas mientras en Sudáfrica era 140. Lo mismo sucede con el porcentaje de niños menores de 5 años con malnutrición (2008-2013) que en Chile era de 1.8% mientras que en Sudáfrica de 23.9%, y también con el porcentaje del empleo vulnerable²⁶. Considerando el período 2008-2013 para Chile éste era de un 24.4% mientras que para Sudáfrica era de 10.0%, es decir, en Chile más del doble que de Sudáfrica.

Si observamos datos en relación a niveles de desigualdad, como el índice GINI, los resultados indican que en el año 1987 este índice para Chile era de 56.21 y de 50.84 para el año 2011. Respecto a Sudáfrica, este índice en 1993 era de 59.3 y en 2011 sube a 63.3. Un dato importante respecto a esto corresponde también al desempleo por género. Los datos indican que en ambos países las tasas de desempleo son más altas para el caso de las mujeres. Sin embargo en Sudáfrica es mayor la brecha respecto a los hombres. Así, en Sudáfrica la tasa promedio de desempleo (1994-2014) es de 27% mientras que para los hombres es de 21%. En Chile la tasa promedio (1991-2014) es de un 9% contra un 7% en hombres.

²⁵ Maternal mortality ratio: Number of deaths due to pregnancy-related causes per 100,000 live births.

²⁶ Vulnerable employment: Percentage of employed people engaged as unpaid family workers and own-account workers.

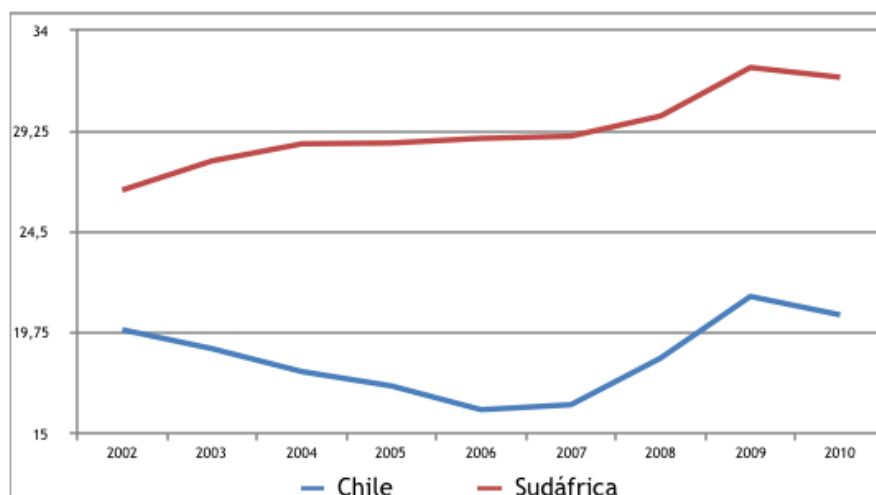
Figura 9: Desempleo por género



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

El gasto público es otro índice importante de observar. Los resultados indican que el gasto público es mayor en Sudáfrica, el cual promedia en el periodo 2002 a 2010 un 29%, mientras que en Chile promedia en el mismo periodo un 18.5%.

Figura 10: Gasto Público



Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial

Por último, en relación a los grupos étnicos en el caso de Chile un 88,9% se identifica como blanco o no indígena, un 9,1% como mapuche, un 0,7% como Aymara, y un 1% como parte de otros grupos indígenas. Para el caso de Sudáfrica, un 80,2% se identifica como africano negro, un 8,4% como blanco, un 8,8% de color y un 2,5% como Indio o Asiático.

En suma, en esta sección hemos visto una serie de indicadores que nos han permitido dar cuenta de similitudes y diferencias entre los países de Chile y Sudáfrica. Entre los principales argumentos que se han esbozado se encuentra el hecho que la composición de las poblaciones de ambos países es totalmente distinta, en términos generales y en términos de composición étnica. Ambos países han tenido mejoras en términos económicos, aunque en el caso de Sudáfrica el termino del periodo del apartheid no representó una mejora en este punto. También ambos países coinciden en altos niveles de inflación en los periodos autoritarios, y presentan incrementos tanto de exportaciones como de importaciones luego de los periodos autoritarios. Respecto a los indicadores sociales, es posible observar mayores diferencias entre ambos países. Si bien tanto Chile como Sudáfrica presentan tasas más altas de desempleo para el caso de las mujeres, existen diferencias significativas respecto a indicadores relacionados a esperanza de vida, alfabetización, índice de desarrollo humano, pobreza, entre otros.

2. Interpretación mediante Mecanismos Sociales.

La interpretación mediante el recurso a los mecanismos sociales ofrece una forma específica para resolver el problema de distinguir entre el la transición de la política económica del periodo y los fenómenos que configuran la misma. Existe un gran cúmulo de literatura metodológica sobre mecanismos sociales (véase por ejemplo Elster, 2007; Givan *et al.* , 2010; Gross, 2009; Tilly, 2001, Delanty 2012). Los mecanismos sociales ofrecen los medios de explicación e interpretación, pero no de predicción, se emplean con frecuencia en

las ciencias sociales, e incluyen en su análisis dimensiones sociales propias de las trayectorias de cambio como la competencia, la adaptación, el conflicto y el conformismo. Los mecanismos sociales son las fuerzas que no sólo generan y establecen discursos, estructuras, instituciones y otras entidades a nivel macro, sino también tienen la capacidad de transformar dichos fenómenos emergentes.

Los mecanismos funcionan sincrónicamente, por ejemplo, para conectar la acción social con los discursos, con estructuras, reglas, instituciones y otras entidades. Elster afirma que un mecanismo ocurre con frecuencia y es fácilmente reconocible, tiene un patrón causal y se desarrolla en condiciones generalmente desconocidas y tiene consecuencias indeterminadas (Elster, 2007). Gross (2009, p.368) y Delanty (2012) argumentan a favor de una concepción interpretativa de los mecanismos sociales, compuestos de cadenas de hechos o agrupaciones de actores que enfrentan situaciones problemáticas y la movilización de respuestas habituales. Por ejemplo, Delanty afirma que el análisis marxista ha presupuesto tradicionalmente una noción de conflicto de clases como un mecanismo de cambio social, pero esto podría ser ampliado para incluir una variedad de otros tipos de mecanismos generativos, como las contradicciones sociales, siendo el caso de la teoría crítica (Habermas, 1987; Honneth, 2004; Strydom, 2011); o la teoría de sistemas (Luhmann), que asume la autopoiesis como modelo básico de autogeneración y cambio social. Del mismo modo Tilly (2001) plantea la existencia de mecanismos relacionales que plausiblemente alteran las conexiones entre los grupos sociales, mecanismos cognitivos que operan a través de cambios en las percepciones, y los llamados mecanismos ambientales que ejercen influencias externas en los procesos sociales. El énfasis en los procesos de aprendizaje se refleja también en la definición pragmática de Gross de los mecanismos sociales como las estrategias de resolución de problemas (Gross, 2009). Estos son los siguientes: mecanismos de emergencia, mecanismos de transformación y mecanismos de institucionalización. A su vez estos mecanismos tienen dimensiones normativas o bien criterios normativos de

evaluación. Para el análisis presente ha sido útil esta distinción, a saber:

Mecanismos de Emergencia. Estos son los mecanismos que desencadenan el cambio en la política económica o convierten percepciones y modos de hacer en marcos más generales en las que las nuevas definiciones de los problemas se transforman en convincentes. Tales mecanismos pueden ser expresados en mayor empatía con los demás en la reivindicación de decisiones.

Los Mecanismos de Transformación. Estos se refieren a la selección de ciertas ideas o modelos sobre otros modelos ya establecidos, y a la construcción de nuevos marcos de política económica que abren el camino para la transformación en esta materia. Es aquí donde las dimensiones de interpretación y evaluación son más pertinentes; donde la experiencia está sujeta a nuevos esquemas de interpretación y evaluación crítica.

Los Mecanismos de Institucionalización. Estos se refieren a las formas en que los nuevos modelos adquieren consistencia y se cristalizan en formas institucionales. Los mecanismos de institucionalización es una forma compleja, puede implicar mayor generalización pero también puede ser impuesta fácticamente. Una manera posible de abordar esto en términos de un modelo de mecanismos es verlo como una forma de difusión o impacto directo (Givan et al., 2010; Delanty 2012). Sin embargo, la difusión carece de especificidad, especialmente cuando se trata de explicar las formas en que las ideas y modelos extranjeros son tomados en contextos muy diferentes por los actores sociales para hacer avanzar sus afirmaciones. Mecanismos de transformación son las forma de hacer contextuales, la traducción cultural y la re-contextualización.

Un enfoque de mecanismos sociales, cuando se ubica como parte de un marco más amplio, no es una visión mecanicista de las

relaciones sociales, sino que requiere una perspectiva sincrónica desarrollada. El funcionamiento de los mecanismos sociales siempre está en última instancia en manos de los actores sociales, y refleja sus intereses y aspiraciones (Delanty, 2012). Además, implica un campo complejo, altamente contingente y multidimensional de interacciones con el contexto social y el impacto de los modelos culturales. Las trayectorias democráticas en Chile y Sudáfrica en cuanto a la comparación por similitudes da cuenta de mecanismos comunes asociados con la continuidad y consolidación de su sistema de desarrollo socioeconómico neoliberal. En esta investigación han emergido seis mecanismos, a saber:

1. Los límites de la impugnación y el bloqueo sistemático a alternativas más radicales de izquierda.
2. La imagen estratégica internacional
3. Capital moral: El lado oscuro de la legitimidad del oprimido
4. La influencia de los *think tank*: El ensamblaje entre conocimiento y neoliberalismo
5. Los enclaves autoritarios y la facticidad del *Path dependence*
6. Las Elites en transición y las redes de endogamia

i. Los límites de la impugnación y el bloqueo sistemático a alternativas más radicales de izquierda.

“Es una alianza muy inestable, pero es una alianza, no obstante. Es una forma de alianza. Lo que eso significa es que usted puede ser un miembro del ANC, un miembro del Partido Comunista y un miembro de COSATU, y seguir siendo una alianza” (Entrevistado, Sudáfrica).

El mecanismo referido a la seducción o cooptación de la oposición desde la izquierda da cuenta de la notable limitación institucional de las posibilidades de competencia democrática, surgida a principios del período post-autoritario, como consecuencia combinada de la estructura de apoyo electoral después del fin del período autoritario, durante la transición y la particular institucionalización de las reglas de la representación democrática. El efecto de aquello consiguió, en ambos países, una débil y casi nula presencia de críticas de índole más radical hacia la política económica neoliberal, a pesar de que muchas de aquellas críticas habían tenido una fuerte voz y gran importancia en tiempos de resistencia.

Tanto en Chile como en Sudáfrica se configuró una lógica de exclusión, en el caso chileno, y seducción, en el caso sudafricano de los movimientos sociales más radicales y los partidos de izquierda progresistas. Los movimientos sociales representan una acción colectiva de resistencia, propuesta y alternativa ante el orden social instituido y hegemónico. Y pueden dar forma a un proyecto político si son capaces de producir una ruptura del consentimiento al funcionamiento del régimen político y a las élites, en la medida en que cristalicen un discurso contra-hegemónico. Es en el espacio de “lo político” donde se definen los antagonismos y las búsquedas de las hegemonías se cristalizan en los movimientos y sus desafíos al statu quo (Mouffe, 2012).

El resultado fue bastante similar en ambos casos, a pesar de que el

mecanismo se veía, en detalle, diferente. El sistema electoral chileno, entre otros, se constituye como un gran ejemplo de cómo, a través de mecanismos institucionalizados y a partir de las reglas electorales existentes, fue posible evitar en el escenario político la presencia de posturas o alternativas más radicales al modelo neoliberal que se impulsó desde el régimen y específicamente, desde 1973. Esto, porque el sistema electoral chileno predominante en el período post-autoritario (conocido como el sistema binominal), fue un sistema implementado por el gobierno militar después de conocer su derrota en el plebiscito de 1988. Admitiendo que las fuerzas políticas que lo apoyaban en ese entonces serían minoría en el nuevo período democrático (principalmente los partidos de Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente), este modelo buscaba darle mayor fuerza a éstos partidos otorgándoles una mayor posibilidad de salir electos, ya que con el sistema binominal con un 33% de votos estas coaliciones de oposición ya tenían asegurado uno de los dos escaños en disputa por cada distrito. Este hecho está en estrecha relación con el bloqueo sistemático hacia alternativas más radicales debido a que con ese sistema se presentaban dificultades (sobre todo para la Concertación y los partidos pequeños) para llevar a cabo reformas debido a que esto requería altos porcentajes de aprobación. A la par, también el sistema binominal dificultaba el surgimiento de nuevas fuerzas políticas al favorecer el fortalecimiento de dos grandes coaliciones principales.

Boeninger señalaba en el año 2009 que *“las perspectivas de reforma electoral, en el corto plazo, son muy negativas porque hay demasiados intereses que favorecen la mantención del status quo”*. El mismo autor señala también que los cambios profundos a la Constitución política (la cual fue establecida en 1980 bajo el régimen militar de Augusto Pinochet) no se han podido realizar hasta el día de hoy porque requieren de altos quórum y apoyo en las cámaras (sobre todo para la introducción de enmiendas constitucionales e importantes normas legales), lo que el mismo sistema binominal (y la oposición) no permite (Boeninger, 2009). En los últimos años se han establecido

diversas campañas surgidas desde la sociedad civil y algunas agrupaciones políticas con el fin de poner en la agenda pública la idea de cambiar dicha Constitución (lo cual incluso fue establecido en el programa de gobierno de la actual Presidenta, Michelle Bachelet). Lo cierto es que, a pesar de que se han establecido ciertas modificaciones a través de los años, dicha Constitución se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, ejemplificando la continuidad del modelo.

Como se ha visto en Chile, el impedimento institucional al cambio fue reforzado por las estructuras electorales que, por dos décadas, solo dieron pequeñas mayorías a las coaliciones de los partidos democráticos, por la presencia de una política y una Constitución delegada del régimen que siempre se mantuvo cerrada a ser votada o modificada en los distintos gobiernos. Por lo tanto, las minorías de izquierda quedaron fuera de las coaliciones de gobierno; el Partido Comunista y otros pequeños partidos tuvieron extremas dificultades para hacer que sus voces fueran escuchadas. Finalmente, en el año 2015, después de 25 años, fue aprobada en el Congreso una reforma del sistema electoral chileno, la cual pone fin al sistema binominal y lo modifica por uno proporcional que mejora la representatividad de las distintas fuerzas políticas. En la práctica, aún no es posible identificar de manera clara los efectos que esta reforma tendrá en las próximas elecciones.

Este bloqueo de la impugnación tiene directa relación con los enclaves autoritarios heredados de la dictadura y lleva, desde los 90', a lo que Garretón llama una transición incompleta, y que serán analizados más adelante, donde hay tareas que no han sido resueltas y que tienen efectos sobre el régimen post-autoritario que afectan la calidad de la democracia (Garretón, 1994). De esta forma, desde los 90' el modelo neoliberal deja de ser percibido como un modelo instaurado de manera ilegítima por la dictadura y se convierte más bien en una estrategia legítima para alcanzar el desarrollo en todas las áreas, sobre todo aquello que tiene que ver con lo económico. A partir de ello, también se acepta una intervención del Estado regulada, apuntando

principalmente a “*disminuir el carácter polarizante del neoliberalismo, pero jamás afectarlo de forma estructural*” (González, 2004; Fazio, 1996; Calderón Seguel, 2008). El neoliberalismo es una forma muy particular de intervención, de regulación de la vida económica. La regulación no matiza el neoliberalismo, sino que *ese tipo de regulación* es lo que le da vida, lo que le permite existir.

El resultado de aquello se expresa, tal como sostiene Calderón Seguel (2008), en el desarrollo de una sociedad neoliberal, donde se limitan los grupos impugnadores, y todo aquel que tenga una visión alternativa o consistente con el discurso inicial de la democratización, es incapaz de criticar de manera profunda el modelo, constituyéndolo como un enfoque hegemónico tanto para las elites políticas-económicas, como también para la opinión pública en general. De esta forma y tal como se ha visto, las expectativas de reformas o incluso la aparición en el escenario político de alternativas más radicales se ven mermadas por enclaves y arreglos institucionales que impiden la aparición de estas opciones.

En el caso de Sudáfrica, la exclusión política de las posiciones más radicales no eran tan evidentes, dado que el Partido Comunista siempre siguió siendo parte de la alianza de Gobierno. Teniendo en cuenta, sin embargo, que la alianza ANC ganó rápidamente una posición hegemónica en la política sudafricana, acercándose a una mayoría de dos tercios de los escaños en el parlamento, con su agenda orientada a la transformación y que permanece así hasta hoy en día, había poco espacio para una oposición de izquierda a la ANC. Sucesivamente, el Partido Comunista fue seducido. Tal como plantea un dirigente de COSATU, el PC tuvo serias críticas con el programa GEAR “*Tenemos serias reservas sobre las políticas fiscales conservadoras que el documento pretende implementar.*” Sin embargo, tal como plantea Patrick Bond, en junio de 1998 Mandela y Mbeki reprendían a COSATU y especialmente al SACP por deslealtad. En consecuencia el SACP fue seducido la posibilidad de

coejercer poder en la nueva Sudáfrica, a pesar de que en el curso de esta práctica, el programa de la izquierda política fue abandonado cada vez más, a pesar de que inicialmente fue compartido con la alianza ANC; por ejemplo, en la forma de la Carta de libertad.

Cuando el ANC llega al poder se encuentra con una deuda grande que había sido adquirida por el Partido Nacional especialmente por el gasto militar y en infraestructura. Pero sobre todo se encuentra con que el presupuesto del PN había desaparecido, tenido el gobierno del Partido Nacional estaba desaparecido, no quedaba nada, y se encontraron con un problema de liquidez para el mantenimiento del Estado.

Una de los acontecimientos que emerge de la entrevista a un miembro de la elite política de Sudáfrica, es que en el proceso de negociación del nuevo marco institucional Mandela tuvo que reunirse en privado con Oppenheimer, de la elite económica, director en DeBeers y la AngloAmerican Corporation, empresas mineras. El motivo era la necesidad de mantener cierto cash flow y otros aspectos vinculados a la limitación de construir una alternativa más radical. Accedieron al Banco mundial y el BM les ofreció un crédito que se podría renovar, ese crédito estaba acompañado de condiciones. Entre ellas que el gasto público no podría nunca superar el 35% del PIB, esa cláusula fue la que limito prácticamente cualquier posible desarrollo de políticas de igualdad que no fuesen de discriminación positiva. Hay una cláusula estructural que determino el límite del Estado sudafricano, un estrado constreñido a esa fórmula. Vemos que los intereses de la familia Oppenheimer y otras, que controlaban el comercio y la explotación de diamantes y oro peligraban. En esa instancia, Oppenheimer aprovecho también de dejar en claro a Mandela que no podía aplicarse ninguna de las medidas de la Carta de la Libertad que era el programa básico del ANC; un programa democrático radical de construcción de un estado de bienestar para la mayoría negra del país.

En resumen, la alianza del ANC ganó rápidamente una posición hegemónica en la política sudafricana, acercándose a una mayoría de dos tercios de los escaños en el parlamento, con su agenda orientada a la transformación, y hasta ahora quedaba poco espacio para una oposición de izquierda.

A su vez, el Partido Comunista -y la federación sindical COSATU- fueron seducidos por la posibilidad de co-ejercer el poder en la nueva Sudáfrica, aunque en el curso de esta práctica el programa de la izquierda política fue cada vez más abandonado, a pesar de que inicialmente había sido compartido dentro de la alianza del ANC, por ejemplo Carta de la Libertad y su abandono, un tema recurrente en el debate al respecto.

En Chile, el Partido Comunista participa ahora en la Concertación, desde la coalición Nueva Mayoría 2013, luego de una historia de controversias y críticas, fruto de su activa participación en el Movimiento Estudiantil desde 2006, no sin el coste de haber abandonado el programa izquierdista radical.

En ambos casos nacionales es posible observar la existencia de una cooptación a la negociación, que se refiere al control desde las elites en las transiciones de la democracia.

ii. La imagen estratégica internacional

“(...) los responsables de la política post-apartheid sacaron todas las lecciones equivocadas de la "experiencia internacional" y por lo tanto se prepararon para ampliar más que corregir las principales distorsiones económicas del apartheid” capitalismo”.
(Bond, 2015)

El presente mecanismo, la imagen estratégica internacional, puede ser definido como las concesiones hechas por grupos dominantes del país a grupos de poder extranjeros así como políticas y acciones estratégicas destinadas a estos grupos de agentes privados, con el objetivo de preservar las instituciones en un contexto en el que los grupos subordinados nacionales aumentan su poder de negociación. Este mecanismo es un aspecto común en ambos casos. El caso de la adherencia al consenso de Washington propuesto por el gobierno de Klerk en Sudáfrica produjo la determinación de una política económica sometida a la lógica de que sólo existe una manera o forma de manejar la economía.

En el caso chileno, los subsidios al sector privado estuvieron acompañados por incrementos en el gasto social, con el fin de mantener una estabilización institucional. En Chile, la trayectoria general de la normativa del sistema parece ser una interesante historia sobre cómo la incompatibilidad se incrementa por la incorporación de nuevos intereses y potencialmente controvertidos objetivos dentro del diseño institucional existente, conduciendo todo el régimen de desarrollo hacia la inestabilidad.

Parte del establecimiento de una imagen estratégica internacional en Chile se inicia en los 90' con el comercio exterior, donde se comienza a generar una gran apertura comercial y una nueva etapa en las relaciones internacionales del país. Es así como se reducen tasas arancelarias y se ponen en marcha numerosos acuerdos de libre comercio (los llamados TLC) con México, Canadá, Centroamérica, y

posteriormente con Estados Unidos, con la Unión Europea, Corea, India Japón, Nueva Zelanda, Singapur, entre otros. A esto se suma la entrada de Chile en la Organización Mundial del Comercio (OMC), además de la firma de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) , los cuales suponen una modificación de diversos instrumentos en materia de política comercial (Calderón Seguel, 2008). Tal como sostiene Ffrench-Davis (2001) desde los 90' hubo una intensificación de los vínculos con países principalmente desarrollados, y también otras regiones del mundo; y donde gracias a todas estas medidas, el patrón de crecimiento del comercio se vio altamente influido por la Inversión Extranjera Directa (IED). Así, en los 90' los gobiernos de la Concertación prolongan el legado económico del régimen militar a través de la firma de los Tratados de Libre Comercio:

“Los TLC no se limitan a “regular la desregularización” de los intercambios de tipos comercial; sino que abordan diversas dimensiones como los flujos financieros (...). En este sentido –al menos en el TLC de EE.UU.- “los movimientos de recursos financieros [...] quedaron sin ninguna posibilidad de que el país aplique, si lo requiere, mecanismos de protección” (Fazio y Parada, 2006, p. 79, en Calderón Seguel, 2008).

Adicionalmente, Chile intensifica su participación en el ámbito multilateral, principalmente en organizaciones como la APEC, la OCDE, la Aladi y la OMC mencionada anteriormente. Estas incorporaciones fueron clave en la vinculación con otras economías como la asiática y con los mercados extranjeros en general. De la misma forma, aquella “negociación de la apertura” se realizó también con una participación activa del sector privado a través de diálogos formales y negociaciones con el sector a través de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON 2009). Se destaca, además, la visión de Chile como un “país plataforma”, es decir, desde los 90' llama la atención una estrategia de atracción y establecimiento de empresas extranjeras, con el fin de que

éstas articulen sus procesos con la agregación de valor para alcanzar desde Chile otros mercados. Es así como algunas empresas se establecen en el país para proyectarse hacia el Mercosur o a los mercados asiáticos, debido a las facilidades de acceso a éstos mercados desde el país (DIRECON, 2009).

En relación a la Inversión Extranjera Directa (IED) y los incentivos hacia entes privados, los gobiernos de la Concertación impulsaron una serie de medidas y políticas destinadas a atraer y conceder mayores beneficios a los inversionistas extranjeros, entre las que se cuentan nuevas modalidades de inversiones (por ejemplo los Fondos de Inversión de Capital Extranjero o las acciones chilenas transadas en la bolsa de Nueva York), rebajas tributarias, entre otros (Calderón Seguel, 2008). A la par, desde los 90' se crea un sistema de concesiones mediante el que mucha inversión en infraestructura es realizada por este medio, liberando al presupuesto público de este gasto. Por ejemplo, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, principalmente para fomentar y acelerar procesos de infraestructura, se abre paso a las políticas de concesiones viales (que se mantienen hasta el día de hoy), las cuales le otorgan responsabilidad a entes privados para el desarrollo y mantenimiento de estas tareas. Durante el mismo período de Lagos, se crea el Programa de Fomento de Oportunidades para las Regiones, los Contratos de Desarrollo Regional, y se les otorga la Exención de Patentes Comerciales a las Comunas. Todas estas iniciativas tenían como fin otorgar estímulos para la atracción de capitales privados (Araya y Cerpa, 2008). Del mismo modo, desde los 90' el tema de la privatización de ciertos servicios (electricidad, agua potable, y telefonía, entre otros) permitió establecer un sistema de cobros por su uso, estableciendo sistemas de tarificación (Arellano, 2004).

De acuerdo a lo visto anteriormente, y tomando en consideración la relación con los grupos de poder extranjeros, se torna crucial apoyar algunas de las medidas neoliberales legadas del régimen para satisfacer las expectativas de agentes externos y establecer un buen

“clima de negocios” para la inversión. En el caso de Chile, son determinantes en este buen clima la solidez de las instituciones y la estabilidad política, entre otros, junto con las políticas de incentivos para el sector privado. De esta forma, a pesar de que estas economías pueden -no necesariamente- producir una gran liberalización económica, como fue visto en el caso Sudafricano, pueden actuar para potenciar y fortalecer la credibilidad económica externa del país, relevante para establecer condiciones de préstamo y llegar a acuerdos de integración (como en ambos casos –Chileno y Sudafricano- con el Fondo Monetario Internacional).

En relación a lo anterior, tanto el Banco Mundial (BM) como el Fondo Monetario Internacional (FMI) surgieron de los llamados acuerdos de Bretton Woods, llevados a cabo en New Hampshire en 1944, Estados Unidos donde el objetivo principal era buscar la cooperación económica internacional, así como al reconstrucción de la economía de posguerra. Para lograr el objetivo habría una coordinación de políticas de cambio, y se crearía una estabilidad en el comercio internacional coordinando las políticas monetarias de los países miembros y una estabilidad cambiaria; para los cuales habría un crédito abierto para los países que tuvieran desequilibrios en sus finanzas.

En el caso del FMI el objetivo primario fue regular las tasas de cambio para facilitar el comercio internacional y ser el último prestamista cuando los países tuvieran problemas financieros; sin embargo, con los años pasó a ser el vigilante y supervisor de los países miembros y dar asistencia técnica en temas fiscales, monetarios, asistencia financiera y en las reformas económicas. La función principal del Banco Mundial en un inicio fue respaldar financieramente la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, tiempo después habría un giro a financiar el desarrollo a países del llamado tercer mundo.

En 1971 el presidente de Estados Unidos, el republicano Richard

Nixon, decide dar por terminado el sistema dólar-oro, el mundo de los tipos de cambios fijos finalizaron y se levantaron los obstáculos a los flujos de capital. La libertad de movilidad del capital así como la expansión del capital financiero tenían que acompañarse con cambios de políticas económicas en todo el mundo. Tanto el BM y el FMI como instituciones financieras internacionales consolidadas ayudarían a implementar las reformas necesarias. Estas políticas serían diseñadas e impulsadas principalmente por los países más ricos; el poder de decisión de los países en las instituciones está dado por la cantidad de dinero aportado y no por el número de habitantes que tiene cada una de ellas. Siendo Estados Unidos el que mayor poder de decisión tiene en el FMI²⁷.

De tal manera que si un país miembro tiene problemas financieros, el FMI sale a su rescate por medio de préstamos pero condicionados a cumplir una serie de requisitos por parte de los prestatarios, que darán pie a cambios estructurales en las economías de los países deudores, dicho cambios se identifican con las llamadas políticas neoliberales. Los ajustes han sido conocidos como Programas de Ajuste Estructural (PAE) los cuales están diseñado para incrementar la entrada de divisas a los países por medio de las exportaciones de manera que el país pueda liquidar sus deudas con los acreedores. Las políticas económicas propuestas por los PAE son marcadamente de corte neoliberal, tales como disminuir el peso en la actividad económica del Estado y alentar la libre competencia. Respecto al primer punto, la reducción del Estado ha incluido la venta de empresas estratégicas controladas por el Estado y la entrada del sector privado en el manejo de las antes empresas estatales, la reducción del gasto público en sectores considerados emblemáticos para los sistemas de bienestar como en la salud, pensiones, educación. En otras palabras, se rellena el espacio económico dejado por el Estado. Otras recomendaciones hechas han sido la devaluación de la moneda, equilibrio en la balanza

²⁷ Actualmente Estados Unidos tiene una cuota de 17.41% con una población aproximada de 324 millones y China tiene una cuota de 6.39% con una población de 1,377, 574 personas.

de pagos, reducción de impuestos a los gente con más dinero, reducir la inflación, la contención de los salarios, privatizaciones, menores tarifas a las exportaciones, política monetaria más restrictiva.

En el caso de los países latinoamericanos este tipo de medidas se empezaron a implementar con mayor intensidad en los años ochenta, periodo que se caracterizó por el problema de endeudamiento externo en varios países²⁸, tales como México, Argentina y Brasil quienes empezarían a recibir ayuda económica y asesoría financiera del FMI y a aplicar medidas de corte neoliberal como la orientación de la economía hacia las exportaciones²⁹(French-Davis & Devlin, 1993). El problema de deuda no fue exclusivo de los países latinoamericanos, ya que países de África y Asia como Nigeria, Sudán, Egipto, Israel, Marruecos, tenían problemas de deuda también, sin embargo, la crisis fue más severa en América Latina, por ejemplo, el endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua era de 119% y de Chile 93% en 1983 (Ritter & Pollock, 1987).

Analizando Chile y Sudáfrica, en el contexto anterior. Aunque en el caso de Chile las políticas neoliberales empezaron a implementarse durante la dictadura y se fueron profundizando en los siguientes años al término de la dictadura, como por ejemplo la consolidación de la automatización del Banco Central emprendida por Pinochet.

En el caso de Sudáfrica luego de la deuda contraída durante el *apartheid*, la necesidad de reconstruir al país y transformar la

²⁸ Entre los años de 1960 y 1970 las economías latinoamericanas pidieron varios préstamos para financiar sus proyectos de industrialización. Así, entre 1975 y 1982 la deuda con los bancos comerciales aumentó a una tasa acumulativa del 20.4%. Con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos y Europa a principios de los ochenta, las deudas externas se vieron incrementadas peligrosamente hasta el punto que en 1982 México declaró que no sería capaz de pagar su deuda anunciando una moratoria(Theberge, 1999).

²⁹ El papel del FMI fue muy activo al actuar como puente entre los bancos comerciales y los países deudores. Con el Plan Baker el Banco Mundial tendría mayor participación y con el Plan Brady el BM y el FMI la participación como prestamistas se profundizó.

economía post apartheid hizo que se llevarán a cabo programas económicos como el Crecimiento, Empleo y Redistribución. GEAR; ampliamente analizado, con un marcado corte neoliberal tales como la desregulación de la economía, privatizaciones, liberalización comercial, etc.

En la implementación de políticas de corte neoliberal hubo una influencia de organismos internacionales reconocida por la mayoría de las elites entrevistada en ambos países, y en la literatura, por ejemplo, el Banco Mundial prestó 340 millones de rands a Sudáfrica en 1997, pero su verdadera influencia estaba en el asesoramiento sobre políticas (Bond, 2005); además, el organismo publicó una serie de artículos sobre Sudáfrica con diferentes recomendaciones sobre las políticas a seguir tales como advertencias del papel expansionista del Estado (Bakken, 2014). Por otra parte, si bien muchos países habían cesado relaciones con el régimen del apartheid, no fue el caso del FMI que siguió haciendo préstamos al menos hasta principios de los ochenta, si bien después cesó los préstamos no la ayuda para aplicar políticas de corte neoliberal (Bond, 2005). Para luego intensificar su presencia en la etapa democrática de Sudáfrica por medio de artículos y reportes recomendando una serie de políticas de crecimiento tales como fuentes del ahorro, composición del gasto de gobierno, implicaciones del aumento en los salarios reales, liberalización del comercio, entre otros (Bakken, 2014).

De manera similar a Sudáfrica, en Chile durante la época del presidente electo democráticamente Salvador Allende (1970-1973) no se recibió préstamos del Banco Mundial, sin embargo, ante la instauración de la dictadura de Pinochet, instaurado por medio del golpe militar, el país recibió préstamos del organismo y es justamente cuando las políticas neoliberales empiezan a implementarse en Chile. Dejando claro que hay una relación entre la política de los préstamos, y sus condiciones de préstamos explicadas líneas arriba, y un interés geopolítico (Toussaint, 2007).

Como se mencionó líneas arriba, una de las motivaciones principales de las políticas impulsadas de corte neoliberal fue eliminar los obstáculos a la libre movilidad del capital por el mundo por medio, por ejemplo, de leyes más flexibles a la entrada y salida de inversiones; esto se vio materializado por medio de tratados comerciales internacionales.

En el caso de Chile desde finales de la década de los noventa empieza a firmar una serie de tratados de libre comercio; firma un tratado con Canadá en 1995, pero destacan en mayor medida el tratado firmado con la Unión Europea en 2002 y con Estados Unidos en 2003 por el tamaño de los mercados comerciales. Sudáfrica firma su primer acuerdo con la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) en 1994, con la Unión Europea en 1999 y con Estados Unidos en el 2000; esta serie de acuerdos fueron impulsados en su mayor parte por levantamiento de sanciones y boicots provocados por el régimen autoritario que vivía conocido como *apartheid*.

Otra forma de ver expresada la mayor liberalización del capital es por medio del crecimiento de la Inversión Extranjera Directa (IED). Según datos de Naciones Unidas, en Chile el stock de la IED como porcentaje del PIB representaba aproximadamente un 35% en 1980, al término del periodo autoritario ya era de aproximadamente 46% en 1990, y de 80% en 2014. En Sudáfrica la IED era de 19% en 1980, luego de la terminación de la etapa autoritaria la IED era de 9% en 1995, y en 2014 ya representaba el 41%. De esta manera se puede ver claramente como las barreras del capital han ido disminuyendo para dar paso a un mayor flujo de inversiones y comercial.

Las privatizaciones de empresas estatales fue otra de las expresiones de las políticas neoliberales, por ejemplo, en el caso de Chile se privatizaron empresas emblemáticas como el Banco de Chile, la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA), la Empresa Nacional de Computación (ECOM) y EMEL. En el caso de Sudáfrica compañías como South African Broadcast Corporation

(SABC), Telkom, Sun Air, Airports Company South Africa, South African Airways, Denel, Dolphine Coast, Alexcor, the South African Post Office, and Aventura, fueron privatizadas completamente o parcialmente (Lesufi, 2005).

iii. Capital moral: El lado oscuro de la legitimidad del oprimido

“Por favor [...] Y no me lo vengas a plantear a mí, porque yo tengo mi vida entera dedicada a la política, he estado preso, he estado exiliado, para que venga un grupo de niños a calificar de esta manera, que no lleva al país a ninguna parte”

Ministro Bitar, Chile. 2010

"El capital moral es el prestigio moral - ya sea de un individuo, de una organización o de una causa - que termina siendo útil"

Jhon Kane, 2001

El capital moral es uno de los principales mecanismos subyacente de la aparente inmovilidad no progresiva que tuvo lugar en la política económica posterior de las transiciones democráticas post autoritarias. Este apartado interpreta el mecanismo de la acción del capital moral. Por otra parte, ilustra el punto de que la moralidad, como un elemento simbólico de capital, es un valor simbólico que se incrusta en capital fáctico en los procesos de toma de decisiones. Es la dimensión factual de este capital la que opera en el proceso de diseño institucional, el capital fáctico que afecta al jugar un papel económico único. En palabras de John Kane, a partir de su libro *The Politics of Moral Capital*, el capital moral es prestigio moral, ya sea individual, organizacional o de una causa, que sirve al servicio de la misma (Kane, 2001, p.7). El juicio moral es intrínseco, este postulado es aceptable en el análisis, sin embargo su observación desde la teoría se ha conceptualizado desde el punto de vista de su uso favorable, dinamizador, estratégico en combinación con otros recursos. En esta visión, el mecanismo del capital moral funciona como limite a la

argumentación y a la deliberación, tal como ha planteado Max Weber, las actitudes posibles en última instancia son irreconciliables, y por lo tanto la lucha (deliberación) nunca puede llevarse a una conclusión final. El capital moral actúa como decisión concluyente. En otros términos, actúa basado en la valoración o en un juicio de valor extremo sobre el cual no se puede decir nada sustantivo.

En general, los debates recientes en la teoría política se han referido a la movilización y el potencial edificante de mantener la memoria de la injusticia del pasado vivo en el presente (Nedimovic, 2015), cuando, sin embargo, la rememoración se convierte en una forma de capital moral discursiva que no vincula a la acción política transformadora, y cuando, a su vez, las críticas al gobierno o al poder, o a una manera de dirigir la política económica de un país se convierten en ilegítimas debido a la condición de las élites gobernantes actuales, que fueron antes oprimidos e incluso grupos perseguidos en la sociedad, como en el caso de algunos miembros de la ANC y la Concertación de Partidos por la Democracia, durante el periodo estudiado y podríamos decir que en la actualidad. En otros términos, el capital moral se refiere a la moral invisibilizadora que niega la contradicción o la inconsecuencia de las acciones de acuerdo a los principios normativos.

En ambos casos, la referencia al capital moral que se ha adquirido debido a la resistencia a la opresión en el pasado, se convierte en limitante, más que en un aspecto dinamizador del presente. Habermas (1997) nos recuerda la estrecha relación entre la conciencia histórica, la auto comprensión del colectivo en el presente, y la importancia de adoptar una actitud crítica hacia el pasado histórico.

Para lograr la revitalización del pasado en el presente, sin embargo, también se requiere la aparición de un espacio discursivo en el que el crítico de las prácticas posteriores a la liberación no se denuncia inmediatamente como en su defecto para entender las condiciones de la liberación, o incluso sin tener en cuenta la realización de la

liberación total. En este contexto, el desarrollo mismo de la modernidad ha sido entendido bajo una concepción del tiempo orientada al futuro, que presenta al presente como una ruptura con el pasado.

La política económica se trata finalmente de la concatenación de decisiones institucionales que se toman a base de la ostentación del poder, y el poder tiene atracciones y usos independientes. Los actos de ambición no son casos aislados, e incluso los actores con parámetros normativos orientados al bien común y convicción se ven cooptados por un modo de argumentación legítimo que muchas veces intenta representar un algo inconsistente con los parámetros ideológicos del conglomerado, o bien para lograr algún objetivo que corresponde a fines privados.

En el contexto de las transiciones democráticas de Chile y Sudáfrica la fundamentación moral en los procesos de decisión ha sido clave durante Durante los procesos de deliberación institucional, de decisión política – según lo declarado por los propios actores de la élite entrevistados – la selección argumentativa de algún conjunto de valores, principios, y condiciones de la opresión pasada, en su conjunto selectivo han configurado un discurso resonante y significativo. Un discurso referido a la operación difícilmente es debatible, tiene un peso simbólico sustantivo y tiene la capacidad de obstrucción – y por cierto, la capacidad dinamizadora para otros aspectos relativos a la deuda social – siendo probable que los interlocutores otorguen respeto, aprobación, con el resultado de un fácil beneficio político para el emisor del mensaje cargado de capital moral.

Dado que el capital moral depende de la especificidad moral de las personas, agentes e instituciones políticas, debe ser distinguido de la mera popularidad. La popularidad puede basarse en parte en las evaluaciones morales, pero se basa a menudo en otras dimensiones

adicionales. Es posible ser popular y se puede carecer de capital moral, o se puede poseer capital moral sin ser particularmente popular. Además la popularidad, por lo general se asume, puede ser comprada y construida mediáticamente, mientras que el capital moral está adscrito al pasado del actor. El capital moral tiene verdaderos efectos políticos. Es un recurso que básicamente puede emplearse para legitimar o deslegitimar decisiones, es un mecanismo que ha operado para movilizar y desmovilizar apoyos.

El mecanismo del capital moral por supuesto no es el único recurso que se puede usar en el proceso de deliberación institucional, y la configuración histórica de la política económica en las transiciones ha podido obtenerse mediante una variedad de medios. La inercia, la continuidad, el dinamismo, la ascendencia, dependen de los actores claves, las normas y valores que ponen en juego para poder institucionalizar una decisión. Tales factores pueden ser denominados capital político (Bourdieu, 1988) por tanto, existe una relación evidente entre procesos y resultados políticos, en esa relación el capital moral es una fuerza real que implica el movimiento del juicio moral en la vida política y en las decisiones económicas. La premisa del capital moral es que los procesos de institucionalización política se fundamentan en valores y fines, y los juicios morales de los actores cumplen un rol performativo en este proceso. La acción en los espacios de deliberación institucional muchas veces se define como amoral, o no valórica por los propios actores, dando a las decisiones una connotación pragmática, sin embargo el punto de vista ético es ineludible.

El capital moral en las transiciones post autoritarias estudiadas tiene el fin de desarmar las posibles oposiciones, y crear oportunidades. Sin embargo, cuando el contexto es favorable para los cambios, pero los intereses personalistas y ansias de poder acomodan más el status quo, es posible observar que el efecto es justamente el contrario.

Los fines e intereses opuestos deben ser acomodados, neutralizados o derrotados. Aunque el compromiso es posible, y de hecho a veces alabado como una virtud política central, el juego se juega generalmente para ser ganado, y los resultados particulares están determinados por el balance del poder político y el relativo ejercicio de la habilidad política.

El establecimiento de estándares inferiores a los propuestos marca una aceptación de que las fuerzas opuestas son demasiado fuertes para ser derrotadas o las posturas respecto al cambio son demasiado débiles para ser victoriosas. El énfasis en la acción competitiva hacia los fines hace de que se juegue dentro de restricciones y el énfasis de esas restricciones es ganar o perder, que de uno u otro modo en las transiciones políticas ha tenido un color en cierta medida vulgar, ya que la mayoría de las decisiones, como fue expuesto en el capítulo III y IV, han sido evaluadas en términos de su valor como capital político, el capital es, por definición, un recurso para el logro o la justificación de otros fines. De este modo, la posición moral es un mecanismo que funciona como recurso útil, e invariablemente asume la forma de capital en la política. Puede ser observado desde este punto de vista, pero desde un modelo inductivo, sin duda es un mecanismo que emerge desde la necesidad de justificación.

En un contexto neoliberal es predecible que el recurso que permite este proceso toma un carácter de capital moral. Los problemas surgen, sin embargo, si la posición moral comienza a ser tratada *principalmente* como un medio para promover fines. En la vida ordinaria suponemos que el carácter moral es un valor en sí mismo, un recurso que teóricamente gobierna tanto los fines que elegimos, así como los medios que consideramos apropiados para adoptar en ellos. La posición política, incluida la reputación moral en relación al pasado, es susceptible de ser un medio para obtener ventajas políticas. En otras palabras, este mecanismo invierte en cierta medida el orden habitual, haciendo que las características morales sean juzgadas por su utilidad más que por su significación implícita.

En el contexto post autoritario tanto de Chile como de Sudáfrica en un comienzo las nuevas coaliciones gobernantes tuvieron toda la legitimidad y expectativa que promovía la construcción de un nuevo sistema político y económico, la posibilidad de dar vida a una nueva política económica. En el avance progresivo del programa, debido a las presiones externas e internas, la sospecha comenzó a emerger como un factor relevante. El honor, fundamento sustantivo tanto del ANC como de la concertación, se configuró en un atributo que se fue devaluando progresivamente, hasta hoy. Uno de los motivos fue la distancia que adquirió la praxis concreta de los discursos que se movilizaron a principios de las transiciones. En este sentido, tal como plantean Boltanski y Chiapello (1999) en el nuevo espíritu del capitalismo, el desarrollo institucional del capitalismo requiere acciones y motivaciones subjetivas. Al respecto Wagner (establece una comparación con Weber y afirma que la jaula de hierro no puede persistir sin “espíritu”). El desarrollo basado en la búsqueda de beneficios, aunque sea implícitamente, necesita particularmente de justificaciones para persistir y sustentarse. La acción política siempre presupone esta justificación. El argumento político en este sentido es altamente moralizado, aunque no necesariamente moralizante. El modelo de desarrollo neoliberal en ambos países ha necesitado justificarse permanentemente para mantenerse, consolidarse y funcionar, incorporando las críticas de las que es objeto, pero sobre todo limitando el avance de discusiones que buscan reivindicación de principios relativos a las convicciones de los conglomerados. Los conglomerados políticos no pueden limitarse a afirmar su condición en sí, sino que deben establecer su legitimidad moral y así, al mismo tiempo, la falta de legitimidad de los desafíos actuales o potenciales.

La legitimidad en ese sentido fundamenta los intereses, los argumentos, y los deseos a veces no sustentables políticamente. El capital moral permite esta legitimación de argumentos y los puede potenciar como justos, o rectos, o al menos aceptables públicamente. Sin embargo, en los procesos impulsados por la política, existe una tensión perpetua entre la exigencia implícita de razones justificativas y

el incentivo de usar cualquier medio a mano, incluyendo el poder coercitivo de los argumentos referidos al pasado.

Como se ha visto en el análisis de ambos casos, la confianza en la persuasión moral y el uso del capital moral ha disminuido progresivamente en la medida en que el orden político ha ido acrecentando la consolidación del poder, y las coaliciones han ido disponiendo de más medios para su consolidación. Evidentemente el poder en ambas trayectorias se ha mantenido en base a otros elementos que no dependen exclusivamente del capital moral, sino a motivos como el miedo, la sujeción, y el resto de los mecanismos que se explicitan en este apartado.

Tales tácticas retóricas son un medio para desarmar a la oposición, tanto externa como interna, y además son un intento de evadir las dudas que se generan en los procesos de cambio sobre la posibilidad latente de derivar ciertas posiciones normativas tanto del ANC como de la Concertación, en un conjunto de hechos concretos, en decisiones vinculantes. Un argumento basado en el capital moral tiene la potencialidad de colapsar la exigencia de la consistencia entre discurso y práctica política.

Justamente la Dictadura chilena y el apartheid sudafricano, en tanto periodos autoritarios, demostraron en su configuración que no existe ninguna restricción inherente en lo que podría ser adoptado como un fin político o normativo en democracia, y no existió límite evidente, tampoco, respecto a los procedimientos que podrían emplearse para lograrlo. El imperativo moral fue uno de los mecanismos para mantener esta configuración en los regímenes autoritarios (Arendt, 1969). En este tipo de régimen se mostró que era posible concebir y llevar a cabo una configuración particular del sistema jurídico y político, del Estado-nación, de las leyes como tal, de las estructuras burocráticas, de las clases sociales y de todas las posibles categorizaciones por raza o condición política, en términos de

jerarquía y exclusión. Paradojicamente es ese mismo imperativo moral que sustenta la inmovilidad o resistencia de las elites en la transición democrática.

Esta configuración institucional fue estableciendo una forma de proceder que iba eliminando del espectro de la legitimidad cualquier actividad fuera del régimen, por lo tanto argumentos de carácter radical, basados en una condición de capital moral, se tornan normales y adquieren carácter de mecanismo.

En el caso de Sudáfrica, el ANC ha tenido como estrategia política por un lado simbolizar las injusticias del sistema del apartheid en la figura de Mandela, dadas su cualidades morales personales, y su historia. En un momento determinado, Mandela se convirtió en el centro de toda posibilidad de romper con el estancamiento histórico, pero por otro lado, también funcionó como juicio extremo para bloquear nuevos cambios. Mandela brindó al ANC una posición política superior en ese sentido.

Dentro del análisis cualitativo de las entrevistas a élites existen múltiples referencias a este mecanismo, especialmente en el caso de Sudáfrica. *“Durante el Apartheid hubo violencia todo el tiempo porque los oprimidos estaban luchando contra los opresores. Después de 1994, la violencia se produce principalmente en torno a conflictos laborales. Por ejemplo, si los sindicatos no están de acuerdo con los aumentos salariales habrá violencia en torno a eso (...)”* (Entrevistado, Hombre, élite política).

Otra de las manifestaciones de este mecanismo es la extensión del concepto de violencia, que si bien tiene sentido y justificación, se sustenta muchas veces en el capital moral de los oprimidos en el periodo del apartheid. Por ejemplo, una entrevistada de la élite económica declara: *“Debo decir que, en los últimos cinco años, hemos tenido lo que llamamos “violencia de entrega de servicios”.*

Hemos tenido comunidades donde los vecinos se levantan y son violentos y se quejan del gobierno, y del hecho de que el gobierno no está proporcionando suficientes servicios. Esa es una forma importante de violencia desenfrenada y esporádica. Tuvimos mucho de eso hace dos o tres años, pero incluso ahora tenemos eso (...)” (Entrevistada, Mujer, élite económica)

En el caso de Chile, la figura explícita del líder no ha estado tan presente en el discurso, sino que más bien el capital recurrente de los discursos desde la concertación han sido los conflictos y las violaciones a los derechos humanos. Si bien en el caso de las entrevistas a élites no ha sido tan explícito, una de las situaciones explícitas que da cuenta del uso extremo del mecanismo del capital moral es una declaración del Ministro de Obras Públicas del penúltimo gobierno de Michelle Bachelet, quién fue además Ministro de Salvador Allende y Ministro de Ricardo Lagos, Sergio Bitar, quién en un debate de televisión en torno al modelo de desarrollo en educación, dejó ver explícitamente este mecanismo *“Nadie fue a la puerta del ministro de hacienda a plantearle un negocio, por favor. Y no me lo vengas a plantear a mí, porque yo tengo mi vida entera dedicada a la política, he estado preso, he estado exiliado, para que venga un grupo de niños a calificar de esta manera, que no lleva al país a ninguna parte”* (Bitar, 2010).

Como ha sido presentado, el capital moral desempeña un papel de conciliación y restrictivo único. Si bien un proceso de desarrollo económico requiere relaciones interpersonales armoniosas, el capital moral expuesto en este último ejemplo desempeña, además, un rol importante en el bloqueo de última instancia exacerbado al diálogo deliberativo.

iv. La influencia de los *think tank*: El ensamblaje entre conocimiento y neoliberalismo

“Habitando una zona gris entre reflexión y acción, el think tank nace así de la voluntad de influenciar el proceso político según una cierta concepción del interés público apoyándose en la investigación aplicada a los temas de interés público y a la difusión de soluciones adecuadas respecto de quienes toman las decisiones”

Entrevistado elite política, Chile

Los centros de pensamiento y la influencia de los *think tank* en la agenda política de ambos países durante la dictadura y transición a la democracia, fue crucial. En el período mismo de dictadura en Chile sin duda uno de los principales *think tank* corresponde a los Chicago Boys. Destaca aquí el rol que cumplió la Universidad Católica, específicamente la Facultad de Economía de la misma Universidad. Durante el período de los años 50' y 60' esta universidad creó alianzas y se generaron convenios con la Universidad de Chicago. Esto produjo que un tiempo más tarde, un grupo de estudiantes viajara a aquella universidad a adquirir mayores conocimientos. Estos estudiantes, posteriormente serían conocidos como los “*Chicago Boys*”, y destacan por la importancia que tomaron en el proceso de implementación del nuevo modelo neoliberal que sería puesto en práctica en Chile.

Este grupo de estudiantes creó un documento de 500 páginas basándose en las ideas de la Universidad de Chicago, que eran de corte netamente neoliberal, siendo uno de sus “mentores” en aquella institución Milton Friedman. Este documento en primera instancia fue rechazado por Jorge Alessandri, pero cuando se produce el golpe de

estado y la posterior instauración de la dictadura, dicho documento se convierte en la base de la política económica chilena bajo el nuevo régimen. Dentro de los nombres más destacados de este grupo se encuentran: Joaquín Lavín (Ministro de Educación, 2010-2011, Ministro de Planificación 2011-2013), Cristián Larroulet (Ministro de la Secretaría General de la Presidencia [SEGPRES], 2010-2014), Juan Andrés Fontaine (ministro de Economía, 2010-2011), Hernán Büchi (Ministro de Hacienda, 1985-1989), José Piñera (Ministro de Trabajo y Pensiones, 1978-1980, Ministro de Minería, 1980-1981), entre otros.

Desde el otro lado (aquel no ligado al régimen) los *think tanks*, tal como expresa Moreno (2010) estuvieron mucho más relacionados a la creación de espacios alternativos que albergaran a académicos, investigadores e intelectuales en general, que habían sido marginados y excluidos durante la dictadura. Así, estos centros no solo cumplieron labores investigativas, sino también políticas. Promovieron diálogos, encuentros y el reclutamiento de dirigentes opositores al régimen. El rol de éstos estaría enfocado a la reflexión sobre las razones del golpe militar, y sobre todo respecto a las alternativas y caminos posibles para poder volver a un régimen democrático. Por todo esto no resulta raro que al final del régimen militar estos centros apoyaran activamente a la oposición en el plebiscito del 88' incluso a través de financiamiento. En suma, el rol de estos *think tanks* estuvo fuertemente ligado al desarrollo de una oposición al régimen, y aquello no fue menor. Según Huneus et al. (2014), en 1985 (en plena dictadura) había nada más y nada menos que 43 centros de pensamiento donde trabajaban destacados profesionales y académicos que tenían posiciones opuestas al régimen. Dentro de estos centros destaca la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN), el cual se convertiría en el principal centro de investigación económica de la dictadura y estaría compuesto por investigadores con activa participación política. En relación a lo anterior, también hubo muchas organizaciones internacionales públicas y privadas que financiaron estos centros, como la Fundación Ford y el International Development Research Center (IDRC), entre

otros (Huneus et al 2014).

Otro centro importante fue el Centro de Estudios del Desarrollo (CED) quien, como bien expresa Huneus et al. (2014) entre otras cosas impulsó un dialogo con militares en retiro, “dando una señal de que la transición a la entre otras cosas impulsó un dialogo con militares en retiro, “dando una señal de que la transición a la democracia no seria posible sin un acuerdo con los institutos armados. Ahí también trabajó Edgardo Boeninger, que llegaría a ser vicepresidente del PDC y ministro del presidente Aylwin” (pp. 15). En relación a las personas que estaban en exilio, destaca el *Institute of Policy Studies* de Washington DC donde participó Orlando Letelier, quien posteriormente fuera asesinado por orden de Pinochet.

Con el retorno a la democracia a principios de los años 90', el rol de los *think tanks*, sobre todo de estas instituciones que habían sido parte de la oposición durante el gobierno militar, cambió considerablemente. Tal como expresa Moreno (2010), en el proceso de transición éstos jugaron un rol de “*catalizadores de consenso*” (p.109). De esta forma, estas instituciones pasarían a redirigir su acción hacia “*la promoción de ideas e innovación pública*” (p.109) tomando un rol preponderante en la agenda del Estado respecto a las reformas. Un aspecto extremadamente importante respecto a esto planteado por Moreno es que desde los 90' estos *think tanks* compartieron muchas características con grupos teocráticos que se instalaron en el gobierno. En el ascenso de estos grupos tecnocráticos se identifican ciertas variables que sin duda favorecieron esta práctica, entre las que se encuentra la influencia de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las cuales aportaron a la consolidación y la legitimidad de estos grupos.

Otro cambio sumamente relevante respecto al rol de los *think tanks* en el período de transición a la democracia y posterior, tiene que ver con algo que es muy bien descrito por el trabajo de Huneus et al. (2014),

y es el hecho de que el poder de estos centros se expandió considerablemente durante este período en gran parte porque quienes los conformaban pasarían a ser funcionarios públicos importantes con cargos ministeriales o altos funcionarios del gobierno de Patricio Aylwin, que se hicieron cargo de la dirección económica de este mandato. Dentro de los nombres destacados a este respecto se encuentra, por ejemplo, Alejandro Foxley quien fue fundador y presidente de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (CIEPLAN) y que durante el gobierno de Aylwin se convirtió en Ministro de Hacienda y posteriormente, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet se convertiría en Ministro de Relaciones Exteriores. No obstante, un dato relevante es que diez de los veinticinco ministros que ejercieron durante el gobierno de Patricio Aylwin, pertenecieron o estuvieron vinculados en su momento a alguno de estos centros de pensamiento, al igual que varios subsecretarios y embajadores. Una tendencia similar se produjo en los partidos y el congreso. Los presidentes de los partidos fundaron numerosos centros de pensamiento. El Presidente de la Cámara de Diputados se había vinculado a estos y el Presidente de la Cámara del Senado había fundado uno (Huneus et al. 2014).

La explicación a lo anterior tiene que ver también con la influencia que ejercieron ciertos organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), quienes durante la transición cooperaron activamente con académicos de universidades y presidentes de partidos políticos. No solo esto, la CEPAL fue un referente teórico importante en la política llevada a cabo por la Concertación desde los 90': la transformación productiva con equidad como alternativa al neoliberalismo.

Desde la otra perspectiva, el rol de la oposición durante este período, el estudio de Huneus et al. (2014) es conclusivo cuando sostiene que la participación de profesionales y académicos de centros de estudios en los liderazgos de la oposición “definió una agenda y un estilo

político que tuvo enormes repercusiones en el desarrollo político, que no lo favoreció. Se cultivó un estilo de deliberación y acción política que estuvo separado del que se efectuaba al interior de los partidos, sin consultarles en decisiones estratégicas, y se asumió una visión de la política entendida en un sentido limitado” (pp. 3).

Como conclusión, el rol de los *think tanks* en Chile ha sido sumamente relevante. Durante la dictadura los Chicago Boys participaron activamente del programa económico impulsado por el régimen, mientras la oposición vio en estos centros la oportunidad de reflexionar y desarrollar ideas alternativas, junto con reclutar opositores a la dictadura. Durante la transición a la democracia los roles cambian y estos centros comienzan a participar activamente en el desarrollo de políticas e influenciar las ideas de la Concertación. Tanto es así que muchos de sus participantes se convierten, con la llegada de Aylwin al poder, en altos funcionarios públicos.

En el caso de Sudáfrica al inicio de la transición se creyó que la asesoría experta de los *think tank* permitiría anclar la perspectiva tecnocrática al movimiento, guiando de ese modo una reestructuración del país y un diseño de la política económica basada en la carta de la libertad de 1955. Y sin duda los expertos comenzaron a aparecer por doquier, sin embargo anclados no en el movimiento sino en la experticia de Washington.

Los motivos de preocupación de los foros socioeconómicos son múltiples, particularmente las organizaciones Nader, Alliance for Global Justice y el Centro de Derecho Ambiental Internacional, por ejemplo). Ahí se fueron concentrando varios grupos de reflexión económica.

Con orgullo, un entrevistado de la elite política plantea “(...) desde mi punto de vista nuestras políticas son notorios, tal vez más que otros países, por no estar basada en la evidencia. No basamos en el análisis

académico o de investigación científica en la toma de decisiones informadas sobre la economía, mucha de la crítica es ideológica”. Pero tal cual el caso chileno, no hubo demasiadas posibilidades de decisión. Otro entrevistado plantea “(...) Hubo influencia incluso antes de las elecciones en el ANC por algunos gobiernos europeos y el gobierno de Estados Unidos”. También a instituciones como el FMI y el Banco Mundial para que se adoptaran ciertos tipos de políticas. La justificación fue evidente, si “Si no hacemos esto, entonces vamos a tener que ir al FMI y el Banco Mundial para dinero y entonces no será un programa de ajuste estructural que significará que otras personas decidan sobre nuestras políticas. Por lo que era mejor para nosotros adoptar políticas neoliberales nosotros mismos que lo han impuesto por otras personas”.

Tal como plantea el historiador Manuel Garate (2018) los Think Tanks no son las únicas agrupaciones orientadas a pensar la política ni la economía, pero lo que los distingue es la combinación entre fundamentos teóricos y su orientación pragmática respecto de temas de alto impacto social. Lejos de la reflexión teórica esencialmente propia de las universidades, los Think Tanks utilizan metodologías con objetivos políticos claros y encuadrados en nociones normativas previamente definidas. Su mayor o menor grado de neutralidad está dado por este último elemento y no tanto por la eficiencia técnica de sus metodologías de análisis. El conocimiento en sí mismo no puede ser crítico, y no tiene un valor en sí mismo.

v. Los enclaves autoritarios y la facticidad del *Path dependence*

“Nunca se es lo suficientemente fuerte para ser maestro todo el tiempo, a menos que transforme la fuerza en derecho y obediencia”

Jean-Jacques Rousseau

"Ellos nunca nos liberaron. Sólo tomaron la cadena de Alrededor de nuestro cuello y lo puso en nuestros tobillos”

Rassool Snyman, 2007

La idea de enclaves autoritarios es desarrollada de manera exhaustiva por Garretón (2003) y tiene que ver con que la institucionalidad política está, incluso después de la transición, fuertemente anclada a legados no-democráticos. Esto es posible observarlo claramente en el caso de Chile, principalmente si relacionamos esos enclaves autoritarios a la Constitución de 1980. A pesar de que esta Constitución fue construida durante el régimen militar esencialmente para mantener la continuidad de Augusto Pinochet (y a su vez del régimen), hasta el día de hoy se ha mantenido vigente, lo que sin duda da luces de cómo se ha expresado la continuidad de este modelo. Por un lado, su naturalización y penetración en las conductas sociales, la adaptación de la ciudadanía a los principios del modelo que lleva a la extrema individualización (Garretón, 2016) y por otro lado, un creciente distanciamiento de la sociedad respecto de la política institucional. Ya sea por la imposibilidad de alterar la correlación de fuerzas a través de las elecciones respecto de la derecha, o por los vínculos que el gran empresariado chileno ha logrado establecer con la alta dirigencia de la ex Concertación, tras el clivaje derecha versus nueva mayoría opera de fondo un pacto elitario o partido del orden,

que logra salvaguardar la herencia dictatorial en materia económica e institucional (Mayol, 2016).

Lo anteriormente señalado está en directa relación con el argumento de Garretón (1991) respecto a la idea de que durante la transición a la democracia hubo una aceptación explícita de ciertos “enclaves autoritarios”, de reglas e instituciones que no podían ser alteradas sin el consentimiento de la derecha política chilena. El mismo autor señala: *“Se impuso un consenso tácito, porque en un principio las tareas de término de la dictadura y la transición impidieron o cerraron un debate sobre lo económico-social. Así, la postura de la dirección gubernamental de mantener la continuidad del modelo económico se presentó como la única vía posible para garantizar la democratización política”* (Garretón, 2012, p. 85).

Dentro de aquellos enclaves autoritarios, Garretón (1991) identifica los institucionales, socioculturales, actorales y ético-simbólicos. Los institucionales se refieren a leyes que impiden la generación de cambios y reformas profundas; los socioculturales se refieren a rasgos de una sociedad que vivió durante mucho tiempo un período de dictadura; los actorales se relacionan a los sectores empresariales, la institucionalidad de las fuerzas armadas y a la derecha política; y los ético-simbólicos se refieren a aquellos que tienen que ver con los derechos humanos y las violaciones a éstos. Fernández Fredes (2002) sostiene que son también enclaves autoritarios el régimen del que gozan los comandantes en jefe del Ejército, Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea y el General Director de Carabineros, los cuales no pueden ser removidos por el Presidente de la República durante el período por el cual son designados, debido al beneficio de inamovilidad; las atribuciones conferidas al Consejo de Seguridad Nacional que no se relacionan con dicho aspecto; el rol que se confiere a las Fuerzas Armadas y de Orden (entre ellas Carabineros) respecto al rol garante del orden institucional, el cual es incompatible con el poder otorgado al Presidente de la república dado por la Constitución política, en relación al gobierno y la administración del Estado; y la designación

de los miembros de la Corte Suprema la cual está sujeta a una mayoría reacia a los cambios institucionales. Posteriormente, Siavelis (2009) identifica enclaves relacionados a: 1) el cuoteo como forma de distribución del poder de gobierno, que incluye una negociación entre los partidos para la división de las carteras ministeriales; 2) el control de la élite en la selección de candidatos y la política electoral (en la que se incluye el sistema binominal); 3) la dominación de los partidos en la política, los cuales sin embargo, tienen vínculos muy débiles con la sociedad civil complementado con élites partidarias notablemente poderosas; 4) la formulación de políticas elitistas y extra-institucionales: aquellas, en gran parte, han sido elaboradas, formuladas y discutidas por las elites que trabajan en el Poder Ejecutivo, donde existen acuerdos entre los partidos y la élites, los potenciales actores de veto o poderosos actores y líderes económicos de derecha; por último, 5) la intocabilidad del modelo económico, donde las negociaciones de alto nivel se han privilegiado en desmedro de plebiscitos o consultas populares.

Gruninger (2003) evidencia muy bien esta situación cuando argumenta que, debido a que la transición a la democracia tenía un carácter pactado, ésta no permitió a los nuevos gobiernos poder realizar reformas significativas, y gran parte de estos obstáculos están consagrados en la Constitución de 1980 que cuida el equilibrio de las fuerzas políticas, asegura la privatización económica de varias funciones de carácter público y en consecuencia, pone trabas a la futura democracia. En suma, estos enclaves autoritarios han interferido en el funcionamiento óptimo del sistema democrático. Recién en el año 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se aprueban una serie de enmiendas a la Constitución de 1980, las cuales ponen fin a algunos de estos enclaves. No obstante, esta Constitución se mantuvo sin modificaciones relevantes durante al menos 25 años, un período no menor. De acuerdo con esto, y bajo la idea de transición pactada que se llevó a cabo a comienzos de los 90', las reformas a la constitución en este período son vistas como una derogación "*de las disposiciones más cavernarias, para dejar intactas las instituciones*

que aseguraban en veto minoritario y la imposibilidad de reformas no consensuadas tanto del sistema político como del sistema socioeconómico” (Moulian, 1998, p.356). Incluso algunos autores afirman que algunas de las reformas introducidas dificultaron aún más la posibilidad de cambio (ver reformas a los artículos 65 y 68), las cuales *“reforzaron, en lugar de debilitar, el sistema político, económico y social, dejado por la dictadura”* (Portales, 2000, p.43).

La institucionalización de estos enclaves se erige cristalización de las reglas a través de una codificación más estricta (Wagner 2009, Habermas 1998), por la que se vuelven más difíciles o imposibles los cambios futuros y las interpretaciones alternativas o el cambio de reglas internas.

En Sudáfrica, con la institucionalización temprana del enfoque de la alteración de la estructura racialmente desigual de la sociedad, a través del empoderamiento semántico, normativo y las políticas de discriminación positiva vigentes durante toda la transición, ha tenido un resultado positivo, sin embargo en la visión de la elite política ha marcado un mínimo y un máximo. Opera como justificación y reduce la posibilidad de enfoques alternativos en puntos de inflexión posteriores.

Caso chileno, la política democrática se centró tempranamente en una búsqueda constante de mejorar el uso de las instituciones y acuerdos existentes de la dictadura, más que en su alteración. Esto puede verse, por ejemplo, en la especificación del objetivo de inflación, la normativa de gasto fiscal, el compromiso tácito sobre una ley de responsabilidad fiscal y la protección social focalizada, que opera como un consenso enmarcado en la idea de deuda social.

En Chile, dentro de los enclaves autoritarios más importantes, se encuentra sin duda el sistema binominal. Varios estudios en Ciencia Política que se concentran en el congreso chileno y sus grados de

cooperación, afirman que han existido factores institucionales importantes, tales como el sistema electoral que han contribuido a un equilibrio de fuerzas en la legislatura. Y es que si se observa la composición de éste, puede apreciarse que desde los 90' la distribución de los escaños ha sido bastante equilibrada, lo que se debe en gran parte a los efectos de compensación del sistema binominal. Este sistema definió en todos los distritos una magnitud igual a 2, lo que obligaba a la formación de grandes coaliciones y tenía efectos de definir (con muy pocas excepciones) un representante por cada una de las listas con mayor porcentaje de votos, desfavoreciendo totalmente la representación de minorías. Por esta razón, desde los 90' hasta el día de hoy los dos bloques políticos (Concertación o Nueva Mayoría / Alianza) no tuvieron alteraciones significativas respecto a su composición en el congreso (Alemán y Saiegh, 2007). Durante los gobiernos de la concertación, en ambas cámaras se logró una mayoría por parte del bloque oficialista, mayoría que sólo alcanzaba para aquellas decisiones que requerían un quórum simple. Es por ello que resultó tan difícil para los distintos gobiernos poder hacer frente y tratar de eliminar estos enclaves. Recién en el año 2015 fue aprobada en el Congreso una Reforma al sistema electoral, cuyos efectos aún no pueden ser apreciados debido a que las primeras elecciones con este nuevo sistema se efectuaran a finales del año 2017.

Otro enclave importante fue la definición de cargos de senadores designados sin votación popular, debido a que éstos ejercieron durante muchos años un rol clave en la moderación de las fuerzas en el interior del congreso. Nueve de estos senadores (que ejercieron durante ocho años) fueron designados directamente por Pinochet. Aunque posteriormente, con la renovación del Senado la composición resultó ser más heterogénea, esto sin duda impidió enormemente la aprobación de cualquier tipo de Reforma. El año 2005, que fue el año en que finalmente se eliminó la definición de cargos de senadores designados, el congreso mantenía a cuatro representantes pertenecientes a las fuerzas armadas.

La influencia militar ocupó un rol clave dentro de los enclaves autoritarios consagrados en la Constitución. Esto, debido a que constitucionalmente, el Presidente se veía totalmente imposibilitado de remover a los altos mandos de las fuerzas armadas, tanto a los jefes militares como al director general de la policía de Carabineros. Esta característica se mantuvo también hasta el año 2005. Entre los otros aspectos que modificó esta Reforma Constitucional se encuentra además el hecho de eliminar los cargos de senadores vitalicios (que hasta ese momento solo ocupaba Eduardo Frei), y la modificación de las atribuciones del Consejo de Defensa del Estado (COSENA) pasando de ser un órgano resolutorio a uno consultor. Es decir, antes de la reforma éste podía auto convocarse, mientras que ahora solo el presidente tiene la facultad para convocarlo.

A lo anterior se suman otra serie de enclaves que supusieron una gran cantidad de dificultades en relación a la democratización del país después de la transición. Algunos de ellos son, por ejemplo: la imposibilidad de la Cámara de Diputados para acusar constitucionalmente a altos funcionarios públicos que colaboraron con la dictadura; la independencia económica de las fuerzas armadas respecto al poder ejecutivo; o la amplia autonomía de la que gozaba el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. El hecho de que Pinochet pasara a ocupar este cargo después de la transición, también condicionó el ambiente y la vida política de la época, al ejercer tutela sobre el ejército chileno, y al tratarse de un cargo inamovible y con capacidad de definir ascensos y retiros de oficiales (Soto, 2009).

También se encuentran aspectos relacionados a la Corte Suprema, donde en dictadura se aumentó su composición y se nombraron tres magistrados adicionales. Debido a una serie de modificaciones e incentivos aplicados durante el régimen militar, en el momento en que Patricio Aylwin asume la presidencia del país, catorce de los dieciséis miembros de la Corte Suprema habían sido designados durante el régimen de Pinochet (Soto, 2009).

En suma, se ha visto que los enclaves autoritarios heredados del régimen de Augusto Pinochet, y principalmente de la Constitución de 1980, fueron una dificultad fundamental a la hora de implementar un régimen democrático en el país a partir de los años 90'. La gran cantidad de dichos enclaves, consagrados en leyes y la carta magna, permitió que las fuerzas políticas se mantuvieran equilibradas, que las fuerzas armadas gozaran de grandes facultades e impidió por tanto la aprobación de reformas importantes, las cuales solo pudieron ser realizadas a partir del año 2005, veinticinco años después de la transición democrática.

En el caso sudafricano la expectativa común, como se ha señalado era que la Carta de la Libertad guiaría el modelo legislativo. Desde antes de la transición, ya se conocía que existirían ciertos enclaves determinantes del modelo de desarrollo posterior, como por ejemplo el Banco Central en tanto entidad independiente. El economista Padayachee, así como la gran mayoría del ANC en sus inicios, creía que la política monetaria debía servir a los objetivos de crecimiento, empleo y redistribución, por lo tanto un Banco Central autónomo no era consistente con esta idea.

Si el Banco de la Reserva Nacional (Banco Central) se administraba de manera autónoma al plan de desarrollo se restringiría. Sin duda la capacidad de negociación y de cumplir las expectativas del ANC se vería limitada, y por cierto los planteamientos fundados en la Carta de la Libertad. Desde la opinión de los entrevistados, y la literatura de la época, el Partido Nacional el que estaba tratando de encontrar una forma de puerta trasera, para mantener el poder. El resultado de esta negociación, fue el banco central administrado como entidad autónoma, garantizado en la constitución, e incluso Pero sería encabezado por el mismo hombre que lo dirigió bajo el apartheid, Chris Stals. Para Padayachee y para Bond, el enclave autoritario plasmado en el Banco Central haría perder cualquier posibilidad de transformación económica en el corto plazo. Este problema es destacado por varios entrevistados “(...) *no cambiaron el papel del banco central; No lo tocaron. Hasta el día de hoy no hay interferencia*

con el banco central porque es una institución importante en el sector bancario del país, en la economía del país. Al hacer declaraciones alrededor de la moneda, alrededor de las tasas de interés y todo eso. Eso no ha cambiado”.

Un tema clave en el mantenimiento de los enclaves autoritarios es la ausencia de intencionalidad, al menos en el discurso. Las negociaciones en la época de transición fueron tan intensas que muchas veces se entregaban disposiciones claves, en las negociaciones, algo tenía que ser dado, a veces irreflexivamente.

Desde la narración de algunos entrevistados del ámbito académico, el gobierno llegó al poder y trató de moverse libremente, para dar a la ciudadanía aquellos elementos prometidos. Sin embargo la red se tensó y las posibilidades se fueron reduciendo, frente a los enclaves plasmados y la imposibilidad de negociar. Tras fuertes negociaciones el ANC hereda un modelo de desarrollo cuyas características fueron forjadas previas al transpaso del poder.

El resultado es que el ANC, como plantea una entrevistada del ámbito académico, *“no se entromete demasiado en cuestiones económicas. Un ejemplo típico es cómo con la nacionalización, hay mucha discusión acerca de la nacionalización, pero el gobierno se mantuvo callado al respecto, nunca tomó realmente una postura, sobre la nacionalización”.*

En el caso sudafricano otro de los enclaves dice relación con el desmantelamiento del Estado en el apartheid. “El gobierno tenía algunas limitaciones serias porque no tenía suficiente dinero para hacer lo que quiere hacer”. Este fue uno de los argumentos centrales para procurar el crecimiento, y emprender acciones para estimular la economía, obtener altos niveles de crecimiento económico, y el intento de atraer inversión extranjera directa, sin que ello haya determinado la generación de políticas universales. *“(…) Porque en mi opinión, creo que seguimos políticas económicas muy*

conservadoras después de 1994. Y es por eso que todavía estamos luchando con este desafío de crecimiento y desigualdad y pobreza y así sucesivamente. Así que aunque no hemos estado bajo la influencia directa de la Banda Mundial o el FMI, no hay duda de que nuestros ojos todavía se centran en la política económica y así sucesivamente (...) (Entrevistado elite política).

Otro de los enclaves que además dice relación con la imagen estratégica internacional es el Consenso de Washington. Tal como en el caso de Chile, pero a una escala de tiempo más larga. Fue un cambio no esperado. Sin embargo, persisten las contradicciones respecto a la continuidad y la profundización. “ (...) *Creo que hay continuidades entre el Apartheid y el período posterior al Apartheid y creo que eso fue capturado en gran medida en el programa GEAR. Así, en el 78 implementan un programa neoliberal. Paradójicamente, cuando el ANC llega al poder implementan un programa más neoliberal (...)*” *Entrevistado ámbito académico.*

vi. Las Elites en transición y las redes de endogamia

“Así que a través de Black Economic Empowerment, estos hombres y mujeres, jóvenes, negros han sido cada vez más ricos, más ricos y más ricos. Así que esta historia nunca va a parar”.
Entrevistado Elite económica. Sudáfrica

“Creo que la violencia y todo eso se relacionan todo el tiempo con la transición y el evento que fue un compromiso de élite que ha fracasado. Trajo paz, pero no trajo, pero no trajo justicia (...)”
Entrevistada elite política Sudáfrica.

En ambos países, el fin de los regímenes opresivos significó que los grupos que llegaron al poder político fueran quienes habían sido siempre excluidos del mismo. En el caso sudafricano, por ejemplo, se encontraban los grupos oprimidos o privados de sus derechos en el Apartheid, quienes estuvieron fuertemente representados en el ANC, o en el caso chileno quienes fueron exiliados durante al menos dos décadas o desplazados de cualquier posición cercana al poder. Para aquellos grupos, la creación intencional de bases de apoyo en la sociedad y el fortalecimiento de los seguidores partidarios o partidos a través de la provisión de recursos de poder a aliados potenciales han sido mecanismos importantes en la reproducción del poder.

Los pactos, los acuerdos, los contratos sociales, ocupan un lugar sustantivo en los movimientos por la transición política. La manera en que quienes tenían claro que un proyecto neoliberal sería el camino para el desarrollo, fueron convenciendo a distintos actores, pensadores, progresistas, que fueron abdicando a sus principios básicos. La negociación se convirtió en la base para la consolidación de la política económica neoliberal en Chile y la emergencia en Sudáfrica, pero el resultado no era solo el acuerdo en torno al desarrollo, sino también acceder a posiciones sociales.

Teniendo en cuenta la desconfianza, o por lo menos la falta de plena confianza por parte de las élites de negocios establecidas hacia las nuevas élites políticas, hubo una preocupación especial para la creación de grupos empresariales favorables al gobierno en la disputa por el control social en el campo económico. Aquello entendiendo élites como grupos que han acumulado, ya sea en forma individual o por herencia, uno o varios tipos de capitales provenientes de diversos campos. Esta estrategia operó a través de la creación de redes de reciprocidad con las élites previamente establecidas. La existencia de tales vínculos entre redes, a la vez que mejoraban el apoyo empresarial al gobierno, limitaba el poder de los discursos progresistas de cambio e introducía un interés particular en las decisiones políticas (Mascareño, 2011). Es más, según Bond (2014) en esta época y dentro de la planificación de escenarios en Sudáfrica no estaba planteado el hecho de desafiar las normas y prácticas de la élite. Por tanto, no es raro pensar en este fenómeno considerando que estudios como el de Higley y Gunther (1992) realzan la importancia de aquellas élites sobre todo en procesos de transición democrática. Para el caso chileno, este hecho también calza perfectamente con lo que ya decía Silva (2011) respecto a la importancia del equilibrio de fuerzas entre la élite económica (de derecha) y la centroizquierda a finales de 1980, lo que generó aquello que el autor denomina un “partido transversal” que derivó en grandes incentivos para, durante los primeros años del regreso a la democracia, adoptar fórmulas tecnocráticas. En suma, ha sido extensamente estudiada esta idea de creación de redes formales e informales que les permiten a ciertas élites influir en la toma de decisiones, promover intereses o generar consensos (Higley & Gunther, 1992).

Según Alvarado (2013), en el caso chileno las élites de los partidos fueron progresivamente asumiendo un discurso de consenso, de adaptación a ciertas circunstancias políticas, que incluso llevaron a negociaciones en 1989. Si bien esto podría relacionarse en mayor medida a mecanismos que hacen referencia al bloqueo sistemático de alternativas más radicales, detrás de aquello sin duda hay un elemento

de negociación entre élites y creación de redes de reciprocidad para evitar puntos críticos o crisis posteriores relacionadas con la gobernabilidad. Este hecho también se ve representado por el estudio de Delamaza (2011), quien sostiene que las élites en Chile durante la década de los 80', luego de la transición democrática, siguieron permaneciendo en el aparato estatal sin ser mayormente cuestionadas, pero como forma de élite tecnocrática.

Complementando esta lógica, hay medidas de liberalización mediante la aplicación de algunos aspectos de la política económica, mientras que los activos del Estado están alineados y entregados a la gestión privada para los sectores clave de desarrollo económico. En el caso chileno, por ejemplo, la liberalización financiera era esencial para generar una base de apoyo al experimento neoliberal, no relacionado a la parte del sector empresarial que había sido desobediente en los primeros estadios del experimento. Al mismo tiempo, la privatización de la seguridad social en el sistema de AFP (Administradora de Fondo de Pensiones) ofrece un flujo constante y creciente de recursos frescos para alimentar a estos grupos. A pesar de algunas reformas a este sistema por parte de los últimos gobiernos de la Concertación, su estructura se mantuvo intacta. Lo mismo ocurre con la política de concesiones llevada a cabo durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde se semiprivatizan ciertos servicios. Frente a ello, no es raro que en la arena política chilena, por ejemplo, se observen declaraciones incluso de actores políticos haciendo referencia a la endogamia de la élite como un círculo cerrado.

En términos empíricos, incluso al analizar la endogamia de la élite empresarial en Chile, un estudio de CIPER analiza las redes de los directorios de empresas chilenas, donde se observa que por ejemplo entre un grupo de 50 grandes empresas del país, 40 de ellas conforman redes donde ciertos actores son fundamentales. Aquellos actores más importantes, junto con el número de participación en empresas es lo que se ve representado en la siguiente figura.

Figura 4: Élite empresarial en Chile

Nombre director	N° empresas donde es director
Andrónico Luksic	5
Gonzalo Menéndez	4
Luis Felipe Gazitua Achondo	4
Bernardo Matte Larraín	3
Canio Corbo Lioi	3
Carlo Solari Donaggio	3
Cristian Lewin Gomez	3
Francisco Pérez Mackenna	3
Hernan Büchi Buc	3
Jean Paul Luksic Fontbona	3
Jose Maria Eyzaguirre Baeza	3
Juan Antonio Guzman Molinari	3
Juan Claro Gonzalez	3
Richard Büchi Buc	3
Vittorio Corbo Lioi	3

Fuente: CIPER Chile, <http://ciperchile.cl/2015/12/03/las-redes-de-directores-de-las-grandes-empresas-de-chile/>

En el caso de Sudáfrica, se siguieron medidas de privatización sin control para el permiso de capitales externos y básicamente, no se tocó la estructura de sectores claves, como la minería. El núcleo de la transformación fue la creación de una elite empresarial negra junto con su incorporación al sistema (Bond, 2014), un cambio en la composición interna de la élite económica general, una vez más, con el fin de aumentar el apoyo a las políticas del gobierno. Tal como expresa Bond (2014) de manera excepcional, desde los 90' en Sudáfrica se requirió que las élites hicieran un esfuerzo especial que suponía el aprender los objetivos de las otras, elites, sus filosofías y discursos y fundamentalmente tuvieron que comenzar a hacer concesiones (retóricas pero también concretas) para construir un clima de confianza que diera pie a una negociación exitosa entre partes, que sin duda tenían intereses opuestos. A partir de aquello poco a poco se fue produciendo lo que el autor llama una “*coerced harmony*” (p.44).

Tomando en cuenta lo anterior, es interesante observar cómo en

Sudáfrica, por ejemplo, la planificación de la política macroeconómica se convierte en un proceso totalmente exitoso respecto a la confección de élites políticas, dejando a los disidentes fuera del campo. No obstante, las negociaciones y los pactos funcionaron incluso desde el año 1987, cuando el ANC emitió un comunicado titulado “*Yes to real negotiations. No to bogus negotiations*” (p.14), que se tradujo en negociaciones secretas donde se establecieron compromisos preliminares entre los máximos líderes de las facciones de las élites (Van Wyk, 2009, p.15).

En términos de política económica, este área tampoco estuvo exenta de negociaciones entre élites, lo que significó para el ANC, el NP y las élites empresariales comprometerse en varios aspectos, entre los que destaca: 1. el “alojamiento” y acomodación de las élites del período anterior; 2. el reparto del poder entre el ANC, el NP e el IFP para llevar a cabo un gobierno de unidad; y 3. afianzar la independencia del *South African Reserve Bank*; entre otros (Van Wyk, 2009).

Como se ha argumentado anteriormente y tal como sostiene Van Wyk (2009), claramente la transición desde el apartheid con una minoría blanca hacia un régimen democrático con mayoría negra, estuvo basada y supone una vasta negociación junto con la creación de alianzas y pactos entre élites de diversos sectores. Aquí emergen preguntas sustantivas, como las que plantea Bond, ¿Cómo fue que, en la segunda mitad de 1993, COSATU, uno de los sindicatos más radicales del mundo, aprobó una serie de políticas en desmedro del bienestar del movimiento?

Un elemento que emerge en las entrevistas, especialmente en el caso de las elites más conservadoras es la retórica en torno a la corrupción y a la culpabilización del *Black Economic Empowerment*. Incluso estas críticas también vienen de la izquierda. Desde la observación de Bond esto es un punto de crítica fácil de crítica que oculta una paradoja, ya que finalmente es el poder blanco el que usa rostros

negros para acceder de otra manera al poder, al gobierno, y a determinar la política económica. Incluso se ha llegado a plantear que la elite del apartheid ha puesto una trampa neoliberal a la elite aparentemente ascendente negra. Esta tesis tiene sentido en la medida que dicha configuración de la elite finalmente determina la incapacidad de generar cambios sustantivos al problema de la sumisión racial negra, al orden social general.

Sin embargo, también existen otras visiones más críticas, irónicas y que reflejan cierta frustración de la parte más crítica de la elite. Un entrevistado, refiriéndose a un modelo de la política económica plantea: (...) *Se le puede llamar Champagne socialismo. Champagne, en el sentido de que no socialismo en un sistema de mercado. Socialismo para las personas que se dicen comunistas que tienen acceso a los mercados. El Partido Comunista de Sudáfrica no es el centro del proletariado y el pueblo. Son miembros de la burguesía de Sudáfrica (...)* Y agrega, “ (...) *Los miembros del comité central son o primeros ministros, miembros de los consejos políticos; que son miembros de la burguesía. Se benefician de las políticas liberales; que gastan dinero en motos, coches y restaurantes, todos ellos. Es decir “Champagne socialismo”. Se trata de beber vino y hablar (...) Creo que no es el auténtico socialismo que fue inicialmente conceptualizada!!. Ellos disfrutan de vivir en condiciones de neoliberalismo”*.

VI. Reflexiones Finales

Los mecanismos expuestos explican interpretativamente el abandono por parte de la ANC y la Concertación de una visión de desarrollo inclusivo y que buscara la igualdad. Esta idea estuvo presente en su discurso inicial, y sugiere que la combinación de los elementos internos de las alianzas de gobierno, con el poder equilibrio en el ámbito nacional e internacional - a causa de la persistencia de la propiedad en manos de las elites tradicionales - no fueron elementos contextuales favorables al discurso y las intenciones normativas y políticas iniciales. En consecuencia, las élites nacionales se acondicionaron y restringieron para tomar las decisiones que tomaron. En los casos de Sudáfrica y Chile, Mbeki, Aylwin y Frei, y otras elites nacionales, se enfrentaron en dos grupos de intereses diametralmente opuestos que defendían decisiones políticas contrarias. Por un lado, los inversores extranjeros y la comunidad empresarial nacional que estaba presionando para la adopción de políticas económicas neoliberales, incluyendo privatizaciones, la desregulación, la liberalización financiera y comercial, y la consecución de un déficit de presupuesto bajo. La principal fuente de poder de este grupo de interés fue la inversión. Por otro lado, los ciudadanos/as y los movimientos sociales más amplios, debilitados por la violencia del autoritarismo anterior, buscaron reivindicar elementos basales como la superación de la pobreza y la prestación de servicios como parte de una transformación más amplia a lo largo de las líneas de un discurso Estado de bienestar, esperando que se avanzara paulatinamente en las promesas de la transición. La influencia ejercida por este grupo se basa simplemente en el voto, al menos hasta el 2010 en Chile y 2015 en Sudáfrica.

En el caso de Sudáfrica, los ciudadanos/as fueron, sin embargo, debilitados por la estructura de los partidos políticos existentes y el hecho de que ninguno de ellos representaba una verdadera amenaza para el ANC (Habib y Taylor, 2001). En el caso chileno, la exclusión

explícita del Partido Comunista, como (prácticamente) el único modelo organizado de la política de izquierda, impidió el cumplimiento exitoso de tales demandas. Recordemos que el PC recién fue incorporado en el último periodo presidencial de Michelle Bachelet en la Nueva Mayoría³⁰.

En este contexto, la presión ejercida por los inversionistas extranjeros se ha percibido como inmediata y, como resultado, Mbeki eligió a aceptar sus demandas, y Aylwin decidió continuar en el camino de la "posible", el camino de la continuidad, ¿Cuáles fueron las condiciones de posibilidad de alternativas en los años inmediatamente posteriores a 1994 en Sudáfrica y en 1990 en Chile? Las opiniones de las élites gobernantes de la época en ambos países son bastante claras: mientras que la adopción de un programa económico radical no fue posible, con la búsqueda de una lógica de la responsabilidad y reformista vista como esencial, consideramos que, al menos hipotéticamente, la versión débil de una agenda social-demócrata, habría sido posible. De hecho, incluso fue esperado por la comunidad empresarial y otros grupos de interés, tal como se había anunciado en el discurso electoral.

Si se hace el ejercicio de visualizar posibilidades, parece que una política socialdemócrata podrían haberse generado, si es que los mecanismos analizados no hubiesen existido de la manera que lo han hecho. Como justificación discursiva de la ausencia de este tipo de política más consistente con el progresismo y radical, las elites mencionan que el discurso antidemocrático que había surgido en la sociedad sudafricana inmediatamente después de 1994 y en la sociedad chilena después de 1990 y el nuevo contexto internacional de la década de 1990, era una amenaza. En este sentido el miedo era una amenaza a las instituciones democráticas, sin embargo dicha amenaza solo aparece como poco convincente. Creemos que las condiciones estaban abiertas, cualquier desafío a las coaliciones de gobierno de izquierda podría haber surgido desde, por ejemplo, movimiento

³⁰ El último periodo no fue incluido en el análisis.

sindical en el caso de Sudáfrica (no en Chile debido a su desmontaje y debilidad).

Esta posibilidad de realización empírica de la social democracia, sin embargo, fue embargada por los mecanismos analizados. Una insurrección popular, a su vez, fue prácticamente imposible en ambas sociedades, teniendo en cuenta la experiencia del fracaso durante los años antes de la transición en Sudáfrica, y la del derrocamiento de un gobierno de izquierda en el caso chileno. La hipótesis de la continuidad de la política de desarrollo económico implementado por los regímenes de neoliberales "historias de éxito" del Sur se puede observar empíricamente en toda la trayectoria analizada. En un contexto internacional basado en la presión para la liberalización, las instituciones neoliberales no quedan exentas de cambio, sino que están sujetos a modificaciones constantes.

Estas modificaciones, como se evidencia en el análisis de los discursos políticos, no sólo dependen del contexto político y las barreras internas al cambio institucional, sino también en las relaciones entre las diferentes instituciones y cómo estas relaciones se conciben por las partes interesadas. En una constelación tan compleja, la supremacía de un discurso de cambio hubiese sido posible, incluso en la cúspide de la jerarquía institucional: las elites. En concreto, la inconsistencia entre el discurso y las instituciones nos permite entender cómo las élites políticas han tratado de modificar y mantener los regímenes de desarrollo a su medida. Históricamente diferentes situaciones, como en los casos de Chile y Sudáfrica, están influenciadas por los mecanismos de continuidad, discursos y prácticas en Chile y Sudáfrica, y estos mecanismos han logrado generar trayectorias específicas, donde las instituciones han cambiado semánticamente, pero sólo con el fin de mantener el régimen socioeconómico general muy similar al periodo autoritario.

La crisis financiera mundial ha estimulado muchas investigaciones sobre la resistencia y emergencia del neoliberalismo. Esta tesis ha

elaborado una sistematización de seis mecanismos concretos que permiten comprender la emergencia, continuidad y consolidación del neoliberalismo en dos países con pasado autoritario reciente.

Estos seis mecanismos se mantienen en el tiempo porque han sido capaces de dominar y controlar los bloques políticos y sociales de ambos países, puesto que ha sido finalmente más favorable a sus intereses, independiente de los discursos políticos predominantes, permitiendo por cierto cierta soltura en espacios no sustantivamente relevantes en la configuración institucional de los países, como el caso de la sociedad civil organizada, cuyas demandas han sido no vinculantes en el periodo analizado.

Una de las principales conclusiones ha sido la inconsistencia entre el nivel discursivo (y las promesas) de las coaliciones de ambos países versus la realidad empírica del diseño institucional. Esta tensión se explica por el propio neoliberalismo y su capacidad de resistir en las ideas, incluso contrarias a sí mismo como sistema institucional. Las ideas y los discursos en economías capitalistas post autoritarias, emergentes, y golpeadas por las crisis políticas son un caldo de cultivo provechoso para la emergencia débil de las instituciones, por un lado, y para la desigual distribución del poder entre los actores, por otro.

El análisis empírico ha demostrado que mientras que en los grupos dominantes en Sudáfrica han consolidado el neoliberalismo de modo progresivo, en Chile han tenido que mantener el control institucional por medio de la incorporación progresiva de elementos social demócratas, posterior a la fase de consolidación de los 90. Por lo tanto, mientras que en Sudáfrica el bloque social dominante representado por el ANC ha reforzado su compromiso con el neoliberalismo, el bloque social dominante chileno se enfrenta a problemas cada vez mayores debido a la necesidad de incorporar a los sectores empresariales más amplios y las fuerzas políticas de base.

Estos seis mecanismos, por un lado, ayudan la comprensión de cómo

los cambios en la correlación de fuerzas existentes han diseñado el desarrollo post autoritario en materia económica, pero por otro lado también se iluminan cómo estos procesos pueden llevar a la posibilidad de cambio político y económico de carácter más sustancial, enfrentando justamente estos mecanismos. Un elemento transversal de los mecanismos es la aparente exclusión de los grupos subordinados, que disputan el poder político y que con su fuerza dan luces sobre la inconsistencia entre los discursos políticos de las coaliciones – dirigidos a las mayorías – y la realidad que han ido diseñando. Cabe sin duda preguntarse por la agencia de los actores, y las barreras a esa agencia. Si bien la tesis no ha estado orientada a responder la exclusión a nivel total de la sociedad, si es posible afirmar que los mecanismos institucionales han sido – al menos – barreras vinculantes a esa posibilidad de cambio. El neoliberalismo ha permanecido, porque el resultado de las coaliciones políticas en materia de política económica ha sido insuficiente e insatisfactorio evaluado de acuerdo a sus propias premisas iniciales y los indicadores que hemos apreciado. Ahora bien, no se puede hablar de un agotamiento de estas coaliciones a pesar de sus inconsistencia, sino más bien se puede constatar que aun los líderes tanto del ANC en Sudáfrica como de la hoy 2017, Nueva Mayoría de Chile (ex Concertación) podrían insistir, y de hecho lo hacen que la configuración actual del escenario Latinoamericano, Africano, mundial proporcionan un margen de maniobra que ha sido insuficiente.

En el cuadro siguiente se presenta de modo resumido la realidad de los seis mecanismos que definen la continuidad y la consolidación del neoliberalismo en sociedades postautoritarias de acuerdo a tres dimensiones claves para su comprensión y comparabilidad, que se han observado implícitamente en el análisis de cada uno de los seis mecanismos, a saber:

1. Actor o protagonista del mecanismo
2. Estrategia del mecanismo

3. Los efectos del mecanismo en la Política Económica

Figura 11. Mecanismos de consolidación y emergencia del neoliberalismo

	1. Actor o protagonista del mecanismo	2. Estrategia del mecanismo	3. Los efectos del mecanismo en la Política Económica
1. Los límites de la impugnación y el bloqueo sistemático a alternativas más radicales de izquierda.	Coaliciones de gobierno de la transición	Sedución y cooptación de alternativas de izquierda	Limitación del progresismo
2. La imagen estratégica internacional	Organismos Internacionales	Preocupación por indicadores macroeconómicos	Conducción de la política económica a estándares internacionales
3. Capital moral: El lado oscuro de la legitimidad del oprimido	Grupos subalternos del periodo autoritario	Argumentación desde la condición de víctima	Explotación de la condición de víctima
4. La influencia de los think tank: El ensamblaje entre conocimiento y neoliberalismo	Centros académicos	Generación de conocimiento legítimo para el diseño de políticas públicas	Instalación de paradigmas legítimos, ausencia de crítica
5. Los enclaves autoritarios y la facticidad del Path dependence	Grupos en el poder del periodo autoritario	Limitación factual de la deliberación presente y futura	Permanencia del clivaje legal autoritario
6. Las Elites en transición y las redes de endogamia	Elites transversales	Coordinación de clase independiente del sector público	Instrumentalización de las decisiones

Tal como muestra la figura 11, para ambos casos nacionales es posible identificar estos elementos comunes, tanto en la consolidación del neoliberalismo en el caso de Chile, y la emergencia en el caso sudafricano.

La interpretación por mecanismos en este sentido ha mostrado como institucionalmente la política económica en Chile y Sudáfrica varían internamente de acuerdo al contexto y la historia de cada Estado, en el tiempo y de acuerdo a las personas, grupos, actores (1) que se han esforzado por darle forma según sus cosmovisiones e intereses, a través de estrategias (2), generando un efecto (3) en el sistema mismo de la política económica post autoritaria de ambos países. Tal cual dan cuenta estos seis mecanismos, y como fue planteado en el marco teórico, la economía siempre está incrustada a la sociedad, a la colectividad, en palabras de Hall, la economía opera como política y las ideas económicas tienen poder político, contrario a lo que nos ha mostrado la sociología sistémica y funcionalista. La construcción del capitalismo neoliberal, del neoliberalismo en ambos países ha

implicado silencios y visibilización de voces, de administrar las influencias externas, de adaptarse a los paradigmas, gestionar la endogamia, y administrar las confrontaciones de proyectos distintos de economía.

El neoliberalismo ha sido el término propuesto, a pesar de su complejidad y falta de aceptación para abordar la problemática del diseño institucional de las economías nacionales de ambos países. Debe verse por tanto como una forma de abordar la problemática económica en general. La problemática económica debe abordarse en todas las circunstancias (Casassas y Wargner, 2016), y a través del análisis comparado se ha visto como el neoliberalismo llegó a cooptar en cierta medida la autocomprensión de ambas naciones, limitando por cierto la autonomía de los actores y coordinando la configuración de la democracia, de la sociedad, y su orden jerárquico

Independiente de este orden jerárquico propio del rezago autoritario, es interesante destacar que las alternativas han estado representadas al menos discursivamente por organizaciones ideológicamente muy diversas, de la sociedad civil que se quedaron fuera de la disputa de la política económica y de los procesos económicos, en ambos países, ya sea “por inexpertos, por soñadores, por exigentes” (entrevistada Elite Económica, Sudáfrica), y que sin embargo sucumbieron a los escenarios basados en *stakeholders* y demandas externas para el desarrollo.

Ambos países elaboraron desde la institucionalidad respuestas desiguales y muchas veces violentas, e ineficaces a las contradicciones generadas por el neoliberalismo en distintas áreas, como vimos en el Capítulo sobre los países.

Tal como observamos a lo largo de los capítulos, ¿podría haberse esperado más de las reformas en materia económica?. Analizando el devenir histórico siempre existió la posibilidad de que el Partido Comunista Sudafricano, y Chileno – los únicos de la izquierda con

base electoral consolidada – hubiesen generado un quiebre. En el caso de Sudáfrica, una liberación de la Alianza con el ANC, en el caso chileno acuerdos electorales previos a la Nueva Mayoría, “hablar a la izquierda, actuar a la derechas” aparentemente seguirá siendo un modo de proceder en el corto plazo. Sin duda al realizar una observación principalmente basada en los actores con poder de decisión emerge la pregunta por la agencia y la evidencia empírica de los actores para interponerse a esas políticas más progresistas. Aquí vale la pena considerar dos cosas. Primero, el objetivo de la tesis no es decir que los seis mecanismos son los únicos responsables del continuismo y consolidación, sino ¿De qué manera se constituye la trayectoria de la política económica de Chile y Sudáfrica, en sus transiciones post periodos autoritarios? Y se ha constatado que el rol de las elites ha sido sustantivo. Segundo, humanizar continuamente a los movimientos de izquierda no sería del todo correcto observando las paradojas de las luchas en ambos países. A pesar de ciertas interferencias vinculantes – en el caso sudafricano, y no vinculantes en el caso chileno no fueron capaces de dinamitar la política económica desigual. Es probable que tanto en el caso de Chile como Sudáfrica, con los crecientes niveles de democratización y apertura institucional las fuerzas de las organizaciones puedan tener algo más de energía para unir los hilos intelectuales, estratégicos y tácticos en una oposición consolidada. Avanzando de este modo hacia la posibilidad de transformación más genuina que la ofrecida por las elites reformistas, tanto nacionales como extranjeras. El tránsito desde el Apartheid, o la dictadura cívico militar, al neoliberalismo en los casos de Sudáfrica y Chile no es solamente un giro de elites, o una transición de elites (Bond, 2014) sino también un indicador del debilitamiento de las soberanías populares y la capacidad de tematizar las demandas.

Final reflections (English version)

The mechanisms discussed above interpretatively explain the abandonment by the ANC and the *Concertación* of a developmental vision that would have furthered equality and been inclusive. This idea was present in their initial discourse, and suggests that the combination of elements internal to the governing alliances and the national and international balance of power – deriving from the retention of property in the hands of the traditional elites – were contextual elements that were not favourable for the initial discourse and the normative and policy intentions accompanying it. As a result, the national elites gradually adjusted to these new constraints in order to take the decisions that they did. In the cases of South Africa and Chile, Mbeki, Aylwin and Frei came up against two groups whose interests were diametrically opposed that defended divergent political decisions. On the one hand, foreign investors and the national business community who were pressing for the adoption of neoliberal economic policies, including privatization, deregulation, financial and commercial deregulation, and the attainment of a low budget deficit. The main source of power for this interest group was investment. On the other hand, the citizens and the largest social movements, debilitated by the violence of the preceding periods of authoritarian rule, pressed for the recognition of basic needs such as the necessity to overcome poverty and receive basic service provision as part of a wider transformative agenda along the lines of a welfare state discourse, with the hope that this would be gradually attained through the promises of the transition. The influence exercised by this group is based on the vote alone, at least until 2010 in Chile and 2015 in South Africa.

In the case of South Africa, the citizens were, nonetheless, debilitated by the existing structure of the political parties and the fact that none of them represented a real threat to the ANC (Habib and Taylor, 2001). In the Chilean case, the explicit exclusion of the Communist Party (*Partido Comunista*, or PC), which represented (practically) the

only organized model of leftist politics, undermined the successful realization of these demands. We should recall that the PC has recently been incorporated, during Michelle Bachelet's last presidential term, into the New Majority (*Nueva Mayoría*) electoral coalition.³¹

In this context, the pressure that foreign investors exerted was felt immediately and, as a result, Mbeki chose to meet their demands, and Aylwin decided to continue along the path of the possible, the path of "continuity". What conditions would have allowed for the realization of alternative possibilities in the years immediately following 1994 in South Africa and 1990 in Chile?

The opinions of the governing elites of the time are reasonably clear: while the adoption of a radical economic programme wasn't possible, with the pursuit of a logic of responsibility and reform being considered essential, we believe that, at least hypothetically, a weak version of a social-democratic agenda would have been feasible. In fact, this was even anticipated by the business community and other interest groups, just as it had been proclaimed in the electoral discourse.

If one makes the attempt to visualize possible outcomes, it appears likely that a social-democratic agenda could have been formulated were it not for the existence of the mechanisms analysed in the foregoing chapters. As a discursive justification for the absence of these more progressive and radical political practices, the elites claim that the anti-democratic discourse that had arisen in South African society immediately after 1994 and in Chilean society after 1990, as well as in the new international context of the 1990s, was a threat. In this sense fear was a threat to democratic institutions. However, a convincing case for the existence of such a threat is difficult to make. We believe that the conditions of the time were open-ended, and some type of leftist challenge to the governing coalitions could have arisen

³¹ The last period was not included in the analysis.

from, for example, the trade union movement in South Africa (though not in Chile, owing to its disbanding and weakness).

This possibility for the empirical realization of social democracy was, however, closed down by the mechanisms that have been analysed in this thesis. Likewise, a popular insurrection was practically impossible in both societies, taking into account the experience of failure during the years preceding the transition in South Africa, and the deposition of a leftist government in the Chilean case. The hypothesis of continuity in economic development policies implemented by neoliberal regime “success stories” of the South can be observed throughout the trajectory analysed in the foregoing chapters. In an international context based on the exertion of pressure to implement liberalization, neoliberal institutions are not exempt from change, but are rather subject to constant modification.

These modifications, as the analysis of policy discourse reveals, depend not only on the political context and internal obstructions to institutional change, but also on the relations between the different institutions and the manner in which the interested parties conceive of these institutions. In such a complex constellation, it would have been possible for a discourse of change to have won out, even at the summit of the institutional hierarchy: the elites. In particular, the inconsistency between discourse and institutions allows us to understand how political elites have tried to modify and maintain developmental regimes that are most suited to their own needs. Historically different situations, as in the cases of Chile and South Africa, are influenced by the mechanisms of continuity, discourses and practices in Chile and South Africa, and these mechanisms have succeeded in generating specific trajectories along which institutions have changed semantically, but only in order to maintain a general socio-economic regime closely resembling that of the authoritarian period.

The global financial crisis has occasioned a great deal of research

about the persistence and emergence of neoliberalism. This thesis has elaborated a systematization of six concrete mechanisms that make it possible to understand the emergence, continuity and consolidation of neoliberalism in two countries with a recent authoritarian past.

These six mechanisms have endured over time because they have been able to dominate and control the political and social blocs of both countries, given that this dominance has ultimately been best suited to their interests, independently of the dominant political discourses, and indeed allowing for a certain fluidity in the spaces that are not of substantial relevance to the institutional configuration of both countries, such as the case of organized civil society, whose demands have not been binding in the period analysed in this study.

One of the main conclusions has been the inconsistency between the discursive level (along with the promises) of the coalitions in both countries and the empirical reality of institutional design. This tension is explained with reference to neoliberalism itself and its capacity to resist ideas, including those opposed to it as an institutional system. Ideas and discourses in capitalist, post-authoritarian economies that are newly emerging and battered by political crises are a breeding ground for the emergence of weak institutions, on the one hand, and for the unequal distribution of power between the main actors, on the other.

The empirical analysis has demonstrated that even while the dominant groups in South Africa have consolidated neoliberalism in a progressive manner, in Chile they have needed to maintain institutional control by means of the progressive incorporation of social-democratic elements following the consolidation phase of the 1990s. Consequently, while in South Africa the socially dominant bloc represented by the ANC has reinforced its commitment to neoliberalism, the dominant Chilean social bloc has run into ever-increasing problems owing to the need to incorporate both the largest business sectors and grassroots political support.

Identifying these six mechanisms, on the one hand, allows for a better understanding of how changes in the alignment of existing forces have shaped the post-authoritarian development of economic policies, while on the other hand also illuminating how these processes can lead to the possibility of political and economic change of a more substantial nature, precisely by opposing these mechanisms. One cross-cutting element of all these mechanisms is the apparent exclusion of subordinate groups able to challenge political power and use their strength to reveal the inconsistencies between the political discourses of the coalitions – aimed at winning majorities – and the reality that they have designed. It is nonetheless worthwhile interrogating the agency of these majorities, as well the obstacles to the exercise of this agency. While the thesis has not aimed at engaging with exclusion at the level of society as a whole, it is indeed possible to affirm that the institutional mechanisms have been – at the very least – obstructions to such a possibility for change. Neoliberalism has remained in place because the outcome of the political coalitions in political-economic terms has been insufficient and unsatisfactory when evaluated by the standards of their own initial premises and the indicators that we have assessed. That said, the inconsistency of these coalitions has not led to their depletion. One can rather conclude that the leaders both of the ANC in South Africa and of Chile's *Nueva Mayoría* (formerly *Concertación*) of today, 2017, will be able to persevere, and in fact they make as if the contemporary Latin American, African and global stage has left them with insufficient room for manoeuvre.

The following table sets out schematically the reality of the six mechanisms that define the continuity and the consolidation of neoliberalism in post-authoritarian societies in accordance with three key explanatory and comparative dimensions, which have been implicitly observed when analysing each of the six mechanisms, namely:

1. Actor or protagonist of the mechanism
2. Strategy of the mechanism
3. Effects of the mechanism on economic policy

Figura 12. Mechanisms of consolidation and emergency of the neoliberalism

	1. Actor or protagonist of the mechanism	2. Strategy of the mechanism	3. Effects of the mechanism on economic policy
i. The limits of the dispute and the systematic blocking of more radical leftist alternatives	Coalitions of the transitional government	Seduction and co-optation of leftist alternatives	Limitation of progressivism
ii. The strategic international image	International bodies	Concern for macro-economic indicators	Conducting economic policy according to international standards
iii. Moral capital: The dark side of the legitimacy of the oppressed	Subaltern groups of the authoritarian period	Argumentation from the perspective of the victim	Exploitation of the condition of the victim
iv. The influence of think tanks: The blending of knowledge and neoliberalism	Academic centres	The generation of legitimate knowledge for the design of public policies	The installation of legitimate paradigms, absence of critique
v. The authoritarian enclaves and the facticity of path dependence	Groups in power from the authoritarian period	Factual limitation of future and present deliberation	Continuation of authoritarian legal cleavage
vi. Elites in transition and endogamous networks	Cross-cutting elites	Co-ordination of class, independently of political sector	Instrumentalization of decisions

As Figure 12 shows, for the two national cases it is possible to identify these common elements, both for the consolidation of neoliberalism in the case of Chile and for its emergence in the South African case.

The interpretation according to mechanisms in this sense reveals how

at an institutional level political policies in Chile and South Africa vary internally in accordance with the context and the history of each state, temporally and in accordance with the people, groups and actors (1) that have endeavoured to form these policies according to their worldviews and interests, by means of strategies (2), generating an effect (3) on the post-authoritarian economic policy system of both countries. As these six mechanisms show, and as the theoretical framework has suggested, the economy is always embedded in society, in the collectivity, in Hall's terms. The economy operates as a polity and economic ideas have political power, contrary to what systemic and functionalist sociology have shown us. The construction of neoliberal capitalism, of neoliberalism, has led to the silencing and amplification of voices in order to administer external influences, adapt to new paradigms, manage endogamy, and administer the confrontations arising between distinct economic projects.

Despite its complexity and lack of universal acceptance, neoliberalism has been the term proposed here for the purpose of approaching the problem of the institutional design of the national economies in both countries. As such, it should be seen as a way of approaching the economic *problématique* in general. The economic *problématique* needs to be approached in all cases (Casassas and Wagner, 2016), and by means of comparative analysis we have seen how neoliberalism came to some extent to co-opt the self-understanding of both nations, coming indeed to limit the autonomy of the actors co-ordinating the configuration of democracy, of society and its hierarchical order.

It is interesting to note that the alternatives have been represented, at least discursively, by very ideologically diverse civil society organizations, who were left out of disputes about economic policy and economic processes in both countries, being perceived as unqualified, unrealistic and demanding, according to one informant (Economic Elite interview, South Africa), and who nonetheless succumbed to planning scenarios based on "stakeholders" and external demands for development.

Both countries provided institutionally formulated responses that were unequal and often violent, and incapable of resolving the contradictions generated by neoliberalism in distinct areas, as we have seen in the chapter dealing with the two countries.

A question we pose throughout the chapters above is: would it have been possible to expect that more would have come from the reforms in economic affairs? Analysing the historical path, it is apparent that there was always a possibility that the South African and Chilean communist parties – the only leftist parties with a consolidated electoral base – could have provoked a rupture. In the South African case, this would have entailed breaking free of the Tripartite Alliance with the ANC, and in the Chilean case consolidating electoral accords prior to the *Nueva Mayoría*. As things stand, however, “speaking left, and acting right” will apparently be how things will proceed over the short term. Undoubtedly, making such an observation based primarily on actors with decision-making power raises the question of the agency and the empirical evidence actors require when intervening in these more progressive policies. Here it is worth making two observations. First, the aim of the thesis is not to claim that the six mechanisms identified here are solely responsible for continuity and consolidation. Rather, doing so seeks to address the question: how has the political-economic trajectory of Chile and South Africa been constituted in their post-authoritarian transition periods? The conclusion reached has been that the role of the elites has been substantial. Second, continuously humanizing movements of the left is not entirely appropriate when observing the paradoxes of the struggle in both countries. Despite certain interferences that have been binding in the South African case, and non-binding in the Chilean case, they were unable to dynamite the unequal economic policies. It is likely that in both the South African and the Chilean cases, with increasing levels of democratization and institutional opening, organizations may have more power to unite the intellectual, strategic and tactical threads into a consolidated opposition. In this manner they

might take steps towards a more genuine transformation than that offered by the reformist elites, both national and foreign. The transition from apartheid, or the civil-military dictatorship, to neoliberalism in the cases of South Africa and Chile is not only a switching of elites, or an elite transition (Bond, 2014), but also an indicator of the weakness of popular sovereignty and the capacity to formulate demands.

VII. Apéndice. Metodología de la Tesis.

1. Diseño de investigación

El proyecto tuvo como objetivo el análisis interpretativo de las estructuras institucionales de la política económica correspondientes a dos países semi-periféricos, a saber: Sudáfrica y Chile, en términos de sus articulaciones específicas y sus transformaciones históricas de las recientes, posteriores a sus periodos autoritarios, hasta el año 2010.

Se analizarán las autocomprensiones de las elites de ambas sociedades, como secuencias de transformaciones socioeconómicas de estos países, en el contexto de las trayectorias históricas más amplias.

El análisis ha estado basado principalmente en la búsqueda de mecanismos comunes que den cuenta de las trayectorias neoliberales de ambas sociedades. Se ha intentado, sin embargo, no subestimar la variación.

2. Pregunta de investigación

La motivación de desarrollar esta investigación doctoral estuvo fundada en una pretensión académica, y por otro lado en una dimensión práctica, motivada por tratar de entender los principios rectores de la política económica de la transición Chile.

En segundo lugar, a una motivación sociológica de observar las elites en la sociedad, dado que la mayoría de las investigaciones de los últimos años en la disciplina habían puesto el foco en los movimientos sociales. Observar y auscultar la clase dominante me parecía una forma necesaria de comprender el ordenamiento jerárquico de la sociedad. Los “desfavorecidos” en la sociedad son permanentemente

observados y analizados.

En el año 2011 comencé a trabajar con el profesor Peter Wagner y comencé a involucrarme en el proyecto TRAMOD, trajectories of modernity donde se abrieron las posibilidades teóricas y empíricas de conciliar la perspectiva analítica de la observación social con la dimensión interpretativa de la misma. La cual pretende entender, interpretándola, la realidad de sociedades singulares, con posibilidades de generalización global, sin perder de vista las particularidades de estas sociedades singulares. Y con ello superar – en cierto modo - el nacionalismo metodológico.

A partir de lo anterior, comencé indirectamente a formularme una serie de preguntas en torno a Sudáfrica, en tanto sociedad singular, a través de nuestras lecturas sumadas al conocimiento de los compañeros sudafricanos y conocedores de Sudáfrica.

En este proceso comenzaron a cristalizarse dimensiones comunes, similitudes que resistían a pesar de las diferencias, entre la configuración de ambas sociedades particulares. Se fundó una constelación cristalizada de similitudes en las trayectorias de Chile y Sudáfrica, influenciada por mis ojos de investigadora Chilena y por la realidad empírica e histórica de ambos países post autoritarios.

Esta constelación de similitudes permitió superar – al menos contingentemente - la barrera epistemológica e histórica que ha incomunicado América latina y el continente africano

Por tanto, configuración de la pregunta de la tesis se constituyó en la que siguiente:

¿De qué manera se constituye la trayectoria de la política económica -emergencia, continuidad y cambio- de Chile y Sudáfrica, en sus transiciones post periodos autoritarios?

El trabajo de tesis se plantea en dos niveles:

1. Sociológico interpretativo: Desarrollar un marco teórico de explicación de la emergencia y la evolución de las instituciones económicas en sociedades post autoritarias.
2. Sociológico analítico-empírico: Explorar los mecanismos que impulsan el cambio y la continuidad institucional en los regímenes de desarrollo post autoritarios, en lo referente a sus políticas económicas (interacciones entre las dinámicas políticas, sociales y económicas).

Para cumplir con la pregunta de investigación, el objetivo general es el siguiente: Identificar y comprender los mecanismos que impulsan la emergencia, el cambio y continuidad de la política económica en Chile y Sudáfrica.

Objetivos específicos	Capítulo
1. Identificar los actores relevantes, prácticas y discursos presentes en la transición postautoritaria de Chile y Sudáfrica.	Capítulo I
	Capítulo III
	Capítulo IV
2. Interpretar las prácticas y discursos en un nivel normativo de los grupos dominantes que participan en el proceso de deliberación del diseño institucional de la política económica en Chile y Sudáfrica	Capítulo III
	Capítulo IV
	Capítulo V
3. Identificar eventos críticos de la trayectoria de los principios rectores de la política económica en Chile y Sudáfrica.	Capítulo III
	Capítulo IV

<p>4. Explicar el establecimiento del neoliberalismo como la configuración actual del capitalismo moderno en los países postautoritarios.</p>	<p>Capítulo II Capítulo V</p>
<p>5. Desarrollar hipótesis, apoyadas empíricamente, sobre la autocomprensión económica de los países post-autoritarios.</p>	<p>Capítulo V Conclusiones</p>

3. Metodología de Investigación

La metodología de trabajo ha consistido:

En primer lugar (1) El desarrollo individual, en profundidad de los estudios de casos, Chile y Sudáfrica, en base a información principalmente cualitativa y complementada con información cuantitativa.

En segundo lugar, (2) La ampliación de la interpretación de los resultados mediante la comparación de los casos en base a sus similitudes.

El método que se ha usado es la *interpretación comparada por similitudes*, caracterizado por la búsqueda de la evolución más o menos similar, en este caso de dos países del llamado sur global, con economías de ingresos medios-altos, con una configuración política post autoritarios con democracias recientes. Luego determinar si estos acontecimientos son similares, evitando subestimar la variación y sucumbir a las ideas de las tendencias globales, o sobreestimar las continuidades históricas, o proporcionar alguna explicación meramente culturalista de la diferencia.

El desarrollo de la investigación se basará principalmente en método comparativo sustentado en TRAMOD, The “Trajectories of Modernity”, proyecto en el cual se enmarca la presente investigación. Cuyo objetivo general ha sido *avanzar en el análisis de la pluralidad de la sociedad contemporánea, de sus autocomprensiones y sus estructuras institucionales correspondientes de las dimensiones política, económica y epistemológica, en el contexto mundial actual.*

4. Interpretación comparada.

i. Los métodos comparativos en ciencias sociales.

El método comparado se basa en un procedimiento que tiene por objetivo la búsqueda, de manera sistemática, de similitudes y diferencias respecto a un fenómeno. En este caso nos hemos centrado en las similitudes, pues permite una generalización de los resultados. Supone una comparación de casos de análisis con fines de generalizar empíricamente y de verificar ciertas hipótesis. En ese sentido, el método comparado puede incluir todo método que sirve a la comparación y puede ser tanto cualitativo como cuantitativo. En el caso del método comparado en términos cualitativos debe existir una selección de casos limitada y argumentada, mientras que en el caso del método comparado cuantitativo en general se utilizan procedimientos estadísticos que buscan ser aplicados a la mayor cantidad de casos posibles. En suma, las diferencias entre ambos hacen referencia principalmente al número de casos observados y analizados.

Autores como Grosser (1973) resumen algunos objetivos del método comparado que son relevantes, como el hecho de poder hacer comprensibles algunas cosas desconocidas a partir de cosas conocidas a través de la analogía o el contraste; mostrar nuevos descubrimientos, sistematizar, entre otras cosas. Es importante especificar y saber explícitamente qué fenómeno es el que se está comparando. Sobre todo, se hace explícitamente necesario preguntarse si aquello que queremos comparar es efectivamente comparable y hasta qué punto. En relación a esto, si entonces queremos poder hacer algún tipo de generalización a partir del método comparado, entonces la selección de casos es totalmente decisiva y determinará por tanto la calidad y veracidad de los resultados que obtengamos. Se necesitan criterios pre establecidos.

Respecto a lo anterior, al realizar análisis comparado: Se debe distinguir si el contexto de las variables a analizar es homogéneo o

heterogéneo; También se debe distinguir la comparación en términos de tiempo diferentes o similares; Distinguir qué espacio que se está utilizando para la comparación (nacional, infra-nacional, regional, etc.).

El método comparado tiene distintas funciones dentro del proceso de investigación. Hay una función heurística, ya que permite tener una visión más profunda respecto a la complejidad de los fenómenos bajo análisis. El caso de la comparación por similitudes sirve a la generalización.

Dentro del método comparado, existe el Análisis Histórico Comparado (*Comparative Historical Analysis*). Este método se encarga de comparar procesos sociales en diversos tiempos y lugares. Es inherentemente cualitativo, es más, para Mahoney & Terrie (2008) el CHA difiere de los análisis estadísticos. Esto, debido a que el CHA adopta un enfoque de causas-de-efectos para explicar una concepción necesaria o suficiente de causalidad, donde se utiliza principalmente *process tracing* para testar teorías. Esto difiere respecto a los análisis estadísticos los cuales ocupan un enfoque de causa-efecto para explicar efectos promedios, y utilizan técnicas de regresión o elementos estadísticos para testar teorías. Otro de los atributos asociados a este tipo de análisis de secuencia temporal o *path dependence*.

El Análisis Histórico Comparado ayuda a determinar eventos, o construir nuevas teorías. Este método no se distingue por el marco teórico que emplea, sino por las preguntas que plantea. Las líneas de tipo de investigación, a partir del CHA han sido trazadas por una serie de estudios exitosos publicados desde 1960, entre los que destacan los textos de Moore (1966), Tilly (1965), Skokpol (1979) entre otros. Tal como sostienen Mahoney & Terrie (2008), este enfoque se preocupa de investigar “grandes preguntas” o importantes *outcomes* de larga escala. La preocupación central es establecer un análisis *causal*, en la examinación de procesos a

través del tiempo y en poder realizar comparaciones sistemáticas y contextualizadas.

ii. Los estudios comparativos en sociología

El análisis histórico comparado tiene una larga trayectoria en las ciencias sociales. Adam Smith, Tocqueville, Marx y Weber, entre otros reconocidos autores, recurrieron al análisis histórico comparativo como un modo central de investigación. Recientemente, libros y estudios publicados en diversos temas se comprometieron a ofrecer explicaciones históricamente fundamentadas para fenómenos relevantes (Mahoney y Rueschemeyer, 2003).

La sociología clásica y sobre todo en la sociología comparada de Max Weber, se ha ocupado principalmente del análisis macrosociológico de las grandes transformaciones de la sociedad en el transcurso de la historia. Sin embargo, también es una característica de la sociología de Emile Durkheim y la visión profundamente arraigada en la sociología clásica de que la sociología es por su naturaleza comparativa. La sociología histórica comparada fue comparativa en sus objetivos, se ocupó principalmente del análisis empírico, ya que se basó en gran medida en la investigación histórica especializada para sus fuentes. Esto le brindó una inclinación fuertemente teórica que contrastaba con la historia practicada por los historiadores. El trabajo de Charles Tilly o Michael Mann son muy buenos ejemplos de esta comprensión de la sociología histórica.

Esta perspectiva comparativa internacional se basa generalmente en los Estados como unidades de análisis, ya que siguen funcionando como unidades de manera simbólica y práctica. Sin embargo, esto no significa que sean entidades aisladas. Observar estados-nación o países como unidades de análisis no necesariamente implica un nacionalismo metodológico (Smith

1979; Silva 2015).

La comparación es inherente a toda ciencia, especialmente a las ciencias sociales. La metodología de la investigación comparada ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de las disciplinas científicas. Sin embargo, hay poco acuerdo en las ciencias sociales sobre la cuestión de si el método comparativo debe ser considerado un subcampo distinto o como una metodología.

Por ejemplo, en un artículo sobre estudios de desarrollo comparativo, Lijphart (1971,p. 682) sostiene que la metodología comparativa sirve como un método básico por derecho propio, junto con la metodología experimental, estadística y de estudio de caso. Sartori (1991,p. 243) sostiene además que los estudios comparativos de desarrollo son un "campo caracterizado por un método". Kelly, Altbach y Arnove (1982,p. 511-515) discuten la cuestión de si los estudios comparativos de desarrollo son un método o un área de contenido. Mabbett y Bolderson (1999) sostienen que muchas de las cuestiones que rodean las teorías y los métodos en el trabajo comparativo no son exclusivas de los estudios transnacionales. No existe un método transnacional distinto de las ciencias sociales. La idea de que la ciencia social comparada no es diferente de cualquier otra forma de ciencia social y que no tiene problemas metodológicos únicos es atractiva desde una perspectiva positivista, porque sugiere que todas las ciencias sociales usan básicamente los mismos métodos y porque subraya la naturaleza científica de la ciencia social comparada.

Sin embargo, Ragin (1987: 1-6) señala diferencias significativas entre las orientaciones de la mayoría de los comparatistas y la mayoría de los no-comparatistas. Estas diferencias tienen implicaciones metodológicas. La orientación distintiva de las ciencias sociales comparadas es que se refiere a lo que él llama grandes unidades macrosociales, un término que utiliza para

referirse a países, naciones y otras entidades políticas más grandes. Aunque todos los científicos sociales afirman estudiar sociedades o cosas que ocurren en la sociedad, la mayoría no siente la necesidad de definir las unidades macrosociales dentro de las cuales se lleva a cabo su investigación y no se preocupan mucho por las propiedades de estas unidades. Ellos pueden tomar su existencia por sentado. Esto es diferente para los comparatistas, porque comparan las unidades macrosociales como tales:

Del mismo modo, Pennings, Keman & Kleinnijenhuis (1999: 50) sostienen que las comparaciones se hacen a través de los sistemas políticos y sociales que se definen en relación con el espacio territorial. Arnove, Kelly y Albach (1982: 5) discuten el desacuerdo en estudios de desarrollo comparativo sobre si las subunidades de los sistemas nacionales pueden utilizarse como unidades de comparación además de los propios sistemas nacionales y si pueden compararse en diferentes puntos a tiempo. Existen ventajas y desventajas al seleccionar países como unidades, existen todavía cabos sueltos en esta discusión teórico-metodológica que no tiene un conclusión definitiva.

iii. Análisis empírico: Dimensión central: Política económica.

Para el análisis empírico, se ha procedido a la selección de casos de Sudáfrica y Chile, y el modelo de desarrollo socioeconómico que enmarca la política económica en sus distintas dimensiones, a saber:

La política económica es el principal arreglo institucional de la esfera económica, que en conjunto con la política, permite la asignación de recursos a la sociedad, a través de *prácticas de asignación de recursos* ejecutadas por los actores relevantes. Es un medio por el cual la esfera política diseña el modelo económico, equilibra las desigualdades y los resultados socialmente negativos

que emergen desde el mercado. (Wagner, 2016; Hall, 1989). Uno de los objetivos centrales de la política económica es establecer los parámetros de la distribución del ingreso, que es el beneficio de participar de la vida en el mercado.

El análisis de la organización y funcionamiento de la política económica implica necesariamente el análisis de los gobiernos. Las medidas que unos y otros ponen en marcha y los principios rectores de estas medidas cristalizan la política económica de un país. La política económica en su configuración incluye diferentes conjuntos de medidas. En esta investigación no se ha predeterminado que tipo de medidas, leyes, regulaciones, se analizarían de antemano, sino que la selección de los aspectos que constituyen la política económica del periodo ha sido realizado a través de un proceso inductivo, a partir de la declaración de los entrevistados y por cierto de la documentación revisada.

Las variables que fueron analizadas en los Capítulos III y IV son, entre otras:

- Leyes
- Regulaciones.
- Educación
- Políticas publicas
- Subsidios
- Impuestos
- Manejo de las crisis

iv. Diseño comparado por similitudes

La comparación de Chile y Sudáfrica es un diseño por similitudes. Este tipo de comparación plantea la hipótesis de que, si bien con similitudes sistemáticas en condiciones de fondo, ambos casos comparten factores diferentes, son las similitudes que explican la hipótesis central de la investigación (George y Bennett 2007). El ejercicio comparativo tiene como objetivo proporcionar un

conjunto de hipótesis sobre los mecanismos causales subyacentes a las trayectorias de cambio observado.

Uno de los supuestos basales es que, más allá del enfoque teórico, los procesos sociales son el resultado de la acción individual y colectiva construida de manera racional, dados los fines y las condiciones para la acción, y es inteligible por tanto de esa manera. La elección racional en un proceso de decisiones que está condicionada por la influencia de los contextos y situaciones sobre las actitudes y creencias de los actores.

La realidad de ambos países se puede explicar entonces no evocando leyes universales o identificando factores estadísticamente relevantes si no los mecanismos que lo producen. La idea de mecanismo social ha sido ya discutida en el capítulo V, sin embargo, cabe recordar que desde la visión de Elster, los mecanismos son patrones causales fácilmente reconocibles y que ocurren frecuentemente, y que se desencadenan bajo condiciones desconocidas y con consecuencias indeterminadas. Según Hedstrom, un mecanismo viene a ser una constelación de entidades y actividades las cuales están ligadas una a la otra de tal manera que regularmente producen un resultado particular. Las constelaciones a la que alude el autor se refieren a un modelo generativo capaz de incluir actividades y entidades; en donde entidades y actividades son actores, acciones, y interacciones, y el resultado es una institución social. La trayectoria histórica en su proceso de sedimentación se erige como condición de posibilidad para la emergencia de una decisión o entidad. Este sedimento se conceptualiza como *path dependence*.

En este sentido, el aporte de Tilly radica en que las concatenaciones de mecanismos emergen nuevas propiedades y nuevas formas de complejidad social, cuya emergencia no es observable sincrónicamente, sino en los patrones diacrónicos de la historia. Los procesos son el resultado común de una concatenación de mecanismos. En un proceso decisional la

interacción entre actores daría vida a una decisión nueva, este proceso en el tiempo generará pautas recurrentes y caminos recorridos.

5. Sobre la investigación aplicada. Análisis de los casos.

Para el análisis de los casos, se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Revisión de literatura teórica y de los casos.

Análisis de fuentes de conocimiento del periodo: Desarrollo de una síntesis y/o estado del arte acerca del conocimiento científico (histórico, económico y sociológico) del periodo.

2. Análisis de fuentes de micro datos secundarias:

Para apoyar la investigación, se analizaran fuentes disponibles de micro datos cuantitativos.

3. Análisis de documentos oficiales:

Análisis de legislación, proyectos de ley, declaraciones públicas.

4. Análisis de Prensa.

Selección de periódicos a partir de una muestra estructurada con el fin de complementar el análisis.

5. Entrevistas a actores relevantes de la elite:

Desarrollo de entrevistas semi -estructuradas a actores relevantes identificados en la investigación con metodología de eventos conductuales, en la mayoría de los casos.

6. Entrevistas a académicos expertos

Desarrollo de entrevistas semi -estructuradas a académicos expertos. Cabe mencionar que muchos de los académicos entrevistados - la gran mayoría -pertenecen al mismo modo a las elites políticas de los países.

6. Las elites, actores claves de la investigación: ¿Qué entendemos por elite y cómo les entrevistamos?

Las elites se refiere a las personas en las primeras posiciones de los sectores relevantes de la sociedad, cuyas acciones y decisiones influyen en los procesos de estructuración más importantes sobre toda la sociedad, así como la reproducción de su estructura social y sus normas. (Definición propia según Keller 1963: 20, Hartmann 2002: 25f, Halperin, 2015).

Si bien no existe consenso en torno a la definición de elite o elites en las ciencias sociales, un supuesto basal es que la elite se constituye como un grupo que ha acumulado, ya sea en forma individual o por la herencia, un tipo o varios tipos de capitales provenientes de diversos campos, ya sean estos de poder político, económico, cultural, simbólico, entre otros.

El concepto de elite se va configurando entre la dimensión simbólica que caracteriza a una minoría social, y las cuotas de poder que posee y administra un sector. La “elite es aquella minoría de actores sociales de un país, que cuentan con mayores cuotas de poder: lo cual no solo les permite diferenciarse de la población común y ejercer altas funciones de conducción, sino que les obliga a justificar de algún modo su accionar” (Guell, 2014). En esta definición se incluye la idea de legitimidad, que según la perspectiva de Habermas (1998) se entiende como el hecho de que un orden – ya sea este político o económico – sea merecedor de reconocimiento. Referirse a legitimidad entonces es referirse a un postulado de poder, que en nuestra sociedad asumen la forma de

funcionalidad en los diversos campos en que se constituye la elite.

La elite es clave en tanto su rol en el cambio social es clave. Sin duda existen otros actores relevantes, sin embargo durante el inicio del proceso de investigación se llegó ineludiblemente a la necesidad de analizar a las elites, en tanto ambos países son sustantivamente estructurados en términos de clase. La propuesta analítica de las observaciones clásicas se sustenta en el supuesto de que toda sociedad evoluciona desde las acciones que generan las elites. La historia por tanto puede ser entendida, desde esta mirada, como una lucha entre elites que persiguen sus intereses, y que, basándose en sus modos de observación de sus propios espacios o campos, dan dinamismo a la sociedad. En este sentido las sociedades se transforman en la medida que las clases dirigentes, o las elites, producen los cambios. El concepto de elite analiza a una minoría de actores que posee las mayores cuotas de autoridad en una sociedad, por lo cual pueden ejercer la conducción en los diversos ámbitos de acción en que se posicionen.

Desde una observación contemporánea, la sociedad se constituye desde la acción de los individuos en sus diversos campos, dando vida al proceso de . Esta visión la comparte Bourdieu, Castoriadis, Wagner. Del mismo modo estas estructuras van delimitando su actuar. Ciertas clases sociales o elites pueden tener autoridad en un espacio o ámbito y no necesariamente en otros, es decir, pueden tener mucho capital en el espacio político y poco capital económico, o bien pueden ostentar escasez de capital cultural y distinguirse por su capital económico, del mismo modo puede acumular y ostentar distintos tipos de capitales. Sin embargo una de las particularidades tanto de Sudáfrica como de Chile es que justamente estos campos son móviles para las élites, que pasan de uno a otro con relativa facilidad.

Bajo esta definición, decidir quien es miembro de la elite no es sencillo, pues no existe consenso sobre los atributos determinantes

del ser parte de una elite. Sin embargo, el criterio de ámbito de acción de las elites o las elites sirve como eje orientador para establecer un consenso a la hora de determinar quiénes son elites en Chile y Sudáfrica. En este caso se seleccionarán entrevistados pertenecientes a elites de diversos ámbitos de acción en política económica, que tienen o han tenido voz legítima y acción. Los ámbitos usados fueron:

1. Ámbito Político
2. Ámbito Económico – Productivo
3. Ámbito Académico

Más allá de la definición de elites, cabe preguntarse por cuáles son los rangos distintivos de las personas, hombres y mujeres, que son parte de estos ámbitos. Los rangos distintivos de la elite son principalmente su rol, capacidad de acción, influencia y reflexión a escalas globales y locales, de manera simultánea (Halperin, 2012). Un segundo elemento, es la auto-percepción de poseer una forma de ser más elevada que el común de las personas, pues manejan ciertos códigos de distinción. En este sentido las elites son un sector que promueve patrones de comportamiento simbólicos que marcan tendencia, por un lado, y que por otro lado puede dictar normas y, por cierto, romperlas.

Con lo anterior, más allá de las características constituyentes del concepto de elite y de lo que caracteriza a la elite, en el presente estudio se indagó en las orientaciones subjetivas (que piensan) y prácticas objetivas (que hacen) de las elites en materia de lo que hemos denominado desarrollo socioeconómico post períodos autoritarios, en los ámbitos política económica.

El discurso proveniente de las elites no es solamente sistemas de ideas conscientes y de creencias, sino procesos organizados, prácticas y significados, que reflejan valores específicos, y por su posición en lo social, dominantes. En este sentido son discursos

hegemónicos de nivel superior, que pretenden distinguirse y a la vez ser reconocidos por el sentido común.

Del mismo modo, constituyen un cuerpo de expectativas que plausiblemente difieran con las prácticas en algunos matices o bien en la medida que son experimentados como prácticas se confirmen o se desarticulen.

Un discurso es un proceso, y debe ser observado como un complejo efectivo de experiencias, relaciones, actividades, debe ser mirado desde el “qué dice” y el “cómo se constituye” y “a través de qué mecanismos se reproduce”. A través de la técnica de las entrevistas semi estructuradas, se indagará en los límites y características de los discursos y modos de hacer, con el objetivo de develar y observar el sistema de percepciones que emergen de las diversas constelaciones de sentido de las elites chilenas, poniendo en la relevancia que dichas concepciones del mundo o sistemas de ideas, por estar ancladas en la elite, tienen que ver necesariamente con la capacidad de orientar la acción y el cambio.

El objetivo general ha sido abordado – además de otras técnicas - mediante la comprensión de los sistemas discursivos de las elites en torno al desarrollo económico. Estas formaciones discursivas permitirán establecer los cambios o bien continuidades. En conclusión, serán las creencias, los valores y las prácticas asociadas por las elites, las que constituirán un panorama general de los discursos del modelo de desarrollo.

Desde Michel Foucault los discursos son prácticas sociales, el tomar opinión sobre algún acontecimiento y transmitirlo conlleva un propósito real. A partir del concepto de formación discursiva permite clarificar el concepto de discurso, en este sentido señala que son “[...] haz completo de relaciones que funcionan como reglas: prescribe lo que ha debido ponerse en relación, en una práctica discursiva, para que ésta se refiera a tal o cual objeto, para

que ponga en juego tal o cuál enunciado, para que utilice tal o cual conjunto, para que organice tal o cual estrategia. Definir en su individualidad singular un sistema de formación es, pues, caracterizar un discurso o un grupo de enunciados por la regularidad de una práctica (Foucault, 2005) ’

Discurso y práctica se constituyen en cierta medida en dos caras de un mismo acontecimiento.

La realidad está moldeada por el discurso, se encuentra a su vez arraigada en un contexto social determinado. Tanto los ámbitos, las intenciones o las posiciones ideológicas de las elites estudiadas circunscriben el discurso señalado. En este sentido, ‘situaciones, instituciones y estructuras sociales’ dan forma al discurso, y por tanto, tienen incidencia en la construcción de un determinado tipo de sociedad (Van Dijk,2000).

7. Fases del trabajo de terreno y realización de entrevistas

Se realizaron una serie estancias de trabajo en terreno en los países de estudio.

Fase	País	Fecha	Actividad
1	Sudáfrica	Septiembre 2012	Toma de contacto. Investigación en terreno.
2	Chile	Diciembre 2012 Enero 2013	Primera fase de entrevistas Revisión de Documentación
3	Sudáfrica	Enero – abril 2013	Primera fase de entrevistas Revisión de Documentación
4	Sudáfrica	Mayo 2013	Conferencia. Recolección de información.
5	Chile	Septiembre 2013	Entrevistas Prensa

6	Chile	Noviembre 2014	Entrevistas
7	Sudáfrica	Septiembre 2015	Desarrollo de entrevistas en Durban Recolección de recortes de prensa. Para complementar el análisis.
8	Chile	2016	Entrevistas Skype
9	Sudáfrica	2016	Entrevistas Skype , teléfono y email.

8. Sobre la Entrevistas a elite y los eventos conductuales.

Las Entrevistas de Eventos Conductuales (Behavioral Event Interview- BEI-) es una metodología que permite, tal como su nombre lo dice, conseguir descripciones detalladas de conductas respecto a eventos específicos. Este tipo de entrevistas es comúnmente usado por empresas sobre todo cuando se ven enfrentados a la selección de personal, ya que a través de éstas se hace posible identificar aspectos exitosos del entrevistado que son parte de su pasado, y que sirven como predictores del desempeño de la persona para un cargo específico. Por tanto, uno de los aspectos para los cuales este tipo de entrevistas es más usado es para la identificación de ciertas competencias. Varios aspectos son importantes a tener en cuenta al llevar a cabo este tipo de entrevistas:

En primer lugar, el rol de la entrevistadora- investigadora en las BEI no debe estar relacionado a preguntar directamente por las conductas efectuadas, sino más bien guiar al entrevistado para que realice un relato exhaustivo del evento que se está estudiando. Esto, ya que a partir de ese relato se desprenderán las conductas

reales adoptadas. Es importante que las BEI también sean entrevistas focalizadas, es decir, que estén centradas netamente en los aspectos que se deseen evaluar y, por tanto, estén desarrolladas de forma bien estructurada y específica. Alles (2006) da algunos elementos esenciales al momento de llevar a cabo entrevistas de eventos conductuales, aunque bien algunos de estos elementos podrían ser también importantes para cualquier tipo de entrevistas. Entre ellos menciona que antes de llevar a cabo la entrevista es importante informarse sobre la persona a la cual se entrevistará, proveer un lugar adecuado y preparar todo para poder grabar la misma. Este último punto resulta esencial ya que, al tener la oportunidad de grabarla, podemos capturar algunos matices de manera exacta respecto de las motivaciones y procesos de razonamiento de nuestros entrevistados.

Para Saracho (2005) serían cuatro los pasos para conducir una BEI. Estos pasos también están en perfecta concordancia con los pasos que ya el año 1993 habían sido planteados por Spencer & Spencer (1993) y que Alles (2006) también menciona:

1. **Introducción:** Aquí se puso énfasis en la presentación de la investigadora, su procedencia, el objetivo de la tesis y la explicación respecto a los propósitos de la entrevista. Esto primero es importante ya que las personas siempre están interesadas en saber los propósitos de la misma y cómo sus respuestas serán utilizadas.
2. **Responsabilidad:** Aquí se debe indagar en las responsabilidades y funciones que el entrevistado ha participado actualmente o en el pasado. Lo que se sugiere aquí es que se utilicen preguntas abiertas para comenzar.
3. **Eventos conductuales:** En esta parte es donde se debe obtener una descripción detallada de los sucesos más importantes respecto al evento que nos interesa estudiar, por ende, es el core de la entrevista. Aquí se sugieren dos cosas: Preguntar sobre incidentes críticos sobresalientes, y posteriormente

utilizar preguntas más focalizadas respecto a la información que queremos obtener.

4. **Cierre y recapitulación:** Se debe dar por finalizada la entrevista agradeciendo el tiempo y la colaboración del entrevistado, y en este caso se propuso una conclusión teórica para que fuese evaluada por el entrevistado.

Dificultades de trabajar con elites

Debido a que el trabajo de campo de la investigación se basó, principalmente, en el trabajo con personas considerada de elite y entrevistas a algunos/as expertos que no se enmarcan estrictamente en esta categoría. Es importante considerar que existen ciertas dificultades en el trabajo con ellas. Esto se relaciona a que estas personas poseen altos privilegios y ello conlleva a que generan distancias, por lo cual no fue fácil acceder a ellos. También, se hace difícil generar contactos directos con la elite porque no son mujeres y hombres que dispongan su información de contacto abiertamente. Básicamente, existieron dificultades en términos de tiempo y esfuerzo para la investigadora, sin embargo pudieron ser superadas.

Las mayores dificultades se presentaron en el caso de Sudáfrica, al no tener contactos directos, y concentrar las redes en el ámbito académico.

Mientras que en el caso de Chile, la investigadora contaba con más experiencia en estudios con elites, por lo que facilitó el proceso.

A continuación se presenta la lista detallada de todas las entrevistas realizadas durante los periodos de trabajo de campo.

9. Muestra de entrevistas

Muestra de Entrevistas Chile

ID	Ámbito	Nombre y apellido	Biografía
CL_01	Académico	Fernando De Laire	<p>Asesor Ministro Trabajo y Seguridad Social. Osvaldo Andrade.</p> <p>Hacia fines de los 80, participó activamente en los movimientos sociales y estudiantiles para derrocar el régimen autoritario y sacar autoridades universitarias designadas de la época, cuando la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile era conocida como "La Placa". Actualmente es Jefe de Contenidos del Ministerio de Desarrollo Social.</p>
CL_02	Académico	Marcel Claude	<p>Marcel Henri Claude Reyes es un economista, académico y activista político chileno. Fue candidato presidencial en las elecciones de 2013 con el patrocinio legal del Partido Humanista (PH).</p> <p>Trabajó en el Banco Central de Chile.</p> <p>En cuanto a su carrera política, militó en la Juventud</p>

			Demócrata Cristiana; y el PPD.
CL_03	Económico - Productivo	Andrés Concha	<p>Fue un ingeniero comercial, empresario y dirigente gremial chileno.</p> <p>Se desempeñó como alto funcionario del Estado durante la dictadura Militar del general Augusto Pinochet, siendo director de ProChile (1975-1979) y posteriormente.</p> <p>Creó la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la que fue su primer director (1979-1984). Una vez en democracia trabajó activamente en el comando del economista de derecha Hernán Büchi.</p> <p>Fue ejecutivo y directivo de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), organización empresarial que presidió desde mediados de 2009 hasta el día de su fallecimiento.</p>
CL_04	Económico - Productivo	Sergio de la Cuadra Fabres	Sergio de la Cuadra Fabres es un economista, ex presidente del Banco Central de su país y ex ministro de Hacienda de

			<p>la dictadura del general Augusto Pinochet.</p> <p>Ha sido director de la Bolsa Electrónica de Chile y consultor internacional de varios países de Latinoamérica.</p>
CL_05	Económico - Productivo	Esperanza Cueto	<p>Empresaria. Miembro de diferentes directorios. Abogada de la Universidad Diego Portales. Presidenta y fundadora de Comunidad Mujer, Directora de la Fundación Prodemu y Corporación Participa.</p>
CL_06	Político	Nicolás Eyzaguirre	<p>Ministro Secretario General de la Presidencia de Chile.</p> <p>Anteriormente se desempeñó como Ministro de Hacienda del presidente Ricardo Lagos entre 2000 y 2006, siendo quien más tiempo ha permanecido de manera consecutiva en ese cargo; director del Departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
CL_07	Político - Académico	Alejandro Foxley	<p>Se desempeñó como ministro de Hacienda entre 1990 y 1994, senador de la</p>

			<p>República entre 1998 y 2006 y ministro de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2009.</p> <p>Fue gobernador del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (1990-1994), y ocupó el cargo de presidente del Comité de Desarrollo de los Gobernadores del Banco Mundial-Fondo Monetario Internacional (1991-1992).</p> <p>Miembro del Partido Demócrata Cristiano, tienda de la que fue presidente entre 1994 y 1997.</p>
CL_08	Académico	Rolando Franco	<p>Fue director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL por más de una década, desarrollando investigaciones en diversas temáticas, especialmente políticas sociales, equidad y pobreza en América latina.</p>
CL_09	Académico	Manuel Gárate	<p>Experto en historia reciente de Chile e historia del siglo XX europeo.</p> <p>Actualmente se encuentra trabajando como investigador COES (Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social), y en un proyecto sobre historia del carisma político</p>

			(Fondecyt), además de otro proyecto interdisciplinario sobre tecnologías políticas de la memoria a través de los archivos de la Vicaría de la Solidaridad.
CL_10	Político	Claudia Serrano Madrid	Embajadora ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Oede) en el marco del segundo Gobierno de Bachelet. Socióloga, académica, consultora, investigadora y política socialista chilena, ministra de Estado del primer Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. En 2006 Bachelet la nombró subsecretaria de Desarrollo Regional, responsabilidad que dejó a fines de 2008 para asumir en Trabajo y Previsión Social en reemplazo de su camarada Osvaldo Andrade.
CL_11	Político – Económico	Juan José Tohá	Gerente de Comunicación y Asuntos Públicos de Codelco
CL_12	Económico - Productivo	Felipe Lamarca	Economista, académico, empresario y dirigente gremial chileno. Miembro de los denominados Chicago Boys. Como tal fue director del Servicio de

			<p>Impuestos Internos entre 1978 y 1984, durante la dictadura del general Augusto Pinochet.</p> <p>Durante 19 años fue presidente de Copec, la mayor empresa de Chile y pilar del grupo económico Angelini.</p>
CL_13	Político	Manuel Marfán	<p>Ex ministro de Estado del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y exconsejero del Banco Central de Chile, cargo que desempeñó entre 2003 y 2013 previa aprobación del Senado.</p> <p>Fue artífice de la principal reforma tributaria del primer Gobierno de la Concertación encabezado por Patricio Aylwin.</p> <p>Su militancia en el Partido Socialista (PS) lo convirtió en el único político adscrito a esta tienda en ocupar la cartera de Hacienda de los cuatro gobiernos de la Concertación</p>
CL_14	Político	Evelyn Matthei	<p>Política chilena, miembro del partido Unión Demócrata Independiente (UDI).</p> <p>Participó en el régimen militar de Augusto Pinochet</p>

			como jefa de Estudios de la Superintendencia de AFP.
CL_15	Político	Carlos Ominami	Ex ministro de Estado del presidente Patricio Aylwin. Durante su época universitaria integró el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), hasta 1973. Militó en el MIR desde 1968 y en 1973 partió al exilio, luego de la caída del presidente Salvador Allende.
CL_16	Académico – Político	Ernesto Ottone	Sociólogo y doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Paris III. Fue asesor estratégico del ex presidente Ricardo Lagos.
CL_17	Académico	Gabriel Palma	Economista, profesor titular emérito en la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge. De sus trabajos sobre desigualdad se derivó la formulación del “Coeficiente Palma” como índice alternativo al tradicional Gini para su medición.
CL_18	Económico - Productivo	José Piñera	Economista chileno, conocido por su rol en la generación de políticas neoliberales durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, en el período conocido como Régimen Militar, en el que ejerció

			como ministro de Estado en las carteras de Trabajo y Previsión Social y Minería. Fue el creador del sistema privado de pensiones (AFP) basado en la capitalización individual y del "plan laboral", y un promotor clave de la Constitución de 1980.
CL_19	Académico	Joseph Ramos	Es Profesor Titular de la Universidad de Chile desde 1999, y ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad de Chile, actualmente profesor de la misma universidad. Antes fue Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL; economista del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC) de la OIT e investigador de la FLACSO en temas de desarrollo, tecnología y empleo.
CL_20	Académico	Manuel Riesco	Es economista. Ha desarrollado una carrera académica e intelectual, siendo fundador y actual vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo

			<p>Alternativo CENDA, ha participado en procesos políticos y gremiales en Chile, y tiene publicaciones en temas tributarios y económicos, entre otros. Además, fue investigador externo del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD) entre 2003 y 2007, y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en 2002.</p>
CL_21	Académico	Gabriel Salazar	<p>Historiador, es uno de los más destacados exponentes de la historiografía social y política contemporánea en Chile.</p> <p>Después del golpe de Estado de 1973 fue detenido y conducido a Villa Grimaldi y Tres Álamos, donde fue torturado. Mientras estuvo preso, Salazar desarrolló un curso de historia económica chilena, que después se convertiría en el libro Historia de la acumulación capitalista en Chile. En 1976 fue puesto en libertad y partió al exilio al Reino Unido.</p>

CL_22	Político	Guillermo Teillier	Presidente del Partido Comunista de Chile (PCCh). Militante activo desde 1958. En 1985, como Jefe de la Comisión Militar del Partido Comunista de Chile, participa en las gestiones ante Cuba para la entrega de armamento y su posterior internación a través de la localidad de Carrizal Bajo; dicho armamento fue utilizado para el atentado contra Augusto Pinochet en el cual murieron 5 militares de su escolta durante el enfrentamiento.
CL_23	Político	Andrés Velasco	Economista. En cuanto a su carrera política, en 1987 trabaja para la campaña del NO. Desde 1990 y hasta 1992 es coordinador de Finanzas Internacionales en el Ministerio de Hacienda. En 2005 fue el encargado programático de la campaña de Michelle Bachelet, y en 2006 asume como ministro de Hacienda hasta 2010.
CL_24	Económico - Productivo	Roberto Zahler	Economista, académico, investigador y consultor chileno, ex presidente del Banco Central de Chile. Tras su salida del Estado fundó en el año 2000, junto a

			<p>Patricio Rojas, la firma consultora Zahler & Co, desde donde asesoró en materia macroeconómica y financiera a diferentes entidades públicas y privadas.</p> <p>Fue director del Banco Santiago entre septiembre de 1999 y agosto de 2002. Entre 1999 y 2000, ocupó diversos cargos en el Fondo Monetario Internacional (FMI).</p>
--	--	--	--

Muestra de Entrevistas Sudáfrica

ID	Ámbito	Nombre y apellidos	Biografía
SA_01	Económico	Iraj Abedian	Dr. Iraj Abedian, an economist by training, has extensive business and research experience in South Africa. Since 1994 he has been involved in macroeconomic policy making and is a respected adviser to a number of public and private sector organisations. Dr. Abedian served as the chief economist and EXCO member of Standard Bank Group of SA

			<p>over 2000 to 2004 (may) before co-founding Pan-African Capital Holdings in 2005. Iraj was the Special Advisor to Minister of Mineral Resources, SA Government. He is also an Extraordinary Professor at Gordon Institute of Business Science (GIBS), University of Pretoria (March 2010).</p> <p>He has been: Member of the Board of Directors of the Development Bank of Southern Africa (DBSA) since 2001 to 2007, Transnet Ltd (2004 to 2009), MunichRe of Africa (2005 to date), Chairman of Board: Pangbourne Properties Ltd (2007 to 2011), Chairman of Board: Bigen Africa (2009 to date), and Serves on the Advisory Board of the Auditor General of South Africa.</p>
SA_02	Académico , Político	Patrick Bond	<p>Is professor of political economy at the University of the Witwatersrand Wits School of Governance. He was formerly associated with the University of KwaZulu-Natal, where he directed the Centre for Civil Society from 2004-2016. His research interests include political economy, environment, social policy, and geopolitics.</p>

			<p>From the end of the apartheid regime in 1994 until 2002, he was in Mandela's new South African government, authoring or editing more than a dozen policy papers including the Reconstruction and Development Programme (RDP) and the RDP White Paper. He also taught at the University of the Witwatersrand Graduate School of Public and Development Management from 1997-2004.</p>
SA_04	Académico	Ivor Chipkin	<p>PARI's Executive Director and an Associate Professor at the University of the Witwatersrand (Wits). In 2007 he published "Do South Africans Exist? Nationalism, Democracy and the Identity of 'the People' " with Wits University Press. Ivor has also published widely on questions of government, governance and the State in South Africa.</p>
SA_05	Político	Robert Clifton	<p>Director at PFM Advisory. Public finance management support. He studied Business Administration, Public Administration and International Relations at University of Pretoria, and a Master of Public Affairs and Public Finance at the</p>

			<p>University of Texas at Austin - The LBJ School of Public Affairs.</p> <p>PFM Advisory supports governments to improve their public finance management capabilities. Support is primarily aimed at fiscal institutions such as ministries of finance, which stand at the crossroad of policy and service delivery. Fiscal institutions also lie at the heart of a capable state helping ensure broad-based social development and economic growth.</p>
SA_06	Académico	Jackie Cock	<p>Professor Emerita in Sociology and Honorary Research Professor at the University of the Witwatersrand. She is a member of the Research Advisory Committee of the Women's National Commission. She is also a board member of the Centre for the Study of Violence and Reconciliation.</p>
SA_07	Político	Rob Davies	<p>Minister of trade and industry of South Africa. Due to his anti-apartheid activities Davies left South Africa and lived in Britain and Mozambique between 1979 and 1990. During this time he was attached to the Centre for African Studies at the Eduardo Mondlane University,</p>

			<p>Mozambique. On his return from exile he conducted economic research for the African National Congress and the Southern African Development Community. In 1990 he became co-director of the Centre for Southern African Studies at the University of the Western Cape.</p>
SA_08	Económico	Andrew Donaldson	<p>He joined the then Department of Finance in 1993, and is currently Deputy Director-General responsible for Public Finance in the National Treasury. He oversees the Treasury's work on spending policy, social development and public service delivery, and has played a leading role in the reform of the budget process and reshaping of budget documentation.</p> <p>He contributed to the work of the Katz Commission on tax policy, served on the Committee of Inquiry into a National Health Insurance System, was a member of the team that drafted the 1996 macroeconomic strategy and is currently involved in the Interdepartmental Task Team on</p>

			<p>Social Security and Retirement Reform.</p> <p>He is a former member of the Board of Directors of the South African National Roads Agency and the Board of Trustees of the Government Employees' Pension Fund.</p>
SA_09	Académico , Político, Económico	Stephen Gelb	<p>Senior Research Fellow at the Overseas Development Institute in London, where he leads the work on private sector development. He is an economist with thirty years of research and policy experience in South Africa and several other developing countries. He was an activist in the anti-apartheid movement in Canada and South Africa. He has been an adviser to President Mbeki in South Africa and a consultant for several UN and other multilateral agencies.</p>
SA_10	Económico	Robert Michael "Bobby" Godsell	<p>Retired South African businessman and the former CEO of South African gold mining company AngloGold Ashanti, a position he held from 1998 to 2007. He was the Non-Executive Chairman of Eskom from 2008 to 2009 and was appointed to the National Planning Commission of South</p>

			Africa by South African President Jacob Zuma on 30 April 2010.
SA_11	Académico Político	Ian Goldin	<p>Professor at the University of Oxford in England, and until September 2016 was the founding director of the Oxford Martin School at the University of Oxford.</p> <p>From 1996 to 2001, Goldin was chief executive and managing director of the Development Bank of Southern Africa (DBSA) and at that time also served as an adviser to President Nelson Mandela. He succeeded in transforming the Bank from an apartheid-era institution to become the leading agent of development in the 14 countries of Southern Africa..</p>
SA_12	Académico – Político	Adam Habib	<p>Professor of political geography, and the Vice-Chancellor and Principal of the University of the Witwatersrand (Wits) in Johannesburg, South Africa. He officially assumed the position of Vice-Chancellor on 1 June 2013 when the term of his predecessor Loyiso Nongxa ended. He is also a former</p>

			deputy vice chancellor of the University of Johannesburg. He is a well-known public figure in South Africa whose opinions are often sought by both the print and broadcasting media.
SA_13	Económico	Alan Hirsch	Director of the Graduate School of Development Policy and Practice at UCT since 2013. He managed economic policy in the South African Presidency, represented the Presidency at the G20, and was co-chair of the G20 Development Working Group. He has served or serves on several boards, and is associated with a range of policy research initiatives including the International Growth Centre for which he is the Zambia Country Director and the European Centre for Development Policy Management where he is a board member.
SA_14	Político	Saki Macozoma	South African former political prisoner who is now one of South Africa's most prominent businessmen and a leader in civil society. After spending five years in prison alongside Nelson Mandela on Robben Island for anti-apartheid activities he joined the South African

			<p>Council of Churches. He also worked for the African National Congress (ANC) and South African Breweries. He became an ANC Member of Parliament in 1994 but left the legislature in 1996 to become managing director of Transnet Limited, South Africa's largest parastatal, that controls South Africa's rail network and harbours. During this time he was also chairman of South African Airways.</p> <p>Macozoma is one of a small group of former ANC politicians who left politics and rapidly became successful in the business world.</p>
SA_15	Económico	Jackie Manche	<p>Economist. Graduate of the Massachusetts Institute of Technology USA, where she obtained a Masters degree in City Planning. She also holds a BA degree from the University of the Witwatersrand, an Honours degree in Economics from the University of Cape Town, and an Executive Development Program certificate from the Wharton School, University of Pennsylvania, USA.</p>
SA_16	Político	Trevor Manuel	<p>South African politician who served in the government of</p>

			South Africa as Minister of Finance from 1996 to 2009, during the presidencies of Nelson Mandela, Thabo Mbeki and Kgalema Motlanthe, and subsequently as Minister in the Presidency for the National Planning Commission from 2009 to 2014 under President Jacob Zuma.
SA_17	Político	Thabane Vincet Maphai	Director of The South African Breweries Limited. Served as the Corporate Affairs Director of SAB. He serves as the chairperson of BHP Billiton SA.
SA_19	Económico	Tito Mboweni	<p>He was the eight Governor of the South African Reserve Bank and the first black South African to hold the post. He is currently a founder member of Mboweni Brothers Investment Holdings and international advisor of Goldman Sachs International.</p> <p>He was Minister of Labour from May 1994 to July 1998 in South African President Nelson Mandela's cabinet. Prior to his appointment as Minister of Labour, he was Deputy Head of the Department of Economic Policy in the ANC. He also represented the ANC on several</p>

			domestic and international platforms. Tito Mboweni was a member of the ANC's National Executive and National Working Committees and was also Chairperson of the National Executive Committee's Economic Transformation Committee, which coordinated the development of ANC economic policies. While Minister of Labour Mboweni was the architect of South Africa's post-Apartheid labour legislation.
SA_20	Económico	Lumkile Mondli	Economic Advisor of Accelerated and Shared Growth Initiative for South Africa. Mondli is a Chief Economist and Vice President of Industrial Development Corporation in Johannesburg.
SA_21	Político	Mike Moriarty	Mike Moriarty is the DA Spokesperson on Finance as well as the Gauteng Provincial chair. He holds a degree in Civil Engineering from the University of the Witwatersrand and an Honours BA degree in Politics from UNISA. Prior to taking on a full-time role in politics he worked as an Engineer and Project manager in the Group 5 Construction

			Company. He also worked as a self-employed consultant in project management and IT..
SA_22	Político	Abner Mosaase	<p>Abner Mosaase is regarded as a neutral, independent thinker. He has kept a low profile in the league's internal ructions.</p> <p>He cut his political teeth in Soweto in the early 1990s when he joined the Congress of South African Students and the ANC's youth wing following its relaunch in 1991. He was elected president of the student representative council for all campuses of the then Vista University. He also served as a Gauteng youth commissioner before being elected to the youth league's national executive committee (ANCYL) in 2008. In 2011, he was re-elected to the league's NEC.</p>
SA_23	Político	Fholisani Sydney Mufamad	Is a South African politician. He was Minister of Safety and Security from 1994 to 1999 and Minister of Provincial and Local Government from 1999 to 2008.
SA_24	Académico	Pundy Pillay	Professor of Economics and Public Finance and the Research Director at the WSG. Between 2001 and 2007 he was a Senior Economist at RTI International. He was Head of the Policy Unit

			in the Office of the President between 1998 and 2000 and the Executive Director of the Financial and Fiscal Commission between 1995 and 1997. He began his academic career at the University of Cape Town where he was a Senior Lecturer in Economics from 1983 to 1994.
SA_25	Académico	Nicolas Pons-Vignon	Senior researcher in the School of Economic & Business Sciences (SEBS) at the University of the Witwatersrand. He is a political economist whose research focuses on labour markets, economic policy, and the role of the state in economic development.
SA_26	Académico	Jeremy Seekings	He is Professor at Yale and UCT. His research is interdisciplinary, extending across history (especially economic history), politics, sociology and economics. In the 1990s and 2000s most of his work focused on South Africa. Over the past decade it has extended to more comparative work, including in Brazil, the Caribbean and other parts of Africa. He runs a major project on Legislating and Implementing Welfare Policy

			Reforms (LIWPR) in Africa.
SA_27	Político-académico	Edward Webster	Is a Professor of Sociology and the Director of the Sociology of Work Unit at the University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa. His current research interests include: the Evolving Labour Relations System in South Africa, Labour Market Segmentation and the impact of Deep Level Gold Mining on the occupational culture of miners.
SA_30	Económico	Monhla Hlahla	Monhla Hlahla is the Chief Executive Officer of Airports Company South Africa. She is also the Independent Non-Executive Director of the Absa Group Limited. She is the Chairperson of the Executive Committee of the Airports Company of South Africa. She is the Managing Director of Airports Company of South Africa Ltd in Bedfordview. She is the Project Leader of DBSA: Bulk Infrastructure in Pretoria.

Muestra de entrevistas otros académicos/as

Lugar	Nombre	Cargo
España	Agustín Santos Maraver	Consul de España en Cape Town.
Argentina	Ruben Lo Vuolo	Economista. Experto en Desarrollo de América Latina.
España	Antoni Domenech	Economista y filósofo político. Experto en capitalismo contemporáneo.
Chile	Antoni Maillet	Cientista Político. Experto en neoliberalismo.
Chile	Vicente Espinoza	Cientista político. Experto en políticas públicas y elites.
Sudáfrica	Jacob Dlamini	Historiador y Escritor. Experto en Historia de Sudáfrica. Activista político.
Sudáfrica	Riaan Oppelt	Escritor. Experto en Literatura sudáfricana.
Sudáfrica	Ryan Brunette	Investigador PARI. Sudáfrica. Su foco de experticia es el Estado y la capacidad de la Administración Pública en Sudáfrica.
Sudáfrica	Letta Mhlanga	Investigadora PARI. Sudáfrica. Experta en Desarrollo Económico.
Sudáfrica	Sharon Chetty	Periodista sudáfricana. Activista Política.

Brasil	Leonardo Avritzer	Académico especialista en transiciones políticas.
Alemania	Bo Strath	Historiador, economista. Experto en Historia económica.

10. Organización de la información de prensa: análisis e interpretación del contenido

Se reconocen, inductivamente, 6 mecanismos para explicar las trayectorias neoliberales de la política económica de Chile y Sudáfrica (ver capítulo V).

A partir de esto se decide explorar en la prensa escrita de ambos casos el cómo es que estos mecanismos son representados en el periodo, con el fin de complementar la información brindada. El análisis de prensa tiene una función estrictamente complementaria.

El análisis de prensa se lleva a cabo a partir de una muestra intencionada- estructural, basada en la semana construida de modo ficticio, propio de este tipo de estudios. Esta muestra intencionada estructural de prensa escrita se realiza tomando en consideración dos temas:

- Primero, que se trata de una técnica complementaria, no central del estudio.
- Segundo, que por falta de recursos y tiempo resulta imposible analizar una cantidad demasiado alta de periódicos.

A partir de lo anterior se seleccionaron los siguientes periódicos.

País	Periódico	Reseña
-------------	------------------	---------------

Chile	La Nación	La Nación fue un periódico de circulación diaria publicado en Santiago de Chile. Fue fundado el 14 de enero de 1917. Era de interés general, con distribución nacional, y tuvo una edición bajo el formato semanario, llamada La Nación Domingo (LND).
	El Mercurio	El Mercurio es un periódico chileno de tendencia conservadora fundado por Agustín Edwards con varias ediciones a lo largo del país. Su edición más importante es la de Santiago, donde se publicó por primera vez el 1 de junio de 1900 y es distribuido nacionalmente con circulación diaria.
Sudáfrica	Sunday Independent	The Sunday Independent es un periódico semanal en idioma inglés propiedad de Independent News & Media y publicado en Sudáfrica. Tendencia crítica.
	The Sunday Times	The Sunday Times es el periódico dominical más grande de Sudáfrica. Creado en 1906, el Sunday Times se distribuye por todo Sudáfrica.

Muestras: Selección de periódicos

Chile

Meses	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	
Enero - Febrero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Marzo - Abril	8				8				8			
Mayo - Junio		8				8				8		
Julio - Agosto							8				8	
Septiembre - Octubre			8									
Noviembre - Diciembre				8				8				
Total Año	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
año												
Meses	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Enero - Febrero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Marzo - Abril			8					8				
Mayo - Junio				8					8			
Julio - Agosto					8					8		
Septiembre - Octubre	8					8					8	
Noviembre - Diciembre		8					8					8
Total Año	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Sudáfrica

	Year											
Months	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
January-February	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
March- April	8				8					8		
May- Jun		8				8					8	
July-August			8				8					
September-October								8				
November-December				8					8			
Total Year	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
Months	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
January-February	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO		
March- April				8								
May- Jun					8							
July-August	8					8						
September-October		8					8					
November-December			8					8				
Total Year	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		

Pauta Análisis de Prensa

Instrucciones de análisis.

1. Seleccionar:

→ Chile: Cuerpo D (reportaje) del mercurio Domingo y Reportaje de la Nación domingo. Los domingos se resumen las noticias de la semana.

→ Sudáfrica:

2. Seleccionar domingos según meses de la matriz no de todo el año. Ej: Domingos Marzo-Abril de 1988 / Domingos Mayo-Junio de 1989/ Domingos julio-Agosto 1990, etc).
3. Seleccionar filtrando por Portada. Si aparece TEMA (de análisis) en portada seleccionar esa edición. Si no aparece, No seleccionar edición.
4. Analizar con la Matriz las noticias según lo que salga con este filtro
5. Fotografiar todas las portadas donde aparece TEMA.

El análisis de la información que se llevó a cabo con la siguiente pauta de análisis de contenido. La información recabada para complementar el análisis de las entrevistas en el Capítulo V.

Nombre del Medio

Fecha

Número Noticia (el mismo de la foto)

Tema Principal

1. Gasto Público
2. Reformas Laborales
3. Reformas Tributarias
4. Protección Social /Pobreza
5. Economía Internacional
6. Otro

Tema Secundario (si corresponde)

- Origen de la Noticia.

1. Nacional

2. Internacional

- Tipo de Noticia

1. Reportaje
2. Crónica informativa
3. Entrevista
4. Breve

- ¿Responde la noticia a un periodo clave de debate nacional?.

Explicar ("Continuar sólo si es que corresponde a una noticia de

los temas).

Marcar si refiere a algunos de estos sub-temas en especial

1. Movimientos Sociales, Sindicatos, Movilizaciones sostenidas.
2. Rol de Elites , redes endogámicas, redes ANC / Concertación.
3. Acuerdos pragmáticos con la izquierda
4. Institucionalización de políticas, Leyes.
5. Justificaciones normativas de las Elites de izquierda (reparación, memoria, apartheid. alusión golpe de estado)
6. Imagen estratégica internacional (Organismos internacionales)
7. Presencia de Think Tank o Universidades en el debate.
8. Ninguno de los anteriores ¿Cuál? "

Especificar si se refiere a Otro (8)

- Objetivo principal de la noticia
- Descripción de Actores
- Nombres de actores si corresponde
- Partidos Políticos
- Programa/Proyecto/ Ley a al que se refiere
- Análisis personal (si es pertinente)

Referencias Bibliográficas

Allan, D. (2005). Political Budget Cycles in New Versus Established Democracies. *Journal of Monetary Economics*, Vol. 52, No. 7

Aboulafa, M. (2006). *The Cosmopolitan Self: George Herbert Mead and the Continental Philosophy*. Champaign, IL: University of Illinois Press.

Acemoglu, D., and Robinson, J.A. (2006). *Economic Origins of Dictatorship and Democracy*. Cambridge University Press

African National Congress (1994). *Reconstruction and Development Programme: A Policy Framework*. Johannesburg: Umanyano Publications.

African National Congress (1998). *State, Property Relations and Social Transformation*. ANC Discussion Document (mimeo) reprinted in the *African Communist*, 4th quarter, 1998.

African National Congress (2012). *Statement of the National Executive Committee of the African National Congress on the occasion of the Centenary Celebration of the ANC*.

African National Congress, (2012). *Statement of the National Executive Committee of the African National Congress on the occasion of the Centenary Celebration of the ANC*.

Aghevli, B.B. (1999). Asian crisis: causes and remedies. In *The Asian Financial Crisis: Origins, Implications, and Solutions* (pp. 157-166). Springer US.

Agosin, M. (2001). Reformas comerciales, exportaciones y crecimiento. En: R. Ffrench-Davis & B. Stallings (Eds.),

Reformas, crecimiento y políticas sociales en Chile desde 1973. Santiago de Chile: LOM/CEPAL.

Agosín, M., & Montecinos, A. (2011). Chile en los años 2000: evolución macroeconómica y financiera. Recuperado de: <http://www.itf.org.ar/pdf/documentos/76-2011.pdf>

Ainzúa, S. (2010). Crisis económica en Chile: La evidencia de problemas profundos. Chile: Boell.

Akoojee, S. and McGrath, S. (2007). Public and private Further Education and Training in SouthAfrica: a comparative analysis of the quantitative evidence. *South African Journal of Education*, 27(2)209–222.

Alegría Ojeda, N. (2012). Incentivos tributarios para la inversión privada en investigación y desarrollo: análisis del tema en Chile, de la ley 20.241 y de la nueva ley 20.570. Universidad de Chile, Santiago.

Alemán, E., and Saiegh, S. (2007). Legislative Preferences, Political Parties, and Coalition Unity in Chile. *Comparative Politics* 39 (3):253-72.

Alvarado, E. (2013). La representación de élites en las democracias post-transicionales. En AECPA. España.

Amable, B. (2003). *The Diversity of Modern Capitalism*. New York, Oxford University Press.

Amable, B. & Palombarini, S. (2009). A Neorealist Approach to Institutional Change and the Diversity of Capitalism. *Socio-Economic Review*, 7, 123–143.

Amsden, A. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late*

Industrialization. Oxford University Press; New York.

ANC (1994). Reconstruction and Development Plan. Luthuli House: Marshaltown.

Angélica, M. & Riesco, M. (2007). Developmental Welfare State and Social Change in Chile. En: Manuel Riesco (Ed.), Latin America: A New Developmental Welfare State Model in the Making?

Angell, A., and Pollack, B. (2000). The Chilean presidential elections of 1999-2000 and democratic consolidation. Bulletin of Latin American Research 19 357-378

Aninat, C., Benavente, J.M. et al. (2010). The political economy of productivity. The case of Chile. Working Paper, Series IDB-WP-105 (April)

Araya, E. y Cerpa, A. (2008). La nueva gestión pública y las reformas en la Administración Pública Chilena. Revista de Estudios Politécnicos, VII(11).

Arellano, J.P. (2004). Políticas Sociales Para El Crecimiento Con Equidad En Chile 1990-2002. Serie Estudios Socio/Económicos, no.26.

Arjomand, S. and Tiryakian, E. (Eds.) (2004). Rethinking Civilizational Analysis, London: Sage.

Arnason, J. (2003). Civilizations in Dispute: Historical Questions and Theoretical Traditions. Leiden: Brill.

Audier, S. (2012). Néo-libéralisme(s) – une archéologie intellectuelle. Paris: Grasset.

Bakken, T. (2014). *From Apartheid to Neoliberalism: A study of the Economic Development in Post-Apartheid South Africa*.

Balibar, E. (2012). *Citizenship of the world revisited*. En G. Delanty (Ed.). *Handbook of Cosmopolitanism Studies*, London: Routledge.

Baskin, J. (1994). *Unions in Transition: COSATU at the Dawn of Democracy*. Johannesburg: NALEDI.

Baskin, J. (1994). *Unions in Transition: COSATU at the Dawn of Democracy*. Johannesburg: NALEDI.

Bassa, J., & Viera, C. (2008). *Contradicciones de los fundamentos teóricos de la constitución chilena con el estado constitucional: notas para su reinterpretación*. *Revista de Derecho*, XXI(2), 131-150.

Beck, U. (2006). *The Cosmopolitan Outlook*, Cambridge: Polity Press.

Beck, U. & Sznaider, N. (2006). *Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: A research agenda*. *The British Journal of Sociology*, 57 (1): 1–23.

Beinart, W. (2001). *Twentieth-Century South Africa*. Oxford: Oxford University Press.

Benhabib, S. (2008). *Another Cosmopolitanism*, Oxford: Oxford University Press.

Bhaskar, R. (1989). *The Possibility of Naturalism*, London: Harvester.

Bhorat, H. and Hodge, J. (1999). *Decomposing shifts in labour*

demand in South Africa. *South African Journal of Economics* 67(3): 348-380

Bhorat, H. and Leibbrandt, M. (2001). Correlates of vulnerability in the South African Labour Market. Chapter 3 in: H. Bhorat, M. Leibbrandt, M. Maziya, S. Van der Berg & I. Woolard (Eds.), *Fighting poverty: Labour markets and inequality in South Africa*. UCT Press: Lansdowne: 74-106

Bhorat, H. and Van der Westhuizen, C. (2012). Poverty and Inequality and the nature of Economic Growth in South Africa. *Development Policy Research Unit* 12(151). Recuperado de: http://www.humanities.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/36/DPRU%20WP12151pdf.

Bianchi, A. (2008). La autonomía del Banco Central de Chile: Origen y legitimación. *Economic*

Bitar, S. (2010). Francisco Figueroa debate con ex ministro Bitar en CNN. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=s6JXwMSuOHU>

Blazevik Quiroz, H. (2007). Análisis crítico de la política de concesiones en Chile: Balance y aprendizajes. (Magíster en Gestión y Políticas Públicas), Universidad de Chile, Santiago.

Boas, T.C. & Gans-Morse, J. (2009). Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-Liberal Slogan. *Studies in Comparative International Development*, 44(2), 137–161. Recuperado de <http://www.springerlink.com/index/10.1007/s12116-009-9040-5>

Boccardo, G. & Guajardo, F. (2013). ¿El ocaso de la política de la transición?: Balance político del gobierno de Piñera. *Nodo XXI*, 2(2).

Bohle, D. and Greskovits B. (2007). Neoliberalism, Embedded Neoliberalism and Neocorporatism: Towards Transnational Capitalism in Central-Eastern Europe. *West European Politics*, 30, 443–466.

Bohle, D., and Greskovits, B. (2012). *Capitalist Diversity on Europe's Periphery*. Ithaca: Cornell University Press. In Press.

Boltanski, L., y Chiapello, E. (2002). *El nuevo espíritu del capitalismo*. Madrid: Akal, 2002.

Bond, P. (2014). *Elite Transition. From Apartheid to Neoliberalism in South Africa* Pluto Press

Bond, P. (2015). Foreign Investment Retreats from Africa: Gaming, Naming and Shaming "Licit Financial Flow". *International Journal of Socialist Renewal*, 10 August

Booyens, J.C. (2009). The value attached to teaching qualifications by educators and other stakeholders at a Further Education and Training college in Southern KwaZulu Natal. Unpublished dissertation, University of KwaZulu Natal, Durban.

Bourdieu, P. (1990). Espacio social y génesis de las clases. En P. Bourdieu (Ed.), *Sociología y cultura México*: Grijalbo.

Brenner, B. (2009). *La economía de la turbulencia global*. Ediciones Akal, S.A. España

Brook, G. and Brighouse, H. (Eds.) (2005). *The Political Philosophy of Cosmopolitanism*, Cambridge: Cambridge University Press.

Brown, S. (2007). *2007 Transformation Audit: Leadership and Legitimacy*. Institute of Justice and Reconciliation: Pretoria.

Bruff, I. (2014). The rise of authoritarian neoliberalism. *Rethinking Marxism* 26(1): 113-129.

Cademartori, J. J. (2007). El impacto de la inversión extranjera 1990-2000 sobre el desarrollo durable de la región minera de Antofagasta, Chile. Bélgica: Université catholique de Louvain.

Calderón Seguel, M. (2008). La Trayectoria Del Capitalismo Neoliberal En Chile. Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Callon, M. (2004). Introduction: The Embeddedness of Economic Markets in Economics. *The Sociological Review* Vol 46, pp. 1 – 57

Campbell, J. (2004). *Institutional Change and Globalization*. Princeton.

Cardoso, F. & Faletto, E. (1969). *Dependencia y desarrollo en América Latina*. México.

Casassas, D. (2010). *La ciudad en llamas. La vigencia del republicanismo comercial de Adam Smith*. Barcelona.

Casassas, D. y Wagner, P. (2016). Special Issue on Modernity and Capitalism. *European Journal of Social Theory*. Vol 19 number 2. May 2016. SAGE publications.

CEME, A.C. (2005). Análisis económico de los gobiernos chilenos: 1964-2000. Recuperado de: http://www.archivochile.cl/Gobiernos/varios_otros_gob/GOBotros0010.pdf

Centeno, M.A. & Cohen, J. (2012). The Arc of Neoliberalism. *Annual Review of Sociology*, 38, 1–47.

Centre for Development and Enterprise (2009). *Opening the door: practical ways to reduce youth unemployment*. Johannesburg: Acumen Publishing Solutions.

CEPAL. (2009). *Balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe*. Santiago de Chile.

Céspedes, L.F., Goldfajn, I. , Lowe, P. and Valdés, R. (2005). *Policy Responses to External Shocks: The Experiences of Australia, Brazil and Chile*. Working Paper, N°321, Banco Central de Chile.

Chagunda, C. (2006). *An Outline and Brief Analysis of AsgiSA*. Recuperado de: http://noelimits.co.za/staging/CPLO2/pdfs/Briefing_Papers/2006/BP%20156%20ASGISA.pdf.

Chernilo, D. (2012). *Cosmopolitanism and the problem of universalism*. En G. Delanty (Ed.). *Handbook of Cosmopolitan Studies*, London: Routledge.

CIPME. (2014). *The Roots of Apartheid: South Africa's Mining Industry*. Recuperado de: www.cipmefoundation.org.

Coppedge, M. (2012). *Democratization and research methods*. Cambridge University Press

Coppedge, M., Gerring, J., Altman, D., Bernhard, M., Fish, S., Hicken, A.

Kroenig, M., Lindberg, S.I., McMann, K., Paxton, P., Semetko, H.A., Skaaning, S.E., Staton, J. and Teorell, J. (2011). *Conceptualizing and measuring democracy: A new approach*.

Perspectives on Politics, 9(2), 247-267. DOI: 10.1017/S1537592711000880

Crouch, C., & Streeck, W. (1997). *Political Economy of Modern Capitalism: Mapping Convergence and Diversity*. SAGE Publications

Crouch, C., Streeck, W., Boyer, R., Amable, B., Hall, P. A. & Jackson, G. (2005). Dialogue on Institutional Complementarity and Political Economy. *Socio-Economic Review*, 3, 359–382.

De Gregorio, J. (2005). Crecimiento económico en Chile: Evidencia, fuentes y perspectivas. *Estudios Públicos*, 98, 19-86.

De Gregorio, J., Tokman, A., y Valdés, R. (2005). Flexible Exchange Rate with Inflation Targeting in Chile: Experience and Issues. Working paper, Inter-American Development Bank Research Department no. 540

De Lagasnerie, G. (2012). *La dernière leçon de Michel Foucault. Sur le néolibéralisme, la théorie et la politique*. Paris: Fayard.

Delamaza, G. (2011). Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. *Universidad de Los Lagos, Santiago, Chile Polis, Revista de la Universidad Bolivariana, Volumen 10, N°30 , 2011, p. 45-75*

Delanty, G. (2006). *Handbook of Contemporary European Social Theory*. 270 Madison Ave, New York, NY 10016

Delanty, G. (2009). *The Cosmopolitan Imagination: The Renewal of Critical Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Delanty, G. (2012). *Cultural diversity, democracy and the*

prospects of cosmopolitanism: A theory of cultural encounters. *British Journal of Sociology*, 63: 4.

Delanty, G. and He, B. (2008). Comparative perspectives on cosmopolitanism: Assessing European and Asian perspectives. *International Sociology*, 23 (3): 323–344.

Delanty, G. and Inglis, D. (Eds.) (2010). *Cosmopolitanism: Critical Concepts in the Social Sciences*, 4 vols, London: Routledge.

Desai, A. (2002). 'We are the Poors'. *Community Struggles in post-Apartheid South Africa*. New York: Monthly Review Press, 2002. j

DIRECON, Dirección Regional de Relaciones Económicas Internacionales (2009). *Chile 20 Años De Negociaciones Comerciales*. Editado por Ministerio de Relaciones Exteriores. Santiago.

Dolsak, N. & Ostrom, E. (2003) *The commons in the new millennium: challenges and adaptations*. MIT Press, Cambridge, MA.

Drake, Paul W. (2003). El movimiento obrero en Chile: de la Unidad Popular a la Concertación. *Revista de Ciencia Política*, XXIII. 148-158. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32423207#>

Eder, K. (1992). Contradictions and evolution: A theory of the social evolution of modernity. En H. Haferkamp, and N. Smelser (Eds.). *Social Change and Modernity*, Berkeley, CA: University of California Press.

Eder, K. (1999). *Societies learn and yet the world is hard to*

change. *European Journal of Social Theory*, 2 (2): 195–215.

Edwards, S. (1984). Estabilización con liberalización: Diez años del experimento chileno con políticas de mercado libre 1973–1983. En: *Estudios Públicos* 14, 1–39.

Edwards, S. (1984). Estabilización con liberalización: Diez años del experimento chileno con políticas de mercado libre, 1973–1983. *Estudios Públicos*, 14, 1–39

Ekpo, A.H. (2012). The Role of the Global Economic Crisis in the Dynamics of the Labour Market in Sub-Saharan Africa. *West African Financial and Economic Review*, Vol.9, No.1 pp.1–25.

Elster, J. (1989). Social Norms and Economic Theory. *Journal of Economic Perspectives*, 3(4), 99–117.

Elster, J. (2007). *Explaining Social Behaviour*. Cambridge: Cambridge University Press.

Elster, J., Offe, C., Preuss, U., Boenker, F., Götting, U., & Bueb, F. (1998). *Institutional Design in Post-Communist Societies*. Cambridge.

Emirbayer, M. (1997). A manifesto for a relational sociology. *American Journal of Sociology*, 103: 281–317.

i

Esping-Andersen, G. (1985). *Politics Against Markets: The Social-Democratic Road to Power*. Princeton: Princeton University Press.

Esping-Andersen, G. (2000). *Fundamentos sociales de las economías postindustriales*. Barcelona: Ariel.

Evans, P. (1995). *Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation*. Princeton University Press: Princeton.

Evans, P. (2004). Development as Institutional Change: The Pitfalls of Monocropping and the Potentials of Deliberation. *Studies in Comparative International Development*, 38, 30-53.

Evans, P. (2007). In Search of the 21st Century Developmental State. University of California, Berkeley Campus

Evans, P. (2007). In Search of the 21st Century Developmental State. University of California, Berkeley Campus.

Evans, P. and Heller, P. (2012). Human Development, State Transformation and the Politics of the Developmental State. In S. Leibfried, F. Nullmeier, E. Huber, M. Lange, J. Levy & J.D. Stephens (Eds). *The Oxford Handbook of Transformations of the State*. Oxford University Press: Oxford.

Fazio, H. (1996). *El programa abandonado: balance económico social del gobierno de Aylwin*. Santiago. LOM Ediciones. 1996

Fazio, H. (2011). Banco Central decide intervenir en mercado cambiario! *Carta Económica* 1/08/2011. Santiago de Chile: Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA).

Fazio, H. & Parada, M. (2010). *Veinte años de política económica de la concertación*. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Fazio, H., & Parada, M. (2006). *Gobierno de Lagos: balance crítico*. Santiago.

Fazio, H., Parada, M., Latorre, H., Riesco, M., Salazar, G., Portales, F., Brum, H., Otano, R.; Lagos, C.; Villarino, G. (2006). *Gobierno de Lagos: Balance Crítico*. Santiago: LOM/Ciencias Humanas.

Ferguson, J. (2007). Formalities of poverty: thinking about social assistance in neoliberal South Africa. *African Studies Review*, Vol. 50, No. 2, September, pp. 71-86

Fernandez, F. (2002). La constitución chilena de 1980: enclaves autoritarios y cerrojos institucionales, ponencia del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. México.

Ffrench-Davis, R. (1983). Una evaluación del modelo económico. En: *Estudios Públicos* 11, 7–39.

Ffrench-Davis, R. (2001). Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad. Reformas políticas económicas desde 1973. Editado por J.C Saez Santiago.

Ffrench-Davis, R. (2003). Entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: Tres décadas de política económica en Chile. Santiago de Chile: LOM Ediciones.

Ffrench-Davis, R. (2008). Chile entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad: reformas y políticas desde 1973. Santiago de Chile, J.C. Sáez Editor.

Ffrench-Davis, R. y Devlin, R. (1993). Diez años de la crisis de la deuda latinoamericana. *Comercio exterior*, 43(1).

Ffrench-Davis, R. y Heresi, R. (2014). La economía chilena frente a la crisis financiera: respuestas contra-cíclicas y desafíos pendientes.

Fontaine, J. A. (1993). Transición Económica y Política en Chile. *Estudios Públicos*, 50, 229-279.

Fontaine, P. (1999). Introducción al pensamiento de Friedrich Hayek. *Persona y Sociedad*, 13(2), 11– 25.

Foucault, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires, FCE.

Fourcade, M., & Babb, S. (2002). The Rebirth of the Liberal Creed: Paths to Neoliberalism in Four Countries. *American Journal of Sociology*, 108(3), 533–79.

François, P. (2008). *Sociologie des marchés* (p. 312). Paris: Armand Collin.

Freund, B. (2010). Development Dilemmas in Post-Apartheid South Africa: An Introduction. In B. Freund and H. Witt (Eds.), *Development Dilemmas in Post-Apartheid South Africa*, 1–31. Pietermaritzburg: University of KwaZulu-Natal Press.

Frye, I., Farred, G. and Nojekwa, L. (2011). Inequality in South Africa. In H. Jauch and D. Muchena (Eds). *Tearing Us Apart: Inequalities in Southern Africa*. OSISA: Rosebank.

Gárate, M. (2012). *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*. Santiago de Chile.

Garate, M. (2013). *La revolución capitalista de Chile (1973-2003)*. Chile.

Garretón, M. A. (2012). *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado: Los gobiernos de la Concertación en Chile 1990-2010*. Santiago de Chile.

Garretón, M.A. (1991). *La redemocratización política en Chile: Transición, inauguración y evolución*. *Estudios Públicos*:101-33.

Garretón, M.A. (1994). *Transición incompleta y régimen consolidado. Las paradojas de la democratización chilena*. *Revista de Ciencia Política XVI*.

Garretón, M.A. (2000). Chile's Elections: Change and Continuity. *Journal of Democracy* 11.2 (2000) 78-84.

Garretón, M.A. (2003). *Incomplete Democracy*. Chapel Hill. University of North Carolina Press.

Gelb, S. (1998). The Politics of Macroeconomic Policy Reform in South Africa. Conference paper, Cape Town, 16/01/1998.

Gelb, S. (1999). The politics of macroeconomic policy reform in South Africa. Symposium, History Workshop of the University of the Witwatersrand, Johannesburg, 18/09/1999.

Gerwel, J. (1994). Education in South Africa: Means and Ends. In J.E. Spence (Ed.), *Change in South Africa*. Council on Foreign Relations Press: New York.

Giddens, A. (1987). *Social theory and modern sociology*. Stanford.
Givan, R., Roberts, K. & Soule, S. (Eds.) (2010). *The Diffusion of Social Movements: Actors, Mechanisms, and Political Effects*, Cambridge: Cambridge University Press.

González, R. (2004). Tres décadas de un nuevo orden económico: Chile, 1973-2003. *Revista Europea de Estudios Latinoamericanos y del Caribe*, n° 77, 2004. Pp. 61-77.

Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. *American Journal of Sociology*; vol 78, no 6. pp. 1360 – 1380.

Granovetter, M. (2001). A theoretical agenda for economic sociology. En M. Guillen, R. Collins, P. England & M. Meyer (Ed.), *The New Economic Sociology: Developments in an Emerging Field*. New York.

Gross, N. (2009). A pragmatist theory of social mechanisms. *American Sociological Review*, 74: 358–379.

Gruninger, S. (2003). Las ONG's durante la Transición chilena: Un análisis de su respuesta ideológica frente a su incorporación en políticas sociales de índole neoliberal. *Revista Mad*, 9.

Gruninger, S. (2003). Las ONG's durante la Transición chilena: Un análisis de su respuesta ideológica frente a su incorporación en políticas sociales de índole neoliberal. *Revista Mad*. No.9.

Guala, F. (2007). How to Do Things with Experimental Economics. In *Do Economists Make Markets?* Princeton University Press.

Gumede, V. (2011). Policy making in South Africa. In C. Landsberg & A. Venter (Eds.). *South African Government and Politics*. Pretoria: Van Schaik Publishers.

Gumede, V. (2009). Democratic Developmental State in Post-apartheid South Africa: The Dream Deferred? SAAPS Conference, UNISA, Pretoria, South Africa, 10 – 12 September 2014

Gumede, V. (2010). Developmental States Remain a Pipedream in Africa. *The Thinker: Journal of Progressive Thought*. Volume 19.

Gumede, V. (2011). Social and Economic Inclusion in Post-Apartheid South Africa. *Transformation Audit*. Institute of Justice and Reconciliation: Cape Town.

Gumede, V. (2013). Socio-Economic Transformation in Post-Apartheid South Africa: Progress and Challenges. In Ngcaweni, B. 2013. *The Future We Chose: Emerging Perspectives on the Centenary of the ANC*. Pretoria: AISA Press.

Gumede, V. (2014). *Democratic Developmental South Africa: A New Nation in the Making*. University of Johannesburg: Johannesburg.

Gumede, V. (2015). *Political Economy of Post-apartheid South Africa* (unpublished). CODESIA

Habermas, J. (1987). *The Philosophical Discourse of Modernity*. Cambridge: Polity Press.

Habermas, J. (1998). *Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso*. Madrid, España.

Habermas, J. (2001). *Why Europe needs a constitution?* *New Left Review*, 11 (September–October): 5–26.

Habib, A. (2009). *South Africa's Suspended Revolution: Hopes & Prospects*. Wits Press, Johannesburg

Hacker, J. (2005). *Policy Drift. The Hidden Politics of US Welfare State Retrenchment*. En W. Streeck & K. Thelen (Eds.), *Beyond Continuity*. Oxford: Oxford University Press.

Haferkamp, H. and Smelser, N. (Eds.) (1992). *Social Change and Modernity*. Berkeley, CA: University of California Press.

Hall, P. (ed.) (1989). *The Political Power of Economic Ideas: Keynesianism Across Nations*. Princeton, NJ: Princeton University Press

Hall, P., & Soskice, D. (2001). *Varieties of Capitalism*. New York: Oxford University Press.

Hanival, S. and Maia, J. (2008). *An Overview of the Performance*

of the South African Economy since 1994. Government Press: The Residency.

Hanival, S., Maia, J. (2007). An overview of the performance of the South African economy since 1994. Presidency of South Africa. Heymans 1995

Harris, E. (1999). Impacto de la crisis asiática en África al sur del Sahara. Finanzas y desarrollo: publicación trimestral del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, 36(1), 14-17.

Harsch, E. (1998). Africa tenses for Asian aftershocks. Africa Recovery, 12(2).

Harsch, E. (2001). South Africa tackles social inequities. Africa Recovery, Vol.14, No. 4. Recuperado de: <http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/subjindx/144soafr.htm>, version11.28.2001.

Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism (p. 256). Oxford: Oxford University Press.

Hassenteufel, P. (2005). De la comparaison internationale à la comparaison transnationale. Revue Française de Science Politique, 55(1), 113.

Hayek, F. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: Chicago University Press.

Hayek, F. (1993). La competencia como proceso de descubrimiento. Revista Estudios Públicos, (50).

Hedstrom, P. (1998). Dissecting the Social. Cambridge University Press.

Hedstrom, P. & Bearman, P. (2009). *The Oxford Handbook of Analytical Sociology*. Oxford University Press.

Hedstrom, P. and Swedberg, R. (1998). *Social Mechanisms: An Analytical Approach to Social Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.

Henríquez, A. (2008). La vía chilena hacia el socialismo: Análisis de los planteamientos teóricos esbozados por los líderes de la Unidad Popular. *Revista Pléyade*, 1, 91-128.

Hermon, D. (2004). *Beating the backlog: meeting targets and providing free basic services*. Human Sciences Research Council. *Integrated Rural and Regional Development*. Recuperado de: <file:///C:/Users/user01/Downloads/2395.pdf>.

Heymans, C. 1995. A lifelong task. *The RDP in perspective*. *Indicator SA*, 13(1):57-64.

Hoeckel, K. (2007). Key evidence on vocational education and training from previous OECD work. *EDU/EDPC/CERI(2007)6/ANN1*. OECD

Hoff, K. & Stiglitz, J. (2001). Modern economic theory and development. En G. Meier (Ed.), *Frontiers of development economics: The future in perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Hollingsworth, J. R. (2002) On Institutional Embeddedness. En J.R. Hollingsworth, K.H. Muller & E.J. Hollingsworth (Eds.), *Advancing Socio-economics: An Institutional Perspective*, Landham, MD: Rowman and Littlefield.

Honneth, A. (2004). Organized self-realization: Some paradoxes of individualization. *European Journal of Social Theory*, 7 (4): 463–

478.

Honneth, A. (2014). *Freedom's Right. The Social Foundation of Democratic Life*. Polity press. Cambridge

Houston, G.F. & Muthen, Y.G. (2000). *South Africa: a transformative state?* In *Democracy and Governance Review*. Mandela's Legacy 1994-1999. Pretoria: Human Science Research Council.

Houston, G.F., Muthen, Y.G. (2000). *South Africa: a transformative state?* In *Democracy and Governance Review*. (Ed). Mandela's Legacy 1994-1999. Pretoria: Human Science Research Council. <https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/rankorder/rankorderguide.html>

Huneus, C. (2006). *Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2005 en Chile*. *Revista de Estudios Internacionales*, 39(153).

Huneus, C., Cuevas, R., and Hernandez, F. (2014). *Los Centros de Investigación Privados (Think Thank) y la Oposición en el Régimen Autoritario Chileno*. *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 23 (1).

Johnson, C. (1982). *MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industry Policy 1925-1975*. Stanford University Press: Stanford.

Johnson, C. (1999). *The Development state: Odyssey of a concept*. In M. Woo-Cumings (Ed.), *The Developmental State*. Cornell University Press: Ithaca.

Joignant, A. (2011). *Tecnócratas, technopols y dirigentes de partido: tipos de agentes y especies de capital en las élites gubernamentales de la Concertación*. En P. Güell & A. Joignant

(Eds.), *Notables, tecnócratas y mandarines*. Ediciones UDP.

Joignant, A. (2011). *Tecnócratas, technopols y dirigentes de partido: tipos de agentes y especies de capital en las elites gubernamentales de la Concertación*. In P. Güell & A. Joignant (Eds.), *Notables, tecnócratas y mandarines*. Ediciones UDP.

Kane, J. (2001). *The Politics of Moral Capital*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kendall, G., Woodward, I. & Skribis, Z. (2009). *The Sociology of Cosmopolitanism*, London: Sage.

Klein, N. (2007). *La doctrina del shock: El auge del capitalismo del desastre*. Toronto.

Kotzé, D. (2000). *The Political Economy of Development in South Africa*. *African Security Review*, Vol.9, No. 3. Recuperado de: <http://www.iss.co.za/Pubs/ASR/9No3/PolEconom.html>.

Lam, D., Leibbrandt, M. & Mlatsheni, C. (2008). *Education and Youth Unemployment in South Africa*. A Southern Africa Labour and Development Research Unit Working Paper Number 22. Cape Town: SALDRU, University of Cape Town.

Lambrecht, K. (2011). *La distribución del ingreso en Chile: 1960-2000. Análisis del entorno*. Universidad de Chile, Santiago.

Larraín, F. (2012). *El sistema privado de pensiones en Chile y sus resguardos constitucionales*. *Revista chilena de derecho*, 39(2), 541-551.

Le Fort, G. (2000). *Los resultados macroeconómicos del gobierno de Eduardo Frei RT: Una evaluación comparativa*. Banco Central de Chile. Recuperado de:

<http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion/ef3d8a42ec3902fa83b870f383c4d4c703230a64.pdf>

Lee, M. C. (2001). Focus on South Africa: Prospects for the 21st Century. Recuperado de:

<http://www.uga.edu/afstu/NEWS/newsletter3/newletter3.html>.

Lee, M.C. (2001). Focus on South Africa: Prospects for the 21st Century. Recuperado de:

<http://www.uga.edu/afstu/NEWS/newsletter3/newletter3.html>.

Leibbrandt, M., Finn, A. & Woolard, I. (2012). Describing and decomposing post apartheid income inequality in South Africa. *Development Southern Africa*, Vol.29, No.1, pp.19-34.

Lesufi, I. (2005). Six Years of Neoliberal Socioeconomic Policies in South Africa. En A. Zegeye, R. Harris & P. Lauderdale (Eds.), *Globalization and Post-Apartheid South Africa* (pp.22–34). Toronto: de Sitter Publications.

Leubolt, B. (2015). One or two nation projects? Discourse on inequality and equality related policies in South Africa and Brazil. *Revista de Sociologia e Politica*, 23(55):35-51.

Levitsky, S. & Way, L. A. (2010). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge, UK: Cambridge University Press

Linz, J.J., Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1996.

Lo Vuolo, R. (2016). *The limits of autonomy in Latin American*

social policies. Promoting human capital or social control? In D. Casassas y P. Wagner (Eds.), Special Issue on Modernity and Capitalism. *European Journal of Social Theory*. Vol 19 Number 2. May 2016. SAGE publications.

Lo Vuolo, R. (2016). The limits of autonomy in Latin American social policies. Promoting human capital or social control? In D. Casassas y P. Wagner (Eds.), Special Issue on Modernity and Capitalism. *European Journal of Social Theory*. Vol 19 Number 2. May 2016. SAGE publications.

Lo Vuolo, R. 2016. The limits of autonomy in Latin American social policies. Promoting human capital or social control?. In Casassas, D y Wagner, P. Special Issue on Modernity and Capitalism. *European Journal of social theory*. Vol 19 number 2. May 2016. SAGE publications.

MacKenzie, D., Muniesa, F. & Siu, L. (2007). *Do Economists Make Markets? On the Performativity of Economics* (p. 392). Princeton: Princeton University Press.

Madariaga, A. (2016). Mechanisms of neoliberal resilience: comparing exchange rates and industrial policy in Chile and Estonia. *Socio-Economic Review*, 2016, Vol. 0, No. 0, 1–24

Mahoney, J. (2000). Path dependence in historical sociology. *Theory and Society*, 29(4), 507-548.

Mahoney, J. & Thelen, K. (2010). *A Theory of Gradual Institutional Change*. En J. Mahoney & K. Thelen (Ed.), *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency and Power*. Cambridge: Cambridge University Press.

Maillet, A. (2015). *Variedades de Neoliberalismo. Innovación conceptual para el análisis del rol del Estado en los Mercados*.

Revista de Estudios Políticos (nueva época)
ISSN-L: 0048-7694, Núm. 169, Madrid, julio-septiembre (2015),
págs. 109-136. doi: <http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.169.04> 109

Mandela, N. (2010). *El largo camino hacia la libertad*. Santillana Ediciones Generales.

Marais, H. (2001). *South Africa. Limits to Change. The Political Economy of Transition*. London & New York.

Marais, H. (2010). *South Africa Pushed to the Limit: The Political Economy of Change*. UCT Press: Cape Town.

Marais, H. (2011). *South Africa Pushed to the limit. The political economy of change*. UCT Press.

Martínez, J. and Díaz, A. (1996). *Chile, The Great Transformation*. Washington, DC: Brookings Institution

Mascareño, A. (2011). *Entre la diferenciación y los individuos: Derechos fundamentales y las redes de la infamia*. Revista Estudios Públicos | N° 124, 2011

Mayer, M., Gordhan, S., Manxeba, R., Hughes, C., Foley, P., Maroc, P., Lolwana, P., and Nell, M. (2000). *Towards a Youth Employment Strategy for South Africa*. Development Planning Division Working Paper Series No. 28. Development Bank of Southern Africa, Gauteng, South Africa.

Mayer, S.E. (2000). *Income Inequality, Economic Segregation and Children's Educational Attainment*. JCPR Working Papers 209. Northwestern University/University of Chicago Joint Center for Poverty Research.

Meyer, J.W., Boli, J., Thomas, G. & Ramirez, F. O. (1997). *World*

society and the nation-state. *American Journal of Sociology*, 103(1), 273-298.

Meyer, M.J. (2000). Globalisation: An Issue of Contestation and Struggle in South Africa. Recuperado de: <http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1300mm.html> version 11.29.2001.

Midgley, J. (2001). South Africa: the challenge of social development. *International Journal of Social Welfare*, Vol.10, No.4, pp:267-275.

Mirowski, P. & Plehwe, D. (2009). *The road from Mont Pèlerin: The Making of the Neoliberal Thought Collective*. Harvard University Press.

Mohammed, S. (2010). The State of the South African Economy, in J. Daniel, P. Naidoo, D. Pillay & R. Southall (Eds.), *New South African Review 1: 2010: Development or Decline?* Wits University Press: Johannesburg

Mönckeberg, M.O. (2001). *El saqueo de los grupos económicos al estado chileno*. Santiago de Chile

Morandé, F. & Noton, C. (2004). *La conquista de la inflación en Chile*. Paper presentado en la Conferencia del Presidente de la Sociedad de Economía de Chile, Punta Tralca.

Moreno, M. (2010). Think Thanks en Chile: Estilos y Prácticas Tecnocráticas en la Formación de Políticas. *Revista Enfoques VIII* (12).

Moulian, T. (1998). *Chile Actual, Anatomía de un Mito*. LOM ediciones

Mudge, S. L. (2008). What is neo-liberalism? *Socio-Economic Review*, 6(4), 703–731.

Muñoz Gomá, O. (1993). El estado regulador. En: Ó. Muñoz Gomá (Ed.), Después de las privatizaciones: Hacia el estado regulador. Santiago de Chile: DOLMEN/CIEPLAN, 17–47.

Muñoz Gomá, O. (2001). La economía chilena en el cambio de siglo y la estrategia de desarrollo. En: O. Muñoz Gomá (Ed.), Más allá del bosque: Transformar el modelo exportador. Santiago de Chile: FLACSO, 17–65.

Muñoz Gomá, O. (2009). El desarrollo institucional de CORFO y sus estrategias desde 1990. En: O. Muñoz Gomá (Ed.), Desarrollo productivo en Chile: La experiencia de CORFO entre 1990 y 2009. Santiago de Chile: Catalonia, 11–51.

Narayan, A. & Mahajan, S. (2013). The State of Opportunities in South Africa: Inequality Among Children and in the Labor Market. The World Bank. Poverty Reduction and Equity Department, Vol 2, Number 1. Recuperado de: http://worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Poverty_documents/Inequality-in-focus-April2013.pdf.

National Department of Education (1997). Education White Paper 3: A Programme for the Transformation of Higher Education. Department of Education: Pretoria.

National Planning Commission (2012). The National Development Plan 2030. Ministry of Planning. The South African Presidency: Pretoria.

National Youth Development Agency (2011). The South African Youth Context: the Young Generation. Midrand: NYDA

National Youth Development Agency (2011). The South African Youth Context: the Young Generation. Midrand: NYDA

Nattrass, N. (2006). Trading off Income and Health?: AIDS and the Disability Grant in South Africa. *Journal of Social Policy*, 35, pp 3-19 doi:10.1017/ S0047279405009293

Nawak, M. and Ricci, L. A. (2005). *Post-Apartheid South Africa: The First Ten Years*. International Monetary Fund: Washington.

Nedimovic, S. (2015) An unsettled past as a political resource in Chile and South Africa: a comparative analysis of the post-authoritarian periods; in P. Wagner (Ed). *African, American and European trajectories of modernity: past oppression, future justice?*, Annual of European and Global Studies Vol. 2, Edinburgh University Press.

Ngcaweni, B (2005). Developing Skills and Creating Employment through the School to Work Programme. *Youth Development Journal*. Profiling Umsobomvu Youth Fund Programmes, pp.24-39.

Norris, P. and Inglehart, R. (2009). *Cosmopolitan Communications: Cultural Diversity in a Globalized World*. Cambridge: Cambridge University Press.

North, D. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge.

Nozick, R. (1974). *Anarchy, state and utopia* (p. 384). New: Basic Books.

O'Donnell, G. (1994). The State, Democratization and Some Conceptual Problems. En. W.C. Smith; C.H. Acuña & E.A. Gamarra (Eds.). *Latin American Political Economy in the Age of Neoliberal Reform*. New Brunswick (NJ): Transaction

O'Mahony, P. and Delanty, G. (1998). *Rethinking Irish History*:

Nationalism, Identity and Ideology. London: Macmillan.

OECD (2013). Economic Survey of South Africa 2013. Organisation for Economic Cooperation and Development.

Offe, C. (2004). Capitalism by Democratic design? Democratic Theory facing the Triple Transition in East Central Europe. *Social research*, 71(3).

Olmos, C. & Silva, R. (2010). El rol del estado chileno en el desarrollo de las políticas de bienestar. *Némesis: Revista de estudiantes de sociología de la Universidad de Chile*, ISSN-e 07180497, N°. 8, 2010, págs. 89-102

Ominami, C. (2012). *Secretos de la Concertación*. Chile.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: the evolution of institutions of collective action*. Cambridge.

Ostrom, E. (2000). Collective action and the evolution of social norms. *Journal of Economic Perspectives*, 108, 137-158.

Padayachee, V. (2010). Global economic recession: effects and implications for South Africa at a time of political challenges. *Claves de la Economía Mundial*, 2 (4), 3-9

Palma, J.G. (2006). Globalizing inequality: "Centrifugal" and "centripetal" forces at work, ST/ESA/2006/DWP/35, DESA Working Papers No. 35. New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs.

Palma, J.G. (2017). Is the share of the rich what it's all about? The 'Palma Ratio' and the diversity of inequality across the world. En Rivera-Vargas, P., Sánchez, E., Morales-Olivares, R., Sáez-Rosenkranz, I., Yévenes, C. y Butendieck, S. (coords).

Conocimiento para la equidad social: pensando Chile globalmente (pp. 153-157). Santiago de Chile: Colección Políticas Públicas – USACH.

Peck, J. (2008). Remaking laissez-faire. *Progress in Human Geography*, 32(1), 3–43.

Peck, J., Theodore, N. & Brenner, N. (2009) Postneoliberalism and its malcontents. *Antipode*, 41(6)

Peña, M. (2011). Sujeto político y vida pública: privatización de la educación en Chile y sus consecuencias en los sujetos que se educan. *Polis, Revista de la Universidad Bolivariana*, 10(30), 199-215.

Perelman, M. (2007). Primitive accumulation from feudalism to neoliberalism. *Capitalism Nature Socialism* 18(2): 44-61.

Pichler, F. (2009). “Down-to-earth” cosmopolitanism: Subjective and objective measurements of cosmopolitanism in survey research. *Current Sociology*, 57 (5): 704–732.

Polanyi, K. (1944). *La gran transformación*. Quipu editorial.

Polanyi, K. (1994). *El sustento del hombre*. Barcelona.

Policy Coordination and Advisory Services in the South African Presidency (2008). *Towards a fifteen year review, synthesis is report on implementation of government programmes*. Pretoria: Government Communication and Information Systems. Recuperado de: <http://www.thethe South African Presidency.gov.za/main.asp?include+docs/15year/main.html>

Popkewitz, T.S. (2008). *Cosmopolitanism and the Age of School Reform: Science, Education, and Making Society by Making the*

Child. New York: Routledge.

Portales, F. (2000). Chile: una democracia tutelada. Santiago de Chile. Sudamericana

Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24(1-24).

Portes, A. (2006). Instituciones y desarrollo. Una revisión conceptual. *Cuadernos de economía*, 25(45).

Portes, A. (2010). *Economic Sociology: A systematic inquiry*. Princeton.

Pottinger, B. (2008). *The Mbeki Legacy*. Cape Town: Zebra Press.

Pottinger, B. (2008). *The Mbeki Legacy*. Cape Town: Zebra Press.

Przeworski, P., Alvarez, M.E., Cheibub, J.A. and Limongi, F. (2000). *Democracy and development*. Cambridge: Cambridge University Press.

Ramos, C. (2012). *El ensamblaje de ciencia social y sociedad. Conocimiento científico, gobierno de las conductas y producción de lo social*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Rebolledo Leyton, R. (2005). La crisis económica de 1967 en el contexto de la ruptura del sistema democrático. *Revista Universum*, 1(20), 124-139.

Reitzes, M. & White, F. (2010). *Positioning Civil Society Post-Polokwane: Coming to terms with ANC Political Leadership Changes*. Centre of Policy Studies: Johannesburg.

Ritter, A.R. y Pollock, D. (1987). La crisis de la deuda latinoamericana: causas, efectos y perspectivas. *Comercio Exterior*, 37(1).

Rodríguez, S. (2006). Las protestas: Sin miedo a Pinochet. Centro de Estudios Miguel Enríquez. Recuperado de: http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/muertepin8/muertepin8_0034.pdf

Roland, G. (2004). Understanding Institutional Change: Fast-Moving and Slow-Moving Institutions. *Studies in Comparative International Development*, 38(4), 109-131.

Román, E. (2003). El fomento productivo en una economía de mercado: Lecciones del caso chileno. En: O. Muñoz Gomá (Ed.), *Hacia un Chile competitivo: Instituciones y políticas*. Santiago de Chile: Ed.

Roudemetof, V. (2006). Transnationalism, cosmopolitanism and glocalization. *Current Sociology*, 53 (1): 113–115.

Sahlins, M. (2000). *Culture in Practice: Selected Essays*. New York: Zone Books.

Sartori, G. (1970). Concept misformation in comparative politics. *The American Political Science Review*, 64(4), 1033–1053.

Schneider, B. R. & Soskice, D. (2009). Inequality in Developed Countries and Latin America: Coordinated, Liberal and Hierarchical Systems. *Economy and Society*, 38(1), 17-52. November

Schneider, B.R. (2009). Hierarchical Market Economies and Varieties of Capitalism in Latin America. *Journal of Latin American Studies*, 41(3), 553-574.

Schneider, B.R. & Karcher, S. (2010). Complementarities and Continuities in the Political Economy of Labor Markets in Latin America. *Socio-economic review*, 8(4), 623-651.

Scott, J. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press.

Scully, T. (1992). *Los partidos de centro y la evolución política Chilena*. Santiago.

Seekings, J. (2013). *Economy, society and municipal services in Khayelitsha*. Centre for Social Science Research: University of Cape Town

Seekings, J. (2016). State-building, market regulation and citizenship in South Africa. In D. Casassas y P. Wagner (Eds.), *Special Issue on Modernity and Capitalism*. *European Journal of social theory*. Vol 19 number 2. May 2016. SAGE publications.

Seekings, J. and Nattrass, N. (2006). *Class, Race and inequality in South Africa*. Durban: University of KwaZulu Natal Press.

Sewell, W. (2005). *Logics of History: Social Theory and Social Transformation*. Chicago: University of Chicago Press.

Shonfield, A. (1965). *Modern Capitalism: The Changing Balance Of Public & Private Power*. Oxford University Press.

Siavelis, P. (2009). Enclaves de la transición y democracia chilena. *Revista de Ciencia Política* 29 (1):3-21.

Silva, E. (1996). *The State and Capital in Chile: Business Elites, Technocrats, and Market Economics*. Boulder: Westview Press.

Silva, E. (2002). Capital and the Lagos Presidency: Business as Usual? *Bulletin of Latin American Research* 21(3), 339–357.

Silva, P. (1991). Technocrats and Politics in Chile: From the Chicago Boys to the CIEPLAN Monks. *Journal of Latin American Studies* 23(2), 385–410.

Silva, P. (2011). La elite tecnocrática de la Concertación. En A. Joignant y P. Guell (Eds.), *Notables, tecnócratas y mandarines. Elementos de una sociología de las élites en Chile (1990-2010)*. Santiago: Ediciones UDP.

Soto, A. (2009). La Larga Sombra del Dictador. En F. Camacho (Ed.), *Stockholm Review of Latin American Studies*

South Africa's Twenty Year Review

South African Presidency (2014). *Twenty Year Review: South Africa 1994 – 2014*. Pretoria: Presidency.

South African Presidency. (2008). *Towards a Fifteen Year Review: 1994-2008*. Pretoria: Presidency.

Southall, R. (2010). South Africa (2010). From Short Term Success to Long Term Decline? En J. Daniel, P. Naidoo, D. Pillay & R. Southall (Eds). *New South African Review 1: 2010: Development or Decline?* Wits University Press: Johannesburg

Southall, R. and Wood, G. (1999). COSATU, the ANC and the Election: Whither the Alliance? *Transformation*, 38:68-81.

Stals, C. (1999). Speech by the Governor of the South African Reserve Bank, Dr Chris Stals, at the 52nd Congress of the South African Nurserymen's Association in Johannesburg on 17 May 1999. Recuperado de: <http://www.bis.org/review/r990519a.pdf>

Statistics South Africa (2004). Latest Key Indicator. Recuperado de: <http://www.statssa.gov.za/keyindicators/keyindicators.asp>.

Statistics South Africa (2009). Quarterly Labour Force Survey. Stats South Africa: Pretoria.

Statistics South Africa (2010). General Household Survey. Pretoria: Statistics South Africa.

Statistics South Africa (2012). Census 2011. Pretoria: Statistics South Africa. Pretoria: Statistics South Africa.

Statistics South Africa (2012). South African Statistics 2012. Statistics South Africa: Pretoria.

Stigler, G.J. (1957). Perfect Competition, Historically Contemplated. *Journal of Political Economy*, Vol. 65, No. 1 (Feb., 1957), pp. 1-17

Stiglitz, J., y Walsh, C. (2009). *Microeconomía* (p. 571). Barcelona: Ariel.

Streeck, W. (2005). Rejoinder: On Terminology, Functionalism, (Historical) Institutionalism and Liberalism. *Socio-Economic Review*, 3, 577-587.

Streeck, W. (2010). E pluribus unum? Varieties and commonalities of capitalism. MPIfG Discussion Paper 10/12, October 2010. Recuperado de: http://www.mpifg.de/pu/mpifg_dp/dp10-12.pdf.

Streeck, W. (2010a). E Pluribus Unum? Varieties and Commonalities of Capitalism Wolfgang Streeck. MPIfG Discussion Paper 10/12. Köln: Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.

Streeck, W. (2010b). Taking capitalism seriously: towards an institutionalist approach to contemporary political economy. *Socio-Economic Review*, 9(1), 137–167. doi:10.1093/ser/mwq028

Strydom, P. (1999). Triple contingency: The theoretical problem of the public in communication societies. *Philosophy and Social Criticism*, 25 (2): 1–25.

Strydom, P. (2011). *Contemporary Critical Theory and Methodology*. London: Routledge.

Strydom, P. (2011). The cognitive and metacognitive dimension of social and political theory. En G. Delanty & S. Turner (Eds.). *International Handbook of Contemporary Social and Political Theory*. London: Routledge.

Sunkel, O. (2011). *El presente como historia. Dos siglos de cambio y frustración en Chile*. Santiago, Chile.

Tampubolon, G. (2010). Social stratification and cultures hierarchy among the omnivores: Evidence from the Arts Council of England surveys. *Sociological Review*, 58 (1): 1–25.

Tan, K.-C. (2004). *Justice without Borders: Cosmopolitanism, Nationalism and Patriotism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Teorell, J. (2010). *Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the World, 1972–2006*. Estados Unidos, Cambridge University Press, 2010

Terreblanche, S. (2003). *A History of Inequality in South Africa, 1652-2002*. University of Natal Press: Pietermaritzburg.

Terreblanche, S. (2003). *A History of Inequality in South Africa*,

1652-2002. University of Natal Press: Pietermaritzburg.

Terreblanche, S. (2005). An evaluation of macroeconomic policy in the democratic era. Paper read at the Cosatu Conference on 10 Years of Democracy, in Johannesburg, 6 March 2005.

Terreblanche, S. (2012). Lost in transformation. South Africa's Search for a new future since 1986. KMM Review Publishing Company (PTY) Ltd.

The South African Presidency (2008). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Convention: South Africa Report. Pretoria: The South African Presidency Recuperado de: <http://www.the South African Presidency.gov.za/main.asp?include=docs/pcsa/gdch/osw/cedaw/index.html>.

The South African Presidency (2014). Twenty Year review South Africa. Government Print: Pretoria.

The World Bank (1997). World Development Report. Washington DC: World Bank.

The World Bank (2014). World Data Bank, World Development Indicators. Series on GDP (current US\$) for South Africa. Recuperado de: <http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true&ispopular=country&pid=17>.

Therborn, G. (1994). European Modernity and Beyond: The Trajectory of European Societies, 1945–2000. London: Sage.

Tilly, C. (1984). Big structures, large processes, huge comparisons. New York: Russell Sage Foundation.

Tilly, C. (2001a). Mechanisms in political processes. *Annual Review of Political Science*, 4: 21–41.

Tilly, C. (2001b). The historical analysis of political processes. En J. Turner (Ed.). *Handbook of Sociological Theory*, New York: Springer.

Tilly, C. (2008). *Explaining Social Processes*. London: Paradigm.

Todaro, M.P. and Smith, S.C. (2006). *Economic Development*. 9th (ed.). PEARSON Addison Wesley: Harlow.

Toussaint, E. (2007). Banco Mundial, el golpe de estado permanente. *La agenda oculta del Consenso de Washington*. Editorial El Viejo Topo.

Trevor, M. (1998). Medium Term Budget Policy Statement 1998. National Treasury. South Africa. Recuperado de: <http://www.treasury.gov.za/documents/mtbps/1998/all.pdf>

Turner, B.S. (2006). Classical sociology and cosmopolitanism: A critical defence of the social. *British Journal of Sociology*, 57 (1): 133–151.

Undurraga, T. (2014). *Divergencias. Trayectorias del Neoliberalismo en Argentina y Chile*. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago

Valenzuela, S. (1995). Orígenes y Transformaciones del Sistema de Partidos en Chile. *Estudios públicos*, 58.

Van der Berg, S. (2002). *Poverty, Fiscal Incidence and Social Outcomes*. Background Study: World Development Report.

Van der Berg, S. (2010). *Current poverty and income distribution in the context of South African history*. Stellenbosch Economic

Working Papers: 22/10.

Van Horn, R. & Mirowski, P. (2010). Neoliberalism and Chicago. In R. Emmett (Ed.), *The Elgar Companion to the Chicago School of Economics*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Varoufakis, Y. (2012). *El Minotauro global. Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía mundial*. Madrid, 2012. Capitán Swing Libros.

Visser, W. (2004). *Shifting RDP into Gear: the ANC Government Dilemma in providing an equitable system of Social Security for the New South Africa*. University of Stellenbosch: Stellenbosch.

VVan Wyk, J. (2009). *Cadres, Capitalists and Coalitions: The ANC, Business and Development in South Africa*. South Africa: Developmental Leadership Program - University of South Africa.

Wagner, P. (1997). *Sociología de la modernidad*. España.

Wagner, P. (2009). *Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity*. Cambridge: Polity Press.

Wagner, P. (2011). From interpretation to civilization – and back: Analyzing the trajectories of non-European modernities. *European Journal of Social Theory*, 14 (1): 89–106.

Wagner, P. (2012). *Modernity: Understanding the Present*. Cambridge: Polity Press.

Wagner, P. (2015). *Progress: A Reconstruction*. Cambridge: Polity.

Wallerstein, I. (2001). *The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-First Century*. Minneapolis.

Wardle, H. (2007). A groundwork for West Indian cultural openness. *Journal of the Royal Anthropological Institute*, 13: 567–583.

Weber, M. (1949). *The Methodology of the Social Sciences*. New York: The Free Press.

Weber, M. (2002). *Economía y sociedad*. Fondo de Cultura Económica. Mexico.

Wilhelmy, M. y Durán, R. (2003). Los principales rasgos de la política exterior chilena entre 1973 y el 2000. *Revista de Ciencia Política*, XXIII(2), 273-286.

Williamson, J. (1990). What Washington means by policy reform. *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?* J. Williamson (Ed.), Washington: Institute for International Economics.

Williamson, O. (1985). *The economic institutions of capitalism*. New York.

Wilson, F. (2012). Historical Roots of Inequality in South Africa. *Economic History of Developing Regions*, 26(1):1-15

Wuthnow, R. (1989). *Communities of Discourse: Ideology and Social Structure in the Reformation, the Enlightenment, and European Socialism*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Wuthnow, R. (1992). Cultural change and sociological theory. En H. Haferkamp and N. Smelser (Eds.). *Social Change and Modernity*. Berkeley, CA: University of California Press.

Anexos

1. Anexo Pautas de Entrevistas

i. Pautas de Entrevista Chile

I. Contextualización general

Estoy realizando una investigación sobre el desarrollo de la política económica en Chile pos dictadura (comienzo de los gobiernos de la concertación), particularmente interesa indagar sobre el desarrollo de la política económica estatal del periodo.

NOTA 1: En caso de entrevistados del ámbito académico, profundizar directamente en los paradigmas influyentes en el desarrollo institucional.

Pensando en los cambios que han ocurrido en Chile en estas últimas dos décadas.

¿Cómo evaluaría esos cambios en términos del rol del Estado en la coordinación de la economía?

¿Cuáles son los cambios institucionales que le parecen relevantes de destacar, en términos de desarrollo institucional de la economía en materia estatal?

(Indagar en continuidades o discontinuidades si es pertinente)
(Indagar en hipótesis sobre la “ausencia de cambio”)

Ahora, en el resto de la entrevista, nos enfocaremos particularmente en los *cambios institucionales claves* que usted ha mencionado y otros importantes del periodo.

NOTA 2: Si el entrevistado no los menciona, indagar en cambios

institucionales claves:

- a. Autonomización del Banco Central en 1990.
- b. Reforma tributaria del gobierno de Frei (disminución de la evasión tributaria)
- c. Política del Superavit Estructural (anti cíclica) del Lagos-Bachelet
- d. Gestión del Gasto público con el desarrollo de la DIPRES (Dirección de Presupuestos)
- e. Cambios en el Código del Trabajo,
- f. Ausencia de cambios sustanciales en: SEGURIDAD SOCIAL (AFP estatales, Focalización del gasto), SALUD (ISAPRES), EDUCACIÓN (emergencia Universidades Privadas, permanencia municipalización)

II. Paradigmas académicos Instituciones académicas

¿Qué paradigmas económicos estuvieron y han estado presentes Sustentando estos cambios?.

- a. ¿Qué escuelas de pensamiento?
- b. ¿Qué supuestos sustentan las decisiones institucionales, ¿son supuestos de carácter técnico?.
- c. ¿Qué comunidades científicas en torno a la economía existieron en el periodo?.
- d. ¿Dichas comunidades estaban enmarcadas en organizaciones?.
- e. ¿Qué rol jugaron organismos internacionales como la CEPAL?
- f. ¿Qué rol jugaron organismos nacionales como CIEPLAN.
- g. ¿Qué rol jugaron las universidades chilenas?.
- h. ¿Qué conceptos podría decir que fueron claves en este periodo?

III. Actores Claves

- a. ¿Qué actores podría mencionar como claves en este periodo?
(Indagar en nombres)
- b. ¿Qué discrepancias existieron entre los actores mencionados?.

NOTA: Indagar en Que rol jugaron los empresarios, Que rol jugaron los actores sindicales.

II. Aspectos Normativos

Gatillante: Un sociólogo alemán, Max Weber, quién analiza la evolución del capitalismo mundial, realiza la distinción entre **ética de la responsabilidad** y **ética de la convicción**. La primera se responde a la evaluación de consecuencias de las acciones, confronta medios y fines, mide las consecuencias hipotéticas. La segunda, responde más a creencias morales y e implica por lo mismo mayor intransigencia en la búsqueda de lo que se considera correcto, en este caso, el “correcto” desarrollo de las instituciones económicas”.

¿Bajo esta distinción teórica, cual “ética” diría usted que primo en el periodo y porque?.¿Qué otras visiones normativas usted podría identificar?.

III. Apartado de Actores involucrados (en el caso de entrevista a ex ministros de Hacienda y Economía)

Preguntar distintamente por situaciones concretas.Ej. Carlos Ominami (ex ministro economía Lagos), preguntar por reajuste del código del trabajo.

ii. Pauta de Entrevista Sudáfrica

Interview South Africa

I. Introduccion

Thinking about the changes that have occurred in South Africa in the last two decades, after Apartheid period.

a. How would you assess these changes in terms of the state's role in the coordination of the economy?.

b. Which are the institutional changes that seem relevant to note in terms of institutional development of the economy in state

c. What are the continuities or discontinuities that seem relevant?, in relation with apartheid period.

d. Wich is the main public policy, post apartheid period?, and what you think about this public policy?

II. Institutional changes.

Now, we will focus particularly on key institutional changes. How do you feel about the following changes?.

b. Government tax reform (reduction of tax evasion?)

d. Public expenditure management with the development. e. Changes in the Labour Code,

f. No substantial changes in social security

III. Academic scholars Paradigms

a. Which economic paradigms were and have been present underpinning these changes?.

b. What schools of thought?

c. What assumptions underlie institutional decisions, are technical or ideological?.

d. What scientific communities surrounding the economy existed in the period?.

e. What role did international organizations play? g. What role did the SA universities play?.

h. What concepts could say that were key in this period? (Inequality, reconciliation)

IV. Key Actors

a. Who are the key actors in this period?

b. What role did the workers and others stakeholders (unions)?

c. What differences or conflict exist between actors.

d. What role did the big capital play?

V. The role of fear /violence

a. What role did fear or Violence in generating consensus and dissent?

b. You consider that there has been an ideological use of the fear on the part of democratic governments.

c. What were the mains forms and agencies of the violence mainly?, in post apartheid period. (structural, symbolic, resistance, fear)

VI. Regulatory Aspects

- a. Considering ANC policy planning in the period of apartheid.
- b. Do you think governments have pursued a policy coherence?.
- c. Which factors that have played for or against?
- d. What other normative views you could identify?.

2. Anexo. Crisis y la manera de gestionarlas: Chile y Sudáfrica

El presente anexo fue elaborado para desarrollar uno de los mecanismos explicativos, sin embargo al ser un patrón común de la mayoría de los países neoliberales no fue considerado en la lista de los 6 mecanismos.

Crisis Asiática

Luego de tres décadas de crecimiento, una baja inflación, estabilidad macroeconómica, una sólida situación fiscal, altas tasas de ahorro, economías abiertas y sectores exportadores abiertos en las economías asiáticas, principalmente se habla de Corea del Sur, Indonesia, Malasia y Tailandia, no se veía venir una crisis de dimensiones globales. El caso de Tailandia resulta ilustrativo del problema, ya que a mediados de 1997 las reservas monetarias del país se habían agotado solicitando ayuda del FMI. Las causas de la crisis se pueden atribuir primero a una masiva llegada de fondos internacionales lo que disparó los precios de las acciones y de los bienes y raíces, es decir, se creó una burbuja. Los regímenes de cambios fijos dieron una engañosa seguridad que incentivó la adquisición de deuda en dólares de EUA; sin embargo, Estados Unidos empezó a subir sus tasas de interés lo que hizo más atractivo a este país, opacando al sureste asiático, cayendo sus exportaciones, que junto con la apreciación del dólar, a la cual estaba sujetas muchas monedas asiáticas, acabó por pinchar la burbuja (Aghevli, 1999). La crisis se vio reflejada en la caída del PIB de los diferentes países asiáticos, los niveles de exportaciones e importaciones, que acabó contagiando a otras economías del mundo.

Chile

Al estallar la crisis económica asiática (1997-1998) sus efectos se dejaron sentir con gran fuerza en los diferentes países del mundo, y con una fuerza mayor en países latinoamericanos que ya tenían una

relación comercial cada vez más fuerte con los países de dicho continente, principalmente con China, Japón y Corea del Sur. Por ejemplo, en el caso de Chile luego de experimentar una fuerte entrada de capitales en los años previos a la crisis, se viene un desplome y salida de capitales nacionales y externos (Ffrench-Davis & Heresi, 2014). La producción pasó de experimentar un crecimiento de 7% en 1996 a una caída del 0.7% en 1999. Trayendo como consecuencias altas tasas de desempleo de alrededor de diez por ciento, caídas en las tasas de inversión de tres puntos porcentuales del PIB en ese quinquenio (Ffrench-Davis & Heresi, 2014).

Dentro de las herramientas que tiene el Estado, por medio de los bancos centrales, está la política monetaria con la cual pueden mover la tasa de interés de referencia e influir en el comportamiento de los agentes económicos. De esta manera, el Banco Central elevó la tasa de interés a un 14% con el fin de evitar la salida de capitales en septiembre de 1998. Luego se dio pasó a un régimen de libre flotación del tipo de cambio que se tradujo en fuertes depreciaciones por el mercado, lo que se traduciría en mayor competitividad de las exportaciones chilenas.

Durante los siguientes años hubo cambios significativos en las políticas macroeconómicas, por ejemplo, el Banco Central centró la política monetaria en cumplir la meta inflacionaria del rango de 2 a 4%, una flexibilidad cambiaria, y una cuenta de capitales abierta. Este tipo de políticas claramente van en la misma línea con las recomendaciones de los organismos financieros internacionales, por ejemplo, la apertura de la cuenta de capitales se traduciría en menor regulación a la libre movilidad del capital (Ffrench-Davis & Heresi, 2014). Este tipo de medidas junto con una política fiscal basada en un balance estructural fueron las medidas contra cíclicas con las que se trató de aminorar los efectos de la crisis financiera asiática. Por el lado externo, los precios de las materias primas experimentaron un aumento desde el 2003, aumentando el volumen del comercio internacional, lo que acabó ayudando a las economías

latinoamericanas.

Sudáfrica

En el caso de Sudáfrica, la crisis asiática se sintió con mayor fuerza en comparación con el resto de los países africanos al ser el único país del sur de África con mercados financieros desarrollados y con una mayor influencia del capital privado de tal manera que fue el país más expuesto al efecto de contagio de la crisis; aunque el efecto fue en mucho menor medida que el experimentados por los países asiáticos y latinoamericanos. De tal manera que junto con desaceleración del crecimiento de los países con lo que tenía mayor relación comercial y la disminución de los flujos de capital provocaron que el PIB del país creciera sólo a una tasa del 0.6% en 1998, la cual se puede atribuir directamente a los efectos de la crisis mundial. (Harris, 1999). Para julio de 1998 su moneda ya se había depreciado 14% contra el dólar y el precio de las acciones de la bolsa habían caído denotando cierta preocupación sobre el efecto de la crisis sobre la economía de Sudáfrica (Harsch, 1998).

Sin embargo, si bien la crisis asiática tuvo un efecto en el comportamiento económico de Sudáfrica, este fue limitado ya que si bien la tasa de crecimiento se ubicó en 0.6% en 1998, para 1999 ya había un crecimiento de 2.4% del PIB. Las herramientas del Estado, por medio del Banco Central, en este tipo de situaciones es usualmente una baja de las tasas de interés de referencia; de tal manera que en 1998 la tasa era de 19% y para 1999 la tasa disminuye hasta un 12% con el fin de inyectar liquidez a la economía. Por otra parte, al tener un tipo de cambio flexible, el rand se movió de acuerdo a las condiciones del mercado, mejorando la competitividad de las exportaciones (Trevor, 1998). Sumado a que las condiciones se fueron estabilizando en las economías asiáticas, junto con ayudas económicas a países como Brasil fueron llevadas a cabo, los mercados dejaron la volatilidad, situación que fue seguida por los mercados financieros sudafricanos (Stals, 1999).

Como se puede apreciar los Estados tienen diferentes herramientas económicas contra las cíclicas que pueden ayudar a contrarrestar los efectos de las crisis económicas como la política monetaria o la fiscal, así como el uso de programas gubernamentales, por ejemplo, para emplear a los trabajadores más vulnerables. Sin embargo, en un mundo con cada vez mayores lazos económicos, los países difícilmente se pueden extraer del contexto internacional y de sus consecuencias tales como las crisis económicas recientes.

Crisis financiera y económica 2008

A diferencia de las crisis recientes de las últimas décadas, la crisis financiera y económica de 2008 tuvo como epicentro a la mayor economía del mundo, Estados Unidos, para luego tener efectos principalmente a los países considerados desarrollados aunque sintiéndose de manera notable también en los países en desarrollo.

Uno de los mayores socios comerciales de Chile es los Estados Unidos, de tal manera que es el segundo mayor receptor de los productos chilenos después de China, manteniéndose la misma relación respecto a las importaciones hacia Chile. Y tomando en cuenta que la crisis financiera mundial se originó en Estados Unidos, ya se esperaba que la economía chilena se resintiera. Ejemplo de esto fue que las exportaciones totales de Chile pasaron de representar casi un 44% como porcentaje del PIB a un 37% en 2009. Y las importaciones de un 39% en 2008 a un 29% en 2009. La situación es similar para Sudáfrica, ya que uno de sus mayores socios comerciales es Estados Unidos, siendo este el segundo lugar a donde se dirigen las exportaciones de Sudáfrica, sólo superada por China; los efectos de la crisis se vieron reflejados, por ejemplo, en las exportaciones totales que pasaron de 35% en 2008 a un 28% como porcentaje del PIB en 2009.

Las tasas de crecimientos de ambos países se vieron contraídas en el

2009. El PIB de Chile pasó de un 3.29% en 2008 a una contracción de 1.04% en 2009. En el caso de Sudáfrica pasó algo muy similar al pasar de un 3.19% a una reducción del PIB de 1.54% en el mismo periodo. Ante el periodo de inestabilidad que vivió el mundo, las inversiones ya se movían con cautela, el stock de IED pasó de representar un 65% en 2007 a un 56% en 2008 en Chile . Mientras que para Sudáfrica pasó de un 44% como porcentaje del PIB a un 22% en el mismo periodo . El desempleo aumento en ambos países al pasar de un 7.8% en 2008 a un 9.70% en 2009 en Chile, mientras en Sudáfrica el aumento fue menor al pasar de un 22.7% a un 23.7% para los mismos años .

Gestión de la crisis financiera mundial iniciada en 2008

Chile

Una vez más el gobierno hizo uso de las diferentes herramientas económicas que dispone para enfrentar la crisis de 2008. Y con el fin de componer las restricciones crediticias derivadas de la incertidumbre económica mundial, las autoridades monetarias y fiscales implementaron medidas para inyectar liquidez (financiamiento) a los agentes económicos por medio de los diferentes instrumentos financieros como los swaps, repos y colaterales (Ffrench-Davis & Heresi, 2014).

Ante el panorama adverso de la economía mundial, el Banco Central que había mantenido su tasas de interés de referencia en 8.25% en 2008, para julio de 2009 la política monetaria se había relajando hasta llegar a una tasas de interés de 0.50% esto con el objetivo de inyectar dinero a la economía y de esta manera incentivarla; cabe recordar que en términos prácticos una tasa de interés de referencia baja se vería reflejada en la reducción de las tasas de interés de los créditos otorgados a los agentes económicos.

Una vez superado la mayor parte de la incertidumbre, en 2009 los precios de las materias primas empiezan a recuperarse, dentro de ellos el cobre lo que ayudó a mejorar las condiciones económicas del país. Se redujo de manera temporal los impuestos a sectores clave como combustibles, créditos y a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno entregó bonos a las familias de menores ingresos. Se instauraron subsidios a la contratación de jóvenes de bajos ingresos. Además, se llegaron a financiar obras públicas por 700 millones de dólares, incrementando la inversión pública, medida considerada clave para incentivar la economía (Ffrench-Davis & Heresi, 2014).

Sudáfrica

Al ser el país con el sistema financiero más desarrollado en África, Sudáfrica sentiría de manera rápida y profunda los estragos de la crisis financiera económica de 2008. Sin embargo, el Ministro de Finanzas, Trevor Manuel, consideraba que no se vería afectada severamente, su argumento se apoyaba en que la crisis asiática de 1997 la habían librado bastante bien, tenían un crecimiento aceptable y la inflación estaba bajo control (Padayachee, 2010). Sin embargo, se pasó al desencanto cuando la tasa de crecimiento del PIB cayó 1.8% en el último trimestre de 2008, para derrumbarse un 6.4% en el primer trimestre de 2009.

El Banco Central empezó hacer uso de sus herramientas monetarias ya que la tasa de interés de referencia llegó a estar en 12% a mitad del año 2008, y al final del mismo año, cuando se dejó sentir la crisis en Estados Unidos con mayor fuerza, la tasa pasó a 11.50%, para ir bajando progresivamente hasta el 5% en 2012 con el objetivo de estimular la economía. En 2016 la tasa es de 7%, lo que denota la cautela respecto a la superación de la crisis que inició en 2008 y continúan sus secuelas hasta la fecha.

Una de las medidas activas del gobierno durante fase más delicada de la crisis fue la inversión pública en obras tales como construcción de vías de tren y caminos, centrales eléctricas, casas, salud, sistemas sanitarios y agua. Aunque parte de esta inversión pública ya estaba planeada como parte de las adaptaciones para el mundial de fútbol de 2010 (Padayachee, 2010). Además se trató de persuadir para que los bancos comerciales apretaran sus criterios de préstamos pero al mismo tiempo que el crédito fluyera. Así como una mayor supervisión y regulación bancaria pero tratando de evitar una sobre regulación.

3. Anexo. Lista de Think Tanks en Sudáfrica

Lista elaborada para el trabajo de campo en Sudáfrica 2013 y 2016.

Think tank, policy institute or a research institute is an organization that performs research and advocacy concerning topics such as social policy, political strategy, economics, military, technology and non-culture. The following are a list of think tanks in South Africa.

- The Centre for Conflict Resolution - The Centre for Conflict Resolution aims to contribute towards a just and sustainable peace in Africa by promoting constructive, creative and co-operative approaches to the resolution of conflict through training, policy development, research, and capacity-building.
- Location: Cape Town, Western Cape
- Research areas: Peace and security, regional integration, Development and external actors
- Web address: <http://www.ccr.org.za>.
- Executive Director: Dr Tony Karbo tkarbo@ccr.org.za.
- Senior Researcher: Dr Dawn Nagar dnagar@ccr.org.za.
- The South African Institute of International Affairs- SAIIA's research agenda focuses on the external engagement of South Africa and Africa with the rest of the world - with a view to countering the continent's marginal status in global political and economic affairs; furthering good governance, peace and stability in the region; and ensuring that Africa is placed on a long-term, sustainable growth path.
- Location: Johannesburg
- Research areas: Economic Diplomacy, Foreign Policy, Governance of Africa's resources, Governance of APRM
- Web address: <http://www.saiia.org.za/>
- Research Director: Neuma Grobbelaar
Neuma.Grobbelaar@wits.ac.za.
- The Institute of Security Studies- The Institute for Security Studies is an African organisation which aims to enhance

human security on the continent

- Location: Pretoria
- Research areas: African courts, justice and human rights, Africa development, corruption, Gender and security,
- Web address: <https://issafrica.org/>
- Chairman of ISS Board: Prof Jakkie Cilliers
jcilliers@issafrica.org.
- Director: Dr Anton du Plessis aduplessis@issafrica.org.
- Senior Researcher: Allan Ngari angari@issafrica.org.
- Senior Researcher: Amanda Lucey alucey@issafrica.org.
- Senior Researcher: Fonteh Akum fakuma@issafrica.org.
- Senior Researcher: Gustavo de Carvalho
gdecarvalho@issafrica.org.
- Centre of Development Enterprise- advocates for market-based development solutions and amplify research and thought from India, Brazil, South Africa initially in international debates on development strategy. It is aimed at promoting modernisation (within a democratic context) without necessarily imposing the beliefs and cultures of 'western modernity' on the diverse people of the developing world
- Location: Johannesburg
- Research areas: Business Development, Migration, Land Reform, Urbanisation and cities,
- Web address: <http://www.cde.org.za/>
- Executive Director: Ann Bernstein Ann@cde.org.za
- South African BRINCS Think Tank (SABTT) - is aimed at encouraging dialogue and cooperation for the promotion of peace, security and development in a multi-polar, interdependent and increasingly complex, globalising world.
- Location: Johannesburg
- Web address: <http://sabricts-thinktank.org.za/>
- National Institute for the Humanities and Social Science- is a joint research programme between the which is aimed at providing research support for South African and Indian

academics currently undertaking research projects to promote and strengthen the research cooperation in the field of humanities and social sciences between the two countries, by providing funding to allow joint research activities for internationally excellent research in relevant areas of mutual interest and benefit.

- Location: Johannesburg
- Web address: <http://www.nihss.ac.za/>
- Executive Director/ CEO: Prof Sarah Mosoetsa Sarah@nihss.ac.za or Nicola@nihss.ac.za
- Academic Director Research: Dr Sibonginkosi Zakes Mazibuko sibonginkosi@nihss.ac.za
- Human Science Research Council (HSRC)- conducts research that generates critical and independent knowledge relative to all aspects of human and social development.
- Location: Pretoria
- Research Areas: Democracy, Governance and Service Delivery; Economic Performance and Development; Education and Skills Development; HIV, AIDS, STIs and Tuberculosis; Human and Social Development; Population Health, Health Systems and Innovation; Centre for Science, Technology and Innovation Indicators and Africa Institute of South Africa
- Web address: <http://www.hsrc.ac.za/en>
- Executive Director/CEO: Prof Crain A. Soudien mrousseau@hsrc.ac.za
- Deputy CEO and Research Director: Prof Leickness Simbayi lsimbayi@hsrc.ac.za
- Africa Institute of South Africa (AISA)- AISA is a South African think with a proposed research focus entitled: SEEKING AFRICAN SOLUTIONS FOR AFRICA'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT, with three related priority research themes addressing Africa's developmental state; cohesive and sustainable communities void of conflict, crime and corruption; and sustainable resource management and use
- Location: Pretoria

- Research Area: Good governance, Sustainable development and Human security
 - Web address: Web address: <http://www.ai.org.za/>
 - Research Director: Dr Thokozani Simelane
 - Chief Research Specialist and Head: Dr Sehlare Makgetlaneng
-
- Centre for Politics and Research- CPR is a South African think-tank dedicated to conducting research and providing advisory services to entities in the public and private sectors on politics, policy and other related areas. As a contribution to strengthening democracy and promoting an open society, our experts also participate and offer their perspectives in public discourses
 - Location: Pretoria
 - Research Areas: General Research
 - Web address: <http://www.politicsresearch.co.za/>
 - Executive Director: Prince Mashele
prince@politicsresearch.co.za /
itumeleng@politicsresearch.co.za
 - Senior Researcher: Dr Mzukisi Qobo
mzukisi@politicsresearch.co.za /
itumeleng@politicsresearch.co.za
 - Institute of Global Dialogue (IGD)- The IGD is an independent South African-based foreign policy think tank dedicated to the analysis of, and dialogue on the evolving international political and economic environment and the role of Africa and South Africa. It advances a balanced, relevant and policy-oriented analysis, debate and documentation of South Africa's role in international relations and diplomacy.
 - Location: Pretoria
 - Research Areas: SA Foreign policy and analysis, Developmental diplomacy, Environmental diplomacy, SACD institutions, South-south cooperation,
 - Web address: <http://www.igd.org.za/>
 - Director: Dr Siphamandla Zondi zondi@igd.org.za

- Senior Researcher: Philani Mthembu philani@igd.org.za
- Centre for Civil Society (CCS)- CCS is aimed at advancing socio-economic and environmental justice by developing critical knowledge about, for and in dialogue with civil society through teaching, research and publishing.
- Location: Kwa-Zulu Natal
- Research Areas: social movements, social protest and local participation in South Africa; variations of philanthropy in Africa - social justice and social change; HIV/AIDS in Africa - connecting public administration, policy and communities and xenophobia
- Web address: <http://ccs.ukzn.ac.za/>
- Director: Dr Shauna Mottiar Mottiar@ukzn.ac.za
- Centre for Development and Enterprise Council for Scientific and Industrial Research (SCIR)-
- Location:
- Research Areas: Industry, Health, Energy, Defense and security, Built environment, Natural environment and Digital environment
- Web address: <https://csir.co.za/>
- Director and Chief Researcher: Prof Suprakas Sinha Ray rsuprakas@csir.co.za
- Principal Researcher: Dr Louis Celliers lcelliers@csir.co.za
- Institute of Justice and Reconciliation (IJR)- the IJR contributes to post-conflict stability, good governance and human security through programmes that promote political reconciliation and social and economic justice across Africa.
- Location: Cape Town
- Research Areas: Justice and Peacebuilding Programme, Socio-economic Justice and Inclusive Growth, and Racism, social cohesion and inclusion.
- Web address: <http://www.ijr.org.za/>
- Executive Director: Stanley Henkeman info@ijr.org.za
- Head of Policy and Research: Jan Hofmeyr info@ijr.org.za

- Public Affairs Research Institute (PARI)- PARI works to improve the effectiveness of state institutions in the delivery of services and infrastructure. We generate high-quality research to better understand the drivers of institutional performance in the public sector, and improve implementation of policies in relevant fields. We work with relevant change agents in government to address institutional blockages or systems weaknesses in their departments.
- Location: Rhodes
- Research Areas: Institutional dynamics, State formation, and Social change
- Web address: <http://pari.org.za/>
- Executive Director: Prof Ivor Chipkin ichipkin@pari.org.za
- Senior Researcher: Dr. Alice Soares Guimarães alices@pari.org.za
- Institute of Race Relations (IRR)- The IRR produces, disseminates, and promotes the new ideas that South African policy makers need in order to promote the investment and economic growth that will draw poor people into jobs and build a more prosperous South Africa.
- Location: Pretoria
- Research Areas: Free labour markets to help the poor to find work; Build a better investment environment to draw new investment into South Africa and support risk taking entrepreneurs; Reform the quality of the education system by putting parents and communities in charge of schools; Promote and protect property rights to promote investment, growth, and the building of a much bigger middle class; Abandon cadre deployment to defeat corruption and incompetence and enhance democracy and accountability; Promote and protecting a free and independent media, judiciary, and civil society
- Web address: <http://irr.org.za/>
- CEO: John Kane-Berman
- Southern African Regional Poverty Network (SARPN)- SARPN is a non-profit organisation that promotes debate and

knowledge sharing on poverty reduction processes and experiences in Southern Africa. SARPN aims to contribute towards effective reduction of poverty in the countries of the Southern African Development Community (SADC) through creating platforms for effective pro-poor policy, strategy and practice.

- Location: Johannesburg
- Research Areas: Agriculture, Children and education, Civil society, Debt, Energy, Environment and climate change, Food security, Gender, Governance, Health, HIV /AIDS, Human security, Land, Migration, Poverty reduction frameworks and critiques, Trade, Water and sanitation
- Web address: <http://www.sarpn.org/focus.php>
- Studies in Poverty and Inequality Institute (SPII)- The Studies in Poverty and Inequality Institute (SPII) is an independent not-for-profit research think tank which focuses on generating new knowledge, information and analysis in the field of poverty and inequality studies.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: Socio-economic rights, basic needs, social dialogue on poverty and inequality,
- Web address: <http://www.spii.org.za/>
- Executive Director: Isobel Frye Isobel@spii.org.za
- Open Society Initiative of South Africa (OSISA)- OSISA's mission is to initiate and support programmes working towards open society ideals, and to advocate for these ideals in southern Africa
- Location: Johannesburg
- Research Areas: Economic justice, Education, Gender and Women's rights, HIV/AIDS, Human Rights and Democracy Building, Indigenous rights and Law
- Web address: <http://osisa.org/>
- Executive Director: Lerato Mohlamenyane
- Executive Director: Siphosami Malunga
- Oxfam South Africa- Oxfam South Africa works at multiple

levels including at the grassroots and with policy-makers, engaging directly with communities as well as decision makers to ensure that people living in poverty can improve their lives and livelihoods and have a say in decisions that affect them

- Location: Johannesburg
- Research Areas: Women's rights and gender justice, economic justice, democracy and governance, and local to global
- Web address: <http://www.oxfam.org.za/>
- Executive Director: Siphokazi Mthathi info@oxfam.org.za
- Research and Policy lead: Ronald Wesso info@oxfam.org.za
- Economic Policy Research Institute (EPRI) - EPRI is a not-for-profit, independent social policy research institute which conducts research on issues related to social protection in Africa and Asia, organises and teaches at social protection capacity building courses around the globe, and provides economic and social policy training to members of the South African parliament.
- Location: Cape Town
- Research Areas: EPRI is committed to pro-poor, equitable and inclusive economic growth and to social protection for vulnerable people as developmental responses to poverty.
- Web address: <http://epri.org.za/>
- Director: Dr. Michael Samson msamson@epri.org.za
- Senior Researcher: Mr. Kenneth Mac Quene kmacquene@epri.org.za
- Senior Researcher: Ms. Ingrid van Niekerk ivanniekerk@epri.org.za
- Amnesty International- AMNESTY INTERNATIONAL is a global movement dedicated to ending grave abuses of human rights and getting justice for those whose rights have been violated.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: Right of Marginalised persons and Groups; Economic, social & cultural rights programme; and Human Rights and Accountability.

- Web address: <http://amnesty.org.za/>
- Executive Director: Deprose muchena
Deprose.muchena@amnesty.org.za
- Senior Researcher: Tshidi Leatswe
Tshidi.leatswe@amnesty.org.za
- Action Aid- ActionAid is a global movement of people working together to further human rights and defeat poverty for all.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: Food rights; Women's rights; Governance; Education; Emergencies and conflict; Climate change and HIV and AIDS
- Web address: <http://www.actionaid.org/south-africa>
- Southern Africa Trust- The Southern Africa Trust is an independent agency that supports deeper and wider engagement in regional policy to end poverty.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: Learning for better poverty reduction results; understanding civil society organisations and building capability to do pro-poor policy work; constructing regional identity and civic participation amongst citizens; creating new opportunities for voices of the poor to be heard in policy dialogue; and more and better financing to civil society organisations in southern africa
- Web address: <http://www.southernafricatrust.org/>
- Executive Director: Dr Bhekinkosi Moyo
bmoyo@southernafricatrust.org
- Sonke Gender Justice- Sonke works to create the change necessary for men, women, young people and children to enjoy equitable, healthy and happy relationships that contribute to the development of just and democratic societies. Sonke pursues this goal across Southern Africa by using a human rights framework to build the capacity of government, civil society organisations and citizens to achieve gender equality, prevent gender-based violence and reduce the spread of HIV and the

impact of AIDS.

- Location: Johannesburg and Cape Town
- Research Areas: Community Education & Mobilisation; Policy Development & Advocacy; Social and Structural Drivers; International Programmes & Networks; Communications & Strategic Information; Children's Rights & Positive Parenting; Sexual and Reproductive Health & Rights and Research and Monitoring & Evaluation
- Web address: <http://www.genderjustice.org.za/>
- Executive Director: Dean Peacock
- WAHENGA- is focuses on strengthening livelihoods by fighting hunger, poverty and mitigating the impacts of climate change. Wahenga provides a range of technical and management services to governments, donors, development agencies, non-governmental organisations (NGOs), civil society more generally, political parties and the private sector.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: Vulnerability Assessment and Analysis; Information Management; Vulnerability and Adaptation to Climate Change and Resilience Building; Food and nutrition security; Social Protection and HIV/AIDS and Gender
- Web address: <http://wahenga.co.za/>
- Researcher Expert: Josee Koch info@wahenga.org.za
- Researcher Expert: Colleen Anderson info@wahenga.org.za
- Mandela Institute for Development Studies- The Mandela Institute for Development Studies (MINDS) is a continental institute that seeks to address the short, medium, and long-term development challenges in Africa in a holistic and comprehensive manner.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: African studies; Anthropology; Development studies; Economics; Philosophy; Politics and International relations
- Web address: www.minds-africa.org
- Director: Dr. Jumoke Oduwole info@minds-africa.org

- Director: Dr Nkosana Moyo info@minds-africa.org
- Thabo Mbeki African Leadership Institute (TMALI)- (TMALI) serves as a platform to groom change agents who could address and solve African challenges and issues. The institute also plays a significant role in priming tomorrow's leaders with numerous students applying for admission every year and taking initiatives that seek to implement what they learn at TMALI.
- Location: Pretoria
- Research Areas: Public Policy, Governance in African, Gender and Development, Thought Leadership, African and International Trade and Africa's Political Economy
- Web address: <http://www.unisa.ac.za/sites/corporate/default/Thabo-Mbeki-African-Leadership-Institute>
- Executive Director: Prof Vusi Gumede gumede.gumedevt@unisa.ac.za gumede.vusi@gmail.com
- Senior Researcher: Dr Edith Phaswana phaswed@unisa.ac.za
- Chris Hani Institute- COSATU left wing think tank, which is aimed at advocating for the working and workless class, in order to advance their interest and promote socialist ideas and debate.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: Poverty and inequality, socialist ideas for democracy
- Web address: <http://www.sacp.org.za/main.php?ID=1595>
- Executive Director: Edward Webster Priscilla@chi.org.za Priscilla.magau@gmail.com
- Mapungubwe Institute for Strategic Reflection (MISTRA)- The Mapungubwe Institute for Strategic Reflection (MISTRA) carries out research that addresses the country's complex challenges, straddling issues of nation-formation, economic growth, social equity and South Africa's global positioning. MISTRA seeks, through its work, to contribute to the developmental challenges faced by South Africa. This it seeks

to achieve through a number of mechanisms, ranging from its research methodology and its composition to the suite of activities that it undertakes.

- Location: Pretoria
- Research Areas: Socio-economic development and political economy
- Web address: <http://www.mistra.org.za/Pages/Home.aspx>
- Executive Director: Joel Netshitenzhe
- University of Fort Hare
- Fort Hare Institute for Social and Economic Research (FHISER)- FHISER seeks to play a significant role in the development and expansion of a dynamic research culture on the East London campus of the University of Fort Hare. It strives to achieve this objective through dedicated research and post-graduate programmes, which focus on critical social, cultural and economic research issues in the Eastern Cape, and beyond.
- Location: East London
- Research Areas: Land, livelihood and rural development, urban renewal and local economic development, culture heritage and social transformation, and youth, gender and reproductive health
- Web address: <http://www.fhiser.org.za/home>
- Executive Director: Prof Leslie Bank lband@ufh.ac.za
- Senior Researcher: Dr Teresa Connor tconnor@ufh.ac.za
- Assistant Research Manager: Anam Mjekula amjekula@ufh.ac.za
- Govan Mbeki Research and Development Centre (GMRDC)- GMRDC and is responsible for the promotion, development and implementation of Postgraduate teaching, services and activities across all campuses.
- Location: East London
- Research Areas: Land, livelihood and rural development, urban renewal and local economic development, culture heritage and social transformation, and youth, gender and reproductive

health

- Web address: <http://www.ufh.ac.za/departments/>
- Executive Director:
- Senior Researcher:
- University of Johannesburg
- Centre for Social Development in Africa- CSDA is dedicated to basic, applied and strategic research in social development and developmental welfare. We aim to positively influence development issues in the Southern African region by contributing to debates on social policy, improvements in service delivery and the expansion of knowledge through cutting-edge research.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: Their research focuses on South Africa and the southern African region, but also looks beyond to the wider scholarly community
- Web address: <https://www.uj.ac.za/faculties/humanities/csda>
- Director and South African Research Chair in Welfare and Social Development: Prof Leila Patel csdainfo@uj.ac.za
- Deputy Director and Associate Professor: Prof Lauren Graham lgraham@uj.ac.za
- Centre for the Study of Democracy- CSD's researches focuses widely on the South African transition to democracy both before and after the elections of 1994 and has, over the past decade, largely written on the relationship between democracy on the one hand, social inequality and economic growth on the other. In particular, it focuses on the role of citizen voice in strengthening democracy and promoting equality.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: The state of democracy in South Africa
- Web address: <https://www.uj.ac.za/faculties/humanities/csd>
- Executive Director: Prof Steven Friedman sfriedman@uj.ac.za
- South African Research Chair in Social Change (SARCHI) – The Research Chair in Social Change focuses on social change

in South Africa, but also undertakes comparative and theoretical study. While interested in the broad dynamics of social transformation, its main strength lies in 'change from below' - movements, protests, strikes, and so on. The Chair is interdisciplinary, and has included people whose main background is in sociology, history, development studies, political economy, anthropology, politics, socio-linguistics and geography.

- Location: Johannesburg
- Research Areas: South Africa's social change
- Web address: <https://www.uj.ac.za/faculties/humanities/sarchi>
- Executive Director: Prof. Peter Alexander palexander@uj.ac.za
- Senior Researcher: Dr Luke Sinwell lsinwell@uj.ac.za
- South African Research Chair in African Diplomacy and Foreign Policy- SARChI Chair is committed to engaging in research that bridges the divide between the worlds of theory and practice/decision making. It adopts an inter-disciplinary approach on the nexus between domestic politics and foreign policy, and implements a multi-dimensional research agenda, comprising a focus on South African foreign policy; African diplomacy; African integration at continental, regional and sub-regional levels; and Africa's co-operation with, and search for strategic partnerships with the outside world.
- Location: Johannesburg
- Research Areas: African Diplomacy and Foreign Policy
- Web address: <https://www.uj.ac.za/faculties/humanities/African-Diplomacy-and-Foreign-Policy>
- Director: SARChI Chair of African Diplomacy and Foreign Policy: Prof Chris Landsberg chrisl@uj.ac.za
- Senior Researcher/Lecturer: SARChI Chair of African: Dr Lesley Masters lmasters@uj.ac.za
- University of the Witwatersrand
- Wits Institute for Social and Economic Research (WiSER)-WiSER's research agenda; to combine aesthetic and social

scientific analyses; and to provide an institutional space that strengthens the scholarly dialogue between South African researchers and academics in the rest of the world.

- Location: Johannesburg
- Research Areas: Digital Infrastructures and Subjectivities; Governing Intimacies; Knowledge Futures; Locations of African Critical Theory; Medical Humanities and Oceanic Humanities
- Web address: <http://wiser.wits.ac.za/page/about-us-11630>
- Director: Sarah Nuttall sarah.nuttall@wits.ac.za
- Senior Researcher: Sarah Emily Duff sarahemilyduff@gmail.com
- University of Cape Town
- African Gender Institute- The African Gender Institute at the University of Cape Town is a teaching, learning and research institute which focuses on issues of gender and development on the African continent.
- Location: Cape Town
- Research Areas: Gender, peace-building & transitional justice in African contexts; Sexual & Reproductive Rights Programme; Livelihoods, Gender and Entrepreneurship; and Feminist e-Knowledges
- Web address: <http://agi.ac.za/>
- Director: Prof Jane Bennett jane.bennett@uct.ac.za
- Senior Researcher: Yaliwe Clarke yaliwe.clarke@uct.ac.za
- Centre of Social Science Research-
- Location: Cape Town
- Research Areas: AIDS and Security; Democracy in Africa; Sustainable Solutions and African Legislature
- Web address: <http://cssr.uct.ac.za/>
- Director: Prof Jeremy Seekings jeremy.seekings@uct.ac.za
- Director: Prof Nicoli Nattrass nicoli.nattrass@gmail.com
- Centre for Research on Higher Education and Development (CHED)- CHED's mission is to promote equity of access,

effectiveness of teaching and learning and the enhancement of curriculum, with the twin aims of improving student success and ensuring that UCT's graduates are globally competitive, locally relevant, socially responsive and fully representative of South Africa's diverse population.

- Location: Cape Town
- Research Areas: Education and Development
- Web address: <http://www.ched.uct.ac.za/>
- Director: Christie Pam pam.christie@uct.ac.za